

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Departamento de Historia e Instituciones Económicas I



TESIS DOCTORAL

La opinión pública sobre la competencia en España: el caso del sector de los servicios profesionales públicos en derecho y salud

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Inés Martín de Santos

Director

Luis Perdices de Blas

Madrid, 2012



Universidad Complutense de Madrid
Departamento de Historia e Instituciones Económicas I

**La opinión pública sobre la competencia en España.
El caso del sector de los servicios profesionales
públicos en Derecho y Salud**

Tesis doctoral

Inés Martín de Santos

Director: Luis Perdices de Blas

“Las obligaciones del gobierno pueden dividirse en cuatro grupos fundamentales: la defensa de los derechos de la propiedad, la garantía de la competencia entre empresas, la provisión de bienes problemáticos y la protección de los desprotegidos para garantizar la igualdad de oportunidades” (Xavier Sala i Martín (2008). *Economía liberal para no economistas y no liberales*. Barcelona: Debolsillo, p. 49).

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	18
2. INSTITUCIONES REGULADORAS DE LA COMPETENCIA.....	42
2.1. Instituciones europeas	45
2.2. Instituciones españolas.....	48
2.2.1. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC)	49
2.2.2. Los tribunales de la Competencia en las Comunidades Autónomas españolas	53
2.2.3. Otros organismos en defensa del consumidor	58
3. LEGISLACIÓN	61
3.1. La base jurídica de la Comisión Europea	61
3.2. La ley española de defensa de la competencia.....	63
3.3. La <i>Ley Paraguas</i>	71
3.4. La <i>Ley Ómnibus</i>	74
3.5. La emergente Ley de Servicios Profesionales y el Real Decreto sobre Visado	78
4. LA COMPETENCIA EN LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS	82
4.1. Abogacías del Estado y Letrados	83
4.2. Notarías	85
4.3. Registros de la propiedad	90
4.4. Procuradurías.....	92
5. LA COMPETENCIA EN LAS ACTIVIDADES SANITARIAS	96
5.1. Medicina	97
5.1.1. El <i>Informe Abril Martorell</i>	99
5.2. Veterinaria	103

5.3. Farmacia	105
6. LOS ESTUDIOS SOBRE LA COMPETENCIA	
DESDE LA PERSPECTIVA CUANTITATIVA	110
6.1. Pautas para un modelo de evaluación de la competencia	113
7. LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA COMPETENCIA	121
7.1. Los colegios profesionales	124
7.2. La opinión de los colegios profesionales	129
7.3. La opinión de los usuarios	132
8. LA OPINIÓN ESPAÑOLA ACERCA DE LA LIBERALIZACIÓN DE	
SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SECTORES JURÍDICOS Y	
SANITARIOS. ESTUDIO DE CASO	136
8.1. EL TRABAJO DE CAMPO	136
8.2. EL DISEÑO DE LA ENCUESTA	142
8.3. PRETENSIONES DE LA ENCUESTA	146
8.4. LOS PARTICIPANTES	150
8.5. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS	
POR LOS ENCUESTADOS	155
8.6. LA OPINIÓN GENERAL DE LOS ENCUESTADOS	158
8.7. LA OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS	
POR GRUPOS PROFESIONALES	173
8.7.1. ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS	173
8.7.2. NOTARÍAS	184
8.7.3. REGISTROS DE LA PROPIEDAD	195
8.7.4. MEDICINA	205
8.7.5. VETERINARIA	216
8.7.6. FARMACIA	227

8.8. EL JUICIO DE LOS GRUPOS PROFESIONALES Y LA OPINIÓN PÚBLICA.....	237
8.9. TABLAS DE CONTINGENCIA – CHI CUADRADO (χ^2) – RESIDUOS CORREGIDOS.....	257
9. CONCLUSIONES	303
10. EPISTEMOLOGÍA DE LA COMPETENCIA.....	309
11. GLOSARIO SOBRE COMPETENCIA.....	318
12. BIBLIOGRAFÍA	339

Índice de figuras

Figura 1:	PARTICIPACIÓN POR DIFERENCIA DE SEXO.....	152
Figura 2:	PARTICIPACIÓN EN FUNCIÓN DE LA EDAD.....	153
Figura 3:	PARTICIPACIÓN POR PROFESIONES.....	155
Figura 4:	PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS POR LOS ENCUESTADOS.....	157
Figura 5:	PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES.....	160
Figura 6:	CONOCEN LA NORMATIVA SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.....	161
Figura 7:	CONOCEN LA LEY ÓMNIBUS.....	163
Figura 8:	HAN LEÍDO OBRAS SOBRE COMPETENCIA.....	164
Figura 9:	NORMAS SOBRE LA COMPETENCIA LES AFECTAN DE MODO POSITIVO O NEGATIVO	166
Figura 10:	CONSIDERAN LAS NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA BENEFICIOSAS	168
Figura 11:	CONOCEN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA.....	169
Figura 12:	HAN RECURRIDO EN ALGUNA OCASIÓN A ALGÚN ORGANISMO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.....	171
Figura 13:	PIENSAN QUE LA LIBRE COMPETENCIA CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO ECONÓMICO.....	172
Figura 14:	ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. PARTIDARIOS DE LIBERACIÓN.....	175
Figura 15:	ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. CONOCEN LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA.....	176

Figura 16: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. LEY ÓMNIBUS.....	177
Figura 17: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. LECTURA OBRAS SOBRE COMPETENCIA.....	178
Figura 18: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. NORMAS SOBRE COMPETENCIA LES AFECTAN.....	179
Figura 19: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. CONSIDERAN BENEFICIOSAS LAS NORMAS SOBRE LA COMPETENCIA	180
Figura 20: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRA. CONOCEN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA.....	181
Figura 21: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. HAN RECURRIDO EN ALGUNA OCASIÓN A UN ORGANISMO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.....	182
Figura 22: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. LIBRE COMPETENCIA CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO ECONÓMICO	183
Figura 23: NOTARÍAS. PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN DE SERVICIOS.....	186
Figura 24: NOTARÍAS. CONOCEN LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA.....	187
Figura 25: NOTARÍAS. CONOCEN LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA.....	188
Figura 26: NOTARÍAS. LECTURA DE ALGUNA OBRA SOBRE COMPETENCIA.....	189
Figura 27: NOTARÍAS. LES AFECTA LA NORMATIVA SOBRE LA COMPETENCIA	190
Figura 28: NOTARÍAS. CONSIDERAN BENEFICIOSA LA NORMATIVA SOBRE COMPETENCIA	191
Figura 29: NOTARÍAS. CONOCE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA.....	192
Figura 30: NOTARÍAS. RECURSO ANTE LA	

DEFENSA DEL CONSUMIDOR.....	193
Figura 31: NOTARÍAS. LA LIBRE COMPETENCIA CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO	194
Figura 32: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN.....	196
Figura 33: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. CONOCE LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA	197
Figura 34: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. LEY ÓMNIBUS.....	198
Figura 35: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. LECTURA SOBRE COMPETENCIA.....	199
Figura 36: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA.....	200
Figura 37: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. NORMATIVA BENEFICIOSA.....	201
Figura 38: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. CONOCE LA CNC	202
Figura 39: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. RECURSOS ANTE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.....	203
Figura 40: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. LIBRE COMPETENCIA CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO	204
Figura 41: MEDICINA. PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN DE SERVICIOS.....	207
Figura 42: MEDICINA. CONOCEN LA NORMATIVA EURPEA Y ESPAÑOLA.....	208
Figura 43: MEDICINA. LEY ÓMNIBUS.....	209
Figura 44: MEDICINA. LECTURA SOBRE COMPETENCIA	210
Figura 45: MEDICINA. AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA	211
Figura 46: MEDICINA. NORMATIVA BENEFICIOSA	212
Figura 47: MEDICINA. CONOCE LA CNC.....	213
Figura 48: MEDICINA. RECURSO ANTE	

DEFENSA DEL CONSUMIDOR.....	214
Figura 49: MEDICINA. LIBRE COMPETENCIA	
AYUDA AL CRECIMIENTO.....	215
Figura 50: VETERINARIA. PARTIDARIOS	
LIBERALIZACIÓN SERVICIOS.....	218
Figura 51: VETERINARIA. CONOCE NORMATIVA	
EUROPEA Y ESPAÑOLA.....	219
Figura 52: VETERINARIA. LEY ÓMNIBUS.....	220
Figura 53: VETERINARIA. LECTURA SOBRE	
COMPETENCIA.....	221
Figura 54: VETERINARIA. AFECTAN NORMATIVAS	
SOBRE COMPETENCIA	222
Figura 55: VETERINARIA. NORMATIVA BENEFICIOSA.....	223
Figura 56: VETERINARIA. CONOCEN LA CNC	224
Figura 57: VETERINARIA. RECURSO ANTE	
DEFENSA CONSUMIDOR.....	225
Figura 58: VETERINARIA. LIBRE COMPETENCIA	
AYUDA AL CRECIMIENTO.....	226
Figura 59: FARMACIA. PARTIDARIO LIBERALIZACIÓN.....	228
Figura 60: FARMACIA. CONOCE NORMATIVA	
EUROPEA Y ESPAÑOLA.....	229
Figura 61: FARMACIA. LEY ÓMNIBUS.....	230
Figura 62: FARMACIA. LECTURA SOBRE COMPETENCIA.....	231
Figura 63: FARMACIA. AFECTAN NORMATIVAS	
SOBRE COMPETENCIA	232
Figura 64: FARMACIA. NORMATIVA BENEFICIOSA.....	233
Figura 65: FARMACIA. CONOCE LA CNC	234
Figura 66: FARMACIA. RECURSO ANTE DEFENSA	
DEL CONSUMIDOR	235
Figura 67: FARMACIA. LIBRE COMPETENCIA	
AYUDA AL CRECIMIENTO.....	236
Figura 68: JUICIO PROFESIONALES.	
PARTIDARIO LIBERALIZACIÓN.....	239

Figura 69: JUICIO PROFESIONALES. CONOCE	
NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA.....	240
Figura 70: JUICIO PROFESIONALES. LEY ÓMNIBUS	241
Figura 71: JUICIO PROFESIONALES. LECTURA	
SOBRE COMPETENCIA	242
Figura 72: JUICIO PROFESIONALES. AFECTAN	
NORMAS SOBRE COMPETENCIA.....	243
Figura 73: JUICIO PROFESIONALES.	
NORMATIVA BENEFICIOSA.....	244
Figura 74: JUICIO PROFESIONALES. CONOCE CNC.....	245
Figura 75: JUICIO PROFESIONALES. RECURSO	
ANTE DEFENSA CONSUMIDOR.....	246
Figura 76: JUICIO PROFESIONALES. LIBRE	
COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO.....	247
Figura 77: OPINIÓN PÚBLICA. PARTIDARIOS	
DE LA LIBERALIZACIÓN.....	248
Figura 78: OPINIÓN PÚBLICA. CONOCE NORMATIVA	
EUROPEA Y ESPAÑOLA.....	249
Figura 79: OPINIÓN PÚBLICA. LEY ÓMNIBUS	250
Figura 80: OPINIÓN PÚBLICA. LECTURA SOBRE	
COMPETENCIA.....	251
Figura 81: OPINIÓN PÚBLICA. AFECTAN NORMATIVA	
SOBRE COMPETENCIA	252
Figura 82: OPINIÓN PÚBLICA. NORMATIVA BENEFICIOSA.....	253
Figura 83: OPINIÓN PÚBLICA. CONOCE CNC.....	254
Figura 84: OPINIÓN PÚBLICA. RECURSO	
ANTE DEFENSA CONSUMIDOR.....	255
Figura 85: OPINIÓN PÚBLICA. LIBRE COMPETENCIA	
AYUDA AL CRECIMIENTO.....	256
Figura 86: SEXO * PARTIDARIOS LIBERALIZACIÓN.....	263
Figura 87: EDAD * PARTIDARIOS LIBERALIZACIÓN.....	265
Figura 88: PROFESIÓN * CONOCE LA NORMATIVA.....	268

Figura 89: PROFESIÓN * AFECTA LA NORMATIVA.....	271
Figura 90: PROFESIÓN * NORMATIVA BENEFICIOSA.....	273
Figura 91: SECTOR DE ACTIVIDAD * CONOCE LA NORMATIVA.....	282
Figura 92: SECTOR DE ACTIVIDAD * AFECTA LA NORMATIVA.....	291
Figura 93: SECTOR DE ACTIVIDAD * NORMATIVA BENEFICIOSA.....	301

Índice de tablas

Tabla 1:	PARTICIPACIÓN POR DIFERENCIA DE SEXO.....	152
Tabla 2:	PARTICIPACIÓN EN RAZÓN DE LA EDAD	153
Tabla 3:	PARTICIPACIÓN POR PROFESIONES	154
Tabla 4:	PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS POR LOS ENCUESTADOS.....	157
Tabla 5:	PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES.....	159
Tabla 6:	CONOCEN LA NORMATIVA SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.....	161
Tabla 7:	CONOCEN LA LEY ÓMNIBUS.....	162
Tabla 8:	HAN LEÍDO OBRAS SOBRE COMPETENCIA.....	164
Tabla 9:	NORMAS SOBRE LA COMPETENCIA LES AFECTAN DE MODO POSITIVO O NEGATIVO	165
Tabla 10:	CONSIDERAN LAS NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA BENEFICIOSAS	167
Tabla 11:	CONOCEN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA.....	169
Tabla 12:	HAN RECURRIDO EN ALGUNA OCASIÓN A ALGÚN ORGANISMO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.....	170
Tabla 13:	PIENSAN QUE LA LIBRE COMPETENCIA CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO ECONÓMICO	172
Tabla 14:	ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. PARTIDARIOS DE LIBERACIÓN.....	175
Tabla 15:	ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. CONOCEN LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA.....	176
Tabla 16:	ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. LEY ÓMNIBUS.....	177
Tabla 17:	ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. LECTURA OBRAS SOBRE COMPETENCIA.....	178

Tabla 18: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. NORMAS SOBRE COMPETENCIA LES AFECTAN.....	179
Tabla 19: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. CONSIDERAN BENEFICIOSAS LAS NORMAS SOBRE LA COMPETENCIA	180
Tabla 20: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. CONOCEN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA.....	181
Tabla 21: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. HAN RECURRIDO EN ALGUNA OCASIÓN A UN ORGANISMO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	182
Tabla 22: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. LIBRE COMPETENCIA CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO ECONÓMICO	183
Tabla 23: NOTARÍAS. PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN DE SERVICIOS.....	186
Tabla 24: NOTARÍAS. CONOCEN LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA.....	187
Tabla 25: NOTARÍAS. CONOCEN LA LEY ÓMNIBUS.....	188
Tabla 26: NOTARÍAS. LECTURA DE ALGUNA OBRA SOBRE COMPETENCIA.....	189
Tabla 27: NOTARÍAS. LES AFECTA LA NORMATIVA SOBRE LA COMPETENCIA	190
Tabla 28: NOTARÍAS. CONSIDERAN BENEFICIOSA LA NORMATIVA SOBRE COMPETENCIA.....	191
Tabla 29: NOTARÍAS. CONOCE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA.....	192
Tabla 30: NOTARÍAS. RECURSO ANTE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR.....	193
Tabla 31: NOTARÍAS. LA LIBRE COMPETENCIA CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO	194

Tabla 32:	REGISTROS DE LA PROPIEDAD.	
	PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN	196
Tabla 33:	REGISTROS DE LA PROPIEDAD.	
	CONOCE LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA	197
Tabla 34:	REGISTROS DE LA PROPIEDAD.	
	LEY ÓMNIBUS.....	198
Tabla 35:	REGISTROS DE LA PROPIEDAD. LECTURA	
	SOBRE COMPETENCIA	199
Tabla 36:	REGISTROS DE LA PROPIEDAD.	
	AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA.....	200
Tabla 37:	REGISTROS DE LA PROPIEDAD.	
	NORMATIVA BENEFICIOSA.....	201
Tabla 38:	REGISTROS DE LA PROPIEDAD. CONOCE LA CNC	202
Tabla 39:	REGISTROS DE LA PROPIEDAD.	
	RECURSO ANTE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	203
Tabla 40:	REGISTROS DE LA PROPIEDAD. LIBRE	
	COMPETENCIA CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO.....	204
Tabla 41:	MEDICINA. PARTIDARIOS DE LA	
	LIBERACIÓN DE SERVICIOS.....	207
Tabla 42:	MEDICINA. CONOCEN LA NORMATIVA	
	EURPEA Y ESPAÑOLA.....	208
Tabla 43:	MEDICINA. LEY ÓMNIBUS	209
Tabla 44:	MEDICINA. LECTURA SOBRE COMPETENCIA.....	210
Tabla 45:	MEDICINA. AFECTAN NORMATIVAS	
	SOBRE COMPETENCIA	211
Tabla 46:	MEDICINA. NORMATIVA BENEFICIOSA.....	212
Tabla 47:	MEDICINA. CONOCE LA CNC.....	213
Tabla 48:	MEDICINA. RECURSO ANTE	
	DEFENSA DEL CONSUMIDOR.....	214
Tabla 49:	MEDICINA. LIBRE COMPETENCIA	
	AYUDA AL CRECIMIENTO.....	215
Tabla 50:	VETERINARIA. PARTIDARIOS	
	LIBERALIZACIÓN SERVICIOS.....	218

Tabla 51:	VETERINARIA. CONOCE NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA	219
Tabla 52:	VETERINARIA. LEY ÓMNIBUS.....	220
Tabla 53:	VETERINARIA. LECTURA SOBRE COMPETENCIA	221
Tabla 54:	VETERINARIA. AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA	222
Tabla 55:	VETERINARIA. NORMATIVA BENEFICIOSA	223
Tabla 56:	VETERINARIA. CONOCEN LA CNC.....	224
Tabla 57:	VETERINARIA. RECURSO ANTE DEFENSA CONSUMIDOR.....	225
Tabla 58:	VETERINARIA. LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO.....	226
Tabla 59:	FARMACIA. PARTIDARIO LIBERALIZACIÓN.....	228
Tabla 60:	FARMACIA. CONOCE NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA	229
Tabla 61:	FARMACIA. LEY ÓMNIBUS.....	230
Tabla 62:	FARMACIA. LECTURA SOBRE COMPETENCIA.....	231
Tabla 63:	FARMACIA. AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA	232
Tabla 64:	FARMACIA. NORMATIVA BENEFICIOSA.....	233
Tabla 65:	FARMACIA. CONOCE LA CNC	234
Tabla 66:	FARMACIA. RECURSO ANTE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	235
Tabla 67:	FARMACIA. LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO.....	236
Tabla 68:	JUICIO PROFESIONALES. PARTIDARIO LIBERALIZACIÓN.....	239
Tabla 69:	JUICIO PROFESIONALES. CONOCE NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA.....	240
Tabla 70:	JUICIO PROFESIONALES. LEY ÓMNIBUS	241
Tabla 71:	JUICIO PROFESIONALES. LECTURA SOBRE COMPETENCIA	242

Tabla 72:	JUICIO PROFESIONALES. AFECTAN	
	NORMAS SOBRE COMPETENCIA.....	243
Tabla 73:	JUICIO PROFESIONALES.	
	NORMATIVA BENEFICIOSA.....	244
Tabla 74:	JUICIO PROFESIONALES. CONOCE	245
Tabla 75:	JUICIO PROFESIONALES. RECURSO	
	ANTE DEFENSA CONSUMIDOR.....	246
Tabla 76:	JUICIO PROFESIONALES. LIBRE	
	COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO.....	247
Tabla 77:	OPINIÓN PÚBLICA. PARTIDARIOS	
	DE LA LIBERALIZACIÓN.....	248
Tabla 78:	OPINIÓN PÚBLICA. CONOCE NORMATIVA	
	EUROPEA Y ESPAÑOLA.....	249
Tabla 79:	OPINIÓN PÚBLICA. LEY ÓMNIBUS	250
Tabla 80:	OPINIÓN PÚBLICA. LECTURA SOBRE	
	COMPETENCIA.....	251
Tabla 81:	OPINIÓN PÚBLICA. AFECTAN NORMATIVA	
	SOBRE COMPETENCIA.....	252
Tabla 82:	OPINIÓN PÚBLICA. NORMATIVA BENEFICIOSA	253
Tabla 83:	OPINIÓN PÚBLICA. CONOCE CNC	254
Tabla 84:	OPINIÓN PÚBLICA. RECURSO ANTE	
	DEFENSA CONSUMIDOR.....	255
Tabla 85:	OPINIÓN PÚBLICA. LIBRE COMPETENCIA	
	AYUDA AL CRECIMIENTO.....	256
Tabla 86:	CHI-CUADRADO (χ^2). SEXO * PARTIDARIOS	
	LIBERALIZACIÓN.....	261
Tabla 87:	CONTINGENCIA. SEXO * PARTIDARIOS	
	LIBERALIZACIÓN.....	262
Tabla 88:	CHI-CUADRADO (χ^2). EDAD * PARTIDARIOS	
	LIBERALIZACIÓN.....	263
Tabla 89:	CONTINGENCIA. EDAD * PARTIDARIOS	
	LIBERALIZACIÓN.....	264

Tabla 90: CHI-CUADRADO (χ^2). PROFESIÓN * CONOCE LA NORMATIVA.....	266
Tabla 91: CONTINGENCIA. PROFESIÓN * CONOCE LA NORMATIVA.....	267
Tabla 92: CHI-CUADRADO (χ^2). PROFESIÓN * AFECTA LA NORMATIVA.....	269
Tabla 93: CONTINGENCIA. PROFESIÓN * AFECTA LA NORMATIVA.....	270
Tabla 94: CHI-CUADRADO (χ^2). PROFESIÓN * NORMATIVA BENEFICIOSA.....	272
Tabla 95: CONTINGENCIA. PROFESIÓN * NORMATIVA BENEFICIOSA.....	272
Tabla 96: CHI-CUADRADO (χ^2). SECTOR DE ACTIVIDAD * CONOCE LA NORMATIVA.....	274
Tabla 97: CONTINGENCIA. SECTOR DE ACTIVIDAD * CONOCE LA NORMATIVA.....	274
Tabla 98: CHI-CUADRADO (χ^2). SECTOR DE ACTIVIDAD * AFECTA LA NORMATIVA.....	283
Tabla 99: CONTINGENCIA. SECTOR DE ACTIVIDAD * AFECTA LA NORMATIVA.....	284
Tabla 100: CHI-CUADRADO (χ^2). SECTOR DE ACTIVIDAD * NORMATIVA BENEFICIOSA.....	292
Tabla 101: CONTINGENCIA. SECTOR DE ACTIVIDAD * NORMATIVA BENEFICIOSA.....	293

1. INTRODUCCIÓN

■ Objeto de estudio: La libre competencia en los servicios públicos jurídicos y sanitarios mediante la liberalización de estas actividades. Para ello parece fundamental responder a la siguiente pregunta: ¿Opinan los españoles que es necesario implementar un sistema económico de libre competencia en los servicios públicos de carácter liberal vinculados a las actividades jurídicas y sanitarias?

■ Las partes de que consta la investigación se ajustan a la matriz de congruencia mostrada a continuación:

El trabajo contiene nueve capítulos¹, o apartados principales:

1. Breve introducción al tema anunciado en el título. Desde la perspectiva económica, se exponen las ventajas que la competencia ofrece principalmente a los usuarios de servicios.
2. Estudio de las fuentes relacionales. Presentación de los organismos responsables más relevantes en materias de competencia. En primer lugar se analizan las instituciones oficiales europeas y en segundo lugar las españolas.
3. Se atiende a las fuentes documentales. Se revisa la legislación europea y española en defensa de la libre competencia. En el primer caso, se incide especialmente en los artículos 101 y 102 del actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En el segundo caso, se contemplan las leyes Paraguas, Ómnibus y la legislación complementaria o incipiente como, en este último

¹ No van precedidos de la palabra *capítulo*, con el fin de evitar los problemas de indización automática que el procesador de textos Word ocasiona.

1. INTRODUCCIÓN

caso, la anunciada Ley de Servicios Profesionales y el Real Decreto sobre visado.

4. Me fijo de manera pormenorizada en el estado actual de la competencia en las actividades jurídicas siguientes: Abogacías del Estado y Letrados, Notarías, Registros de la Propiedad y Procuradurías. Indicamos sus particularidades respecto al Derecho anglosajón, y su virtual mayor competitividad en un estado de libre competencia.
5. Aplico el mismo procedimiento que en el caso anterior a las profesiones médicas, veterinarias y farmacéuticas. Ha parecido relevante fijarse en un documento adelantado a su tiempo: el *Informe Abril Martorell* sobre la Sanidad española.
6. Se establecen pautas para la evaluación de la competencia desde la perspectiva cuantitativa.
7. Se analiza y valora la opinión pública sobre la competencia atendiendo a tres grupos de personas: los responsables de los colegios profesionales, los propios profesionales y los usuarios de servicios.
8. A partir de un estudio de caso se pretende averiguar la predisposición de los españoles para aceptar un sistema de libre competencia en el desarrollo de las profesiones públicas jurídicas y sanitarias dependientes de la tutela del Estado y de los Colegios Profesionales.
9. Se exponen las conclusiones derivadas del estudio teórico y del estudio de caso.

1. INTRODUCCIÓN

Finalmente se desarrollan unos núcleos de contenido de carácter epistemológico elementales en torno a la competencia en el ámbito de la Economía, un glosario de términos y frases frecuentemente empleado en los estudios sobre competencia, y la bibliografía utilizada.

■ El método de trabajo, en líneas generales, consiste en recopilar la bibliografía más relevante y actual con el propósito de lograr esa especie de *poso*, bagaje o formación cultural que debe poseer el investigador.

Tras la documentación consultada, analizo el estado de los profesionales del Derecho y de la Sanidad a partir de la legislación oficial vigente y de la normalización de las instituciones privadas.

Posteriormente se contrasta esta realidad con el nivel de satisfacción tanto de los profesionales como de sus representantes y de los usuarios, mediante el procedimiento de las encuestas, para extraer las conclusiones pertinentes.

Las técnicas derivadas de este método se explican unas páginas más adelante.

■ Son propósitos de esta investigación:

- Presentar el *statu quo* de la competencia en el marco profesional oficial español de los oficios siguientes: abogados del Estado y letrados, notarios, registradores de la propiedad, médicos, veterinarios y farmacéuticos.

1. INTRODUCCIÓN

- Establecer las diferencias más notorias entre el sector profesional relacionado con las ciencias jurídicas y el sector profesional vinculado a las ciencias de la salud.
- Analizar aquellas partes de los estatutos de los colegios profesionales seleccionados, que afecten a prácticas contrarias al desarrollo de la libre competencia.
- Considerar las posibilidades de reforma de los colegios profesionales con vistas a la mejora de la competitividad de los servicios españoles.
- Ayudar a los legisladores en la adopción de criterios para la creación de nuevas leyes que sirvan para mejorar la economía de este país y orientar a los gobernantes en la toma de decisiones de política económica que, asimismo, favorezcan el desarrollo económico.
- Aproximarse a la sensibilidad de la gente y conocer la opinión pública ante la posibilidad de ampliar las medidas liberalizadoras en los sectores indicados.

No es pretensión de este estudio ofrecer normas nuevas para el desarrollo de la competencia sino animar a descartar tanto la legislación como las costumbres que la impidan de acuerdo con el principio *popperiano* de lo que se ha dado en traducir como *falsación*², desarrollado en *La lógica de la investigación científica*.

² También denominado *contrastación*, consistente en poner en tela de juicio las teorías contrastándolas con ejemplos contrarios para verificarlas o desmentirlas.

1. INTRODUCCIÓN

* * * * *

Bajo el prisma teórico, la defensa de la libre competencia como principio básico del desarrollo económico en la sociedad actual obliga a hacer algunas reflexiones.

§ Parece necesario que en un mundo cada vez más vecino, gracias sobre todo al gran desarrollo de las comunicaciones, las actividades económicas deban estar abocadas al aperturismo comercial. Por el contrario, en consecuencia, si se acepta esta hipótesis, se puede deducir, en general, que las medidas proteccionistas son proclives a ocasionar situaciones de aislacionismo mercantil.

Pero el aperturismo no se puede entender sin una relación recíproca entre los gobiernos de los diferentes Estados, y para ello deben marcarse unas normas comunes de intercambio.

Conviene que estas normas las decidan los comerciantes, es decir las regule el propio mercado según el criterio tradicional de la oferta y la demanda.

El intervencionismo gubernamental, que podrá ser necesario en determinados casos, debe limitarse a vigilar que se cumplan de manera honesta las reglas del juego y a evitar que se produzcan riesgos que impliquen momentos de peligro para las economías nacionales.

Así las cosas, la actividad económica se desarrollará de manera que quienes sean capaces de ofrecer iguales o mejores productos³ a precios más bajos serán quienes seguramente obtengan mayores beneficios. A

³ Entiéndase también la capacidad de las personas para el trabajo como otro elemento fundamental de la competencia.

1. INTRODUCCIÓN

este fenómeno lo denominaré *competencia* y a sus manifestaciones prácticas *competitividad*.

Pero la historia nos muestra abundantes casos de medidas tomadas en contra de la competencia (aranceles, monopolios,...), e incluso de prácticas nada ortodoxas: poner trabas a la distribución de un producto, conceder subvenciones o frenar ciertas importaciones también son hechos anticompetitivos.

Estos fenómenos han desatado infinidad de manifestaciones a favor o en contra de la competencia tanto en publicaciones científicas como de divulgación y son una de las materias de tratamiento más desarrolladas en los estudios de Economía.

* * * * *

§ Resulta evidente que hoy en el sector servicios hay muchas actividades redundantes e incluso innecesarias, al menos desde la perspectiva económica, para el normal desarrollo de la sociedad. Con frecuencia aparecen informaciones en los medios de comunicación relacionadas con actividades que a veces se solapan.

Lo innecesario de muchas actividades económicas es algo que puede ser discutible e incluso puesto en entredicho. Por hacer una comparación, lo mismo que en el lenguaje de las personas hay muchos signos innecesarios para la comprensión⁴ pero necesarios para el

⁴ Gran parte de los signos son redundantes, entre ellos, por ejemplo, el artículo; de hecho en unas lenguas hay diversas clases de artículos o presentadores, en otras tan solo una palabra, en otras el artículo es inexistente y la comunicación se desarrolla sin trabas de comprensión, lo que

1. INTRODUCCIÓN

sostenimiento del sistema de comunicación, también puede suceder que en el mundo de la economía veamos muchas tareas inútiles que, sin embargo, puedan ser necesarias para el sostenimiento del sistema. Esta reflexión, en cualquier caso, no es una invitación al conformismo. Mi pretensión es justamente la contraria: defender la necesidad de un revisionismo y reformismo constantes para lograr el funcionamiento idóneo de cualquier sistema.

§ Habida cuenta de la suficiencia de recursos naturales, al menos por el momento, para resolver las necesidades vitales de las personas, la restructuración del sector terciario en un sistema de libre competencia podría ser una fórmula óptima para ahorrar recursos y fomentar el crecimiento económico.

§ El paso de un siglo a otro no tiene por qué ocasionar necesariamente cambios bruscos en la sociedad, de hecho a lo largo de la historia nunca los cambios radicales se han producido en este tipo de fechas señaladas; pero sí está apareciendo una literatura cada día más abundante reclamando revisiones de costumbres anteriores, entre ellas las relacionadas con la actividad económica.

§ Uno de los factores que más han influido en el desarrollo de la competencia por todo el mundo ha sido el de la globalización. Sus ventajas y perjuicios en los países en vías de desarrollo han sido tratadas en la parte segunda de la compilación preparada por Eleanor M. Fox y Abel M. Mateus [2011, vol. I, pp. 189-240].

indica que su presencia, aunque no sea imprescindible, ayuda a mantener el hilo de las conversaciones.

1. INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la globalización no es nuevo. Esta, a la que asistimos, se puede considerar como mínimo la tercera globalización⁵ (o *mundialización*, como prefieren decir los estudiosos franceses). La crisis internacional que atravesamos tampoco es la única ni probablemente sea la última. En consecuencia deben arbitrarse medidas, desde las instancias políticas, ajustadas a la realidad actual para hacer más viables el desarrollo y las relaciones económicas entre los países.

§ Los estudios de carácter cuantitativo no siempre resultan suficientes para resolver los nuevos desafíos del desarrollo económico en el futuro. Expertos como W. Edwards Deming, por ejemplo, apuestan más que por las correspondencias costes/beneficios a las que en ocasiones considera falacias [p. 306], por la implementación de medidas más eficaces como las reestructuraciones de organigramas, la preparación de los directivos, la satisfacción en el desempeño de las tareas,... es decir, variables difícilmente cuantificables.

§ La educación para el desempeño de una profesión es un aspecto tal vez poco valorado en nuestro país, y es en parte debido a la escasa correspondencia entre las materias de estudio y las tareas profesionales; y en parte debido al escepticismo mostrado no sólo ante la tasa de paro sino también a causa de la escasez de salidas profesionales vinculadas a los estudios cursados.

Parece aconsejable modificar el sistema educativo. La ponderación de las competencias como complemento de los conocimientos ha supuesto

⁵ Previa unificación de la zona mediterránea, la primera se produjo con el descubrimiento de América y el depósito de capitales en centro Europa. La segunda tuvo lugar a raíz de la Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX y el Reino Unido fue el centro internacional de las finanzas. Ver el artículo de Carlos Fuentes. Mundo y localismo: la tercera globalización. *La nación on line*. 30 de noviembre del 2003. Accesible en: http://www.almendron.com/politica/pdf/2003/reflexion/reflexion_0170.pdf [Consulta 24 de marzo del 2010]

1. INTRODUCCIÓN

un gran avance, pero quedan todavía otros aspectos por revisar y renovar. La enorme agilidad y el abaratamiento de las telecomunicaciones inducirán a un modelo cada vez menos presencial de la docencia.

Los franceses, en su momento, supieron resolver bien este problema con la puesta en funcionamiento de las Escuelas de Altos Estudios, centros para preparar a la clase ejecutiva, algo que es fundamental para acrecentar la competitividad.

Pero a niveles inferiores es también importante cuidar la cualificación de los trabajadores. Las medidas más precipitadas son los cursos de capacitación y los programas de formación continua. A veces nos olvidamos de que la preparación laboral es una formación constante que realizamos a lo largo de nuestra juventud, y que es una de las grandes inversiones del Estado a largo plazo para generar desarrollo económico. “Cuando se produce una situación crítica en la competencia económica internacional es frecuente achacar la responsabilidad de las dificultades a la formación de los trabajadores” [Garrido Medina, 1992, p. 198].

§ Con evidente ironía en el argot económico (como sucede también, por ejemplo, con el marbete *La Armada Invencible*⁶ por *Real Armada*) se emplea la frase *Spanish Practices* [Marcos Fernández, 2003, p. 85] para aludir a las extendidas medidas proteccionistas que aún persisten en muchos sectores de la economía española como, por ejemplo, la adjudicación de los estancos y de las loterías⁷.

⁶ Es el mote o apodo con el que denominaron los ingleses a la Armada Española tras su decadencia.

⁷ Sometidas estas últimas recientemente a un fracasado proceso de privatización.

1. INTRODUCCIÓN

Una de las mayores adaptaciones que tuvo que hacer España a los movimientos internacionales de capital en el último tercio del siglo XX fue la relativa al control de cambios. Antes de su entrada en la Comisión Económica Europea (CEE), hoy Unión Europea (UE), como ya vaticinó en su momento Francisco Cabrillo [1980] nuestro país estaba abocado a una progresiva liberalización que pusiera fin a la restrictiva legislación sobre el control de cambios. “El control de cambios es todo el conjunto de restricciones impuestas por la autoridad a la libre compra, venta y tenencia de divisas extranjeras, así como a la libre circulación de medios de pago entre residentes. El control de cambios parte de la falsa suposición de que deben restringirse las operaciones internacionales de las empresas y los particulares en favor de un supuesto «interés general», que es, en realidad, el interés de los gobernantes, de los funcionarios y de su clientela política” [p.8].

§ Como indica el título de una de las guías publicitarias editada por la Comisión Nacional de la Competencia, “La competencia beneficia a todos. La defensa de la competencia es un deber de todos los poderes públicos”⁸. En efecto, con el desarrollo de la competencia lo que se pretende es el bien común, es tratar de conseguir el mayor bienestar social, nunca el mayor beneficio particular. A los responsables de los organismos defensores de la competencia no les gusta parecerse a unos jueces implacables que dictan resoluciones contrarias a los intereses empresariales. Se trata, en definitiva, de ver lo que es mejor para todos y no para una parte.

⁸ *Guía para la elaboración de memorias de competencia de los proyectos normativos*. Documento interno.

1. INTRODUCCIÓN

El conflicto entre los defensores y los detractores de la competencia surge muchas veces, como dice el profesor Rodríguez Braun⁹, porque la competencia no conviene a todo el mundo. Está claro que es beneficiosa para los consumidores pero no siempre para los productores ni para quienes ya ocupan un empleo estable y no tienen obligación ni necesidad de hacer méritos para mantenerse en su puesto.

Según Francisco Cabrillo [1986, p.165], “Poca gente pone en duda la idea de que un mercado con competencia en la oferta y en la demanda es un mercado eficiente”. Sin embargo, siguiendo a este profesor, la defensa de la competencia tropieza a menudo con tres escollos difíciles de superar: problemas de información o falta de información igualitaria en las partes¹⁰, falta de homogeneidad de los productos¹¹ y falta del principio de que los compradores y los vendedores son precio-aceptantes¹² [*passim* 165-167].

Los Estados, en general, predicán la competencia pero a veces no la practican. De hecho en Europa hay cierto temor a la competencia.

⁹ Cfr. Prólogo a la obra coordinada por Sergio A. Berumen. *La política de la competencia en Europa*. Madrid: ESIC, 2009, pp. 11-14.

¹⁰ A pesar de que la información pública es un elemento clave para el ejercicio de la libre competencia, sin embargo en el ámbito de la producción es de carácter reservado, y provoca a menudo lo que se conoce como espionaje de la competencia [Porter, 1991, p. 92].

¹¹ La modalidad del transporte en España sería un ejemplo de este tipo. Este caso ha sido brillantemente expuesto por Juan Emilio Iranzo y Marta Otero [1983]. Hasta el año 2010, con la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros, Renfe Operadora ha realizado una agresiva campaña de descuentos en el precio de los billetes, llegando a veces a descuentos del 60%, pero también es cierto que un tercio de sus ingresos se ha debido a la ayuda del Estado. La Comisión Europea ha declarado ilegales las ayudas estatales a Renfe del 2006 al 2010.

¹² En situaciones de competencia desleal los precios abusivos se suelen detectar tomando como referencia los precios medios de mercado en el mismo sector.

1. INTRODUCCIÓN

Y es que la competencia llevada a sus últimas consecuencias, y sin sentido de la proporción, puede ocasionar desequilibrios sociales.

Un ejemplo peculiar de competencia serían los mal vistos paraísos fiscales y uno de anti-competencia la unificación de la moneda única (el euro) pues de este modo las monedas de los distintos Estados ya no compiten como hacían hasta la pasada década. Para que los Estados fueran más competentes habría que modificar algunas de las reglas del juego, pero ¿cómo ajustar las reglas a quienes las hacen?

§ La competencia pretende el progreso para lograr el bien común. En general nadie se opone al bien común. Hasta en los estados primitivos y en regímenes reaccionarios parece difícil sostener que sus habitantes consideren que el bien común sea indeseable.

El problema de fondo es averiguar y definir lo que es el bien común o el interés público¹³, y quién decide lo que es beneficioso para todos, o al menos para la mayoría. El desarrollo económico de un país atrasado puede ser bueno para los habitantes de ese país y malo para los países vecinos. Esta es la idea mercantilista de interpretar la Economía como un juego de relaciones comerciales de suma cero o, dicho de otra manera: en la economía capitalista para que unos ganen otros tienen que perder.

Pero el liberalismo sostiene que la Economía debe asentarse en un juego de relaciones comerciales positivas, en el que todos ganan, aunque unos más que otros. Y esto siempre será posible en un sistema competitivo no viciado por los abusos de las fuerzas económicas.

Con palabras de Alejandro Deustua [2004, p. 2],

¹³ Cada día se emplea con mayor frecuencia el término *general* en vez de *público*. Aquí se usa indistintamente de modo equivalente.

1. INTRODUCCIÓN

“La diferencia del liberalismo económico con el mercantilismo no deviene entonces del desconocimiento del conflicto bélico sino de la naturaleza del mismo. En tanto el mercantilismo entiende la interacción económica en términos de ventajas absolutas, la ventaja de uno es equivalente a la pérdida de otro. Este punto es descrito críticamente por Smith de la siguiente manera, “el comercio, que debiera generar naturalmente entre las naciones y los individuos lazos de unión y amistad,...(deviene) en la más fértil fuente de desacuerdo y animosidad” (Smith en Doyle). Para el liberalismo, en cambio, la interacción económica en términos de ventajas relativas implica que la ganancia de uno, aunque en diferente medida, redonda la ganancia de otro. He allí la clave económica de las diferentes perspectivas de seguridad entre una escuela y la otra”.

§ Parece que la nueva coyuntura mundial exige una normalización renovada, acorde con las circunstancias para tratar de armonizar las relaciones humanas de manera conveniente para todos. En este sentido me muestro partidaria de la realización de los pertinentes cambios legislativos y del establecimiento de unas prácticas adaptadas al actual entorno social español a partir del análisis de dos sectores profesionales de carácter público, con claro *status* proteccionista, vinculados al campo de las ciencias jurídicas y de la salud.

§ No se pretende establecer la competencia como norma de obligado cumplimiento en los sistemas de libre mercado, porque entiendo que, por una parte se pueden producir casos en los que sea necesario poner límites o establecer restricciones a la libre competencia, y por otra parte la libre competencia no tiene por qué producirse en todas las relaciones comerciales ni en todos los sectores profesionales. Es obvio, por ejemplo, que para poder operar en un quirófano el cirujano haya tenido que pasar por diversas pruebas en la Facultad de Medicina que le faculden para trabajar con un mínimo de garantías para el paciente.

1. INTRODUCCIÓN

La defensa de la competencia se debe entender, por tanto, como la defensa de la igualdad de oportunidades para todos en las relaciones comerciales siempre y cuando las ventajas sean comunes. En consecuencia en algunas ocasiones se pueden y se deberán establecer restricciones a la competencia, pero en cualquier caso estas restricciones tienen que estar siempre justificadas con objeto de producir la menor distorsión posible en los mercados.

§ La cita de Xavier Sala i Martín anotada al principio de este trabajo nos parece suficientemente reveladora como para no encarar el problema de la competencia desde un punto de vista exageradamente permisivo, sino desde una perspectiva tolerante y con el sentido de la proporción que se debe tener en nuestro tiempo, dicho de otro modo: con el mínimo intervencionismo estatal en aquellos casos más necesarios con el fin de garantizar en todo caso la seguridad y el bienestar social.

§ *Los tiempos están cambiando* es el título de una canción de Bob Dylan; hoy habría que decir: los tiempos están cambiando deprisa. Desde que algunas de las empresas de éxito (Benetton, Zardoya-Otis, Matutano/Friuto-Lay, American Airlines,...) cosecharan los primeros resultados positivos hace unas décadas a partir de la información obtenida de los usuarios, vienen siendo cada vez más importantes las tareas de los cuestionarios dentro de las labores del marketing empresarial.

En el lado opuesto de quienes piensan que la información es un bien que aunque se dé no se pierde, están quienes desde la perspectiva económica consideran que la información es un activo financiero más.

1. INTRODUCCIÓN

Pero es un activo peculiar, sin duda, como dice Alfons Cornella [1994, p. 146] y difícilmente evaluable, que no deja de ser un bien costoso en el que muchas empresas emplean tiempo y dinero.

Se considera fundamental conocer la opinión pública española sobre la competencia en el sector de servicios profesionales públicos vinculados al Derecho y a la Salud como una de las posibles maneras que hay para mejorar el sistema laboral de las profesiones liberales vinculadas a dichas áreas.

Hay que fijarse también de modo apriorístico y provisional en la literatura de carácter especulativo aparecida tanto en los medios convencionales como electrónicos a favor o en contra de la capacidad de las personas para maximizar beneficios minimizando costes en un sistema de producción de libre mercado.

* * * * *

Desde el punto de vista de la Economía se pretende evaluar con la presente investigación el nivel de operatividad que tiene el sector de servicios profesionales dependientes del Estado en España y se apunta el que presumiblemente lograría en un sistema independiente o de libre competencia.

Se seleccionan las actividades profesionales derivadas de dos campos del conocimiento predominantes en el ámbito docente desde el nacimiento de las primeras universidades: el del Derecho y el de la Medicina.

1. INTRODUCCIÓN

La creación de colegios profesionales es una iniciativa tendente a salvaguardar los derechos de determinados grupos profesionales del sector servicios. Estos derechos se deciden de manera particular, y en la mayor parte de los casos establecen limitaciones que impiden la virtual libre competencia emergente de la iniciativa privada.

La necesidad de algunas profesiones consideradas tradicionalmente imprescindibles como, por ejemplo, la de notario, está siendo puesta en entredicho. Entre otros, el Comisario Europeo de Mercado Interior y Servicios de la Unión Europea Charlie McCreevy¹⁴ declaró en el 2006 que habría que abrir el mercado, y que los notarios deberían asumir la competencia incluso de abogados extranjeros.

La Unión Europea desde su Dirección General de la Competencia hace todo lo posible para impedir que sus Estados miembros desarrollen prácticas monopolísticas. Incluso en Internet tiene la página web http://ec.europa.eu/competition/forms/intro_es.html¹⁵ en la que cualquier ciudadano o persona jurídica puede denunciar los casos de ayudas ilegales.

El desarrollo de la competencia resulta hoy día un tema de gran actualidad que no puede quedar en una mera declaración de buenas

¹⁴ Onésimo Álvarez-Moro. El notario ¿tiene los días contados? *El blog salmón. Economía y finanzas en su color natural*. En: <http://www.elblogsalmon.com/entorno/el-notario-tiene-los-dias-contados> [Consulta 15 de marzo del 2010].

McCreevy formó parte de la Comisión Europea de la UE presidida por João Manuel Barroso desde 2004 hasta el 31 de octubre del 2009 en que fue sustituido por Michael Barnier. Diplomado en Contabilidad por el Colegio Universitario de Dublín. No conozco publicaciones suyas, por tanto afinidad con cualquier escuela o tendencia de pensamiento económico; parece más bien una persona pragmática con más experiencia política que conocimientos de Economía.

¹⁵ Consulta 27 de marzo del 2011.

1. INTRODUCCIÓN

intenciones. De ahí la creación de instituciones que velen por el cumplimiento de todo tipo de normas o acciones que se opongan a la libre competencia de los mercados.

España como miembro de derecho de la Unión Europea y como miembro de la comunidad mundial debe velar por los principios que marcan las honestas prácticas competitivas.

Cuando ello no sea posible y en los casos en que la justicia de un país no cuente con leyes o que sus leyes no sean las apropiadas para frenar e impedir los fenómenos de competencia desleal, se deberá recurrir a los principios generales del Derecho, sobre todo a sancionar negativamente los abusos en proporcionalidad con el daño causado.

Algo que en todo caso tenemos que dejar claro es que la libre competencia se desarrollará siempre en el entorno de la propiedad privada, y se debe aplicar para optimizar la riqueza, pero nunca deberá suponer un lastre para los recursos naturales, ni deberá propiciar casos de marginación social.

* * * * *

Y a todo esto ¿Qué piensan los españoles acerca de la aplicación de la libre competencia a los servicios que a menudo utilizan en sus relaciones con la Administración y con la asistencia sanitaria?

Se plantea esta cuestión ante las diversas y diferentes manifestaciones a favor o en contra aparecidas tanto en los medios de comunicación como en publicaciones científicas acerca de la eficiencia de profesiones tales como las de notario, procurador y registrador de la propiedad.

1. INTRODUCCIÓN

Un ciudadano, por ejemplo, que decida adquirir un bien inmueble se ve obligado a contratar los servicios de un notario, para hacerse acreedor del título que le garantiza la propiedad de ese bien. Hay quienes piensan que este trámite resulta innecesario porque en el caso de que se produzca alguna desavenencia entre las partes contratantes, es un juez el que tendrá que resolver el litigio a pesar de la intervención notarial.

Dadas las circunstancias actuales de la actividad económica en el entorno internacional y la legislación en la mayor parte de los países, conducente al fomento de la libre competencia para el aumento de la producción, el abaratamiento de los costes y la consecución del bienestar, me centraré en determinadas instituciones amparadas por medidas proteccionistas, y en algunas profesiones liberales ejercitadas en el sector público español, a fin de poder constatar su posible mayor operatividad en un sistema de libre competencia.

Como el campo de trabajo es muy amplio y disperso¹⁶, como ya he dicho anteriormente, se han seleccionado las actividades profesionales relacionadas con el Derecho y la Salud¹⁷.

¹⁶ Se extiende, incluso, a áreas relacionadas con la Propiedad Intelectual y con la Propiedad Industrial (incluidas las acciones de espionaje), como muy bien recoge la excelente lista de legislación y de casos juzgados tanto en Estados Unidos como en Europa, elaborada por Kevin Coates [2011].

¹⁷ Además de la Teología, el Derecho y la Medicina fueron materias de estudio cruciales en las primeras universidades españolas, y han seguido siéndolo en la evolución de la enseñanza superior hasta nuestros días. Aun cuando hayan sido manifestaciones fundamentales de las profesiones liberales, no se pretende insinuar que sean los pilares de la ciencia, sino sencillamente indicar su trascendencia en el ámbito universitario y su relevancia en el mundo profesional tanto por su interés social como por la actividad económica que generan.

1. INTRODUCCIÓN

* * * * *

En el ámbito científico el tratamiento de la competencia obliga a estudiar por un lado el conocimiento de las leyes, los dictámenes de rango inferior y las normas¹⁸ que regulan la libertad de comercio entre dos o más partes, y por otro lado analizar la realidad económica, de manera que para realizar un análisis global de las diversas situaciones es preciso combinar los aspectos legislativos con los económicos.

En lo que corresponde a la perspectiva jurídica, hace unos años se presentó en la Universidad Complutense de Madrid una tesis doctoral muy interesante para nuestros propósitos: *Las autoridades de defensa de la competencia. Los Estados Unidos y la Unión Europea. España y Bulgaria*, realizada por María Jeleztcheva Jeleztcheva¹⁹.

En materia económica hay otra tesis doctoral de enorme interés: *Un análisis económico sobre la política de defensa de la competencia: aspectos microeconómicos, macroeconómicos e institucionales*, escrita por Juan Luis Jiménez González²⁰.

¹⁸ A menudo en el lenguaje de la calle se tiende a confundir leyes y dictámenes de rango inferior con normas. Las normas, al contrario que las leyes, decretos, etc. no obligan a su cumplimiento; tienen una sanción, positiva o negativa, pero nunca una penalización de oficio. En cierta manera se puede decir que las normas coinciden con las costumbres. Las llamadas *normas de tráfico* en realidad no son normas sino el desarrollo de un reglamento de obligado cumplimiento.

¹⁹ Madrid. Universidad Complutense. Facultad de Derecho, marzo del 2007. Debido a la fecha de publicación contiene algunos datos desactualizados, pero es un excelente estudio comparativo entre las instituciones de defensa de la competencia de Estados Unidos, Unión Europea, España y Bulgaria.

²⁰ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, abril del 2005. ISBN 9788469169643. Texto íntegro accesible en: <http://acceda.ulpgc.es/handle/10553/2174> [Consulta 3 de mayo del 2011]

1. INTRODUCCIÓN

Es interés de este trabajo fijarnos principalmente en la parte económica. Para ello ha sido importante la lectura de una obra que trata la competencia desde el punto de vista de sus oponentes, me refiero al estudio esclarecedor del profesor Pedro Fraile Balbín *La retórica contra la competencia en España (1875-1975)*²¹.

En cuanto a la metodología, esta investigación tiene carácter especulativo y crítico, es decir: por una parte trata de analizar la realidad española actual, en un momento de tránsito hacia la libre competencia, mostrando las controversias mantenidas entre intereses de grupo contrapuestos; y por otra parte pretende valorar un sector económico de la realidad española a partir de la opinión pública de los ciudadanos.

Cuando se ha obtenido información de páginas web de carácter divulgativo, siempre se ha procurado contrastar esta información con la realidad mediante documentos científicos o fuentes relacionales derivadas de conversaciones con expertos, puesto que en algunos casos incluso dentro de una misma página web aparecen datos contradictorios²².

Los centros consultados han sido: la Biblioteca Central de la Comisión Europea²³, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca del Banco de

²¹ Madrid: Fundación Argentaria; Visor, 1998.

²² Por ejemplo, en la página oficial de la Comisión Nacional de la Competencia, por un lado se indica que se trata de un organismo que funciona de manera piramidal con un Consejo y una Dirección de Investigación, y por otro lado en su organigrama aparece otra Dirección de Promoción de la Competencia cuyo lugar en la pirámide o, mejor dicho: jerarquía, no se aprecia.

²³ Se creó en 1958. Su catálogo se denomina ECLAS. Es la más voluminosa en cuanto a documentos sobre asuntos de competencia en la Unión Europea, con

1. INTRODUCCIÓN

España, la Biblioteca de la Comisión Nacional de la Competencia (Madrid), el Centro de Documentación Europea de la Universidad Carlos III de Madrid, las Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, las fuentes abiertas en Internet y la prensa diaria.

He mantenido fructíferas reuniones consultivas con personas especializadas en el fomento de la competencia como D. Joaquín López Vallés, Subdirector de Estudios. Dirección de Promoción de la Competencia en la Comisión Nacional de la Competencia.

Las observaciones de los profesores Miguel Cuervo Mir, José Carlos García Zorita, Juan Miguel Marín Diazaraque, Carlos Rivero Rodríguez y Luis Manuel Santos Redondo sobre el diseño, gestión y tratamiento de los datos en soporte digital fueron muy afortunadas para ahorrar tiempo y encauzar este cometido de la investigación.

Pero por encima de todos los consejos recibidos, ha sido fundamental el minucioso seguimiento y correcciones de este trabajo realizados por su director, D. Luis Perdices de Blas, de quien debo decir que no sólo es un buen maestro, sino también una buena persona, según la sencilla acepción machadiana de este adjetivo.

Ha sido asimismo importante la suscripción, entre otras, a la lista de distribución²⁴ Derecho y Economía de la Competencia (DERCOM) que mantiene RedIris en España²⁵, primordial para la actualización de conocimientos y resolución de dudas entre colegas.

más de 20 000 ejemplares entre monografías, artículos de publicaciones seriadas y materiales especiales. Su OPAC se puede consultar en http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_es.htm [Consulta 14 de abril del 2011].

²⁴ También llamados *foros de discusión* o *foros de debate*.

²⁵ Ver en <http://www.rediris.es/list/info/dercomp.html> [Consulta 23 de abril del 2011].

1. INTRODUCCIÓN

La bibliografía utilizada en lo que respecta a las publicaciones unitarias o monografías inicialmente se escogió (salvo las necesarias excepciones de obras ya consideradas clásicas), a partir del año 2007 hasta nuestros días.

Anteriormente la bibliografía es menor. Aunque las iniciativas para el fomento de la competencia sean anteriores, el año 2007 marca un hito en las prácticas comerciales españolas con la aparición de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia,

Desde el punto de vista formal, la descripción y citación bibliográficas de las fuentes utilizadas en el inicio de este trabajo se hizo de acuerdo con la norma ISO 690:1987 para documentos convencionales e ISO 690/2:1997 para recursos electrónicos²⁶. No obstante, por una razón de elegancia, he sustituido los paréntesis por corchetes en las citaciones que aparecen en medio de la redacción para diferenciarlas de otro tipo de señalizaciones en el texto corrido. En casos de posibles dudas me atengo al *Prontuario de Bibliografía* de Alberto Montaner Frutos [1999].

Teniendo en consideración que entre las condiciones fundamentales para que una materia pueda ser considerada científica está el uso de un lenguaje especializado propio, y con el fin de evitar ambigüedades conceptuales, se expone al final de este trabajo un glosario con las voces y frases más habitualmente empleadas en temas relacionados con la competencia.

²⁶ Ambas se encuentran en la actualidad refundidas en la *ISO 690:2010 Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources*, y sustituidas por esta. Las diferencias en relación a la descripción y citación de los documentos convencionales apenas son apreciables. A sabiendas de que las normas son documentos especiales, curiosamente es una norma que no dice cómo hay que describir una norma.

1. INTRODUCCIÓN

* * * * *

El trabajo aquí expuesto supone la culminación del proceso iniciado en los cursos del programa interuniversitario del Doctorado **Fundamentos del Crecimiento (Teoría, Historia e Instituciones)** del Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, y el Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, en el año 2008.

En el primer curso académico de este ciclo cursé 5 asignaturas de 4 créditos cada una. En el segundo curso presenté dos trabajos de investigación, dirigidos por los profesores Victoriano Martín Martín y Luis Perdices de Blas, de 6 créditos cada uno, para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA).

Uno de los resultados de las orientaciones recibidas de mis citados orientadores ha sido la publicación del artículo *El debate sobre el socorro a los pobres en España durante el siglo XVI*²⁷.

El título de esta tesis corresponde a uno de los temas sugeridos por el profesor Perdices durante los cursos de Doctorado. Habida cuenta de la voluminosa producción bibliográfica, pienso que se trata de una materia de candente actualidad tanto en los medios de comunicación de masas como en el entorno de la investigación.

La novedad del estudio consiste sobre todo en analizar la virtual operatividad de la libre competencia en las principales actividades profesionales de carácter público o gubernamental, vinculadas a las ciencias del Derecho y de la Salud en España, y en mostrar la

²⁷ *Eseconomía*. 2011, vol. VI, nº 31, pp. 91-110. ISSN 1665-8310.

1. INTRODUCCIÓN

aceptación o rechazo de la sociedad respecto a su aplicación a través de la opinión pública.

El reciente cambio de denominación de Ministerio de Economía por *Ministerio de Economía y Competitividad* ²⁸da cuenta de la importancia que este *modus operandi* tiene para el crecimiento económico.

²⁸ Creado el 22 de diciembre del 2011 por el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy Brey en el décimo gobierno del período democrático iniciado en el siglo XX (elecciones generales legislativas de 1977), tras la dictadura del General Franco.

2. INSTITUCIONES REGULADORAS DE LA COMPETENCIA

Desde tiempos remotos los grandes estados e imperios reconocieron la conveniencia del libre comercio. La defensa de la competencia fue un tema ya tratado en la antigüedad. Figura en el Código de Hammurabi, en la *Política* de Aristóteles, en la *Lex Julia de annona* de Julio César, en el *De praetiis rerum venalium* de Diocleciano (donde aparece el castigo con trabajos forzados e incluso con la muerte para aquellos que desarrollen prácticas monopolísticas). Asimismo, algunas capitulaciones de Carlomagno, Luis Pío y diversos monarcas medievales se oponían a las prácticas restrictivas.

A finales de la Edad Media, con la caída del feudalismo, comienzan las personas a tener apellidos propios, a desarrollar el libre comercio y se inicia el tortuoso camino hacia la institucionalización de normas en defensa de la competencia. El hecho de que Carlos I en el *Mandato de Toledo* de 1523 excluyera a los Fugger, Höschstetter y Wesler de las leyes antimonopolio, no impidió la crítica de esta medida en algunos círculos comerciales [Piotrowski, 1978, *passim* 89-92, 105-133 y 252-253].

En la Edad Contemporánea, aun cuando los movimientos de oposición a los monopolios son muy anteriores, la primera ley que garantiza el desarrollo de los mercados en un sistema de libre competencia fue la Ley Sherman Antitrust²⁹, publicada el 2 de julio de 1890 por el gobierno federal de los Estados Unidos. Su objetivo principal fue la

²⁹ Algunas de sus deficiencias se consiguieron remediar con la Ley Clayton Antitrust de 1914.

2. INSTITUCIONES REGULADORAS

prohibición de aquellas prácticas empresariales abusivas que perjudicaran los derechos de los consumidores.

A partir de entonces las discusiones sobre la competencia han sido abundantes. Mientras que para unos economistas lo más importante no son las leyes antitrust sino la permisibilidad de libre entrada de nuevas empresas en los mercados, otros han mantenido, sin embargo, que sin esas leyes los dominios de posición dominante de muchas empresas serían difíciles de controlar.

No todos los países tienen los mismos problemas de falta de competitividad en los mercados. Mientras que los Estados Unidos se han centrado siempre en el control de las grandes empresas (Standard Oil, Microsoft,...) en Europa la falta de competitividad ha derivado en muchos casos de las propias empresas públicas y de las ayudas concedidas a las empresas privadas [Cabrillo, 1986, p. 168].

Son muchos los países que tienen establecidos tribunales nacionales de defensa de la competencia, sobre todo en países desarrollados como Canadá, Chile,... Estos organismos pueden aparecer con diversos nombres como, por ejemplo, centro, comisión, tribunal,....

En el marco de los países de la Unión Europea se han creado organismos de tipo internacional, nacional y local³⁰ para la defensa de la competencia, cuyas recomendaciones no siempre son atendidas por igual en los diferentes estados miembros.

³⁰ Los Länder alemanes, por ejemplo, ofrecen similares organismos de defensa de la competencia similares a los de nuestras Comunidades Autónomas.

2. INSTITUCIONES REGULADORAS

España, sin ir más lejos, impone mayores restricciones competitivas a los ingenieros salidos de sus universidades que las que tienen, por ejemplo, los ingenieros que terminan sus estudios en las universidades alemanas.

Dicho de otra manera a modo de ejemplo, en Alemania un ingeniero industrial puede realizar actividades propias de un ingeniero de caminos, mientras que en España no. Es el fenómeno que se conoce como *reserva de actividad*.

Hoy todavía, se da el caso, incluso, de que un ingeniero industrial titulado en Alemania encuentra menos trabas en España para desempeñar trabajos vinculados a su formación académica, que un ingeniero industrial titulado en nuestro país.

Las manifestaciones, unas veces a título personal, y otras veces como representantes de las ingenierías en los medios de comunicación en relación con la futura Ley de Servicios Profesionales, se pueden tildar de inciertas, tendenciosas y demagógicas, puesto que lo que se pretende es precisamente ofrecer la misma igualdad de oportunidades de trabajo a los ingenieros españoles que a muchos extranjeros y, en definitiva, defender a los profesionales de las Ciencias Aplicadas.

En cambio muchas veces nos olvidamos de que los problemas de fondo son de otra índole, y podemos indicar al menos dos:

1. Falta de uniformidad de normas no sólo en los países de la Unión Europea sino falta de uniformidad de normas de carácter mundial.
2. Escaso poder de los organismos defensores de la competencia, ya que en muchos casos sus decisiones terminan en manos de los jueces.

2.1. Instituciones europeas

La Unión Europea desde sus inicios nació con el fin fundamental de organizar y mejorar la economía de sus países miembros, de ahí los anteriores nombres que ha recibido: Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA, 1951), Comunidad Económica Europea o Mercado Común (CEE o CE, 1957), y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM, 1957), que son las tres comunidades sobre las que se asienta hoy la Unión Europea, creada en 1992 a partir del Tratado de Maastricht. Los fines culturales o de otra índole fueron objetivos secundarios hasta la actual configuración.

Si examinamos su organigrama vemos que al igual que la mayoría de las naciones diferencia las tres grandes esferas del poder³¹:

Legislativo: *Consejo Europeo* o Reunión de Jefes de Estado o de Gobierno (27 Jefes de Estado o de Gobierno, Presidente del Consejo Europeo y Presidente de la Comisión Europea).

Parlamento Europeo (751 diputados).

Judicial: *Tribunal de Justicia de la Unión Europea*. (27 jueces y 8 abogados generales, designados de común acuerdo por un

³¹ Es aconsejable leer el libro de Araceli Mangas Martín [2010] mejor que leer las confusas y a veces equivocadas informaciones que aparecen en las páginas web de Internet.

2. INSTITUCIONES REGULADORAS

período de seis años por los gobiernos de los Estados miembros)³².

Ejecutivo: *Consejo*, también llamado Consejo de la Unión Europea o Consejo de Ministros (27 ministros, 1 por Estado miembro).

Comisión Europea o Ejecutivo Comunitario (27 miembros hasta 2014)³³.

Es la Comisión Europea la encargada de orquestar un entramado de culturas diferentes. Si se presta atención a sus direcciones generales, comprobamos que en su mayoría están vinculadas a los aspectos económicos de la vida. De hecho, de las veinticuatro que figuran en el período 2010-2014 al menos trece se pueden considerar relacionadas con la Economía, entre ellas, la de Competencia.

El comisario de Competencia y uno de los seis vicepresidentes de la Comisión para el período 2010-2014 es el español Joaquín Almunia. Está respaldado por el Director General de la Competencia (este, a su vez, ayudado por dos asesores y un auditor) y apoyado por un Economista-Jefe (también ayudado por dos asesores).

³² En el año 2004 se creó un tribunal especializado, el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, con el fin de aliviar la carga de trabajo del Tribunal de Justicia.

³³ De modo complementario en el terreno económico figuran el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas (27 miembros, 1 por Estado miembro) y el Banco Europeo de Inversiones. Asimismo las instituciones consultivas: Comité de las Regiones (máximo de 350 miembros) y el Comité Económico y Social (máximo de 350 miembros).

2. INSTITUCIONES REGULADORAS

Por debajo están los directores generales de Defensa de la Competencia (Antitrust), Fusiones (Mergers) y Ayudas Estatales (State Aids) y los departamentos de Registro y Recursos y Política y Estrategia.

La figura del Economista-Jefe es importante. Se encarga del asesoramiento económico para la ejecución de casos y las iniciativas políticas. Ayuda a evaluar el impacto económico de sus acciones, proporciona orientación independiente sobre cuestiones metodológicas de economía y econometría para la aplicación de las normas de competencia de la UE, y contribuye en casos individuales de competencia (en particular lo relacionado con problemas económicos complejos y análisis cuantitativo), para el desarrollo de instrumentos de política general, así como ayudar con los casos pendientes ante los tribunales comunitarios.

Además el Economista-Jefe actúa como un foco para el debate económico dentro de la Dirección General de la Competencia, en colaboración con otros servicios de la Comisión y en asociación con el mundo académico. También coordina las actividades del grupo económico de asesoramiento sobre política de competencia (GCEPC).

Las denuncias y reclamaciones que cualquier persona o institución puede presentar en la Dirección General de la Competencia, como se ha dicho anteriormente, son resueltas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, susceptible de estar apoyado por tribunales especiales adjuntos, tal como dice el artículo 257 del *Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea*.

2.2. Instituciones españolas

En general la historia de España, desde la perspectiva económica, se caracteriza por el apego a las medidas proteccionistas, propias de los sistemas autárquicos; la supresión de barreras en la economía ha ido muchas veces por detrás de la de los países europeos más avanzados. A mediados del siglo XX comienzan a escucharse las primeras voces de algunos economistas defensores de la libertad de mercado.

Actualmente en el derecho español se reconocen tres tipos de conductas contra la competencia: los cárteles, el abuso de posición dominante (incluyendo la explotación de la situación de dependencia económica) y el falseamiento de la libre competencia por actos desleales.

Tras el precedente del Plan Nacional de Estabilización Económica (1959), que supone la ruptura con el autarquismo anterior, la primera ley en defensa de la competencia aparece a finales de los años 80 del siglo pasado, es la *Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia* mediante la cual se crean el Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia.

Poco después, la ley 1/2002 permitió el establecimiento de autoridades sobre la competencia en cada una de las Comunidades Autónomas. Las primeras fueron las de Cataluña y Madrid.

Los jueces no pueden aplicar directamente la *Ley de Defensa de la Competencia*, pero sí pueden resolver cualquier demanda de los particulares que reclamen indemnizaciones por daños o perjuicios derivados de prácticas restrictivas de la competencia después de haber recibido resoluciones en firme de la Comisión Nacional de la Competencia.

2.2.1. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC)

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) es una institución estatal pública, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda (hoy Ministerio de Economía y Competencia), descendiente e integradora de los anteriores Servicio y Tribunal de Defensa de la Competencia³⁴.

De modo similar a otros países de la Unión Europea (en Francia se llama *Autorité de la Concurrence*³⁵, en el Reino Unido *Competition Commission* ³⁶,...), España cuenta con este organismo central de defensa de la competencia y diversos tribunales en las Comunidades Autónomas.

La Comisión Nacional de la Competencia es un organismo público pero independiente del gobierno. Ejerce sus actividades en el territorio nacional y se encarga de aplicar la Ley de Defensa de la Competencia en todos los sectores y relaciones comerciales de la economía española.

En el artículo 24 de la anteriormente citada Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia se establecen como funciones de la misma las de instrucción, resolución y arbitraje. Sus actividades están sometidas anualmente a control parlamentario y a la estrecha vigilancia del Consejo de Ministros. Pero no hay que perder nunca de vista que sus

³⁴ Actualmente ubicada en Madrid, en la calle Barquillo número 5. Una información más detallada y completa se puede obtener en su página web <http://www.cncompetencia.es/> [consulta 7 de abril del 2011]

³⁵ Cfr. <http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/index.php> [Consulta, 23 de abril del 2011].

³⁶ Cfr. <http://www.competition-commission.org.uk/> [Consulta, 23 de abril del 2011].

2. INSTITUCIONES REGULADORAS

decisiones, como todas las del poder ejecutivo, estarán siempre sometidas a las sanciones positivas o negativas del poder judicial si hubiera lugar a ello.

En el organigrama de la CNC se puede observar la dirección de un presidente que realiza tareas de coordinación y supervisión, y los órganos siguientes: el Consejo, con funciones de resolución de casos; la Dirección de Investigación, que instruye expedientes; la Dirección de Promoción de la Competencia para tareas de extensión y fomento de la competencia mediante cursos, jornadas... ; la Asesoría Económica destinada a las actividades consultivas y de arbitraje; y la Secretaría General encargada de las labores administrativas.

Sus funciones y actividades se complementan con las de los Tribunales de la Competencia de las Comunidades Autónomas. Para evitar acciones redundantes existe el Comité de Coordinación.

Esta dualidad y pluralidad de organismos se puede producir también en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, sucede algo parecido. Allí, por un lado tenemos la *Federal Trade Commission* (FTC), que es una agencia dependiente del Gobierno pero independiente en cuanto a sus actividades, y por otro lado la *Antitrust Division* del Ministerio o Departamento de Justicia. Ambos órganos trabajan en estrecha colaboración, “El propósito de mantener esta duplicidad es la necesidad de una aplicación efectiva y diferenciada de las normas antitrust en relación con la gravedad de las infracciones: de este modo la Federal Trade Commission está autorizada para emitir órdenes de cese y desestimiento [sic] con características de actos administrativos singulares en la aplicación de la Clayton Act y Federal Trade Commission Act, mientras que la Division Antitrust está encargada de

2. INSTITUCIONES REGULADORAS

la persecución de las violaciones más graves (algunas de las cuales constituyen delitos) en aplicación de la Sherman y Clayton Act, mediante sus potestades de iniciar proceso civil o penal.” [Jeleztcheva, 2009, p. 19].

* * * * *

La Comisión Nacional de la Competencia tiene también como objetivo promover la competencia (Advocacy). Una de sus grandes ventajas es la gratuidad de sus prestaciones. Cualquier persona puede interponer una queja o una demanda sin tener que desembolsar dinero por tasas, y sus resoluciones son vinculantes para la parte demandada.

Pero a diferencia de los casos de los tribunales ordinarios de justicia, en los que los jueces pueden dirimir o abortar los conflictos entre partes por común acuerdo de ambas, en los casos de la CNC esta continúa y finaliza todo proceso emprendido por iniciativa propia o a instancia de los particulares aun cuando estos renuncien a sus pretensiones en cualquier momento de proceso.

* * * * *

La Comisión Nacional de la Competencia es tan conocida por la publicación de sus documentos como por el funcionamiento de su organización interna.

Además de su biblioteca especializada de uso privado, es la responsable de un cuantioso número de publicaciones de gran interés tanto para los estudiosos como para los empresarios.

2. INSTITUCIONES REGULADORAS

Normalmente son ediciones en formato PDF que se pueden obtener en su sitio web. Algunas especialmente relevantes como el *Libro blanco para la reforma del sistema de defensa de la competencia*. El didactismo de la CNC en el citado lugar llega hasta puntos como la apostilla de un interesante glosario de términos relativos a la competencia.

Un apartado asimismo interesante lo constituyen sus notas de prensa. En esta sección se pretende dar a conocer a la gente temas que pudieran ser interesantes para prever actuaciones anticompetitivas. En estos casos, la ley, no obstante, aboga por la confidencialidad y obliga a adoptar ciertas cautelas en relación a comentarios que pudieran perjudicar los intereses de algunas empresas.

En cuanto a su funcionamiento, la fortaleza y consolidación de esta institución quedan fuera de toda duda. Esto puede comprobarse mirando el gran número de inspecciones e incoaciones de oficio de expedientes sancionadores realizados³⁷.

Su función parece imprescindible por la tendencia de los operadores a saltarse las reglas de la libre competencia. La crisis económica actual “no hace sino agravar los riesgos de concentración empresarial e incrementar la presión de los grupos de interés a la Administración en busca de protección, aún a costa de entorpecer significativamente la competencia en los mercados” [Baches Opi, 2010, p. 21]³⁸.

³⁷ Esta riquísima información es pública y se puede obtener en la dirección: <http://www.cncompetencia.es/Inicio/Expedientes/tabid/116/Default.aspx> [Consulta 28 de diciembre del 2011].

³⁸ Esta idea se contradice con las aseveraciones de algunos de los autores que colaboran en la misma obra. Por ejemplo en la página 356 se dice todo lo

2.2.2. Los tribunales de la Competencia en las Comunidades Autónomas españolas

España es, junto con Alemania, el único Estado miembro de la Unión Europea que tiene descentralizado el sistema de defensa de la competencia³⁹.

En España, el Estado de las Autonomías ha propiciado también la aparición de tribunales de la competencia en cada una de las diversas comunidades autónomas. En la actualidad son diez las Comunidades Autónomas que cuentan con este tipo de organismos.

Estas instituciones pueden recibir nombres distintos⁴⁰, por ejemplo en Extremadura es el **Jurado** de Defensa de la Competencia, en Andalucía

contrario: "En lo relativo a la práctica de la nueva autoridad, buena parte del período de aplicación de la nueva LDC en España se ha caracterizado por la fuerte caída en la actividad económica y las dificultades de financiación, lo que ha incidido negativamente sobre el número de operaciones de concentración".

³⁹ *Cfr.* Javier Berasategui Torices. Las autoridades autonómicas de defensa de la competencia: ¿Quo Vadis? En: Sergio Baches Opi (Coord.). *La Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. Balance de su aplicación*. Madrid: La Ley; Asociación Española de Defensa de la Competencia, p. 105.

⁴⁰ Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, Servicio Canario de Defensa de la Competencia, Comisión Regional de la Competencia de Castilla-La Mancha, Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla-León, Autoridad Catalana de la Competencia, Jurado de Defensa de la Competencia de la Junta de Extremadura, Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, Servicio Regional de Defensa de la Competencia de la Región de Murcia, Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana y Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia.

se denomina **Agencia** de Defensa de la Competencia, en Castilla La Mancha se llama **Comisión** Regional de la Competencia,...

A diferencia de la Comisión Nacional de la Competencia, estos tribunales solamente tienen atribuciones para resolver casos de los comportamientos comerciales contra la competencia que se produzcan dentro de los límites de cada comunidad respectiva.

Como muy bien señala Miguel Cuerdo Mir [2005, p.11] “La defensa de la competencia en ningún caso puede ser entendida y agotada en el momento de realización de las transacciones, sino más bien desde el momento en que un agente toma la decisión de producir un bien o un servicio y con ello participar de una determinada manera en el mercado. Hay una esfera de producción y otra de intercambio que conviene no confundirlas ni superponerlas”⁴¹.

En consecuencia los Tribunales de Competencia de las Comunidades Autónomas no pueden arbitrar ni sancionar actos como, por ejemplo, las concentraciones de empresas o cualquier otro asunto que resulte de trascendencia nacional. No obstante, algunos de los casos regionales o autonómicos pueden derivar en ulteriores recursos a la Comisión Nacional de la Competencia.

El pago o gratuidad de las traducciones de las sentencias de los tribunales catalanes, por ejemplo, es uno de esos casos en los que se puede producir una duplicidad sancionadora. Los hechos son estos: ante la decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia de Cataluña de avalar la decisión de la Generalitat para que no se hagan

⁴¹ El subrayado es nuestro.

2. INSTITUCIONES REGULADORAS

gratuitamente las traducciones del catalán al castellano de los documentos en los juicios, sino que las paguen quienes las soliciten, salvo en los casos penales, el abogado José Luis Manzón denunció en octubre de 2009 ante la Comisión Nacional de la Competencia, con sede en Madrid, al Departamento de Justicia de la Generalitat por práctica restrictiva de la competencia⁴².

Para evitar colisiones y redundancias de juicios paralelos entre los diversos tribunales la Ley 1/2002⁴³ señala cómo se debe articular la cooperación entre los diversos organismos autonómicos. En caso de dudas es el Consejo de Defensa de la Competencia el que decide a quien corresponde resolver los conflictos.

Como ocurre con la Comisión Nacional de la Competencia, cualquier persona puede interponer una queja o demanda ante estos tribunales, e igualmente estos recursos son de carácter gratuito y no excluyen una resolución alternativa en los tribunales ordinarios de justicia.

En algunas ocasiones se ha puesto en entredicho tanto la operatividad de estos organismos autonómicos de defensa de la competencia cuanto la redundancia de funciones. De modo exagerado se ha considerado que

⁴² Mercedes Serraller. Los abogados deben pagar las traducciones del catalán que soliciten en los juicios. *Expansion.com jurídico*. En:

<http://www.expansion.com/2011/03/04/juridico/1299252595.html?a=1efa1d562335c0069663e93d971365ea&t=1302685300> [Consulta 13 de abril del 2011].

⁴³ Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.

2. INSTITUCIONES REGULADORAS

sus atribuciones podrían, incluso, ser asumidas por el Tribunal de Cuentas.

Un paso en esta dirección lo ha apuntado ya Dña. María Dolores de Cospedal García, Presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, quien, días antes de su toma de posesión el día 22 de junio del 2011, declaró a los medios de comunicación la supresión, entre otros organismos, del Defensor del Pueblo, del Consejo Económico y Social y de la Comisión Regional de la Competencia, organismo que fue creado mediante el Decreto 76/2008, de 10 de junio, de creación de los órganos de defensa de la competencia de Castilla-La Mancha (DOCM de 13 de junio del 2008).

Se lleve a cabo o no lo anunciado entonces, e independientemente de las declaraciones en contra de otros miembros del partido político al que pertenece esta presidenta, el dato es muy significativo porque se trata de una persona que es Abogada del Estado y se supone que conoce de cerca el nivel de competitividad de los organismos que pretende suprimir.

Otra Comunidad, la de Castilla-León ha anunciado su voluntad de suprimir este Tribunal⁴⁴, la de Madrid lo ha hecho de facto como aparece en el *BOCM* del día 16 de enero del 2012. El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el discurso de investidura el día 19 de diciembre del 2011, anunció la conveniencia de eliminar este tipo de instituciones para evitar servicios redundantes, con vistas a fortalecer medidas de mercado único.

⁴⁴ elpais.com, 20-11-2011. En: http://wap.elpais.com/index.php?module=elpais&page=elp_p_noticia&idNoticia=20110502elpepieco_3.Tes&seccion=eco [Consulta 21 de noviembre del 2011].

2. INSTITUCIONES REGULADORAS

Otras doce Comunidades Autónomas conservan este tipo de tribunales. Su mantenimiento o clausura debe decidirse en función de su operatividad. La Comisión Nacional de la Competencia se ha declarado favorable a ellos, no solamente por tratarse de servicios descentralizados, sino porque su trabajo alivia el exceso de trabajo que ella tiene.

La operatividad de estos tribunales complementarios hay que decidirla en virtud de su rentabilidad, puesto que se ha visto que con ellos las ventajas para los consumidores son evidentes, como ya lo ha demostrado la Office of Fair Trading (OFT) en el Reino Unido⁴⁵.

Ahora bien, lo que hay que hacer es un análisis comparativo y evaluar si los gastos que ocasiona su funcionamiento son suficientemente rentables en relación con los ingresos obtenidos por sanciones, ya que el ahorro que sus medidas producen en los consumidores es evidente.

En este sentido, todavía no hay estudios determinantes pero sí contamos con una tabla que nos puede dar idea de los gastos generados por los tribunales de algunas Comunidades Autónomas, los ocasionados por la Comisión Nacional de la Competencia y los

⁴⁵ Juan Santaló. ¿Hay que suprimir las autoridades autonómicas de defensa de la competencia? 27-5-2011. En: <http://www.fedeablogs.net/economia/?p=11791> [Consulta 21 de noviembre del 2011]. Las ventajas del estudio citado por Santaló reflejan que superan en una proporción de siete a uno a la inversión que supone la creación de estos organismos en el Reino Unido.

2. INSTITUCIONES REGULADORAS

beneficios que redundan de sus actividades, como se puede observar a continuación⁴⁶:

CCAA (AÑO)	PRESUPUESTO (€)	Expedientes entrantes	Sanciones (€)	Presupuesto/ Expedientes entrantes	Presupuesto/ Sanciones
ANDALUCIA (2010)	3.107.808	11	425.012	282.528	7,3
CASTILLA LA MANCHA (2010)	197.150	4	-	49.287	
CASTILLA Y LEON (2009)	?	3	182.184	?	
CATALUÑA (2009)	1.280.020	10	10.000	128.002	128,0
GALICIA (2009)	897.930	8	54.250	112.241	16,5
MADRID (2010)	1.827.267	12	15.048	152.272	121,4
PAIS VASCO (2010)	466.100	4	12.000	116.525	38,8
VALENCIA (2010)	669.830	6	174.572	111.638	3,8
CNC Septiembre 2008- Agosto-2009	13.432.278	166	75.252.247	80.917	0,18
CNC Septiembre 2009- Agosto-2010	13.348.638	217	162.405.730	61.514	0,08

2.2.3. Otros organismos en defensa del consumidor

El artículo 51 de la *Constitución* del 27 de diciembre de 1978 establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afectarles.

⁴⁶ *Ibídem*. El número de expedientes entrante es recogido del período que va del 1 de setiembre al 31 de agosto del año que se menciona. El presupuesto de las CCAA y las sanciones, sin embargo, corresponde al año natural.

2. INSTITUCIONES REGULADORAS

Las Juntas Arbitrales y los Colegios Arbitrales son las instituciones de carácter gratuito encargadas de velar por la defensa de los consumidores que median en las desavenencias comerciales entre las partes y son en cierta forma un medio para fomentar la competitividad en el sentido de que pueden evitar costosos y lentos procesos judiciales.

En el caso de los Colegios, sus resoluciones (laudos arbitrales) tienen los mismos efectos que las sentencias judiciales.

Pero a primeros de abril del 2010 el Ministerio de Justicia presentó un anteproyecto de ley⁴⁷ que ampliará el ámbito de aplicación no sólo a los asuntos mercantiles sino también a los civiles, y que reformará de manera notable la regulación del arbitraje y la mediación. Se pretende con ello una adaptación a la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo del 2008. Pero mientras que esta directiva establece unas normas mínimas, la futura legislación española supone una ampliación de ellas y establece un régimen vinculante de más amplio espectro con el sistema jurídico. Todo ello con el propósito de evitar el colapso en los juzgados, de favorecer la economía sostenible y, en definitiva, de fomentar la competitividad.

En España tanto los Ayuntamientos como las Comunidades Autónomas tienen regulados los servicios en defensa del consumidor. Dicha normalización ha sido analizada, entre otros, por el profesor

⁴⁷ Se trata del Anteproyecto de Ley de Mediación y reforma del arbitraje. *Cfr.* Almudena Vigil Hochleitner. Nueva regulación del arbitraje y la mediación para aliviar los juzgados. *El Economista*, 6 de abril del 2010, pp. 4-5.

El texto completo se puede obtener en:

http://www.mjusticia.es/cs/Satellite?c=Documento&cid=1161680003706&pagename=Portal_del_ciudadano%2FDocumento%2FTempDocumento.

Cualquier ciudadano puede enviar mediante correo electrónico sugerencias en la dirección:

http://www.mjusticia.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1161680003567&pagename=Portal_del_ciudadano/Page/MenuInferior&lang=es_es [Consulta 8 de abril del 2011]

2. INSTITUCIONES REGULADORAS

Javier Guillén Caramés [2002] en *El estatuto jurídico del consumidor (Política comunitaria, bases constitucionales y actividad de la Administración)*.

En el caso de Madrid se puede decir que realizan una actividad altamente competitiva, intensa y gratuita, y su experiencia es un excelente indicador de la actividad empresarial en la región.

3. LEGISLACIÓN

3.1. La base jurídica de la Comisión Europea

Como escribe Borchardt [2011, p. 31], “La UE es una «federación» de Estados a la que han sido transferidas una serie de funciones y tareas; por ello, su Constitución debe ser capaz de responder a las mismas preguntas que la Constitución de un Estado... Los Estados se rigen por dos principios de organización esenciales: el Derecho («rule of law») y la democracia”.

No obstante, el fracaso del propuesto *Tratado Constitucional* el 29 de octubre del 2004 no impide esta aspiración fundamental y mucho menos atenta contra la naturaleza jurídica de la Unión Europea.

Sentada esta base, hay que señalar que las decisiones jurídicas del Tribunal de Justicia de la anterior Comunidad Económica Europea siguen estando vigentes y siendo válidas en el actual estado de la Unión Europea⁴⁸. Pero hay que tener en cuenta que, si bien la Unión Europea, desde la perspectiva judicial, “es una entidad autónoma de poder con derechos de soberanía propios y un ordenamiento jurídico independiente de los Estados miembros, al que están sometidos tanto los Estados miembros como sus ciudadanos en los ámbitos de competencia transferidos a la UE” [Borchardt, 2011, p.35], tampoco es menos cierto que “la UE no es aún una estructura acabada, sino más bien un «sistema de gestación» cuya apariencia definitiva aún no puede

⁴⁸ En los años 1963 y 1964 se publicaron dos sentencias fundamentales, el asunto Van Gend & Loos y el caso Costa / Enel. Para más detalles sobre estos litigios, véase el citado libro de Borchardt, pp. 32-34.

⁴⁹ El subrayado es mío.

3. LEGISLACIÓN

preverse” [Borchardt, 2011, p.35]. El Tribunal de Justicia, de hecho, en muchos casos tiene que recurrir para sus decisiones a los Principios Generales del Derecho y al Derecho consuetudinario (que está reconocido) de modo que todavía falta mucho camino por andar para fraguar su estabilidad.

En relación con nuestro cometido, El *Tratado de Roma* (1957), que fue el documento de creación de la inicial Comunidad Económica Europea (CEE) dejó desparramados en diferentes apartados y confusas redacciones los principios básicos del sistema comercial de los países socios. Esa ofuscación se procuró remediar con el *Tratado de la Comunidad Europea* (Maastricht, 1992), que por lo que se refiere a los asuntos económicos relacionados con la competencia, establece, según Alonso Soto [1999, p. 31 y ss.], dos principios fundamentales: “1º. Que la elaboración de la política económica corresponde a cada uno de los Estados miembros. Y 2º. Que la libre competencia es un instrumento esencial para el logro del mercado único”.

De modo más concreto la legislación comunitaria sobre las cuestiones de competencia está expuesta en los artículos 81⁵⁰ del anterior Tratado de la Comunidad Europea (TCE) que ahora se corresponde con el 101 de ya citado *Treaty on the functioning of the European Union* = *Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea* (TFEU), y el artículo

⁵⁰ Accesible en

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0097:0118:ES:PDF> Legible en los formatos html, tiff y pdf al que se corresponde la dirección aquí escrita [Consulta 13 de abril del 2010].

3. LEGISLACIÓN

82⁵¹ del TCE, que asimismo, a partir de febrero del 2009, ha pasado a ser, tras su revisión, el artículo 102 del TFEU, sin que la redacción en ninguno de los dos casos se haya modificado, de hecho tanto el Manual de Ortiz Blanco [2008] como en la 18ª edición del *Manual* de Broseta Pont [2011, capítulos 6 y 7] se sigue utilizando la vieja nomenclatura.

Pues bien, en ninguna de las dos partes del *Tratado* antes citadas se alude a los colegios profesionales. Por lo tanto algunos juristas sostienen [*Cfr.* Engra y Navarro Varona, 2002] que las profesiones liberales deben someterse a las directrices de los tribunales de la competencia de la Unión Europea y de sus correspondientes países solamente en aquellos casos en que de su actividad profesional se derive una relación comercial, pero en ningún caso cuestionan las actividades de los colegios profesionales.

3.2. La ley española de defensa de la competencia

Si volviéramos la vista hacia tiempos pasados, posiblemente encontraríamos algunas de las raíces de nuestro carácter tolerante en la época medieval. Los escolásticos medievales y renacentistas tuvieron gran influencia en la cultura española de entonces y de siglos posteriores.

⁵¹ Toda la legislación antitrust de la Unión Europea se puede ver en: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html>. La parte que estoy citando está accesible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:045:0007:0020:ES:PDF> Legible en los formatos html, tiff y pdf al que se corresponde la dirección aquí escrita [Consulta 13 de abril del 2010].

3. LEGISLACIÓN

El hecho de que los Padres de la Iglesia sostuvieran que el hombre es más hijo de sus obras que de sus padres, con las reflexiones de todo tipo que esta frase implica en los diversos campos del conocimiento científico, es, a mi juicio, una de las ideas más avanzadas para la superación de la sociedad estamental y para el apoyo al espíritu competitivo basado en el desarrollo de la libertad individual.

El principio de libertad es la base fundamental del liberalismo, pero la defensa de la libertad de actuación en Economía no surge de manera inopinada ni nace de la nada con los economistas clásicos del siglo XVIII. El tópico de que “la economía empezó como la humanidad, con un Adán, cuyo apellido era Smith” [Barber, 1984, p. 19], además de discutible, no es sino una broma.

La historia de las ideas desde tiempos remotos, salvo pocas excepciones, ha sido siempre más propensa a la evolución que al cambio, y en el pensamiento económico también sucede algo parecido. Por eso contemplar a los economistas clásicos, a los defensores de la libertad de mercado, sin mirar hacia atrás, sin reconocer el mérito, por ejemplo, del gran economista liberal (y seguramente, padre de la Economía moderna) Ibn Jaldún [2005] o de la Escuela de Salamanca, sería una interpretación histórica incompleta.

De manera consciente o fortuita, se aprecian si no influencias directas, sí al menos concomitancias y parecidos, por ejemplo, entre la idea de la naturaleza egoísta del individuo manifestada por algunos Padres de la Iglesia, la ley de consecuencias no queridas del Padre Vitoria [Martín,

3. LEGISLACIÓN

2002, p. 122] y el pesimismo implícito que sirve de base al *corpus* teórico de la obra de Adam Smith.

El historicismo y la metodología comparativa parecen aspectos fundamentales para el conocimiento de la ciencia. En este sentido, Victoriano Martín [2002] ha realizado un estupendo estudio de los antecedentes del pensamiento económico liberal desde San Agustín hasta Adam Smith, porque es difícil entender la Escuela Clásica sin unos precedentes medievales y renacentistas de los que se suele hablar con frecuencia pero, como dice el citado profesor, “no existe un estudio sistemático de aquellas ideas” [Martín, 2002, p. 17], que es justamente lo que consigue hacer en este libro.

* * * * *

Las primeras prohibiciones explícitas de conciertos y monopolios que se contienen en nuestra legislación aparecen en el siglo XVI y se refieren a las «personas que se conciertan entre sí, haciendo liga y monopolio, de no vender y contratar aquellas cosas que son de su trato»⁵².

La actual *Ley de Defensa de la Competencia* data del año 2007 tiene como precedente (relativamente próximo o lejano, según se mire) la *Ley 110/1963*, de 20 de julio, de *Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia*, y se asienta sobre una ley anterior: la *Ley 16/1989 de*

⁵² *Quaderno de las Alcabalas*, Ley 51 de 1566. Apud *Ley 11/1963 de Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia*. En: *B.O.E.* nº 175, de 23 de julio de 1963, p. 11145.

3. LEGISLACIÓN

Defensa de la Competencia, publicada el día 17 de julio, de manera que supone una actualización de la misma, y se completa con el Real Decreto 261/2008 de 22 de febrero, que desarrolla el espíritu de dicha Ley y reglamenta las actuaciones de los organismos oficiales frente a los hechos anticompetitivos.

Uno de sus cambios más notorios ha sido la refundición de los anteriores Servicio y Tribunal de Defensa de la Competencia en la que hoy es la Comisión Nacional de la Competencia.

A raíz también de la Ley 16/1989 surge la Ley 1/2002 de 21 de febrero que de modo complementario regula la coordinación de competencias del Estado y de la Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia⁵³.

Estas tres leyes: 16/1989, 1/2002 y 15/2007, junto con la futura *Ley de Servicios Profesionales* anunciada por el anterior gobierno socialista serán los cuatro pilares sobre los que se asiente la defensa de la competencia en España.

⁵³ Esta Ley era sumamente necesaria para la aplicación de la competencia en el Estado de las Autonomías, ante la petición de inconstitucionalidad de la Ley 16/1989 por parte de las Comunidades Autónomas de Cataluña y el País Vasco, y sobre todo después de la sentencia 208/1999 del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales algunos de sus artículos principalmente por el uso de la frase “*en todo o en parte del mercado nacional*”. Las citadas Comunidades Autónomas argumentaron que la defensa de la competencia no era un principio que figurara en la Constitución sino una cuestión interna que cada Comunidad puede legislar dentro de sus atribuciones.

3. LEGISLACIÓN

Si nos atenemos a sus fechas de publicación de las mismas, observamos que nuestro país no siempre ha ido a remolque de la legislación europea (puesto que la Ley 16/1989 es anterior a los Reglamentos derivados del Tratado de Maastricht), sino que tanto los gobiernos socialistas como sus opositores han desarrollado leyes defensoras de la libre competencia. Cosa distinta es el grado de permisibilidad en los servicios que pretendan aplicar unos y otros.

* * * * *

La Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia se desarrolla al amparo de la *Constitución española* que en su artículo 38 reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado.

El preámbulo de esta ley es sumamente interesante porque, además de ser una declaración de intenciones, argumenta y justifica de modo teórico la importancia de la competencia para el desarrollo económico de España y señala los objetivos que pretende.

Se parte de una hipótesis, al parecer consensuada. A juicio del legislador, “existe un **acuerdo generalizado** con respecto a la creciente importancia de la defensa de la competencia”⁵⁴.

Dicha ley pretende establecer la libre competencia empresarial para mejorar los sistemas de gestión utilizando técnicas eficientes con objeto de aumentar la producción, bajar los precios para los usuarios y

⁵⁴ B.O.E. 4 de julio del 2007, nº 159, pág. 28849.

3. LEGISLACIÓN

aumentar el bienestar social, pero todo ello adaptando las iniciativas empresariales a las necesidades económicas del país y a la planificación gubernamental.

De modo que el Gobierno es el que marca las líneas generales de la economía y las empresas podrán decidir sus sistemas de producción pero siempre ajustándose a la política económica gubernamental.

Contenido fundamental de la Ley

Esta Ley contempla los siguientes cinco títulos o temas fundamentales:

a) Regulación de cuestiones llamadas sustantivas. Se establecen en este título tres clases de instrumentos principales para la política competitiva: el régimen aplicable a las conductas restrictivas de la competencia, los principios del control de concentraciones y el sistema de seguimiento y propuesta en materia de ayudas públicas.

b) Aspectos institucionales. La novedad destacable es la creación en el ámbito estatal de una institución única e independiente del Gobierno, la Comisión Nacional de la Competencia, que integrará a los anteriores Servicio y Tribunal de Defensa de la Competencia que desaparecen.

La Comisión Nacional de la Competencia presenta una estructura piramidal centrada en la existencia de dos órganos separados, la Dirección de Investigación, que es la encargada de incoar y tramitar los expedientes que hayan sido objeto de investigación, y el Consejo que decide si sobresee y archiva los expedientes o declara la prohibición de

3. LEGISLACIÓN

conductas restrictivas de la competencia e impone las sanciones correspondientes y acuerda la imposición de medidas cautelares.

c) Comisión Nacional de la Competencia. En este apartado se regulan los aspectos generales de la Comisión Nacional de la Competencia, que es la encargada de aplicar esta Ley, y sus órganos de dirección.

Hay que destacar que el Presidente de la CNC concentra un gran poder como jefe de todo el personal de la misma, director de los planes plurianuales de inspección y presidente del Consejo de Defensa de la Competencia.

d) Cuestiones procedimentales. Esta ley pretende lograr el equilibrio entre los principios de seguridad jurídica y eficacia administrativa. Así, se simplifican notablemente los procedimientos y se separa con claridad la instrucción y la pura resolución.

e) Régimen sancionador. En este apartado la Ley supone un importante avance en seguridad jurídica.

Se realiza una graduación de las diversas infracciones previstas.

Se aclaran las sanciones máximas de cada tipo, fijadas en términos de un porcentaje del volumen de ventas totales de los infractores.

Asimismo, se especifican los criterios que determinarán la multa concreta en cada caso, en línea con las tendencias actuales en el ámbito europeo.

3. LEGISLACIÓN

Además, se prevé la publicidad de todas las sanciones impuestas en aplicación de la Ley, lo que reforzará el poder disuasorio y ejemplar de las resoluciones que se adopten.

También se introduce y admite el procedimiento de clemencia (*leniency*), de modo parecido al regulado por la normativa comunitaria.

Esta Ley ha sido ampliamente comentada tanto en artículos de publicaciones seriadas como en publicaciones unitarias⁵⁵. La valoración ha sido mayoritariamente positiva seguramente porque no es una ley que imponga condiciones muy estrictas en cuanto a las prácticas comerciales se refiere. Predomina en ella el sentido de la proporción. Hay un párrafo, a mi juicio, muy significativo:

“En esencia, se trata de que las prohibiciones no sean aplicables a aquellas restricciones de la competencia proporcionales a los beneficios que generan en términos de eficiencia en la asignación de recursos y, por tanto, de bienestar general”.

Es decir, de las líneas apuntadas parece deducirse que la Comisión Nacional de la Competencia juzgará con benevolencia y eximirá de responsabilidad tanto las *conductas de minimis* como todos aquellos casos en los que acciones restrictivas, a pesar de mostrarse anticompetitivas, supongan un aprovechamiento de los recursos naturales y un beneficio común para la sociedad.

⁵⁵ Massaguer [2008], Parejo [2008], Beneyto [2009], Varela Carid [2010], ...

3.3. La *Ley Paraguas*

En el año 2009, casi a la par, aparecieron dos leyes en España de similares características, conocidas popularmente como *Ley Paraguas* y *Ley Ómnibus*. Ambas establecen mayores grados de libertad en la práctica de determinadas profesiones y servicios.

La aparición de dichas leyes no fue casual ni voluntaria y apura plazos. Obedece al imperativo de la *Directiva Bolkenstein* del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea o *Directiva 2006/123/CE*, de 12 de diciembre⁵⁶, de servicios en el mercado interior, que daba como último plazo el día 28 de diciembre del 2009 para que todos los países miembros adaptaran los principios de la esta *Directiva* a sus respectivas legislaciones.

Antes de aparecer la *Directiva Bolkenstein*, y por tanto sin conocer el texto definitivo, ya se produjeron algunas manifestaciones sindicales en su contra como se puede apreciar en el siguiente cartel⁵⁷:



⁵⁶ Publicada en el *Diario Oficial de la Unión Europea* el 27 de diciembre del 2006. Ref. L 376 para la traducción en español.

⁵⁷ CGT. En: <http://www.cgt-clh.org/castellano10junio.pdf> [Consulta 27 de setiembre del 2010].

3. LEGISLACIÓN

El objetivo principal de esta legislación es adaptar el sector de servicios a la normativa europea, pero, a mi juicio, se ha exagerado mucho la dependencia de las leyes *Paraguas* y *Ómnibus* respecto de la *Directiva Bolkenstein* por varias razones:

- a) La *Directiva Bolkenstein*, que anuncia una defensa a ultranza de la competitividad global⁵⁸, sin embargo, excluye tratar materias tan fundamentales como la abolición de los monopolios⁵⁹.
- b) Se trata de una Directiva más preocupada por manifestar los asuntos excluyentes que los incluyentes. Entre ellos los tocantes a los profesionales del Derecho y de la Salud.
- c) Existe un reconocimiento implícito de los colegios profesionales.

La Ley 17/2009 de 23 de noviembre⁶⁰, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, tiene por objeto facilitar el libre establecimiento de prestadores de servicios y la libre prestación de estos, simplificando los procedimientos y fomentando la calidad de los mismos.

Pero, acogiéndose a la *Directiva Bolkenstein*, “no se aplica esta Ley a los servicios financieros; los servicios y redes de comunicaciones

⁵⁸ Pág. L 376/36.

⁵⁹ Así se expresa claramente en la página L 376/50.

⁶⁰ *B.O.E.* N° 283 del día 24 de noviembre del 2009, pp. 99570-99593.

3. LEGISLACIÓN

electrónicas; los servicios en el ámbito del transporte, incluidos los servicios portuarios; los servicios de las empresas de trabajo temporal; los **servicios sanitarios**; los servicios audiovisuales, incluidos los servicios cinematográficos y la radiodifusión; las actividades de juego, incluidas las loterías; los servicios sociales relativos a la vivienda social, la atención a la infancia y el apoyo a familias y personas temporal o permanentemente necesitadas, proporcionados directa o indirectamente por las Administraciones Públicas; y los servicios de seguridad privada.

“Además, cabe señalar que la Directiva tampoco se aplica a las actividades que supongan el ejercicio de la autoridad pública. En nuestro ordenamiento jurídico ello implica que los actos realizados por fedatarios públicos, así como por los registradores de la propiedad y mercantiles⁶¹, quedan fuera de su ámbito de aplicación. La Ley tampoco se aplica al ámbito tributario.

“Por otro lado, conviene señalar que esta Ley no se aplicará a aquellos aspectos concretos relacionados con el acceso de una actividad de servicios o su ejercicio regidos por otros instrumentos comunitarios”⁶².

En resumidas cuentas, esta ley pretende sobre todo simplificar los procedimientos administrativos, acabar con demoras de licencias y otras trabas, para mejorar la actividad económica en el sector de servicios, que constituye aproximadamente el 70% del Producto Interior Bruto en la Unión Europea (en España aproximadamente, según las últimas cifras consultadas, está en torno al 64%).

⁶¹ No aparecen incluidos los registradores de la propiedad en la *Ley Paraguas*. En la *Directiva Bolkenstein* ni siquiera se mencionan.

⁶² *Ibidem* pp. 99571-99572.

3. LEGISLACIÓN

Con el establecimiento de la *ventanilla única*, se puede decir que en líneas generales los más beneficiarios por esta ley han sido las pequeñas y medianas empresas.

3.4. La *Ley Ómnibus*

Se denomina popularmente *Ley Ómnibus*⁶³ a la Ley 25/2009, de 22 diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (*B.O.E.* 23 de diciembre del 2009)⁶⁴.

En el intento de adaptación de la legislación española se han modificado nada menos que 47 leyes de rango nacional. Por todo ello no es fácil resumir una ley que ha suscitado voceadas controversias y que podría ser incluso tema de un trabajo de mayor envergadura.

En líneas generales la *Ley Ómnibus* tiene como objetivo fundamental la reducción de medidas protectoras sobre las actividades económicas del sector terciario: licencias para la explotación del servicio de taxis, habilitación para la instalación de calderas de gas, permisos para la apertura de farmacias, etc., todo ello tendente al establecimiento de

⁶³ Del latín *omnis*, *e (todo)* en el caso dativo plural (*para todos*).

⁶⁴ Todos los documentos oficiales relacionados con esta Ley: memoria justificativa, memoria de impacto económico y presupuestario, memoria de impacto por razón de género y nota de prensa, se pueden obtener en la página del Ministerio de Economía y Hacienda:

<http://www.meh.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Union%20Europea/Paginas/Ley%C3%93mnibus.aspx>

3. LEGISLACIÓN

criterios comunes para la regularización de las actividades profesionales.

Esta normativa común busca por una parte favorecer la movilidad y la libre competencia de los profesionales dentro del marco de la Unión Europea, y por otra parte ahorrar costes a los usuarios.

Los detractores de tales medidas han anunciado la desaparición de algunas profesiones. Esta actitud pesimista no parece justificada porque las profesiones no podrán ser suprimidas (se seguirá necesitando electricistas por ejemplo), lo que habrá que hacer es modificar los requisitos que frenen la competitividad para la realización de ciertos trabajos.

Aunque la ley afecta a muchos colectivos, nosotros nos vamos a fijar solamente en el capítulo III (Servicios Profesionales), artículo 5: “Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales” (pp. 108517-108-522).

A pesar de las críticas en contra y reacciones populares (recordemos por ejemplo la huelga de taxistas madrileños los pasados días 17 y 18 de diciembre del 2009) hay que señalar que esta ley en principio no parece ofrecer cambios sustanciales. No obstante, el espíritu de la misma tendrá que ser desarrollado posteriormente con otras disposiciones de rango menor.

De momento los contenidos en ocasiones parecen imprecisos. En lo relacionado con los servicios profesionales, tal como está dispuesta la redacción no parece que vayan a desaparecer ni los colegios

3. LEGISLACIÓN

profesionales, ni la obligatoriedad de la colegiación en muchos casos, ni la mayor parte de sus atribuciones.

Así se dice: “Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcional” (p. 108517).

Más adelante: “Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal” (p. 108518).

En el caso, por ejemplo, de los arquitectos, se dice: “Los Colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos profesionales en su ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales, o cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta a los colegiados afectados...” [p. 108521].

En estas circunstancias parece que la *Ley Ómnibus* sigue poniendo trabas a la libre competencia y ya se han presentado recursos de inconstitucionalidad por parte de las comunidades autónomas de Cataluña y Castilla-León.

3. LEGISLACIÓN

El Ministerio de Economía y Hacienda ha realizado unos cálculos macroeconómicos aplicando el modelo REMS⁶⁵ de equilibrio general dinámico y tomando como referencia un estudio de Breuss y Badinger [2005] en el que se calcula que el efecto pro-comercio en la UE generará una reducción del *mark-up*⁶⁶ del 3,84% en el sector español de servicios. *Grosso modo* en la Memoria de impacto económico y presupuestario se estima que en el período de tres años esta ley propiciará la creación de unos 150 000 empleos⁶⁷.

Es una ley, en mi opinión, que no afronta la realidad que se avecina. Es una ley que utiliza constantemente la palabra *cuando* sin fijar fechas exactas. Es una ley que prohíbe recomendaciones sobre honorarios [p. 108522], pero que no los descarta. Es una ley no tan permisiva como se supondría porque deja fuera a los servicios financieros, sanitarios, servicios de redes y comunicaciones electrónicas, fedatarios públicos (notarios y registradores), servicios audiovisuales, loterías, vivienda social y atención a la infancia. Es una ley, en definitiva, de la que todavía es temprano para saber si va a favorecer la competencia y el espíritu de libre empresa.

⁶⁵ Es un modelo de equilibrio general, creado por el Ministerio de Economía y Hacienda, donde se detallan las decisiones de las familias, de las empresas y del sector público, que permite simular el comportamiento de un amplio conjunto de variables macroeconómicas ante determinadas perturbaciones de carácter exógeno. Este modelo es apto para realizar simulaciones, capta las rigideces de la economía española y permite analizar la evolución dinámica de esta economía en presencia o en ausencia de un cambio estructural.

⁶⁶ Margen o diferencia entre costos y precios.

⁶⁷ Para mayores precisiones ver

<http://www.meh.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Union%20Europea/Documents/09-06-04%20LO%20Memoria%20Econ%C3%B3mica%20y%20Presupuestaria.pdf>
[Consulta 16-1-2010]

3.5. La emergente Ley de Servicios Profesionales y el Real Decreto sobre Visado

La anunciada y futura *Ley de Servicios Profesionales* vendrá a ser en buena medida consecuencia inmediata de las leyes contempladas en los apartados 3.2, 3.3 y 3.4 de este estudio.

Se trata de un intento más de fortalecer la competitividad de las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales. Afectará sobre todo a los colegios profesionales. Parece una medida perentoria para frenar el control que tienen estas instituciones sobre los colegiados y sobre su profesión.

Se ha dicho en el párrafo anterior que “se trata de un intento de fortalecer la competitividad” porque algunos de los responsables de llevar a cabo la reforma ya han dado a entender a los medios de comunicación que los cambios no afectarán a las colegiaciones de médicos (al menos a los que trabajen en el sector privado) y abogados, de manera que de producirse una liberación prácticas en los servicios profesionales esta resultaría parcial.

Es necesario y está también pendiente de aparecer un Real Decreto sobre Visado que señalará qué tipo de visados serán obligatorios y cuáles dependerán de la voluntad de los clientes⁶⁸.

⁶⁸ Por el momento la exigencia de visado colegial es la que regula el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, que exige como obligatorios 9 de los 82 visados que había anteriormente, entre ellos los que atañen a trabajos de edificación y tratamiento de explosivos.

3. LEGISLACIÓN

La concesión o denegación de visados es una medida que debe adoptar la Administración del Estado, sin embargo esta delega ese cometido en los colegios profesionales.

* * * * *

La opinión de los políticos acerca de la Ley de Servicios Profesionales no es uniforme y varía a tenor de la ideología política de los partidos y la legislación de la Unión Europea. El pensamiento económico de la normativa comunitaria por una parte defiende la libre competencia, pero por otra parte acepta establecer restricciones en aquellos casos en los que estas supongan mejorar la situación de los ciudadanos de la Unión Europea.

Sin embargo la opinión de los representantes de los profesionales ante la futura Ley de Servicios Profesionales en general es desfavorable; así, al menos, se desprende de las declaraciones aparecidas tanto en la prensa convencional como en la digital, en muchos casos valorando el informe que maneja el gobierno de *disparate*.

Los argumentos empleados para defender el actual *status* de los Colegios se sustentan en afirmaciones tales como las siguientes:

- ♦ Los colegios profesionales ofrecen mayor garantía de los servicios prestados por sus colegiados.
- ♦ Este control de la profesión también se ejerce en países como Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos o Alemania.
- ♦ ¿Cuál será la vía de financiación si la colegiación es voluntaria?

3. LEGISLACIÓN

Antes de pronunciarse acerca de los beneficios o perjuicios de una reforma aún en ciernes, conviene conocer cuál es la situación europea.

Tomando como referente la República Federal de Alemania⁶⁹, en este país la colegiación no sólo es obligatoria sino que en algunos Estados de la Federación, tal es el caso, por ejemplo, de Renania del Norte, el Colegio de Médicos asume las competencias de sanidad del gobierno renano⁷⁰.

El Colegio Médico de Renania del Norte depende del Colegio Federal de Médicos (Bundesärztekammer). Es una corporación de derecho público de carácter autogestionario, pero siempre cumpliendo las instrucciones del Estado. Cuenta con un estatuto jurídico en el que, entre otras cosas, se regulan las buenas prácticas de la profesión.

Representa a unos 53 000 médicos colegiados. Da empleo a 224 personas. Ofrece cursos de formación continua y especializada. Vela por los intereses tanto de los médicos como de los pacientes, resuelve quejas. Mantiene constantes relaciones con los poderes públicos como el resto de colegios médicos alemanes, de manera que estos llegan a ser uno de los mejores consejeros del gobierno federal.

Por tanto, el poder de los colegios médicos alemanes parece a primera vista muy superior al de los españoles.

* * * * *

⁶⁹ Llamada indebidamente en muchos trabajos *República Federal Alemana*.

⁷⁰ *Cfr.* El Colegio de Médicos de Renania del Norte se presenta al público. En: <http://www.aekno.de/page.asp?pageID=140> [Consulta 28 de julio del 2011].

3. LEGISLACIÓN

Algo similar ocurre con los abogados en Alemania. Las condiciones para ejercer la abogacía son más exigentes. Además del título superior obtenido en la Universidad, deben superar un examen o reválida de Estado y afiliarse a alguno de los 28 colegios de abogados que hay en el país para poder desempeñar la profesión; además de estar sujetos a un regular reciclaje mediante cursos que los propios colegios imparten.

Los colegios alemanes de abogados garantizan los servicios de sus colegiados mediante un seguimiento y control de sus actividades, resuelven desavenencias entre abogados y clientes, e incluso obligan a que los letrados contraten un seguro de riesgos profesionales ante virtuales equivocaciones. Los mismos colegios aseguran también las posibles necesidades económicas de los abogados que se vean impedidos para continuar desarrollando su actividad.

La influencia de los colegios alemanes de abogados en la sociedad es, pues, notoria. El problema es combinar y hacer equivalente la competencia de los abogados extranjeros que deseen desarrollar su trabajo en Alemania con el nivel de competencia exigido a los propios alemanes.

Este es uno de los desafíos al que deberá enfrentarse la Comisión Europea, y no será fácil resolverlo porque el derecho comunitario no está todavía tan desarrollado como el particular de sus estados.

Un segundo desafío consistirá en conjugar la libertad económica con las normas jurídicas. De modo hipotético, suponiendo que todos los abogados de la Unión Europea posean un nivel de competencia igual o equivalente, ¿Van a tener que estar sujetos al control de los colegios profesionales?

4. LA COMPETENCIA EN LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS

Englobamos en este epígrafe los funcionarios públicos con remuneración privada (es el caso de los notarios y de los registradores), los funcionarios públicos con remuneración pública (abogados del Estado y letrados) y las profesiones privadas bajo amparo o intervencionismo estatal como son los procuradores.

Tal vez debiera incluirse también en parte a los abogados que por su cuenta se dedican al desarrollo de la profesión de modo libre, pero ello se escapa de nuestros propósitos. El abogado que contrata sus servicios con un particular no tiene que rendir cuentas más que a ese particular en un entorno de libre competencia. Tan sólo los abogados del *turno de oficio* y *asistencia al detenido* entrarían en este cometido porque son los únicos que mantienen una relación contractual con la Administración. Las Comunidades Autónomas se hacen cargo de sus emolumentos, pero son los Colegios de Abogados los que organizan el turno de oficio entre sus afiliados, previa superación de cursos obligatorios.

Las restricciones a las que se ven sometidos los abogados en el ejercicio de la abogacía son las marcadas por el Código Deontológico del Consejo General de la Abogacía, y se refieren principalmente a la fijación de precios, publicidad, acceso al ejercicio y a la estructura y organización del negocio⁷¹.

⁷¹ Un desarrollo más extenso de las mismas se puede ver en Aitor Ciarreta et al (2010b). *El estado de la competencia en las profesiones de abogado y procurador, passim*. 72-173.

4.1. Abogacías del Estado y Letrados

Estas profesiones en unos países no cuentan con colegiación⁷² y en otros sí. En España hay una Asociación de Abogados del Estado, creada en 1977, que en la actualidad planea convertirse en una Agencia Jurídica Estatal⁷³.

En el artículo 4º de los *Estatutos* de esta Asociación se justifica su creación: “para el fomento y defensa de los intereses profesionales y corporativos de los Abogados del Estado”. Curiosamente a esta Asociación están afiliados la mayoría de abogados del Estado en ejercicio y también los jubilados y los excedentes, por lo que parece un fenómeno de proteccionismo reforzado, por lo menos en el caso de los que se encuentran en situación de excedencia.

La Administración española debe revisar el coste que supone mantener una plantilla de abogados como la actual (al pie de 650) ya que casi la mitad se encuentra en estado de excedencia. Los motivos pueden ser de índole económica (70 000 euros brutos anuales que cobran en el Estado frente a los 500 000 que suelen ganar en el sector privado)⁷⁴.

⁷² Caso, por ejemplo, de Venezuela.

⁷³ Cfr. *Diariojuridico.com*, 29 de marzo del 2010. En: <http://www.diariojuridico.com/entrevistas/entrevista-con-edmundo-bal-presidente-de-la-asociacion-de-abogados-del-estado.html> [Consulta 29 de marzo del 2010].

⁷⁴ Vid. Pirzoe. La mitad de los abogados del Estado se van por el bajo sueldo. Apud <http://www.intereconomia.com/negocios>. En: <http://www.empresuchas.com/la-mitad-de-los-abogados-del-estado-se-van-por-el-bajo-sueldo/> [Consulta 29 de marzo del 2010].

4. COMPETENCIA EN ACTIVIDADES JURÍDICAS

La profesión de abogado del Estado no ha sido puesta en entredicho como tampoco lo son aquellos puestos de titulados superiores especializados de funcionarios a sueldo: arquitectos, inspectores de Hacienda,... sin embargo se está produciendo un caso de competencia desleal porque a menudo los bufetes de prestigio suelen contratar a los mejores abogados estatales. El hecho de que las Asociaciones de Abogados del Estado en Austria e Italia funcionen de manera similar a la española no justifica su amenaza a la competitividad.

Los letrados del Consejo de Estado constituyen un cuerpo al que también se accede por oposición. Su función es meramente consultiva. Asesoran principalmente al Gobierno de España si éste lo pide. Pero hay que tener en cuenta que los dictámenes del Consejo de Estado son meramente informativos, no vinculantes y sin efectos jurídicos. El Gobierno no tiene por qué acatarlos aunque en general lo haga. El prestigio de estos profesionales está fuera de duda, pero también podrían ser sustituidos por auditores privados de reconocido prestigio.

Los letrados de las Cortes, tanto Generales del Congreso y Senado como de los Parlamentos Autónomos y de otros organismos especiales de la Administración (Tribunal Constitucional, Consejero de Cultura y Grandes Proyectos del Gobierno de Zaragoza,...) son funcionarios que mantienen estrechos vínculos a través de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos (AELPA).

Su trabajo es asimismo de carácter consultivo. Asesoran a presidentes, ponentes, subcomisiones, comisiones,... en asuntos legislativos⁷⁵. Su labor se considera necesaria y contribuye a agilizar muchos trámites burocráticos.

4.2. Notarías

A grandes rasgos se puede decir que desde tiempos antiguos la actividad jurídica en Europa ha discurrido por dos cauces distintos: la tradición anglosajona partidaria del derecho consuetudinario, es decir, del Derecho apoyado sobre todo en la costumbre; y la tradición latina, asentada principalmente en las leyes escritas.

Los comienzos del Derecho escrito en España se hallan en el *Fuero Juzgo* (1241) implantado en Castilla por Fernando III, que es una traducción fiel (ni siquiera una adaptación) del Derecho romano expuesta en el *Liber Iudiciorum* del año 654, y que ha marcado la posterior trayectoria del Derecho hispano, rompiendo con su aplicación muchas costumbres tradicionales anteriores en otras regiones pero también en la propia Castilla [Carretero y Jiménez, 1977, pp. 26-27].

Esta alternancia, en la que se puede dar prioridad a la ley sobre la costumbre o viceversa, marca muchos aspectos de la vida social de unas culturas que, empero vecinas, se han desarrollado por caminos

⁷⁵ Cfr. Artículo 8, punto 1 del *Boletín Oficial de las Cortes Generales*. Las funciones de los letrados de estas pueden hacerse extensibles al resto de instituciones. Para una visión de conjunto véase la obra de Luis María Díez-Picazo y Ponce de León, Verónica San Juan Puig y Simón Pates (coords.) *El oficio de jurista*. Madrid: Siglo XXI, 2006.

4. COMPETENCIA EN ACTIVIDADES JURÍDICAS

distintos. Y esta diferencia se deja notar también en la importancia dada al notariado y a la funcionalidad del mismo.

De este modo podemos distinguir un notariado de raigambre latina, como es el español, cuyos trabajos son incuestionables y relevantes en los procesos jurídicos; y un notariado de raíz anglosajona, cuyas aportaciones no son tan determinantes en esos procesos, tal es el caso del Reino Unido e Irlanda.

Sin embargo, a principios del siglo XXI empezaron a cuestionarse algunos colectivos profesionales, respaldados por instituciones depositarias de privilegios contrarios a la libre competencia y redundando en perjuicio de los usuarios. Entre ellos los notarios, los registradores de la propiedad, los médicos, los veterinarios y los farmacéuticos.

En el 2006 Tobias Buck publicó en *The Financial Times*⁷⁶ un artículo titulado “Notaries in 17th European countries to lose privileges” donde pone en tela de juicio la justificación de la actividad notarial en las sociedades avanzadas del siglo presente.

El notario es un funcionario público cuyo cometido es dar fe de hechos contractuales entre personas o entidades. Es un intermediario entre partes, de manera que más que un abogado es un juez, por lo tanto sus funciones se solapan con las de este último.

⁷⁶ Publicado el 11 de octubre del 2006. Accesible también en http://www.ft.com/cms/s/9f25328e-5962-11db-9eb1-0000779e2340.Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F9f25328e-5962-11db-9eb1-0000779e2340.html&_i_referer=http%3A%2F%2Fwww.elblogsalmon.com%2Fentorno%2Fel-notario-tiene-los-dias-contados [Consulta 19-3-2010].

4. COMPETENCIA EN ACTIVIDADES JURÍDICAS

Pero además el notario reúne una doble condición profesional, por un lado es un funcionario público y por otro desarrolla una profesión cuyo sueldo depende de sus clientes.

En el Reino Unido la figura del notario es importante, sin embargo no es clave en contratos u otros acuerdos, y basta la conformidad de las partes con la representación de sus correspondientes abogados para dar legalidad a cualquier acto jurídico.

En cambio, Países como Alemania y Francia se muestran partidarios del mantenimiento de la figura del notario. Este es un escollo difícil de salvar para la Dirección General del Mercado Interior y Servicios de la Unión Europea, como antes se ha señalado, que pretende revisar la operatividad de esta profesión en vía a mejorar el sistema de libre competencia.

La metodología cuantitativa para medir la operatividad y la conveniencia o no de los notarios en un sistema de libre competencia puede ser la mejor manera de determinar la necesidad de esta profesión.

En este sentido, Murray [2007, p. 21] ha cuestionado el abaratamiento de los costes mediante la supresión de las notarías. Murray centra su atención en los negocios de transacciones inmobiliarias. Resumiendo su informe, el análisis comparativo que hace entre países que mantienen el sistema notarial latino (para este caso: Francia, Alemania y Estonia) y países sin una regularización del notariado tan estricta (para este caso: Suecia y Estados Unidos) da como resultado que quienes

4. COMPETENCIA EN ACTIVIDADES JURÍDICAS

prescinden las notarías se encuentran con unos costes de tramitaciones superiores que deben abonar a gestores inmobiliarios y abogados.

Asimismo Arruñada [1996, p. 44] ha comparado los costes de una propiedad inmobiliaria en Estados Unidos y en España, y ha concluido que los gastos asociados a la compra son superiores en Estados Unidos.

No obstante, el problema es de enorme complejidad y de difícil solución porque hay que jugar con variables cuantificables en otros contornos como la incidencia de la actividad notarial en el sistema judicial en el que, al parecer, produce una evidente reducción de los litigios.

La supresión drástica de las notarías no parece probable a corto plazo. Están aferradas a una fuerte institucionalización, no sólo en el ámbito nacional sino también en el europeo, y están respaldadas por el Consejo de los Notarios de la Unión Europea (CNUE), y además está por demostrar que desde el punto de vista del análisis cuantitativo resulten más caras que servicios equivalentes que tuvieran que realizar otros profesionales.

La posibilidad de la funcionarización completa de los notarios podría ser una solución a esa dicotomía en apariencia contradictoria, en este caso, de pertenencia al sector público (lo cual implica una restricción a la competencia) y privado al mismo tiempo.

Se resolvería, de paso, el problema de los aranceles⁷⁷, sustituibles por nóminas. Además hay que tener en cuenta que algunas de sus otras

⁷⁷ En la actualidad fijados por el Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre (*B.O.E.* n° 285, del 28 de noviembre de 1989), que permiten un 10% de descuento, aunque el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio (*B.O.E.* n° 151,

4. COMPETENCIA EN ACTIVIDADES JURÍDICAS

funciones, como la ayuda a la recaudación de impuestos, están más próximas a la Administración del Estado que a la empresa privada.

Pero también este *status* ambiguo de los notarios podría servir de modelo para una reorganización del funcionariado en general, en el sentido de que es de esperar que el funcionariado de hoy día tenga que competir en el futuro durante toda su carrera para mantener un puesto de trabajo necesario y amortizable.

Dar solución a esta disyuntiva no es fácil y es susceptible de polémica. En términos económicos, por el momento está demostrado que el notariado en España resulta más barato para el Estado y para los contribuyentes [Ciarreta Antuñano, 2010, p. 128] que su desaparición o sustitución por otro sistema equivalente.

Generalmente en nuestro país la elección de notario es libre⁷⁸. Esta regulación favorece la competencia. Sin embargo ello puede ocasionar que algún notario como mediador de grandes transacciones esté tentado de favorecer al cliente amigo. Los colegios han presionado para evitar este supuesto peligro de manera infructuosa en contra de la libre competencia, que siempre estará sujeta a toda clase de riesgos.

El mantenimiento de la actual estructura del notariado supone restricciones a la competencia, pero estas restricciones, que afectan a

de 24 de junio del 2000), en su artículo 35, tolera precios libres acordados entre los notarios y sus clientes cuando se trate de transacciones de más de 601.012,10 euros.

⁷⁸ Excepto algunos supuestos establecidos legalmente, como las actas de declaración de herederos. Por norma, el Notario no puede autorizar documentos públicos fuera de la población en que es competente.

4. COMPETENCIA EN ACTIVIDADES JURÍDICAS

los usuarios (al menos cuando derivan de trámites de obligado cumplimiento), también pueden afectar a los propios notarios. Entre ellas se pueden señalar las siguientes:

- a) El sistema de acceso a la profesión mediante oposiciones y establecimiento de *numerus clausus*.
- b) Establecimiento de precios fijos en los servicios con mínima variación (como se indica en la nota 56).
- c) Limitación de publicitar las actividades y medios de captación de los clientes.
- d) Limitación de poder estructurar jurídica y económicamente el negocio como, por ejemplo, la colaboración entre las notarías.

4.3. Registros de la propiedad

El origen de los registros de la propiedad se encuentra en la *Ley Hipotecaria* de 1861 que, entre otros cometidos, establecía el funcionamiento de un registro en cada partido judicial, y que culminaría en 1872 con la creación del Banco Hipotecario, cuyo objetivo principal era conseguir la unidad de mercado.

La Ley Hipotecaria acabó con muchas costumbres y prácticas locales y foráneas del antiguo régimen.

Se trataba de una ley que abarcaba todo un amplio espectro de reformas fiscales que un equipo de juristas comenzó a preparar en 1855 con el fin de asegurar la propiedad territorial.

El 8 de febrero del 2011 se cumplió el sesquicentenario de la promulgación de dicha *Ley* que, en sus comienzos no estuvo exenta de

4. COMPETENCIA EN ACTIVIDADES JURÍDICAS

dificultades para su aplicación⁷⁹ y tuvo algunos detractores, sobre todo por parte de aquellas personas que conservaban títulos privados, y por parte de quienes se servían de la falta de una escrituración pública para la ocultación de propiedades y, en consecuencia, para la evasión de impuestos.

La oposición a los registros de la propiedad en sus inicios también partió de algunas estancias públicas que se mostraron recelosas de la independencia de los registradores.

Los registradores de la propiedad, al igual que los notarios, son un cuerpo de funcionarios públicos que deben superar una oposición, y sus retribuciones también dependen de los clientes privados.

La finalidad principal de un registro de la propiedad es ofrecer información fiable a los usuarios. En España la inscripción de propiedades en el registro es voluntaria pero aconsejable. En otros países como Alemania, por ejemplo, es obligatoria.

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España⁸⁰ es una Corporación de Derecho Público adscrita a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia. Sus estatutos fueron aprobados por el Real Decreto de 14 de abril de 1997.

⁷⁹ *Cfr.* Alfonso Candau Pérez. España 1861. *ABC*, 8 de febrero del 2011, p. 3.

⁸⁰ Con sede en la calle Diego de León nº 21 de Madrid.

4.4. Procuradurías

Según un tópico generalizado, España es el único país que mantiene esta profesión reconocida ya en el Derecho Romano. Sin embargo esta afirmación no es del todo cierta porque también en algunos países extranjeros existen actividades similares y, desde luego, toda una leyenda en la literatura de carácter creativo acerca de una profesión extraña y temida, capaz de hacer inclinar la balanza de la justicia de manera arbitraria. Evidentemente esta creencia y la realidad no tienen nada que ver.

Para desarrollar la Procura es necesario ser español o miembro de la Unión europea, mayor de edad, no declarado incapacitado y haber obtenido el título de procurador que expide el Ministerio de Justicia. Además, según el *Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España*⁸¹, es obligatorio estar colegiado, lo cual, entre otras cosas, implica el pago de una cuota.

El término equivalente a *procurador* en francés es *avoué*,⁸² la persona que representa al cliente en las altas instancias de la judicatura.

Otra figura muy distinta es la del *huissier*, palabra que habría que traducir como *alguacil* (o *solicitador* en portugués), es decir, en este caso, la persona que se encarga de hacer cumplir los mandatos

⁸¹ Accesible en <http://www.cgpe.es/doc/Estatuto/EstatutoG.pdf> [Consulta 14 de junio del 2011] En formato PDF.

⁸² *Cfr.* Miguel Garre. Las semejanzas y diferencias entre el Huissier y el Avoué francés y nuestros procuradores. En: <http://www.icamalaga.es/portalMalaga/archivos/ficheros/1290525277674.pdf> [Consulta 14 de junio del 2011]. Archivo en formato PDF.

4. COMPETENCIA EN ACTIVIDADES JURÍDICAS

judiciales. En ocasiones se intenta equiparar e identificar al *huissier* con el procurador de manera equivocada.

No obstante, en Francia, el Proyecto de *Ley de Modernización de Profesiones Judiciales y Jurídicas Reglamentadas* del año 2010 , con el objeto de fomentar la competitividad, unificó las funciones de los *avoués* y los *avocats*, diferencias que habían venido produciéndose desde el siglo XV.

En muchos otros países no hay procuradores pero existen abogados ayudantes de los abogados defensores que realizan funciones equivalentes. Por eso he afirmado anteriormente que no es un oficio exclusivo de la Administración española. La diferencia fundamental entre el trabajo del procurador en España y los trabajos de carácter similar que se hacen en el resto del mundo consiste en que en determinados casos (se exceptúa el Derecho Laboral) nuestra ley obliga a la contratación de este servicio.

Los procuradores son abogados auxiliares de los abogados defensores, cuya función principal consiste, además de representar a sus clientes, en preparar la documentación necesaria e informar del estado del proceso en todo momento, tramitación de oficios, mandamientos y exhortos, publicación de edictos y anuncios oficiales en el B.O.E., B.O.P. y prensa, y gestiones ante los registros de la propiedad y registro mercantil. El procurador viene a ser, pues, un gestor y un intermediario entre el tribunal y el abogado.

Su trabajo, como se ha podido ver, es útil para agilizar los procedimientos y, como en el caso de otros abogados, precisan de un

4. COMPETENCIA EN ACTIVIDADES JURÍDICAS

poder notarial de sus representados cuando estos no tengan obligación de comparecer en los juicios.

La supuesta mala fama de los procuradores no pasa de resultar un estereotipo más y lo que hará falta es analizar casos concretos y no situaciones generales. En algunas ocasiones los procuradores han ayudado a mejorar las labores administrativas de las secretarías de los juzgados, en otras han usurpado los beneficios de sus clientes. Casos, a fin de cuentas, de honestidad o delincuencia como los que se puedan dar en cualquier otra profesión.

Los procuradores surgieron inicialmente como individuos que sabían leer y escribir para representar y sustituir en los juicios a las personas analfabetas. Por esta razón algunos piensan que hoy día esta profesión es, si no innecesaria, sí al menos encarecedora de los procesos para los litigantes, y por consiguiente enemiga de la competitividad.

Aun cuando se trate de un empleo público, los procuradores desempeñan una profesión por cuenta propia cuyos emolumentos dependen de las minutas de sus clientes. Pero los honorarios o aranceles que perciben están fijados en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre⁸³, aunque esté permitida una variación al alza o a la baja del 12%.

La imposición de los procuradores en determinados procesos y el establecimiento de unas tasas más o menos fijas (aranceles) es un caso de doble impedimento de la libre competencia.

⁸³ B.O.E. nº 278, de 20 de noviembre del 2003.

4. COMPETENCIA EN ACTIVIDADES JURÍDICAS

Una de las razones fundamentales que suelen aducirse para justificar el empleo de procurador es la falta de agilidad de los procesos judiciales. Entendemos que el ciudadano no es el responsable de un sistema caracterizado a menudo por su lentitud, en consecuencia debería ser la propia Administración la que corriera con los costos de este servicio.

Las nuevas tecnologías pueden resolver, al menos parcialmente, la descoordinación entre los juzgados y las tramitaciones de los procesos judiciales.

Recientemente se ha implementado en España el sistema Lexnet. Se trata de un sistema de notificaciones telemáticas entre los juzgados y los profesionales de la justicia con efectos legales [Illán, 2009]. Funciona de modo similar a la correspondencia que transcurre a través del correo electrónico convencional, pero para poder hacer uso de sus ventajas,⁸⁴ además de darse de alta en el sistema, tanto los abogados como los procuradores se comunicarán con los juzgados mostrando su firma digital mediante una tarjeta criptográfica que se introducirá en los teclados de los terminales de ordenador. A juzgar por las observaciones de algunos expertos⁸⁵, la operatividad de este sistema no es todavía del todo satisfactoria, pero seguramente con el tiempo será un *modus operandi* imprescindible .

⁸⁴ Su uso está regulado en el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, *B.O.E.* n° 38 de 13 de febrero del 2007, pp. 6239-6244.

⁸⁵ *Cfr.* el blog <http://justiciayprehistoria.blogspot.com/2010/04/otra-de-lexnet-en-el-transito-la-noj-y.html> [Consulta, 12 de octubre del 2011].

5. LA COMPETENCIA EN LAS ACTIVIDADES SANITARIAS

En España tanto la Ley General de Sanidad⁸⁶ como la legislación autonómica reconocen la libertad de empresa en materias de salud pública.

Sin embargo el Estado o, en su caso las Comunidades Autónomas, tiene una evidente posición de dominio en el sector sanitario tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda porque por una parte la Administración es el mayor proveedor de servicios, pero también por otra parte es el mayor comprador en su doble vertiente:

- a) Como recaudador y administrador de cotizaciones.
- b) Cuando se trata de negociar con las empresas privadas, de decidir concesiones o de establecer cualquier otro tipo de acuerdo.

En paralelo hay un sector sanitario privado que ofrece y presta servicios a los beneficiarios de la sanidad pública a través de conciertos, contratos de obra,... independientemente de sus servicios a empresas privadas (compañías automovilísticas, mutuas de accidentes de trabajo,...) y particulares.

⁸⁶ Ley 14/1986, de 25 de abril. *BOE* número 102 de 29/4/1986, páginas 15207 a 15224.

Pues bien, la Administración Pública, desde su posición dominante, realiza en muchas ocasiones actos que impiden, limitan, restringen o falsean la competencia. Prueba de ello son algunas denuncias llegadas tanto a la Comisión Nacional de la Competencia como alternativamente a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

En esta parte del trabajo incluimos como objeto de análisis a los funcionarios públicos con remuneración privada, es el caso de los veterinarios; a los funcionarios públicos con remuneración pública (médicos) y las profesiones privadas bajo amparo o intervencionismo estatal como son los farmacéuticos.

5.1. Medicina

La colegiación es obligatoria sin excepción alguna para cualquier persona que desee desarrollar la profesión médica. Algún juez⁸⁷, incluso, han emitido sentencias en las que se decide que la colegiación es obligatoria aunque no se preste asistencia alguna.

No basta estar una persona avalada por el título universitario de cualquier facultad española de Medicina u homologado su título por el Ministerio de Educación. En el caso de la Comunidad de Madrid, el capítulo VI, artículo 37 de los actuales estatutos de su Ilustre Colegio Oficial de Médicos se dice: “1. Será requisito indispensable para el

⁸⁷ Una sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número cuatro de La Coruña ha establecido que la colegiación de los médicos es obligatoria aunque no desempeñen funciones de carácter asistencial. En: <http://www.comtf.es/OPINION/OPINION%20COLEGIACION%20OBLIGATORIA.htm#anchor8160> [Consulta 12 de octubre del 2011]

ejercicio de la profesión médica, en el territorio de la Comunidad de Madrid, en cualquiera de sus modalidades, tanto pública como privada, la incorporación al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid”⁸⁸.

Incluso si un facultativo está colegiado y desarrollando sus tareas en otra provincia, precisa informar a este colegio y someterse a las competencias de ordenación, visado, control deontológico y potestad disciplinaria.

El código de ética y deontología médica no aparece en los citados estatutos, sí, en cambio las prohibiciones derivadas de este código (Artículo 45) que no tiene una redacción única sino que se revisa periódicamente y que además tiene diferentes versiones según la institución que lo divulgue⁸⁹.

Sin embargo, a pesar de la defensa a ultranza que se ha hecho de los colegios médicos, tanto por parte de la Administración del Estado como por parte de diversidad de instituciones privadas, no todas las Comunidades Autónomas se rigen por los mismos criterios. Concretamente las de Andalucía y Canarias, como detentoras de las competencias de sanidad, han publicado sendas leyes por las que eximen a los profesionales médicos de la colegiación obligatoria,

⁸⁸ En: <http://www.icomem.es/files/pdf/varios/estatutos.pdf> , pág. 38 [Consulta 31 de marzo del 2010]

⁸⁹ Basta tomar dos redacciones y compararlas, por ejemplo tomando los documentos obtenidos en Internet, uno de la Universidad de Navarra en <http://www.unav.es/cdb/ccdomccedm1999.html> y otro del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife en <http://www.comtf.es/colegio/deontologia.htm> [Consulta 1 de abril del 2010].

sustituyendo el número del colegiado o colegiada por un código numérico personal⁹⁰.

La colegiación obligatoria para los médicos que son funcionarios del Estado no parece tener mucho sentido, puesto que su actividad ha sido avalada por un sistema de acceso mediante oposición. Pienso que es, por consiguiente, poner una cortapisa al espíritu de la libre competencia. Los últimos gobiernos, tanto populares como socialistas, a mi juicio de modo irreflexivo desde el punto de vista económico, han recurrido la vanguardista decisión de las Comunidades andaluza y canaria por inconstitucionalidad en virtud del artículo 36 de la *Constitución*.

El problema de la obligatoriedad o voluntariedad de la colegiación seguirá suscitando polémicas porque implica no sólo la defensa de intereses particulares sino también medidas complicadas de llevar a efecto como, por ejemplo, la posible devolución de cuotas con efectos retroactivos; cuotas que pueden ser desgravables en la declaración de la renta. Nos encontramos, pues, ante una medida claramente beneficiosa para una única parte: el colegio.

5.1.1. El *Informe Abril Martorell*

Fernando Abril Martorell (Valencia 1936 - Madrid 1998) fue una de las personas más relevantes de la política española durante la época de la transición del franquismo a la democracia.

⁹⁰ En el caso de Andalucía, esta decisión aparece en el Decreto 51/2003 de 10 de junio. En Canarias se trata de la Ley 2/2002.

Abril Martorell⁹¹ dejó la política en 1980 y se dedicó a la actividad empresarial. En 1991 fue vicepresidente del entonces Banco Central Hispano, y en 1991 el gobierno socialista de Felipe González le nombró presidente de una comisión encargada de analizar el sistema español de sanidad. De esta comisión salió el análisis del Sistema Nacional de Salud (SNS), también conocido como *Informe Abril*⁹² que fue presentado en el Congreso de los Diputados el 25 de setiembre de 1991.

En dicho trabajo colaboraron al menos 94 personas. El gobierno socialista de entonces ni siquiera quiso publicarlo.

El estudio tuvo como guía el sistema sanitario del Reino Unido⁹³ y en menor medida de los de Suecia y Holanda. La idea central de que la burocracia administrativa (prevaleciente entonces en el modelo ruso) no era entonces la mejor solución para gestionar la sanidad pública creo con modestia que debe ser tenida en cuenta de nuevo.

El contenido del texto⁹⁴, que fue recibido de manera apática por todos los partidos políticos e incluso denostado por muchos. Hoy, 20 años más tarde, debe ser reconsiderado para conseguir la viabilidad del sistema

⁹¹ Curiosamente murió de un cáncer de pulmón y no llegó a ser ministro de Sanidad.

⁹² Se puede consultar el texto completo en:
http://hospitales.files.wordpress.com/2009/05/informe_abril.pdf

⁹³ Concretamente se tomó como referencia el informe *Griffiths* que se redactó en el Reino Unido en 1983.

⁹⁴ La comisión entregó 13 volúmenes de documentos. Un resumen del informe final se puede obtener en:
<http://www.riberasalud.com/ftp/biblio/07102010131536resumen%20informe%20abril.pdf> [Consulta 21 de noviembre del 2011].

5. COMPETENCIA EN ACTIVIDADES SANITARIAS

sanitario español actual. Algunas de sus recomendaciones se han ido adoptando a principios del siglo XXI tanto por parte del Estado como por parte de las Comunidades Autónomas.

El *Informe Abril Martorell* no sólo no es historia pasada sino que es un documento de actualidad porque, por ejemplo, en él se alude a la fórmula del *copago* (aunque sin emplear expresamente este término) o pequeña contribución de los usuarios por los servicios recibidos.

El *Informe* constató que según la encuesta internacional comparativa Blendon, los españoles aparecían entre los más insatisfechos con su sistema sanitario (tercer lugar entre once países consultados) y reclamaban profundas reformas en el sistema.

Uno de los inconvenientes más importantes parecía ser el excesivo control de la Administración. En las páginas 11-12 podemos leer lo siguiente:

“Globalmente, los instrumentos de gestión y financiación son los que peor se han adaptado a las nuevas necesidades de los servicios sanitarios modernos. La situación práctica de monopolio estatal en la financiación y provisión de los servicios, la política inestable y restrictiva seguida con el sector privado y la utilización de instrumentos de gestión administrativos, frente a servicios muy complejos y sensibles, producen las mayores situaciones de ineficiencia.

“Puede decirse que la situación actual parece representar el final evolutivo de un sistema centralizado y rígido, que ha sido capaz de vertebrar y estimular en el pasado una asistencia sanitaria pública, basada en la Seguridad Social, pero que ya es insuficiente para

5. COMPETENCIA EN ACTIVIDADES SANITARIAS

atender los problemas actuales y futuros de los servicios sanitarios en un entorno de recursos limitados.

“A pesar de iniciativas locales de gran interés, esta situación global se extiende a las Comunidades Autónomas, a las que se ha transferido la asistencia sanitaria. En algunas de ellas se han reproducido las tendencias de centralismo y burocratización”.

La reforma del sistema se estimaba sumamente necesaria para lograr una mayor competitividad. En la página 16 vemos reflejada esta idea:

“Este llamado “mercado interno” produciría un cierto estímulo competitivo entre las unidades de provisión de servicios (hospitales, centros de salud, etc.) que debería suscitar mejoras en la calidad y el coste de las prestaciones. Por otra parte, la competencia proporcionaría al usuario un mayor margen de elección entre los proveedores”.

Asimismo en las páginas 25-26:

“Por otra parte, la colaboración de empresas y mutuas patronales en la gestión de determinadas prestaciones de la Seguridad Social es asimismo una práctica con dilatada experiencia.

“La iniciativa privada sanitaria constituye, en principio, una riqueza acumulada que permite dar contenido real a conceptos necesarios para la regeneración del sistema, tales como competencia o “mercado interno”.

Recapitulando el contenido de los párrafos anteriores, y considerando la infraestructura actual de la sanidad española, estoy convencida de que es necesaria una reconsideración de este *Informe* y el

reconocimiento a un esfuerzo digno de elogio que en su momento no se reconoció.

5.2. Veterinaria

Desde la Baja Edad Media hasta el siglo XV la licencia para ejercer la albeitería o veterinaria era responsabilidad de los Gremios profesionales.

A imagen del establecimiento del tribunal del Protomedicato en 1477, los Reyes Católicos crearon en el año 1500 el tribunal del Protoalbeiterato, cuyos miembros eran designados por los Reyes (generalmente entre los mariscales o menescales⁹⁵ y herradores de las

⁹⁵ La palabra *menesca* no está recogida en el *Diccionario* de la Real Academia Española, sin embargo sus orígenes son conocidos como explican F. y J. Teixidó en la introducción del artículo Las obras de Albeytería de Martín Arredondo. *Asclepio*, vol. LIV-2, 2002, pp. 165-180:

"Se puede afirmar que en España ha habido tres denominaciones para el médico de animales: veterinario, mariscal o menescal y albéitar. Nadie pone en tela de juicio el origen latino de la voz veterinaria, que aparece en la obra del gaditano Columella (s. I) como *veterinarius*, referida al experto en el tratamiento del ganado. Sin embargo, desde el árabe, entró a formar parte de las lenguas de la península Ibérica la voz albéitar (o albéytar) para designar, durante muchos siglos, al veterinario. Todavía hoy, en el árabe actual, «al-baitar» es el veterinario y «baitara» la actividad veterinaria. Y este término se expresó en castellano y portugués, aunque también pasó al euskera y al catalán. No obstante, en la Corona de Aragón, y muy especialmente en Cataluña, la incorporación del término albéitar se realizó mucho más tarde. En la Corona de Aragón se hablaba de menescales y mariscales principalmente, aunque en el Reino de Valencia también se utilizaba albéitar con profusión.

"A diferencia de veterinario y albéitar, **mariscal o menescal** procede del mundo germánico. La voz mariscal es de origen alemán antiguo: «marhskalk», formada por «marh» (caballo) y «skalk» (sirviente). En la Edad Media, el término se latinizó como «marescallus» o «marescalcus» y aparece en el

5. COMPETENCIA EN ACTIVIDADES SANITARIAS

caballerizas reales), con el fin de examinar y facultar a las personas para desarrollar el ejercicio de la profesión tras la superación de las pruebas correspondientes.

Las raíces académicas de la enseñanza de la veterinaria están asociadas a instituciones militares. Tras ello aparecieron las Escuelas a fines del siglo XVIII (a imitación de las Escuelas francesas) y actualmente las Facultades.

La profesión veterinaria en España se desarrolla en dos vertientes: la sanidad alimentaria y los cuidados ganaderos (vacunas, sacrificios,...). Los veterinarios pueden desarrollar su trabajo en las clínicas o en las explotaciones ganaderas.

Los veterinarios que trabajan para la Administración pública (como la gran mayoría de sus trabajadores) pueden ser funcionarios de carrera, interinos, contratados laborales y sustitutos.

Los colegios veterinarios de España forman parte de una amplia red de instituciones (colegios y consejos) provinciales dedicadas al estudio y salud de los animales bajo la supervisión del Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios. Como al resto de colegios, les está permitido establecer convenios y acuerdos comerciales tanto con instituciones públicas como privadas.

occitano antiguo, como «marescal». En Francia se llamaba «maréchal-ferrant» al herrador y «maréchal-traitant» al sanador. En la Corona de Castilla, el término mariscal no tuvo la significación de albéitar; no se asimiló a veterinario hasta la época de Felipe V, cuando a los albéitares del Arma de Caballería se les empezó a llamar «albéitares-mariscales» o simplemente «mariscales»."

Al menos en la Comunidad de Madrid ningún veterinario que no esté colegiado puede trabajar como tal. Así parece que se desprende del artículo 16 de los estatutos del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid: “El veterinario está obligado a denunciar al Colegio todo acto de intrusismo que llegue a su conocimiento, así como los casos de ejercicio ilegal, tanto por no ser colegiado como por hallarse suspendido o inhabilitado el denunciado”.

Como en tantos otros casos, no es suficiente la titulación universitaria para desarrollar la profesión por cuenta propia. La normativa de los colegios pone en entredicho la capacidad de los docentes para preparar a los futuros veterinarios. Teniendo en cuenta que los centros universitarios se denominan *Facultades* parece un contrasentido que sus alumnos egresados no puedan estar facultados para ejercer como veterinarios.

Muchos veterinarios se muestran contrarios a la colegiación por los elevados costes que ella supone. En la provincia de Huelva, por ejemplo, cada colegiado debe pagar aproximadamente 100 euros cada trimestre por unos servicios, a juicio de los afiliados que han sido entrevistados, muy deficientes, y que ni siquiera cuentan, sin ir más lejos, con asesoría jurídica.

5.3. Farmacia

Los establecimientos farmacéuticos u oficinas de farmacia son empresas privadas, pero el mercado de los medicamentos está regulado y controlado por el Estado, ya que los precios que se cobran están establecidos previamente por este. Tanto las oficinas de farmacia como

los distribuidores mayoristas tienen unos márgenes comerciales regulados por el Estado.

Los colegios de farmacéuticos también están diseminados por provincias. En el de Madrid se admite la colegiación a licenciados y doctores en Farmacia bien sean españoles, ciudadanos de la Unión Europea o de otros lugares previa homologación de estos estudios o habilitados en virtud de algún convenio o tratado internacional (capítulo V, artículos 40 y 41).

La apertura a la competitividad sobre el capital humano es evidente porque los farmacéuticos afiliados a otros colegios provinciales también podrán desarrollar la actividad profesional en el ámbito territorial del colegio madrileño.

En cualquier caso, para desarrollar la actividad profesional es obligatoria la colegiación (capítulo 8) y la inscripción de la sociedad profesional en el Registro de Sociedades del Colegio (capítulo IX) además de la pertinente inscripción en el Registro Mercantil de la Comunidad.

En los estatutos de este Colegio⁹⁶ aparece también una Comisión Deontológica (capítulo XI), falta sin embargo el Código Deontológico como al menos se explicita en los estatutos de los veterinarios de Madrid. Asimismo figura un régimen disciplinario con sus correspondientes medidas sancionadoras. Se produce, pues, una duplicación de acciones con las de los tribunales ordinarios de Justicia

⁹⁶ Se pueden descargar en la página web http://www.cofm.es/index.asp?MP=1&MS=6&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=2241&r=1024*768 [Consulta 31 de marzo del 2010].

cuando se trata de resolver asuntos de desavenencias meramente comerciales.

Aspectos tan importantes para la actividad económica como pueden ser la organización de las guardias o las licencias para la apertura de los centros farmacéuticos tampoco están recogidas en dichos estatutos.

Las medidas contra la competencia en el sector farmacéutico se han denunciado no sólo en el caso español sino también en otros países miembros de la Unión Europea por la Comisaria de Competencia Neelie Kroes en el *Informe Final* publicado el 8 de julio del 2009⁹⁷. En él se alude sobre todo al exceso de burocracia imperante en el sector, al retraso de la producción y llegada al mercado de los productos farmacéuticos genéricos provocados por los laboratorios, y a las deficiencias en el marco regulador, entre las más destacadas: falta de acuerdos generales con los productores de medicamentos, desarrollo de una amplia patente comunitaria y carencia de un sistema especializado para la resolución de litigios.

Las prácticas anti-competencia por parte de algunas empresas farmacéuticas están en el punto de mira del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El caso de la empresa GlaxoSmithKline Services Unlimited ha sido uno de los más llamativos. GSK pactó con intermediarios establecidos en España precios diferentes para determinados medicamentos, en función de si dichos intermediarios los

⁹⁷ Defensa de la competencia: las deficiencias del sector farmacéutico requieren nuevas medidas. En: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1098&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en> [Consulta 14 de abril del 2010].

comercializaban en España o en otros Estados miembros. El objetivo de GSK era limitar el comercio paralelo de sus medicamentos. En relación con ello, la Abogada General⁹⁸ Verica Trstenjak señaló hace aproximadamente un año que “una empresa farmacéutica que acuerda una subida de sus precios a la exportación con el fin de limitar el comercio paralelo, tiene por objeto restringir la competencia”⁹⁹.

La formación de los precios de los productos farmacéuticos ha sido muy bien estudiada por Joan Ramón Borrell Arqué, en un estudio comparativo entre el entorno español y el inglés. Según Borrell Arqué¹⁰⁰ las variables fundamentales que conforman los precios de los medicamentos son dos: la competencia marcada por los mercados rivales y la financiación pública conforme con la legislación particular de cada país.

La Comisión Europea ha pedido en varias ocasiones al Reino de España la liberalización de este sector. Se estima *grosso modo* que, de darse este paso, se crearían aproximadamente 30 000 puestos de

⁹⁸ Esta figura, que parece necesaria, no está presente en muchos países, entre ellos España.

⁹⁹ Conclusiones de la Abogada General en los asuntos C-501/06 P y otros. Comunicado de prensa n° 56/09 difundido el 30 de junio del 2009. En: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CJF/09/56&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=ca> [Consulta 19 de abril del 2010].

¹⁰⁰ *Cfr.* Los precios de los medicamentos en Inglaterra y en España: competencia, regulación y financiación pública. Trabajo de tesis doctoral, dirigida por Antón Costas Comesaña, presentada en el Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Barcelona el 21 de julio de 1999. Más información en: <http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0507108-123730/> [Consulta 1 de mayo del 2010].

5. COMPETENCIA EN ACTIVIDADES SANITARIAS

trabajo, además de los oficios vinculados a este sector: alquileres de locales, labores de equipamiento,...

Los detractores de la libre competencia sostienen que de producirse esta decisión se crearían agravios tales como el desabastecimiento de productos en pequeñas poblaciones y la huida de los farmacéuticos a las grandes metrópolis.

Esta argumentación no parece muy consistente porque en las grandes urbes los farmacéuticos se verían sometidos a soportar un mayor grado de competitividad, y en todo caso, porque, como se ha expuesto al principio de este trabajo, todo gobierno de corte liberal debe tratar de impedir cualquier clase de desabastecimiento de productos de primera necesidad hasta en las poblaciones más pequeñas y recónditas.

6. LOS ESTUDIOS SOBRE LA COMPETENCIA DESDE LA PERSPECTIVA CUANTITATIVA

En España uno de los pioneros de los estudios de carácter cuantitativo en las Ciencias Sociales fue el malogrado e injustamente olvidado D. José Bujeda Sanchiz, cuya tesis doctoral salió publicada con el título *La medida en las Ciencias Sociales*¹⁰¹, que marcaría esta tendencia tan en boga en nuestros días.

Por lo que atañe a nuestro estudio, tanto los defensores como los detractores de la libertad comercial tienden a sostener sus tesis con cifras. Hay casos fácilmente analizables; por ejemplo está comprobado que la liberalización de los servicios en el campo de las telecomunicaciones los ha mejorado y abaratado.

Algunos usuarios creen todo lo contrario, pero no se percatan de que el tipo de servicios que reciben en la actualidad es comparativamente más barato que el recibido en épocas pasadas. Un ejemplo claro es el de la telefonía. El gasto en telefonía de un individuo o de una familia puede ser hoy superior al de hace 25 años; pero en las mismas condiciones ese gasto sería inferior. De hecho los gastos en telefonía fija son actualmente muy bajos. Lo que sucede es que los servicios han mejorado y de ahí el incremento del gasto.

¹⁰¹ No figura en la base de datos Teseo. Fue publicada años después con un cambio en el título, como aquí se indica. Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1974. ISBN 84-7231-157-0. Parece oportuno recordarle y reconocer en este lugar su inestimable aporte a la investigación en Ciencias Sociales.

Pero en otros sectores los datos no están tan claros. Leopoldo Pons-Romeu y Albentosa-Furio [2008]¹⁰², ha tratado de demostrar que los colegios profesionales no entorpecen el funcionamiento de los mercados competitivos de prestaciones de servicios, sino que, por el contrario, hacen posible un mercado profesional transparente porque, según su opinión, las titulaciones universitarias oficiales son condiciones necesarias pero no suficientes para el normal desarrollo de las actividades cualificadas desarrolladas por cuenta propia.

Esta idea, que repite en su libro *La economía de la crisis 2009-2011* [2011, p. 43] puede suscitar la polémica al poner en entredicho la capacitación de los estudios universitarios en la vida laboral. Si la liberalización de las profesiones no funciona eficazmente o se producen casos de injusticia social, habrá que analizar si lo que falla es el sistema de mercado o más bien un sistema judicial incapaz de afrontar los retos de la libertad mercantil.

En el campo de la sanidad española, por ejemplo, a menudo la prensa destapa atrocidades de intrusos que sin una titulación imprescindible para desarrollar su trabajo causan graves problemas de salud en los pacientes. Ante este hecho pueden plantearse dos alternativas:

Primera. Que todos los practicantes de la Medicina estén colegiados y su actividad respaldada por un colegio de médicos, para que no se produzcan estos abusos.

Segunda. Que haya una legislación adecuada para que los jueces puedan fiscalizar el trabajo tanto de médicos como de intrusos con el fin de que no se cometan atropellos contra la salud del ciudadano.

¹⁰² Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Valencia.

Ante este dilema es preferible la segunda solución al ser la más barata; porque en cualquier caso un profesional de la Medicina se puede equivocar (estando o no colegiado) y porque en todo caso cualquier persona puede ejercer la Medicina sin ser médico, claro está que contraviniendo la ley.

La colegiación, por tanto, nos parece una medida preventiva que no impide las posibles equivocaciones médicas ni remedia sus resultados, de hecho la mayoría de los médicos recurre a un seguro de responsabilidad.

Se trata, en todo caso, de contemplar no la confianza de los ciudadanos en unos profesionales de probada experiencia por pertenecer a una determinada institución, sino de valorar el coste suplementario de sus servicios por el hecho de que esos profesionales se vean obligados a estar respaldados por una organización para ejercer su profesión.

Por el momento hay poca experiencia en España sobre la aplicación de técnicas de análisis cuantitativo para evaluar las ventajas económicas de ciertas actividades empresariales en un sistema de libre competencia [Jiménez Latorre y Coronado Saleh, 2010, p. 356].

Hasta ahora los estudios, que tienen carácter predictivo, consisten en el desarrollo de simulaciones¹⁰³ que ofrezcan efectos esperados. La Comisión Nacional de la Competencia a través de su Economista Jefe ha resuelto de este modo algunos casos de conflictos ocasionados por la falta de acato a la libertad de competir.

Es de esperar que el análisis de la competencia desde la perspectiva cuantitativa mejore de manera progresiva porque, como dicen

¹⁰³ En vez de simulación, a veces se emplea la frase *test sustantivo*.

Fernando Jiménez Latorre y Javier Coronado Saleh [2010, p. 355]: “La modernización en la aplicación del derecho de la competencia, especialmente en materia de control de concentraciones, viene ganando terreno a medida que evolucionan los desarrollos teóricos, aumenta la información disponible y mejora la fiabilidad de las técnicas de valoración”.

6.1. Pautas para un modelo de evaluación de la competencia

Aunque las consideraciones impresionistas (los juicios de valor de la opinión pública por ejemplo) parecen muy importantes hoy día para la explicación de las actitudes humanas en los procesos comerciales, también es fundamental desde la perspectiva científica marcar un modelo para analizar la competencia con parámetros objetivos que valgan para ver las cosas con la mayor neutralidad posible. Por ello voy a proponer un esquema que sirva de orientación para medir normas y actos competitivos.

Los principios para juzgar cualquier práctica competitiva o anticompetitiva en un sistema de libre mercado serán los siguientes:

A) La competencia debe ser leal. Esto implica que:

- Las empresas no pueden fijar los precios de modo inequitativo o abusivo ni repartirse los mercados entre ellas.
- Ninguna gran empresa puede explotar su posición de dominio para expulsar del mercado a sus competidores.

6. COMPETENCIA. ESTUDIOS CUANTITATIVOS

-Las empresas no pueden fusionarse si ello supone una posición de control del mercado. Este supuesto suele estar relacionado con las *grandes* empresas.

Excepcionalmente se tolerará la actividad de empresas en situación de monopolio cuando se trate de establecer negocios necesarios que supongan costes muy elevados en infraestructuras y de ellos se desprendan ventajas sociales evidentes (monopolios naturales) , siempre que estos monopolios demuestren un comportamiento leal con las demás empresas del sector, siempre que pongan sus infraestructuras a disposición de cualquier usuario y siempre que los beneficios obtenidos por la prestación de servicios públicos no se destinen a subvencionar operaciones comerciales que obliguen a bajar los precios de sus competidores.

B) Las ayudas estatales son, en principio, contrarias al espíritu de la libre competencia. Estas ayudas pueden obtenerse a través de:

- préstamos y subvenciones
- desgravaciones fiscales
- suministros de bienes y servicios a tarifas preferentes
- garantías públicas que mejoren la calificación crediticia de una empresa con respecto a sus competidoras.

Además, en cualquier caso, tampoco podrá concederse ningún tipo de ayuda estatal a las empresas en crisis que no tengan perspectivas de viabilidad económica.

Con todo, no obstante, si es demostrable que una empresa nueva o en crisis puede superar una mala racha y generar un bien social o

público, el gobierno podrá prestar su apoyo a esa empresa en alguna de las condiciones expuestas anteriormente.

* * * * *

La evaluación de la competencia se puede afrontar al menos desde dos períodos temporales: antes o después de producirse las actividades competitivas.

En el primer caso nos referimos a las que podemos llamar medidas preventivas que garanticen la competencia. Estas medidas consisten principalmente en la legislación dimanada de los órganos de la Administración del Estado capaces de generar normas de mayor o menor rango.

En el segundo caso, en base a los ítems establecidos en el modelo propuesto, se trata de diagnosticar casos, realizar valoraciones y emitir los informes pertinentes acerca de aquellas prácticas que no respeten la libre competencia según los requerimientos establecidos en el modelo.

La Comisión Nacional de la Competencia editó hace tiempo un folleto ilustrativo, titulado *Guía para la elaboración de memorias de competencia de los proyectos normativos*¹⁰⁴, que es el centro en esta parte de nuestro estudio.

¹⁰⁴ Documento de la CNC aparecido en febrero del 2009 pero reimpresso posteriormente, hay v.g. una reimpresión en el mes de diciembre del año 2010. Accesible en:

<http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:1YEHMLYxTW0J:www.cncompet>

La CNC denomina *Memoria de competencia* al informe que valora y analiza, desde el punto de vista de la competencia, cualquier proyecto normativo, ya sea una norma de mayor rango (Leyes o reales decretos) o de menor rango (resoluciones, órdenes...) y su impacto, directo o indirecto, sobre la competencia en el mercado.

La antes citada *Guía...* está dirigida tanto a los poderes públicos como a todos aquellos organismos que puedan tener entre sus atribuciones la de regular una determinada actividad económica o influir sobre su ejercicio, lo cual puede abarcar desde la elaboración de un proyecto de ley hasta la aprobación de un pliego de contratación; desde la Administración General del Estado, hasta la Administración Autonómica y Local.

El objetivo que busca este tipo de memorias es que cualquier norma o regulación que se quiera implantar no restrinja la competencia de manera injustificada.

El procedimiento para la elaboración de una memoria o informe de competencia es bastante sencillo. En el caso de mayor complicación se establecen tres fases:

encia.es/Inicio/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx%3FEntryId%3D29520%26Command%3DCore_Download%26Method%3Dattachment+guia+para+la+elaboracion+de+memorias+de+competencia&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESi6Krz0S_FY0teDkvtSD2dy2Lxw2PwCgDzIVt5HRTVUmiz6kllg6DwtXOWaXjYNq-UjPWgxPMOU5MEcab6cfsJ0okGamPErHX6I_D6VBiItIW0S06MQe41DjmGZbKcxGGZmLS-x&sig=AHIEtbSTYPXoj8L6p_AfJ3q1XODbfXbmXw
[Consulta 10 de enero del 2010].

A) IDENTIFICACIÓN. En la primera fase hay que identificar si la norma introduce restricciones a la competencia.

Si la respuesta es negativa, el proyecto sigue adelante.

En caso contrario, es decir si aparecen restricciones a la competencia en la norma, entonces hay que pasar a la segunda fase que consiste en ver si estas restricciones están justificadas.

Las restricciones que pueden darse son principalmente las que figuran en alguno de los siguientes tres grupos:

“1. ¿Limita el número o la variedad de los operadores en el mercado?

Puede ser éste el caso si el proyecto:

1.1 Otorga derechos exclusivos a un operador.

1.2 Establece un sistema de licencias, permisos o autorizaciones para operar en el mercado.

1.3 Limita la capacidad de ciertos tipos de operadores para ofrecer sus productos.

1.4 Eleva de forma significativa los costes de entrada o de salida del mercado para un operador.

1.5 Crea una barrera geográfica a la libre circulación de bienes y servicios.

“2. ¿Limita la capacidad de los operadores para competir?

Puede ser éste el caso si el proyecto:

2.1 Controla de forma sustancial los precios de los productos o influye sobre ellos.

6. COMPETENCIA. ESTUDIOS CUANTITATIVOS

2.2 Limita a los operadores las posibilidades de comercializar sus productos.

2.3 Limita a los operadores las posibilidades de promocionar sus productos.

2.4 Exige normas técnicas o de calidad de los productos que resultan más ventajosas para algunos operadores que para otros.

2.5 Otorga a los operadores actuales en el mercado un trato diferenciado con respecto a los nuevos entrantes.

“3. ¿Reduce los incentivos de los operadores para competir?

Puede ser éste el caso si el proyecto:

3.1 Genera un régimen de autorregulación o correulación¹⁰⁵.

3.2 Exige o fomenta la publicación de información sobre producción, precios, ventas o costes de los operadores.

3.3 Incrementa los costes para el cliente de un cambio de proveedor, reduciendo la movilidad del consumidor.

3.4 Genera incertidumbre regulatoria”¹⁰⁶.

B) JUSTIFICACIÓN. Si las restricciones no estuvieran justificadas, se volvería al punto de partida para modificar el proyecto.

En caso contrario, si la respuesta es positiva, se pasa al tercer punto.

¹⁰⁵ Término no admitido en el *Diccionario* de la Real Academia Española.

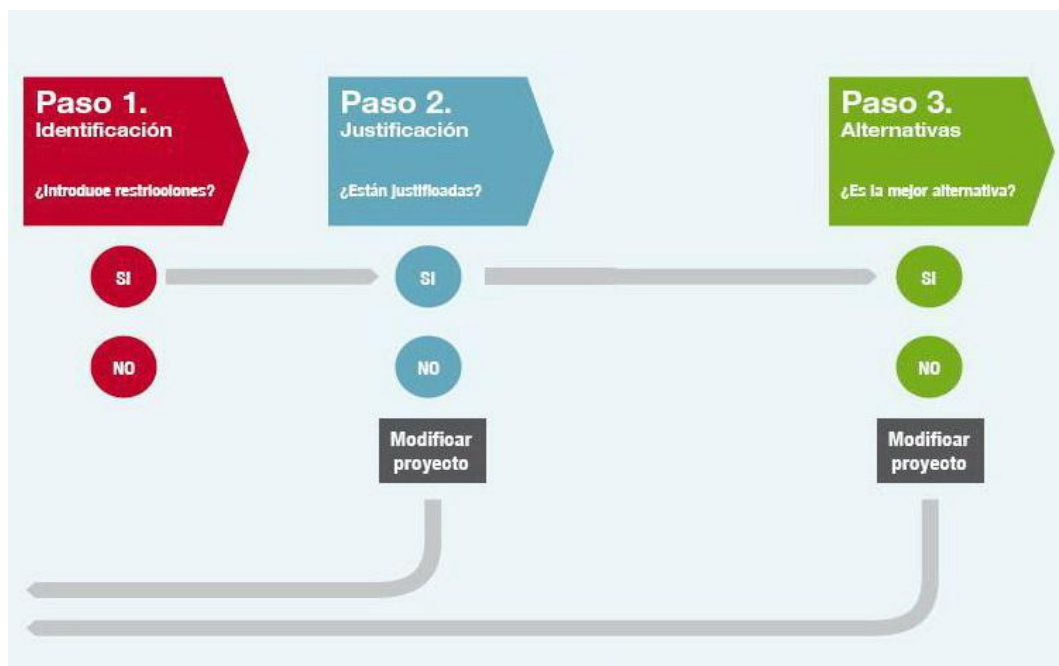
¹⁰⁶ *Ibidem* p. 15.

C) ALTERNATIVAS. Aquí se analiza si el proyecto normativo es la mejor alternativa posible.

Esta vez si la respuesta llegara a ser también negativa, habría que volver al principio para modificar de nuevo el proyecto, y si se cree que es la mejor alternativa, se procederá a dar el visto bueno al proyecto normativo.

Con estos elementales filtros de comprobación las normas son fácilmente controlables para no impedir la libre competencia.

En esquema el proceso es como sigue:



Fuente: CNC. *Guía para la elaboración de memorias de competencia...*, pp. 10-11.

6. COMPETENCIA. ESTUDIOS CUANTITATIVOS

Los puntos 1.2 y 2.1 del apartado A) son los más relacionados con el tema de esta tesis doctoral.

En primer lugar en todos los casos los profesionales de empleos públicos por cuenta propia vinculados a las ciencias jurídicas y de la salud necesitan una doble autorización para desempeñar su trabajo: la de la Facultad en la que hayan cursado sus estudios y la del colegio profesional que refrenda y fiscaliza esa facultad.

En segundo lugar parece evidente que con el sistema actual de control de estos profesionales los costos de sus servicios para los usuarios son superiores a los que se producirían en un sistema libre de oferta y demanda.

7. LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA COMPETENCIA

Parece fundamental, antes de demostrar la opinión de la gente, sondear sus sentimientos presentando el estado de la cuestión. En esta parte se lleva a cabo esta tarea pergeñando sucintamente la historia pasada y a partir de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación de masas.

Uno de los escollos con los que a menudo tropieza la competencia no es sólo el conocimiento superficial de ella sino también su asimilación y aceptación.

Que una persona pueda responsabilizarse de la construcción de un edificio, con una compañía de seguros que le respalde, aunque no sea arquitecto, es algo que entra dentro de lo admisible. Sin embargo, aunque ello suponga un abaratamiento de los costes y un beneficio para el constructor y para el comprador, es posible que hoy día esta posibilidad desate cierta alarma social.

A lo largo de la historia, desde los tiempos de la unificación política de nuestro país, las decisiones de carácter económico muchas veces han sido contrarias a la competencia, incluyendo las medidas populistas de los gobiernos conservadores durante el siglo XIX¹⁰⁷. Aunque se ocupe de un período más restringido, el libro de Pedro Fraile *La retórica*

¹⁰⁷ *Cfr.* Juan Velarde Fuertes. *Sobre la decadencia económica de España*. Madrid: Guía, 1951.

7. OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA COMPETENCIA

contra la competencia en España (1875-1975) supone un concienzudo análisis de este hecho.

Aun cuando las manifestaciones contra el proteccionismo de las actividades económicas son muy anteriores, en España, por citar un período reciente, surgieron a mediados del siglo XX algunas voces contrarias al acentuado intervencionismo económico del Estado¹⁰⁸. Este replanteamiento de la actividad económica será en especial atendido sobre todo al surgir la crisis internacional del petróleo en 1973. Hasta entonces se puede decir que la política española de las décadas anteriores practicaba un tímido modelo de aperturismo de tinte keynesiano.

En el plano microeconómico tanto las declaraciones como las prácticas contra la competencia siguen manteniéndose en los tiempos actuales. Una de las manifestaciones más consolidadas son los colegios profesionales, que aglutinan una enorme influencia social y son virtuales grupos de presión.

En el trabajo que nos ocupa vamos a separar tres clases de grupos de opinión: en primer lugar el de los representantes de los colectivos profesionales, inicialmente tendentes al conservadurismo, y defensores a ultranza del *statu quo*, es decir de mantener la situación actual invariable.

En segundo lugar el de los profesionales y representantes de la Administración, provisionalmente proclives al aperturismo, a los cambios, en definitiva a la liberalización de los servicios. Dentro de este

¹⁰⁸ *Cfr.* el prólogo de Juan Velarde en el citado libro de Pedro Fraile.

7. OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA COMPETENCIA

segundo apartado hay que diferenciar por una parte, como caso especial, la posición de la Comisión Nacional de la Competencia, abierta partidaria de la libertad de negociación de los servicios profesionales por respeto a los principios de la competitividad; y por otra parte la actitud del Gobierno, mediatizada por la legislación de la Unión Europea y proclive a las reformas necesarias con ciertas restricciones. Por ejemplo, en el Proyecto de Ley de Servicios Profesionales que el gobierno socialista se comprometió a enviar a las Cortes antes del día 30 de junio del 2011 no se contempla la exención de la colegiación para las profesiones relacionadas con el Derecho y las Ciencias de la Salud.

En tercer lugar el grupo de los usuarios, supuestamente escépticos, ajenos en buena parte a las medidas legislativas, y desconocedores de las ventajas e inconvenientes de la liberalización de los servicios. No parece muy habitual que el Defensor del Pueblo reciba quejas de ciudadanos debidas al corporativismo colegial a pesar de lo que a veces se lee en la prensa¹⁰⁹.

Estos hipotéticos estados de opinión, atribuidos a los tres grupos previamente citados, son contrastados en el bloque o capítulo 8.

¹⁰⁹ Cfr. Teresa Blanco. Quejas de corporativismo colegial en las reclamaciones contra letrados de oficio. *El Economista*. 2 de noviembre del 2011. También en: http://www.clipmedia.net/ficheros/2011/11_nov/rw288.pdf [Consulta 2 de noviembre del 2011]. No obstante, como me informa, Francisco Vírseda Barca, Asesor Responsable del Defensor del Pueblo (Área de Estudios y Modernización), las quejas relacionadas con actos anticompetitivos no forman parte en genérico del cometido de esta institución. En el último informe relativo al año 2010 no he visto datos sobre este asunto. Cfr. <http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/InformeAnualCortesGenerales2010.pdf> [Consulta 2 de noviembre del 2011].

7.1. Los colegios profesionales

Los colegios profesionales, también llamados *colegios oficiales*, son asociaciones privadas, sometidas al derecho público, de trabajadores de ciertas profesiones cuya función principal es velar por el estatus de las mismas y por los intereses laborales de sus miembros.

En general son profesiones de las denominadas liberales, aun cuando no siempre sea así. De algún modo están emparentados con los viejos gremios medievales, defensores de las profesiones manuales y artesanales.

Estos grupos de presión desaparecieron con el Antiguo Régimen, sin embargo a principios del siglo XIX tomaron su relevo otro tipo de profesionales. “Los Colegios de Corredores de Comercio datan de 1829, los de Agentes de Cambio y Bolsa de 1831. Tras ellos vinieron los Colegios de Abogados (1838) y Procuradores (1842). Los de notarios, antecesores de los actuales, parten de 1862.

A partir de las Uniones Nacionales de farmacéuticos (1913), médicos (1914), jueces (1920), notarios (1922) se fue consiguiendo la colegiación obligatoria, la exclusividad territorial de los colegios, la práctica del *numerus clausus*, y la prohibición de la práctica profesional en grupo” [Fraile, 1998, pp. 194-195].

La existencia de un colegio profesional, al menos en teoría, no tiene por qué suponer ninguna restricción de la competencia, de hecho los colegios profesionales cumplen los requisitos habituales para funcionar como cualquier otra clase de las asociaciones reconocidas por la *Constitución española*. Las que pueden llegar a ser restrictivas son sus

7. OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA COMPETENCIA

normas. De manera que como tantos otros tipos de instituciones privadas pueden perfectamente constituirse y tener la libertad de reunión que les garantiza la *Constitución*¹¹⁰.

La creación de los Colegios Profesionales está reconocida en el artículo 36 de la *Constitución Española* de 1978 para diferenciarlos de manera singular de otra clase de asociaciones. La referencia a estas instituciones es muy corta¹¹¹ y se limita a decir que tanto la estructura interna como su funcionamiento deberán ser democráticos.

Al referirse al régimen jurídico de los Colegios Profesionales, la Constitución Española de 1978 no hace sino remitir a una ley cuatro años más vieja: la Ley 2/1974, de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales que, a su vez, reconoce en sus preliminares el hecho de que “en la actualidad, los Colegios Profesionales se encuentran regulados por una serie de disposiciones dispersas y de distinto rango”¹¹².

La colegiación en España para el ejercicio de las profesiones relacionadas con el Derecho y la Salud es obligatoria. Esta medida en

¹¹⁰ Por una simple cuestión terminológica la legislación catalana emplea el término *Colegio* para referirse a la obligatoriedad de pertenecer a una de estas instituciones, y reserva el término *Asociación* para referirse a pertenencias voluntarias.

¹¹¹ “La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos”.

¹¹² *Boletín Oficial del Estado*, número 40 de 15/2/1974, páginas 3046 a 3049. Esta Ley ha dado pie a sucesivas reformas en 1978, como se ha dicho, en 1997 (Ley 7/1997 de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales) y en 2009 con la ya comentada *Ley Omnibus*.

7. OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA COMPETENCIA

principio parece suponer una restricción a la competencia y, si esto es así, por qué motivo, entonces, sostener la necesidad de los colegios profesionales.

Como ya se ha dicho, la creación y funcionamiento de los mismos están reconocidos por ley. Además, como cualquier otro tipo de asociaciones privadas, pueden perfectamente ejercer actividades privadas no contrarias a derecho. Esta es una razón perfectamente lógica.

Otra discutible razón, que justifica, según algunos, su existencia y desarrollo es de tipo económico. Se da por supuesto que los colegios profesionales (al menos los vinculados a las profesiones jurídicas) resultan beneficiosos. Para Ciarreta et al. [2010b, p. 287], “La Administración delega en los colegios estas potestades públicas porque le resulta más rentable económicamente e incluso a veces más beneficioso para el interés de los usuarios”.

El grupo de investigación de Aitor Ciarreta, antes citado, alude a servicios tales como la organización del turno de oficio, pero cuando unen esta garantía de gratuidad de la justicia con los servicios de los procuradores, están mezclando servicios gratuitos con servicios de pago.

En los últimos años son muchas las voces que se pronuncian a favor de la eliminación de trabas para determinados servicios privados de supervisión oficial, entre ellos los de los colegios profesionales, verdaderos grupos de presión frente al poder político.

7. OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA COMPETENCIA

Hasta hace poco el Ministerio de Economía y Hacienda se ha estado oponiendo a la reforma de tales instituciones¹¹³ en perjuicio de los intereses de los consumidores. No es fácil tratar este asunto y menos dar soluciones que contenten a todos.

Entre otras posibles, al menos cuatro son las dificultades que se encuentran para acotar el estado de la literatura aparecida en el último cuarto del siglo XX sobre la competencia en España:

- a) Escasez documental y diseminación informativa tanto en estudios como en la prensa escrita. En el año 2009 sólo he contabilizado 25 monografías en *Bibliografía Española*. El tema, pese a su interés, tampoco ha sido especialmente tratado de modo extenso en artículos de revistas y periódicos¹¹⁴.
- b) Dispersión legislativa. La normativa de ámbito nacional sobre colegios profesionales se centra en la Ley 2/1974 de 13 de febrero, pero en el Estado de las Autonomías las Comunidades Autónomas han aplicado normativas particulares, por ejemplo la Comunidad de Madrid se rige por la Ley 19/1997 de 11 de julio.

¹¹³ Vid. por ejemplo José María López Agúndez y D. Gracia. Economía frena a Competencia y no liberaliza los colegios profesionales. *Expansión*, 21 de enero del 2009. También en:

<http://www.expansion.com/2009/04/20/economia-politica/1240263980.html>
[Consulta 27-01-2010].

¹¹⁴ No es objeto de este estudio. Habría que averiguarlo mediante la consulta en la base de datos Baratz, aun así habría que revisar los resultados de las referencias uno por uno, ya que en muchos casos podría aparecer en el campo materia o título la palabra *competencia* sin que el documento tuviera nada que ver con la competencia en el sentido económico.

7. OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA COMPETENCIA

- c) Diferentes criterios de opinión que en ocasiones han suscitado controversias. Muchas empresas, por ejemplo, se crean al margen del Registro Mercantil, que lleva funcionando 125 años. Los notarios aseguran que las sociedades pueden operar sólo con la escritura de constitución notarial¹¹⁵.
- d) Prácticas alegales (valga la palabra) consentidas. Quizá uno de los ejemplos más evidentes sea el de los administradores de fincas. Muchos de ellos realizan su labor al margen de la colegiación sin incurrir en faltas ni delitos.

A pesar de la sentencia CIF¹¹⁶ de la Unión Europea, visiblemente contraria a la Ley española de Colegios Profesionales de 1974, estos han continuado aplicando algunas normas derivadas de sus estatutos de los Colegios supuestamente transigidas por la legislación comunitaria, como los orientativos honorarios profesionales. En esta línea el Tribunal de Defensa de la Competencia del País Vasco se ha desmarcado de interpretaciones viciadas y ha adoptado una resolución pionera en España para que todos los Colegios del País Vasco eliminen de sus estatutos los baremos orientativos de honorarios profesionales [Aranzabe Pablos, 2009].

¹¹⁵ *Cfr.* Ricardo Cabanas Trejo. *Inscripción y personalidad jurídica*. Madrid: Consejo General del Notariado, 2010.

¹¹⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 9 de noviembre del 2003, asunto C-198/01 Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF).

7.2. La opinión de los colegios profesionales

El día 20 de marzo del año 2010, se contaban 87 colegios profesionales de ámbito nacional por profesiones. Algunos tan curiosos como el Colegio de Buzos de Cataluña. Si tenemos en cuenta que cada colegio puede a su vez repetirse en diferentes comunidades autónomas, la cifra podría multiplicarse aproximadamente por cinco. El control estatal sobre tantas instituciones podría resultar impracticable, de ahí que una de las pretensiones de la Comisión Nacional de la Competencia sea la de la colegiación única.

La colegiación es obligatoria para realizar determinadas tareas, v.g. abogados *de oficio*, arquitectos de obra,... pero, como veremos más adelante, también lo es para ejercer la profesión de modo privado.

El desarrollo de la profesión en algunos casos perjudica notablemente a los propios profesionales. Se da el caso de que en algunas provincias incluso hay más de un colegio profesional como sucede en la de Madrid, en el sector de la abogacía, donde el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid actúa por un lado y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares actúa por otro; de manera que un abogado que ejerza su actividad en dos términos tan próximos se ve obligado a colegiarse en dos instituciones distintas, con el perjuicio del pago de cuotas por duplicado que ello supone.

Según un estudio realizado por las Profesoras Titulares de Universidad Elena Mañas Alcón, María Luisa Peinado Gracia y la investigadora Raquel Llorente Heras [2006], el número de colegiados en España está en torno al millón y medio de personas. Ello supone un 6,1% de la

7. OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA COMPETENCIA

ocupación total y representa el 8,8% del PIB¹¹⁷, además de los cientos de miles de personas que colaboran en sus instituciones y realizan actividades no sólo de apoyo a los colegiados sino también de mantenimiento de bibliotecas, organización de cursos de capacitación,...

En setiembre del año 2008 la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)¹¹⁸ elaboró un informe bastante desfavorable acerca de los colegios profesionales, acusándolos de realizar prácticas en exceso proteccionistas sobre ciertas actividades.

Los defensores de los colegios profesionales, además de otras muchas razones secundarias, justifican su creación (pero no su necesidad) por dos motivos: “no son comerciantes a los que se les aplique el *jus mercatorum*” [Fernández Farreres, 2002, p. 23 y ss.], lo cual es discutible, y “cuando actúan como delegados del poder público” [Fernández Farreres, 2002, p. 95 y ss.], en cuyo caso deberían rendir cuentas ante la Administración y no ante el Colegio.

El 12 de junio del 2009 el Gobierno presentó el proyecto de la denominada *Ley Ómnibus* en la que se trata, entre otros temas, la situación de los colegios profesionales en España.

La respuesta por parte de los representantes de los colegios no se hizo esperar. Al mes siguiente más de 90 colegios solamente en Cataluña se

¹¹⁷ *Vid.*

http://www.unionprofesional.com/index.php/unionprofesional/recursos/profesiones_en_cifras [Consulta 9-2-2010].

¹¹⁸ Organismo estatal creado a raíz de la Ley 15/2007 de 3 de julio. Hasta el 1 de setiembre del 2007 se denominó Tribunal de Defensa de la Competencia. Tiene su sede en Madrid, en la calle Barquillo nº 5.

7. OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA COMPETENCIA

manifestaron en contra de los propósitos del Poder Ejecutivo¹¹⁹. Sin embargo, como más adelante demuestra nuestro estudio de caso, la mayor parte de los trabajadores que desempeñan una profesión de carácter independiente en los sectores jurídico y de la salud se muestran partidarios de la liberalización de medidas que ponen dificultades a sus actividades profesionales.

El 28 de abril del 2011, ante la previsible Ley de Servicios Profesionales, más de 90 colegios profesionales catalanes se han reagrupado en la Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. Esta Asociación nace, según su propia declaración de intenciones, para reforzar la presencia de los Colegios Profesionales, impulsar proyectos de interés común, actuar como interlocutora con las administraciones y estudiar cuestiones que afecten al colectivo transversalmente, como la nueva Ley de servicios profesionales. Se trata, en definitiva, de fortalecer aún más un grupo de presión ya de por sí fuerte.

Los representantes de los colegios profesionales manifiestan su voluntad de adaptación a los cambios, pero se desconoce a qué tipo de cambios se refieren.

La realidad parece incluso bastante más compleja de la cuenta, porque mientras hay colegios asentados por tradición con un fuerte poder

¹¹⁹ *Cfr.* Joan Ribó Casaus. Los colegios profesionales ante la Ley Ómnibus. La libre competencia. *Avui*, 27 de setiembre del 2009. También en línea: <http://www.eltemadelostemas.com/articulos/501-los-colegios-profesionales-ante-la-ley-omnibus-la-libre-competencia> [Consulta 27 de octubre del 2009]. En español y catalán.

social, a profesionales como los del Periodismo¹²⁰ (la Asociación de la Prensa no es Colegio) o los Graduados Sociales se les ha denegado la posibilidad de constituir un Colegio Profesional.

7.3. La opinión de los usuarios

En muchos casos la libertad comercial de servicios suscita una opinión desfavorable en los medios de divulgación por parte de los periodistas y de las organizaciones de consumidores. Abundan noticias como: “liberar las farmacias no va a traer beneficios para el consumidor”¹²¹, “la OCU califica de ‘fracaso’ la liberalización eléctrica”¹²²,...

Y no sólo son los representantes de colectivos, también los propios consumidores tienden a ver de manera negativa la liberalización de la economía. En la encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)¹²³ el 1 de agosto del 2005, el 46,2% de las personas se

¹²⁰ Excepto en Cataluña donde sí existe la colegiación de este colectivo profesional. A simple vista Cataluña es la Comunidad Autónoma con mayor número de colegios profesionales, de acuerdo con el anejo 2 del Informe sobre el sector de servicios profesionales y los colegios profesionales, elaborado por la Comisión Nacional de la Competencia en setiembre del 2008.

¹²¹ *Vid. Consoft*, 7 de mayo del 2001. En: https://www.farmatic.es/noticias/news_text.asp?id=31939 [Consulta 26 de marzo del 2010].

¹²² *Vid. La Opinión de Granada*, 9 de marzo del 2010. En: <http://www.laopiniondegranada.es/economia/2010/03/09/califica-fracaso-liberalizacion-electrica/180241.html> [Consulta 26 de marzo del 2010].

¹²³ El título exacto de este estudio es *Globalización y relaciones internacionales*. Estudio 2606, mayo 2005. Accesible en: http://www.cis.es/cis/opencms/Archivos/Marginales/2600_2619/2606/Es2606.pdf

Como todas las encuestas del CIS son de acceso público gratuito a los tres meses de su presentación, es de suponer por este motivo que la prensa se

7. OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA COMPETENCIA

muestra contrario a las medidas liberalizadoras. Esta información sesgada se exageró en el siguiente titular del diario *Cinco Días*: “Los españoles creen que la liberalización económica amenaza el empleo y beneficia a las multinacionales”¹²⁴.

Independientemente de que nos mostremos de acuerdo o en desacuerdo con los resultados de las encuestas y de que a veces no reflejen la realidad social, la opinión pública en la sociedad actual es un poder alternativo de enorme transcendencia. Una sociedad, quizá en su momento poco progresista, puede dar al traste con proyectos políticos como el propuesto por Antonio Garrigues Walker en las elecciones generales de 1986¹²⁵.

hiciera eco de este estudio el 1 de agosto de ese año y diera como fecha de publicación erróneamente esta última.

¹²⁴ Supuestamente publicado el 1 de agosto del 2005 (ver nota anterior). Noticia del diario *Cinco Días* en: http://www.cincodias.com/articulo/economia/espanoles-creen-liberalizacion-economica-amenaza-empleo-beneficia-multinacionales/20050801cdscdseco_7/cdseco/ [Consulta 26 de marzo del 2010]. Esta información se obtuvo de la pregunta nº 12 de la encuesta elaborada por el CIS.

¹²⁵ En diversas declaraciones a los *mass media* Antonio Garrigues atribuyó el descalabro de los resultados para el Partido Reformista Democrático que él presidía, a la falta de conexión de las ideas liberales con la sociedad. Cuando se habla de *liberalismo* muchas veces sólo se recuerda el *laissez faire* decimonónico. Hay que aclarar, según el mismo Garrigues manifiesta, que: «El liberalismo no es otra cosa -viene afirmando desde hace tiempo Ralf Dahrendörf- que una teoría política de la innovación y el cambio»... “No es, desde luego, liberal la persona que confiesa y defiende sentimientos xenófobos o racistas como hace en estos momentos un alto porcentaje de la ciudadanía del mundo occidental; no es liberal la persona que pretende poseer, nada más y nada menos, que la verdad absoluta; no es liberal, en concreto, quien afirma que su religión además de ser verdadera, es la única verdadera y que, por ende, las demás son falsas o como poco, menos salvíficas; no es liberal el que defiende tradiciones o privilegios aunque sean causa importante de desigualdades; ni tampoco el que acepta esas desigualdades como inevitables, e incluso naturales a la condición humana; no es liberal el que coloca a la sociedad como un valor superior al individuo y a la igualdad como un

7. OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA COMPETENCIA

Las encuestas de opinión son una arma de la que a veces se abusa para justificar algunas decisiones políticas pero, como dice Pedro Schwartz, estimo acertada “la idea de que el poder no puede estar todo concentrado en una mano, ni de un gobernante, ni de un parlamento, ni siquiera el pueblo debe ser soberano. En una democracia el pueblo tiene la posibilidad de echar al gobierno, y de echarlo sin que corra la sangre, como dijo mi maestro Karl Popper¹²⁶, pero el pensar que con el voto del pueblo, el pueblo nunca yerra, es también un error”¹²⁷.

Los defensores de la libertad de mercado arguyen que este procedimiento potenciaría la competitividad, rebajaría los precios de

principio que prevalece sobre el de libertad; no es liberal -y merece la pena aclarar bien este tema- el que mitifica y sacraliza el mercado como la panacea universal (el subrayado es mío).

“El liberalismo entiende que, por regla general, el mercado es el sistema que permite una asignación más eficiente de los recursos y por ende el que mejor facilita no sólo la creación sino también la distribución de la riqueza. Pero si por cualquier razón ello no fuera así, el liberalismo ha defendido y defenderá inequívocamente la actuación del sector público y su intervención directa, con tal de que no tenga carácter permanente y el proceso pueda ser controlado en todo momento por la sociedad civil. El liberalismo se opone, sin la menor reserva, a toda forma de concentración de poder económico, sea público o privado, y por ello reclama una aplicación estricta de las leyes antimonopolio y de las normas que defienden una competencia leal. El liberalismo no tiene nada que ver con el llamado «capitalismo salvaje» ni con ningún sistema que provoque la indefensión y la opresión del ciudadano. El liberalismo protesta contra un mundo en el que se están acentuando las desigualdades tanto a nivel internacional como nacional, justamente porque se falsifican y se adulteran las reglas del mercado en beneficio de los más poderosos” (El liberalismo auténtico. *abc.es*, 20-05-2008. En:

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-20-05-2008/abc/Opinion/el-liberalismo-autentico_1641878871605.html [Consulta 29 de marzo del 2010].

¹²⁶ Una de las ideas fundamentales de Popper es la limitación de poderes.

¹²⁷ Libertad Digital TV. Programa *Contemporáneos*. 7 de febrero del 2008. Minutaje 0,56h.1'.23". Ideas recogidas en la obra *En busca de Montesquieu*.

7. OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA COMPETENCIA

los productos, animaría la inversión empresarial y fomentaría la creación de empleo¹²⁸.

En el capítulo siguiente se demuestra que algunos de los tópicos mantenidos acerca de la opinión pública favorable al control estatal de los mercados son exagerados.

Habría que saber quién habla en nombre de quién porque, como la encuesta que he realizado nos dice, la mayoría está a favor de una liberalización de la economía con restricciones, en segundo lugar predomina el grupo de quienes apoyan la actividad comercial sin ningún tipo de limitación y en tercer lugar quienes prefieren un sistema que podría llamarse paternalista. En definitiva es mayor el número de los que se decantan por el aperturismo a la libertad de negociar que por el proteccionismo.

¹²⁸ *Cfr.* Gorka Echevarría. ¿La liberalización económica perjudica al consumidor? En: <http://www.juandemariana.org/comentario/232/liberalizacion/economica/perjudica/consumidor/> [Consulta 26 de marzo del 2010].

8. LA OPINIÓN ESPAÑOLA ACERCA DE LA LIBERALIZACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SECTORES JURÍDICOS Y SANITARIOS. ESTUDIO DE CASO

8.1. EL TRABAJO DE CAMPO

Si estamos de acuerdo con Popper, el Estado es un mal necesario y no cabe la menor duda de que la democracia es mejor que la tiranía¹²⁹, asimismo tampoco hay que subestimar la opinión pública, uno de los grandes poderes políticos del mundo actual a pesar de los riesgos que muchas veces entraña.

Popper en *The Logic of Scientific Discovery*¹³⁰ afirma que las teorías científicas no son completamente justificables pero sí contrastables, y que uno de los modos de llegar a la objetividad se puede conseguir a través de contrastar subjetividades individuales. Por tanto, parece apropiado realizar una encuesta para conocer el grado de conocimiento y la opinión de diversos sectores sociales, en relación con los cambios que se están produciendo en la sociedad española ante el reto de la nueva competitividad internacional.

¹²⁹ *En busca de un mundo mejor*. Barcelona: Paidós, 1994, pp. 202-203.

¹³⁰ New York: Basic Books, 1959. Cito por la edición en catalán *La lògica de la investigació científica*. Barcelona: Laia, 1985, p. 88 y 92.

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

La encuesta se ha diseñado mediante la técnica de preguntas cerradas en su mayoría, haciendo uso de variables cualitativas. Aunque algunas preguntas admiten más posibilidades de respuesta, se ha tendido a la simplificación con el fin de aligerar el proceso de la encuesta, ofrecer mayor grado de sencillez y evitar rechazos.

Se ha realizado utilizando la herramienta gratuita *iGoogle\Docs* de la empresa Google. Se trata de un programa muy simple pero potente. Tiene algunas limitaciones como el no poder impedir que una misma persona responda varias veces a la encuesta, pero este es un riesgo que también hay que correr con la sinceridad de los encuestados. Con el fin de paliar, dentro de lo posible, esta disfunción, he optado por descartar aquellas preguntas colindantes que contuvieran contestaciones idénticas.

Dicha herramienta ofrece la gran ventaja de poder tabular los resultados desde el mismo programa o, si se quiere, poder trasladar las respuestas a una hoja de cálculo Excel o a la base de datos Access del paquete *Office* de la empresa Microsoft.

La encuesta se editó y publicó el día 26 de abril del 2011 en la dirección https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDR2e_mFfV01aa2R2TTFWclVEdnF5Z0E6MQ , y se mantuvo hasta el 30 de setiembre del mismo año.

La desventaja de que solamente puedan responder a la encuesta aquellas personas con acceso a Internet y con conocimientos a nivel de usuario, es decir, las incluidas en la denominada *alfabetización informacional*, nos parece mínima.

Desde el punto de vista diatrópico, las encuestas se distribuyeron por todas las provincias de manera proporcional al número de habitantes.

Estos datos se obtuvieron del censo de población del INE correspondiente al mes de enero del año 2011¹³¹.

Desde la perspectiva diastrática, se eligieron profesionales de las actividades tratadas, representantes de estos profesionales y población general mayor de dieciocho años. En los dos primeros casos se aplicó un muestreo estratificado; en el tercer caso se buscaron personas al azar utilizando redes sociales.

El envío de los cuestionarios a través del correo electrónico se hizo siempre de modo selectivo, previo conocimiento del *rol* de los interesados en el caso de los profesionales relacionados con las materias de nuestro interés, y de manera aleatoria, como antes se ha dicho, en el caso del resto de la población.

Alternativamente, cuando se necesita una muestra de población general, se puede acudir a paneles *online* (empresas que se dedican a captar gente dispuesta a contestar encuestas, y la someten a un cuestionario de caracterización que permite asegurar una cierta representatividad); entre las más conocidas destacan Netquest¹³² y Aedemo¹³³, pero las listas que ofrecen estas empresas no tienen por qué ofrecer mayores garantías que el rastreo casi detectivesco de los analistas particulares.

¹³¹ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2011. En: <http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e260/a2011/l0/&file=pro001.px&type=pcaxis&L=0> [Consulta 25 de marzo del 2011].

¹³² <http://www.solucionesnetquest.com/> [Consulta 16 de junio del 2011].

¹³³ <http://www.aedemo.es/aedemo/> [Consulta 16 de junio del 2011].

En vista del modo de selección de los encuestados, dentro de la población general española, se consideró que la muestra era suficiente para ser tratada como estudio de caso o, lo que es igual, como estudio de frecuencias.

Antes de lanzar la encuesta realicé diversas consultas, por un lado a expertos en técnicas de investigación con el fin de mejorar el diseño de la misma; por otro lado a usuarios particulares con el fin de saber si era comprensible. En este segundo caso, comencé por personas de diferentes niveles culturales.

Luego me suscribí a varios foros de discusión o listas de distribución mantenidos por RedIris que me parecieron las más apropiadas para introducirme en el medio, conocer a mayor número de expertos y conseguir unos medios de difusión más amplios porque una de las mayores dificultades de las encuestas a través de medios digitales, no es tanto el diseño de las mismas ni la adquisición del software necesario, como conseguir listas de correo electrónico.

Las listas de distribución en las que participé fueron DERCOMP (Derecho y Economía de la Competencia con 56 suscriptores), BIB-MED (Documentación en Medicina y Ciencias de la Salud, 425 suscriptores), ECONSALUD (Economía de la Salud, 489 suscriptores), HPE (Historia del Pensamiento Económico, 145 suscriptores) HIST EMPRESA (Historia de la empresa en España, 176 suscriptores), INFO EUROPA (Boletín Informativo sobre la Unión Europea, 2389 suscriptores), DOCUFORUM (Boletín de la Fundación de las Ciencias de la Documentación, 19988 suscriptores), IWETEL (Foro para profesionales de Bibliotecas y Documentación, 5251 suscriptores).

La selección de estas listas se hizo en función de dos criterios: materias afines al tema de trabajo y mayor número de suscriptores. En algunas hubo problemas para enviar la encuesta a la lista de suscriptores porque los administradores pusieron impedimentos para la difusión.

La mayor parte de estos mecanismos no permiten redistribuir la encuesta a sus miembros argumentando que se contraviene la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, a pesar de que se le indique que no se desea la lista de los miembros sino simplemente la redistribución de un mensaje con la petición de colaboración.

En algunos casos, a pesar de la respuesta negativa obtenida, nos enviaron informaciones dignas de agradecer como fue el caso de la Biblioteca del Colegio de Médicos de Madrid, que nos indicó la posibilidad de continuar recabando información en la Asociación Española de Derecho Sanitario.¹³⁴

Tampoco ha habido mucha colaboración por parte de los colegios profesionales al no mostrarse partidarios de enviar la circular a sus colegiados.

He procurado abarcar todo tipo de profesiones pero sobre todo aquellas que tuviesen que ver con la actividad laboral relacionada con las ciencias del Derecho y de la Salud: colegios profesionales, bufetes de abogados, hospitales,... Excluí un apartado específico para magistrados por no tratarse de una profesión liberal y por considerar que su opinión debe estar sometida a la legislación vigente.

¹³⁴ Sita en c/ Velázquez 124, Madrid.

En las destinadas a los usuarios de los servicios intenté, asimismo, recabar datos tanto de personas trabajadoras como de personas sin trabajo, inmigrantes en España e incluso del movimiento de los *indignados*¹³⁵.

Como estudio de caso, se consideró una muestra significativa un número superior a seiscientas contestaciones entre las personas familiarizadas con la competencia y las procedentes de usuarios corrientes sin vinculación alguna, entre la lista selectiva previamente preparada de manera minuciosa con setecientas direcciones.

Se procuró en todo que las encuestas estuvieran dirigidas a gente supuestamente conocedora de la temática propuesta. En esta línea, se dirigieron mensajes de modo selectivo, asimismo, a la mayor parte de los centros españoles universitarios que tuvieran alguna relación con la Economía.

Suprimí preguntas como indicar el lugar de residencia, debido a que muchos encuestados sospechan que ese tipo de localización puede enturbiar el anonimato y porque el interés de la encuesta es de cobertura e interés nacional.

Propósitos generales:

- 1) Evaluar el nivel de información que tienen los representantes de las instituciones, los propios profesionales y los usuarios sobre la normativa europea y española acerca de la defensa de la competencia.

¹³⁵ Movimiento de protesta popular surgido en diversas ciudades españolas el 15 de mayo del 2011 en contra del capitalismo y de la democracia representativa.

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

- 2) Recoger las opiniones favorables o desfavorables de estos tres grupos acerca de la apertura de los mercados sin cortapisas para el desarrollo de la competencia.

Propósitos especializados:

- 1) Conocer la sensibilidad acerca de la libertad de las actividades comerciales por:
 - a. Sexo
 - b. Edad
 - c. Profesión
- 2) Analizar de modo comparativo los conocimientos y opiniones de los profesionales y los de los usuarios.
- 3) Detectar hábitos de comportamiento.
- 4) Marcar pautas para futuras leyes gubernamentales relacionadas con la competitividad económica.

* * * * *

8.2. EL DISEÑO DE LA ENCUESTA

La presentación en la página web anteriormente indicada figuró con la apariencia que figura en la página siguiente:

ENCUESTA ¿LA LIBERALIZACIÓN DE SERVICIOS FOMENTA LA COMPETITIVIDAD?

Se trata de que el encuestado o encuestada manifieste su parecer acerca de si la liberalización de los servicios en las profesiones liberales relacionadas con las ciencias jurídicas y de la salud mejoraría el nivel de competitividad y reduciría gastos para los usuarios. Es parte de la tesis doctoral que está elaborando Inés Martín de Santos, bajo la dirección de D. Luis Perdices de Blas, con el título: La opinión pública sobre la competencia. El sector de servicios profesionales públicos españoles en Derecho y Salud.

1.- Marque lo que corresponda

- ☐ Soy hombre
- ☐ Soy mujer

2.- Mi edad está:

- ☐ Entre 18 y 25 años
- ☐ Entre 26 y 45 años
- ☐ Más de 46 años

3.- En mi profesión:

- ☐ Ocupo un cargo en una asociación o colegio profesional
- ☐ Desempeño una profesión liberal de carácter público
- ☐ Desempeño una profesión liberal de carácter privado
- ☐ Nada de lo anterior. Soy sencillamente un cliente o usuario de servicios

4.- Su actividad está vinculada a:

- ☐ Abogacías del Estado y Letrados
- ☐ Notarías
- ☐ Registros de la Propiedad
- ☐ Medicina
- ☐ Veterinaria
- ☐ Farmacia
- ☐ Si su actividad laboral es distinta de las anteriores, pinche en OTRO y señale cuál:
- ☐ Otro:

5.- ¿Es usted partidario de la liberalización de los servicios profesionales?

- ☐ Sí
- ☐ Sí, con restricciones
- ☐ No
- ☐ Me es indiferente

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

6.- ¿Conoce usted la normativa europea y española en defensa de la competencia?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ A medias

7.- ¿Sabe en qué consiste la ley ómnibus?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ He oído algo

8.- ¿Ha leído alguna obra sobre la competencia?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Si la respuesta es afirmativa pinche en OTRO e indique cuál
- ☐ Otro:

9.- ¿Qué tipo de fuente de información utiliza principalmente? Puede señalar más de una opción

- ☐ Conversaciones con las personas
- ☐ Internet
- ☐ Legislación
- ☐ Libros y artículos especializados
- ☐ Prensa u otras obras de divulgación
- ☐ Televisión

10.- Las diversas normativas sobre la competencia le afectan

- ☐ Positivamente
- ☐ Negativamente
- ☐ No me afectan
- ☐ No sé si me afectan

11.- ¿Cree que la normativa de la Unión Europea y de España sobre la competencia es beneficiosa para la sociedad?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No sabe

12.- ¿Conoce usted la Comisión Nacional de la Competencia?

- ☐ Sí
- ☐ No

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

13.- ¿Ha recurrido en alguna ocasión a un organismo de Defensa del Consumidor?

☐ Sí

☐ No

14.- ¿Cree que la libre competencia contribuye a la prosperidad económica?

☐ Sí

☐ No

☐ No sabe

15.- MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

☐ Si desea añadir cualquier sugerencia pinche en OTRO y escríbala

☐ Otro:

Acabada la toma de muestras, los resultados se grabaron en un fichero con el formato de la hoja de cálculo Excel del paquete informático Microsoft Office 2010 y posteriormente se pasaron al programa estadístico SPSS Versión 18.0.0 al considerar que también ofrecía la versatilidad necesaria para las tabulaciones y el análisis de los resultados. Finalmente se exportaron al procesador de textos Word en tablas, y también en figuras o cuadros para facilitar el nivel de legibilidad.

* * * * *

8.3. PRETENSIONES DE LA ENCUESTA

1.- En términos de valores absolutos y tomando como referencia el hecho de que la encuesta se ha enviado tanto a hombres como a mujeres, se determina:

- 1.1. Cuántos hombres han respondido.
- 1.2. Cuántas mujeres han respondido.
- 1.3. Cuántas han sido las contestaciones de hombres entre 18 y 25 años.
- 1.4. Cuántas han sido las contestaciones de mujeres entre 18 y 25 años.
- 1.5. Cuántas han sido las contestaciones de hombres entre 26 y 45 años.
- 1.6. Cuántas han sido las contestaciones de mujeres entre 26 y 45 años.
- 1.7. Cuántas han sido las contestaciones de hombres de 46 años o más.
- 1.8. Cuántas han sido las contestaciones de mujeres de 46 años o más.

Con esta encuesta se ha procurado responder a las cuestiones siguientes:

2. Qué grupo ha sido el más numeroso o participativo en la participación de la misma.

2.1. Cuántas de las personas entrevistadas ocupan un cargo en una asociación o colegio profesional.

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

- 2.2. Cuántas personas desempeñan una profesión liberal de carácter público.
- 2.3. Cuántas personas desempeñan una profesión liberal de carácter privado.
- 2.4. Cuántas personas son usuarias de servicios.
- 2.5. Cuántos profesionales pertenecen al cuerpo de abogados y letrados del Estado.
- 2.6. Cuántos al cuerpo de notarios.
- 2.7. Cuántos al cuerpo de registradores de la propiedad.
- 2.8. Cuántos son médicos.
- 2.9. Cuántos son veterinarios.
- 2.10. Cuántos son farmacéuticos.
- 2.11. Qué otras profesiones han sido las más participativas (variable contada manualmente).

La opinión de la gente por grupos

Son partidarios de la libertad de los servicios profesionales

- ☐ Sí.
- ☐ Sí, con restricciones.
- ☐ No.
- ☐ Les es indiferente.

Conocen las normas europeas y españolas en defensa de la competencia

- ☐ Sí.
- ☐ No.
- ☐ A medias.

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Saben en qué consiste la Ley Ómnibus

- ☐ Sí.
- ☐ No.
- ☐ Algo han oído.

Han leído alguna obra sobre competencia

- ☐ Sí.
- ☐ Indican cuál.
- ☐ No.

Preferentemente usan las fuentes de información siguientes:

- ☐ Conversaciones con las personas.
- ☐ Internet.
- ☐ Legislación.
- ☐ Libros y artículos especializados.
- ☐ Prensa u otras obras de divulgación.
- ☐ Televisión.

Las diversas normas sobre la competencia les afectan

- ☐ Positivamente.
- ☐ Negativamente.
- ☐ No les afectan.
- ☐ No saben si les afectan.

Creen que la normativa de la Unión Europea y de España sobre competencia es beneficiosa para la sociedad

- ☐ Sí.
- ☐ No.
- ☐ No saben.

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Conocen la Comisión Nacional de la Competencia

☐ Sí.

☐ No.

Han recurrido en alguna ocasión a un organismo de defensa del consumidor

☐ Sí.

☐ No.

Opinan que la libre competencia contribuye a la prosperidad económica

☐ Sí.

☐ No.

☐ No saben.

8.4. LOS PARTICIPANTES

Al realizarse todas las encuestas a través de Internet, como se ha dicho unas páginas atrás, se da por sentado que los encuestados cuentan con un nivel de alfabetización informacional aceptable, y que el hecho de tener acceso a la Red, de estar anunciados en la misma y de participar en foros de discusión son indicios suficientes para considerar que su formación cultural está a la altura de las circunstancias, les permite tener criterios propios dignos de ser tenidos muy en cuenta y estimo que aporta mayor grado de representatividad.

De este modo la muestra contiene toda la información deseada para tener la posibilidad de extraerla y extrapolar posteriormente los datos al estudio de caso, esto se logra con una buena selección de la muestra y un trabajo muy cuidadoso a la hora de la recogida de datos.

Descartadas las encuestas vacías de contenido y las posibles duplicaciones¹³⁶, se admitieron 614 respuestas válidas.

En cuanto a la representatividad de la muestra hay que señalar que para un nivel de confianza del 95%, el error estándar es del 4%.

La explicación a este porcentaje de error para las preguntas es la obtenida de la fórmula siguiente:

¹³⁶ Se descartaron, por ejemplo, las respuestas que llegaran a intervalos de tiempo menores de dos minutos, en razón de que podrían ser cumplimentaciones procedentes de la misma persona que consciente o inconscientemente hubiera enviado la encuesta de manera repetida.

$$\text{Error} = \frac{\overline{(1-\alpha)/2}}{N} \cdot 2$$

Ahora, introduciendo los datos:

$$\text{Error} = \left(\sqrt{\frac{0.25}{614}} \right) \cdot 2 = 0.0401 \simeq 4\%$$

Sería en realidad el intervalo de error pesimista, el más grande posible.

* * * * *

A continuación se presentan las tablas con sus respectivas gráficas de los encuestados con los datos de las variables básicas de identificación como son el sexo, la edad y la profesión.

SEXO

Desde el punto de vista del género o sexo, se obtuvieron más respuestas de hombres (57,2%) que de mujeres (42,8%). Esto ha podido deberse a la todavía insuficiente inserción laboral de la mujer en cargos de dirección y responsabilidad. No obstante hay que tener en cuenta que el cuestionario se envió tanto a personas relacionadas con profesiones tantas veces señaladas como a un público general. La diferencia, a

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

pesar de todo no nos parece alarmante ni exagerada y se puede considerar muy equilibrada. La tabla y el gráfico siguientes muestran el grado de participación:

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Soy hombre	351	57,2	57,2	57,2
Soy mujer	263	42,8	42,8	100,0
Total	614	100,0	100,0	

Tabla 1: PARTICIPACIÓN POR DIFERENCIAS DE SEXO

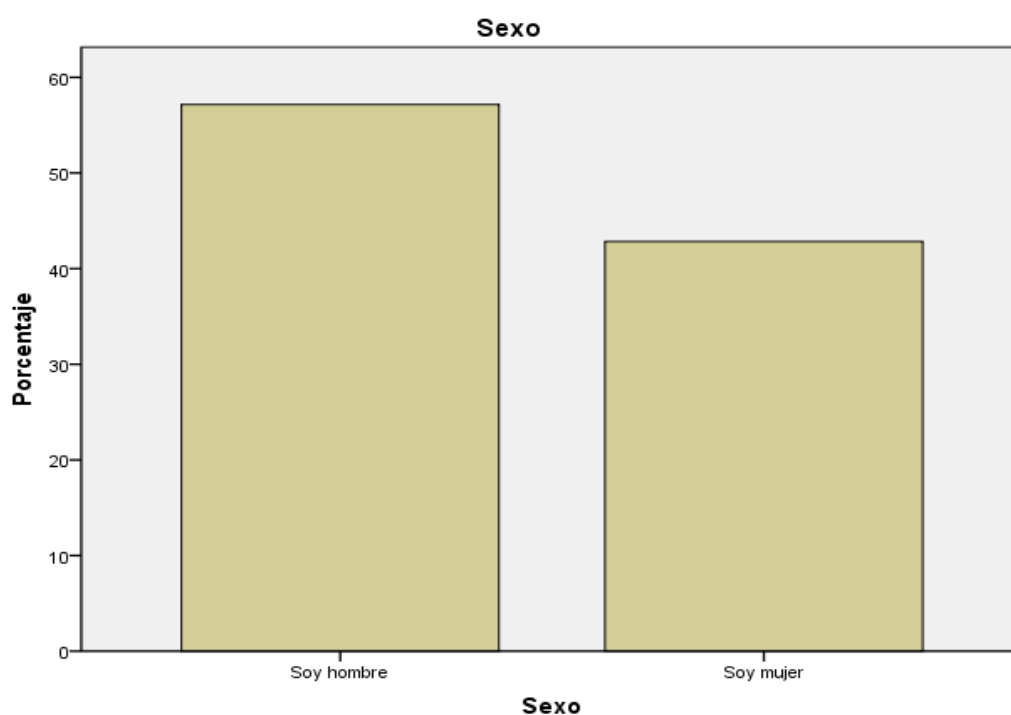


Figura 1: PARTICIPACIÓN POR DIFERENCIAS DE SEXO

EDAD

Por edad el grupo más participativo fue el de las personas comprendidas entre los 26 y los 45 años. Probablemente esto sea debido a que se trata de una edad correspondiente al período laboral más fértil de la población y, por tanto, más interesado por la libertad de los servicios profesionales tratados.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Entre 18 y 25 años	69	11,2	11,2	11,2
Entre 26 y 45 años	292	47,6	47,6	58,8
Más de 46 años	253	41,2	41,2	100,0
Total	614	100,0	100,0	

Tabla 2: PARTICIPACIÓN EN FUNCIÓN DE LA EDAD

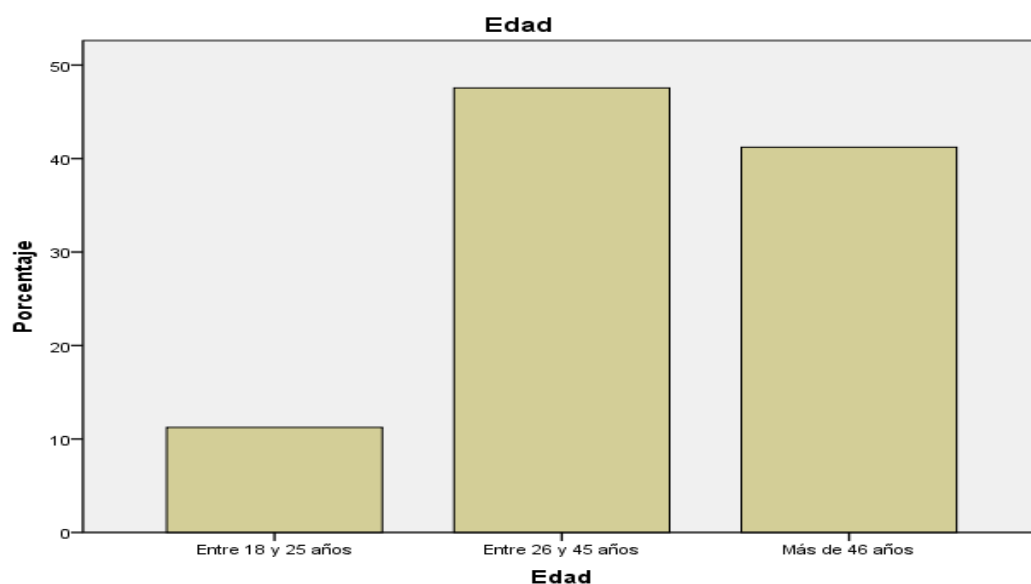


Figura 2: PARTICIPACIÓN EN FUNCIÓN DE LA EDAD

PROFESIÓN

Como se puede apreciar en la tabla y cuadro siguientes, el mayor porcentaje de participación, un 40,9 %, está constituido por un colectivo ajeno a las profesiones de abogados y sanitarios, e incluso por personas que se encuentran sin trabajo como minuciosamente se ha podido constatar en las encuestas revisándolas una por una.

Sin embargo, si juntamos los porcentajes correspondientes a personas vinculadas de alguna manera con los profesionales del Derecho y de la Salud (58,8%), estos superan en número de participantes a los usuarios externos.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Nada de lo anterior. Soy sencillamente un cliente o usuario de servicios	251	40,9	40,9	40,9
Desempeño una profesión liberal de carácter público	167	27,2	27,2	68,1
Desempeño una profesión liberal de carácter privado	117	19,1	19,1	87,1
Ocupo un cargo en una asociación o colegio profesional	77	12,5	12,5	99,7
No contesta	2	0,3	0,3	100,0
Total	614	100,0	100,0	

Tabla 3: PARTICIPACIÓN POR PROFESIONES

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

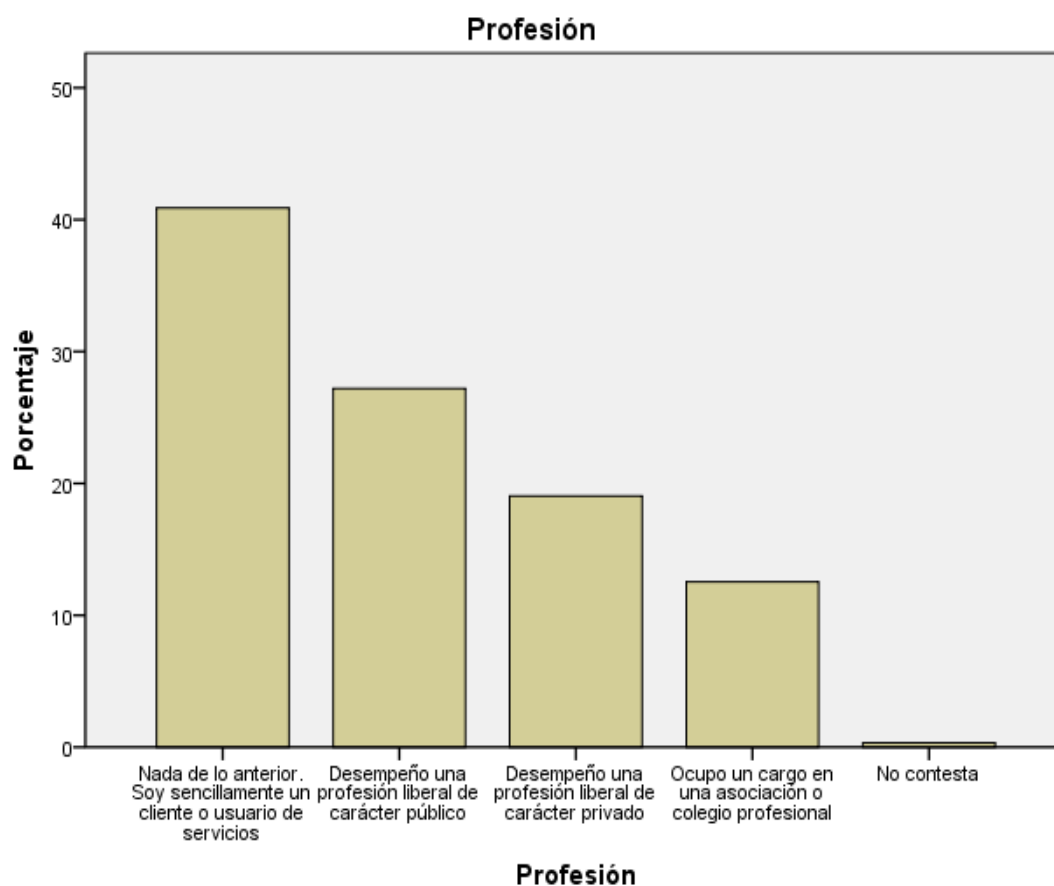


Figura 3: PARTICIPACIÓN POR PROFESIONES

* * * * *

8.5. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS POR LOS ENCUESTADOS

La pregunta número nueve, con la que se corresponde este epígrafe es de respuesta múltiple y no excluyente, de modo que los encuestados

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

pueden señalar varias alternativas, aunque sin orden de prelación. No obstante, con el fin de simplificar la prevalencia de unos u otros medios, se sumaron todas las casillas señaladas y se hicieron posteriormente las medias.

Al tratarse de una encuesta realizada principalmente a través de Internet, es evidente que el mayor porcentaje de encuestadas y encuestados, el 25,27%, utilice como medio fundamental de información la red.

Le siguen por orden descendente:

Prensa: 20,42%

Libros: 15,62%

Conversaciones con las personas: 15,44%

Televisión: 14,44%

Legislación: 8,91%

Las tablas y los cuadros que figuran en la página siguiente muestran estos resultados.

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

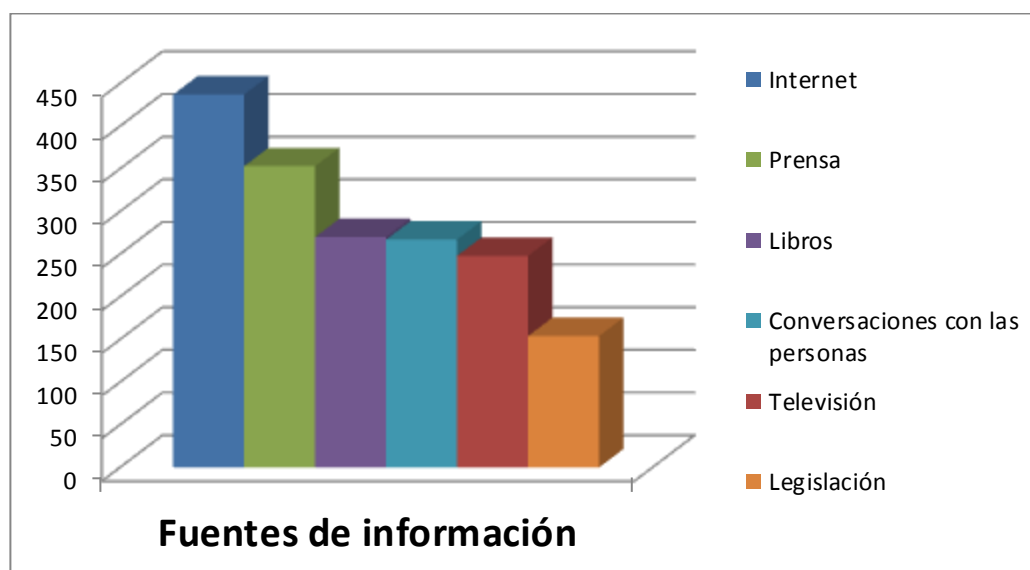


Tabla 4: PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS POR LOS ENCUESTADOS

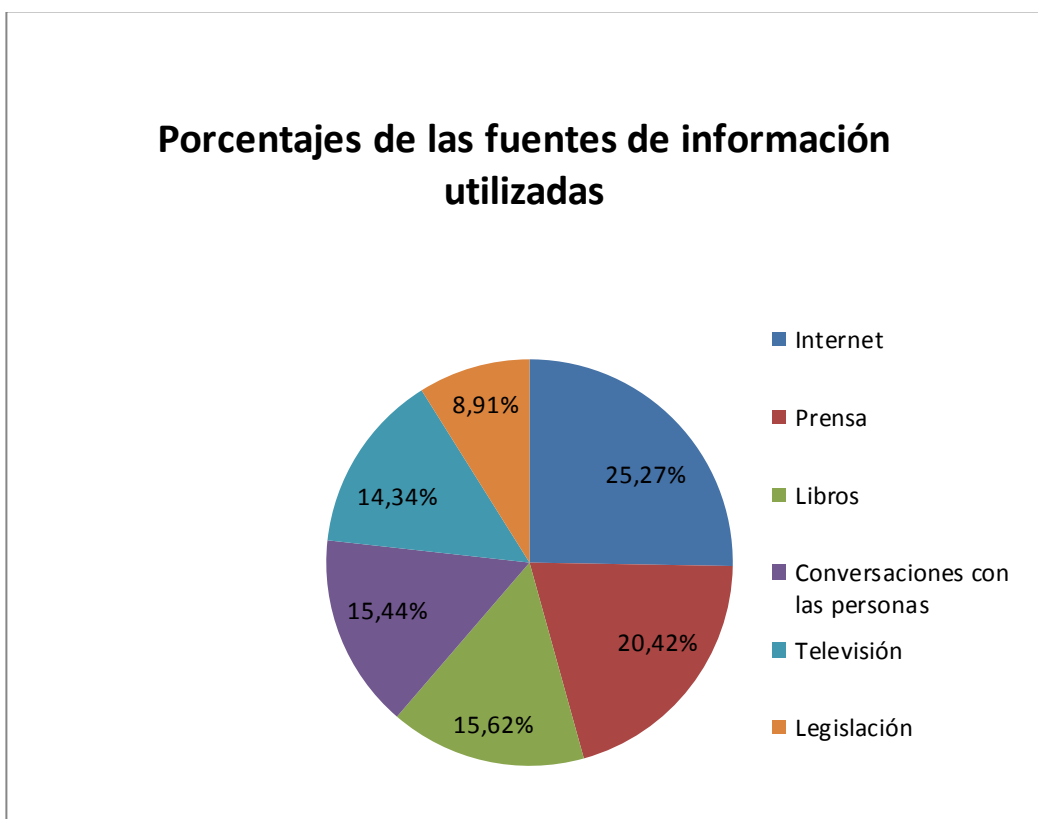


Figura 4: PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS POR LOS ENCUESTADOS

* * * * *

8.6. LA OPINIÓN GENERAL DE LOS ENCUESTADOS¹³⁷

Frecuencias

Descartadas las respuestas vacías e incompletas, las personas participantes han respondido a todas las preguntas de la encuesta.

Si tuviéramos que valorar *grosso modo* con actitud maniquea las preferencias de los encuestados por la independencia de los servicios profesionales o por el intervencionismo de los Colegios, la mayoría se ha decantado por la primera opción.

De modo general, se observan los resultados siguientes:

A) PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES

La mayor parte de los encuestados (41,4%) se muestra partidaria de la liberalización de los servicios profesionales con restricciones.

¹³⁷ Los cruces de variables de manera pormenorizada se pueden consultar en un archivo aparte, anejo a esta edición, que contiene aproximadamente un centenar de tablas de contingencia, y que está a disposición de cualquier persona que lo pida.

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Si a ella unimos los defensores de la liberalización total (28,8%), se puede decir que hay en la población una predisposición (al menos en las fechas en que la encuesta se realizó) a las medidas liberales de la economía.

El 16,8% no es partidario de la liberalización, al 10,4% le es indiferente y el 2,6% no contesta.

Tabla de frecuencias

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Me es indiferente	64	10,4	10,4	10,4
No	103	16,8	16,8	27,2
No contesta	16	2,6	2,6	29,8
Sí	177	28,8	28,8	58,6
Sí, con restricciones	254	41,4	41,4	100,0
Total	614	100,0	100,0	

Tabla 5: PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES

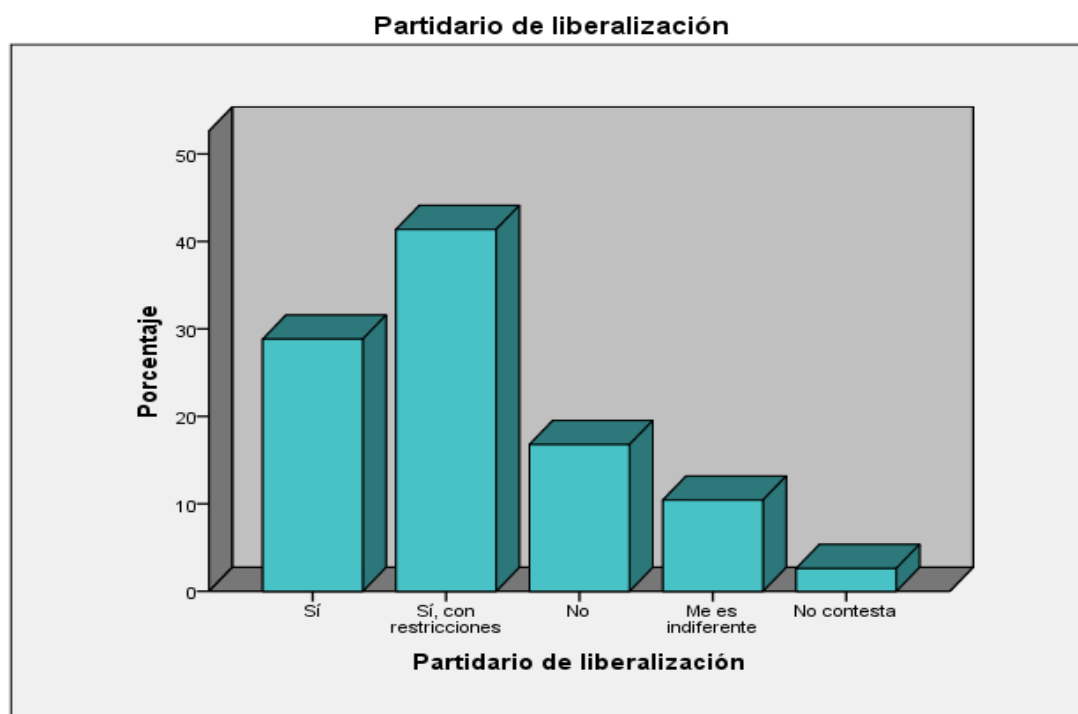


Figura 5: PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES

* * * * *

B) CONOCEN LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Casi la mitad de los encuestados no la conoce (47,9%). La conoce a medias el 29 % (hay que suponer que conocerla a medias quiere decir que algo han oído sobre ella, principalmente a través de los medios de comunicación de masas). Casi una cuarta parte afirma que la conoce y un porcentaje imperceptible no responde.

Si unimos a los conocedores de las normativas sobre competencia (21,7%) con los que han oído decir algo sobre ella (29%), resulta que

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

casi la mitad de la población parece tener suficientes elementos de juicio para poder ejercer una crítica acertada.

Hay que advertir alguna reticencia sobre la sinceridad expresada en esta cuestión porque más adelante cuando se pregunta a los encuestados de qué lecturas se han servido para su información, son pocos los que citan fuentes concretas.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
A medias	178	29,0	29,0	29,0
No	294	47,9	47,9	76,9
No contesta	9	1,5	1,5	78,3
Sí	133	21,7	21,7	100,0
Total	614	100,0	100,0	

Tabla 6: CONOCEN LA NORMATIVA SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

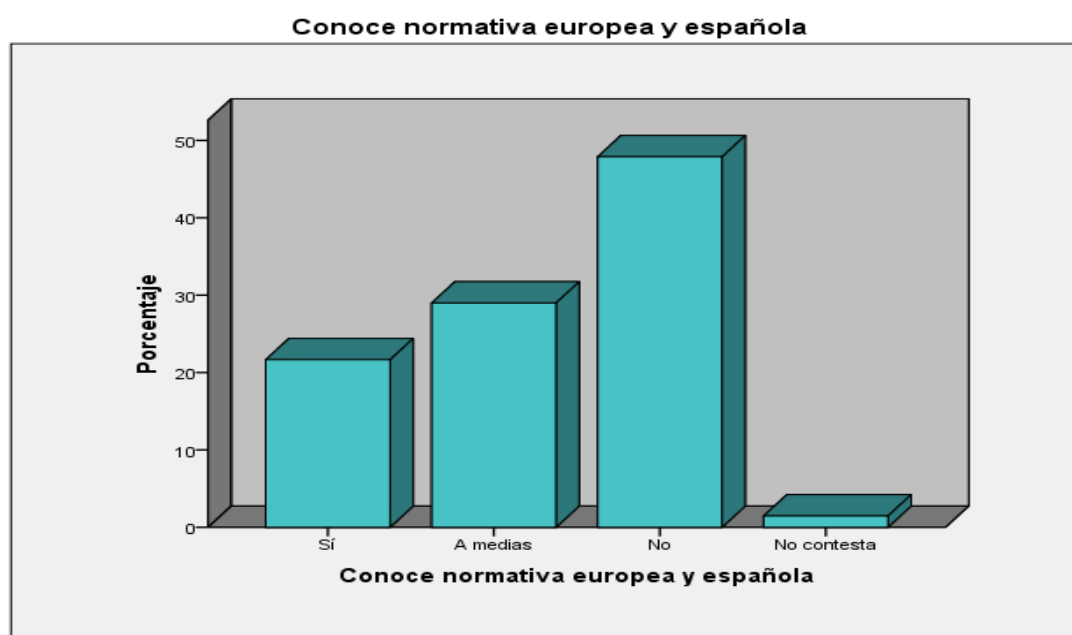


Figura 6: CONOCEN LA NORMATIVA SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

* * * * *

C) CONOCEN LA LEY ÓMNIBUS

En esta ocasión los resultados son similares a los de la pregunta anterior. Se substituyó la fórmula “conocer a medias” por “algo he oído”. Las respuestas parecen consecuentes con la actitud mostrada por los encuestados en la pregunta anterior.

No obstante, hay que advertir que si en la pregunta anterior el 21,7% se declara conocedor de las normativas oficiales sobre la competencia, no parece congruente que en esta pregunta el porcentaje se eleve al 24,6% tratándose de una parte del mismo contenido. Hay que suponer, por consiguiente, una pequeña intencionalidad de engaño (motivada posiblemente por no querer reconocer la ignorancia personal) y un grado superior de desconocimiento sobre esta materia.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
He oído algo	112	18,2	18,2	18,2
No	336	54,7	54,7	73,0
No contesta	15	2,4	2,4	75,4
Sí	151	24,6	24,6	100,0
Total	614	100,0	100,0	

Tabla 7: CONOCEN LA LEY ÓMNIBUS

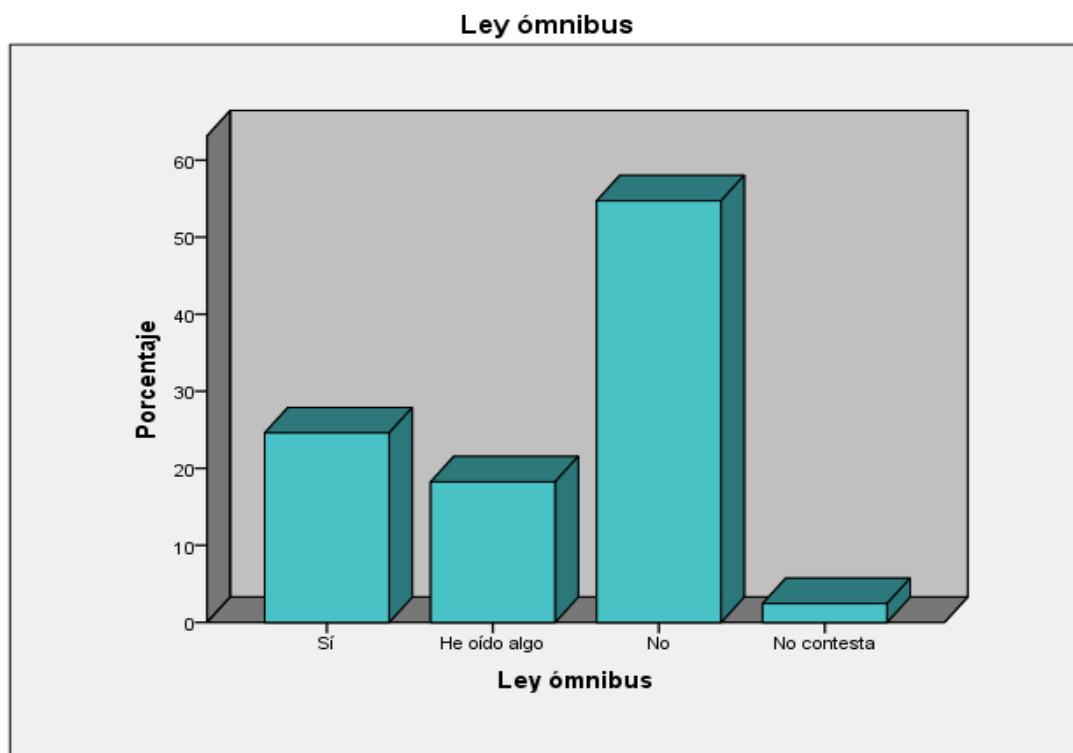


Figura 7: CONOCEN LA LEY ÓMNIBUS

D) HAN LEÍDO ALGUNA OBRA SOBRE LA COMPETENCIA

Sin una desviación especialmente significativa las respuestas entroncan con la tendencia anterior, es decir, la falta de información sobre la competencia es alta. Pero, además, en este caso, es superior (71%). La razón se debe muy probablemente a que en general la gente utiliza preferentemente como fuente de información los medios audiovisuales antes que la lectura en soporte papel.

Con todo, el 26,7%, que asegura haber leído algo sobre competencia, sin embargo no indica qué documento en concreto ha utilizado, por lo que se puede sospechar que la escasez de lectura sobre la competencia es aún mayor.

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	436	71,0	71,0	71,0
No contesta	12	2,0	2,0	73,0
Sí	166	27,0	27,0	100,0
Total	614	100,0	100,0	

Tabla 8: HAN LEÍDO OBRAS SOBRE COMPETENCIA

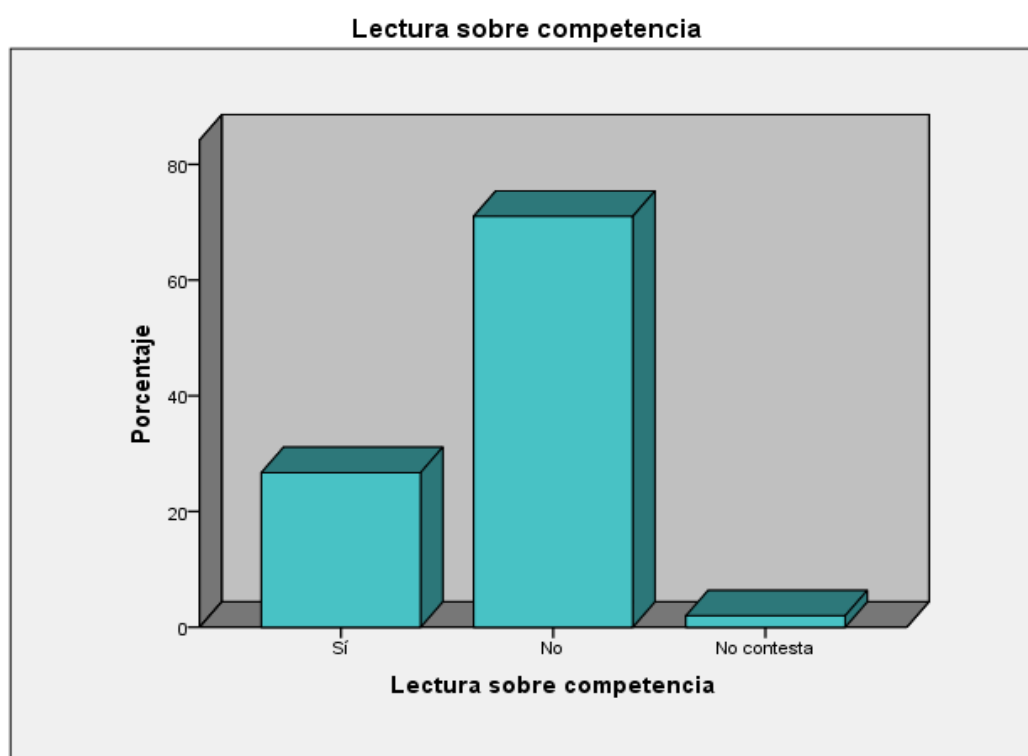


Figura 8: HAN LEÍDO OBRAS SOBRE COMPETENCIA

* * * * *

E) LAS NORMAS SOBRE LA COMPETENCIA LES AFECTAN DE MODO POSITIVO O NEGATIVO

En este apartado no se observa una tendencia clara ni mayoritaria sino más bien dispersa entre quienes no saben si las normas en defensa de la competencia les pueden afectar (37,6%), quienes piensan que les afectan de modo positivo (24,3%), quienes piensan que no les afectan (20,8%) y quienes piensan que les afectan de modo negativo (14%).

En cualquier caso se produce un ligero sentimiento dominante de favor más que de animadversión hacia la competencia.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Negativamente	86	14,0	14,0	14,0
No contesta	20	3,3	3,3	17,3
No me afectan	128	20,8	20,8	38,1
No sé si me afectan	231	37,6	37,6	75,7
Positivamente	149	24,3	24,3	100,0
Total	614	100,0	100,0	

Tabla 9: LAS NORMAS SOBRE LA COMPETENCIA LES AFECTAN DE MODO POSITIVO O NEGATIVO

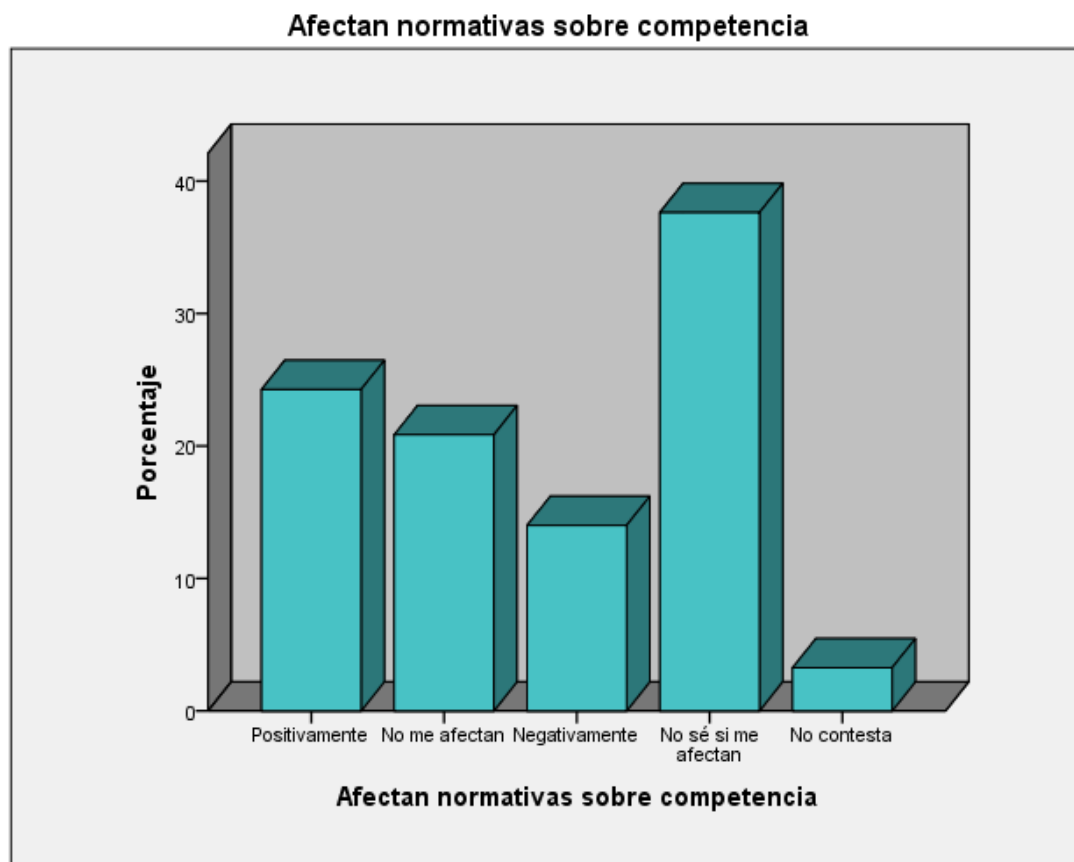


Figura 9: LAS NORMAS SOBRE LA COMPETENCIA LES AFECTAN DE MODO POSITIVO O NEGATIVO

* * * * *

F) CONSIDERAN LAS NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA BENEFICIOSAS

En una línea más o menos parecida, pero acotando sólo el hipotético carácter benéfico de la competencia para la sociedad (no para el individuo como en el caso anterior) los entrevistados han mantenido una actitud similar.

El 45,6% desconoce si las normas para la activación de la competencia son buenas o malas. El 33,7% las considera beneficiosas, el 18,2%

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

perjudiciales. Y, como en la mayoría de las preguntas, algo menos del 3% no contesta.

En definitiva, hay una ligera propensión a considerar de modo favorable la competencia.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	112	18,2	18,2	18,2
No contesta	15	2,4	2,4	20,7
No sabe	280	45,6	45,6	66,3
Sí	207	33,7	33,7	100,0
Total	614	100,0	100,0	

Tabla 10: CONSIDERAN BENEFICIOSAS LAS NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA

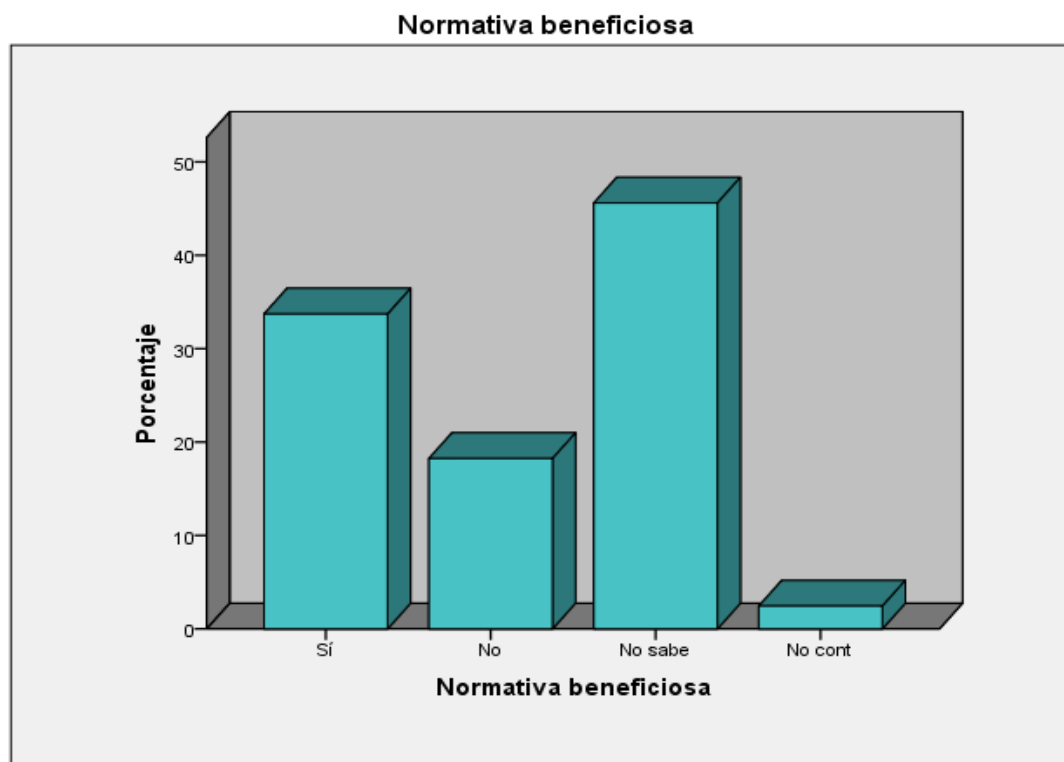


Figura 10: CONSIDERAN BENEFICIOS LAS NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA

* * * * *

G) CONOCEN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

En este caso se trata de otra prueba de control informativo. Son más las personas que desconocen la CNC (59,8%) que quienes tienen conocimiento de su existencia (40,2%). No obstante, el número de informados parece algo más que satisfactorio.

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	367	59,8	59,8	59,8
Sí	247	40,2	40,2	100,0
Total	614	100,0	100,0	

Tabla 11: CONOCEN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

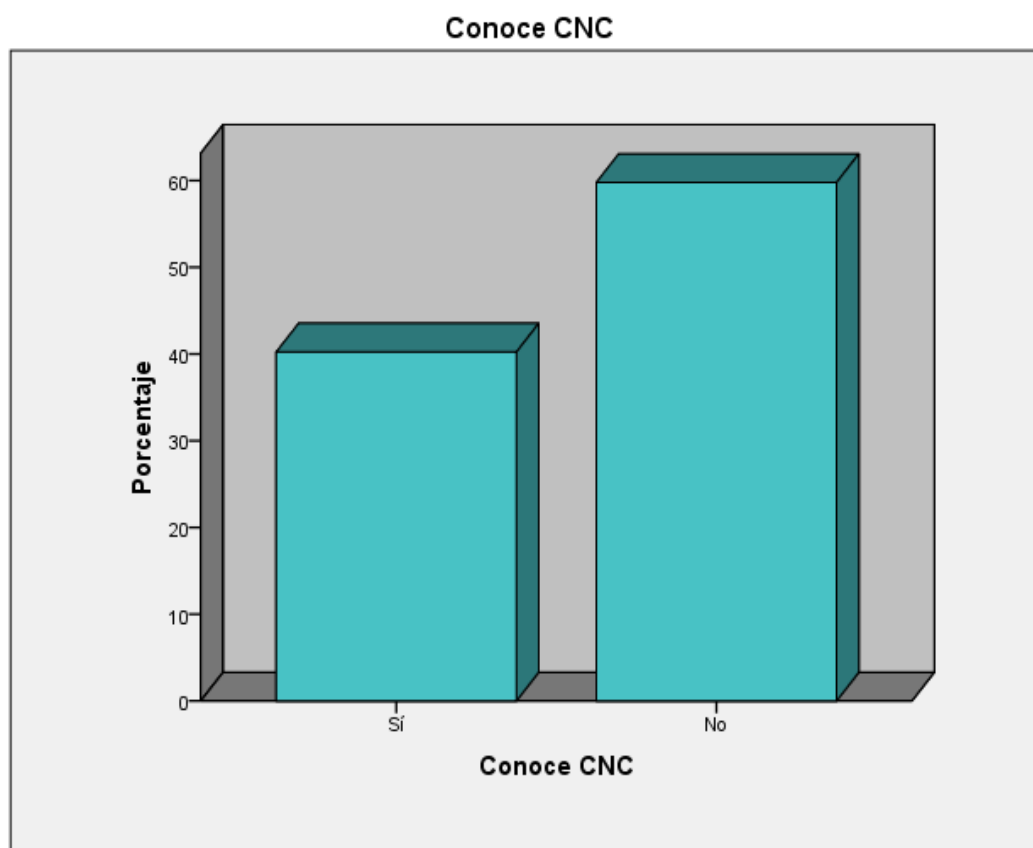


Figura 11: CONOCEN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

* * * * *

H) HAN RECURRIDO EN ALGUNA OCASIÓN A UN ORGANISMO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

En más de una ocasión se insiste en este trabajo de investigación que la defensa de la libre competencia no tiene mucho sentido y puede quedar en agua de borrajas si el Estado no cuenta con unos organismos de control que velen por las prácticas honestas.

Entre estos organismos han cobrado especial interés en las últimas décadas las entidades públicas y privadas en defensa de los consumidores.

Las noticias de los medios de comunicación de masas han anunciado repetidas veces la baja utilización de estos servicios en España frente a otros países desarrollados. Esta afirmación necesitaría un análisis comparativo que se aparta de los objetivos de este trabajo, pero viendo los resultados de la encuesta se puede decir que casi la mitad de los españoles (45,3%) ha recurrido en alguna ocasión a estos servicios, de modo que el índice de participación no nos parece tan escaso como a menudo se dice.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	336	54,7	54,7	54,7
Sí	278	45,3	45,3	100,0
Total	614	100,0	100,0	

Tabla 12: HAN RECURRIDO EN ALGUNA OCASIÓN A ALGÚN ORGANISMO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

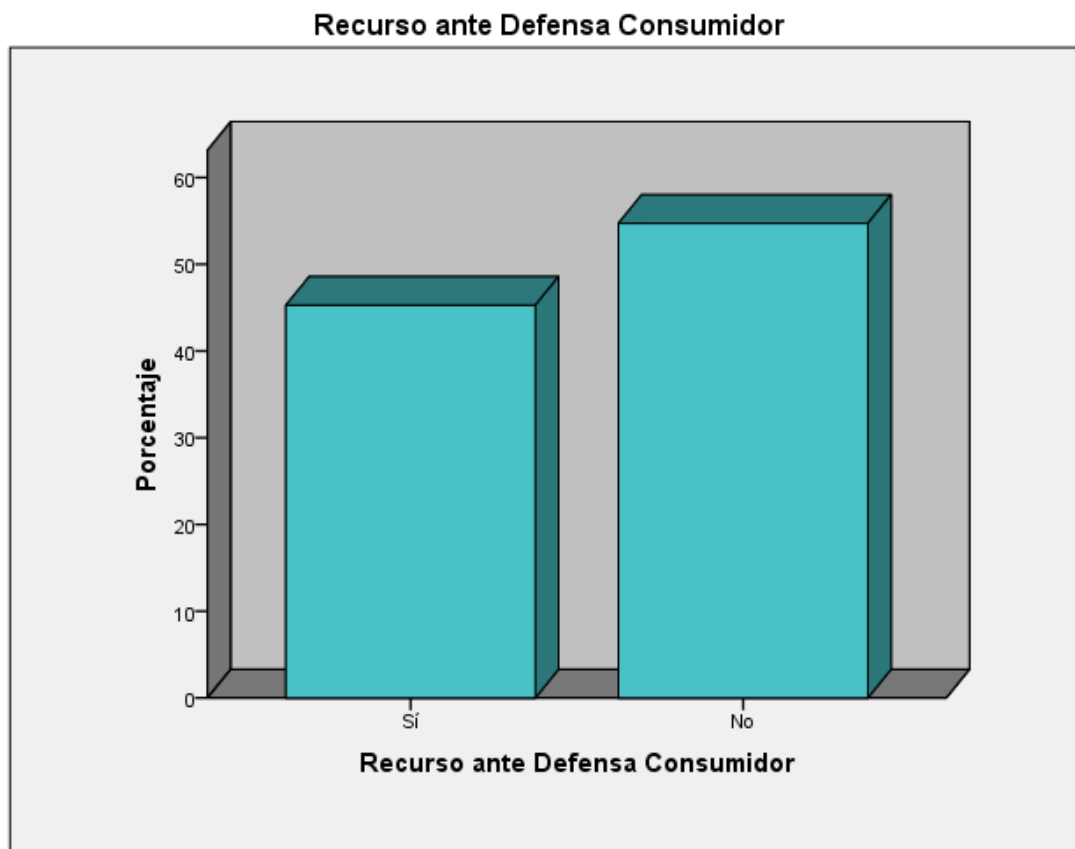


Figura 12: HAN RECURRIDO EN ALGUNA OCASIÓN A ALGÚN ORGANISMO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

* * * * *

I) PIENSAN QUE LA LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Finalmente se hizo una pregunta a modo de recapitulación para medir la sensibilidad de la población acerca de los beneficios económicos que implicarían las medidas para el desarrollo de la libre competencia.

La gran mayoría se mostró partidaria de las mismas (59,1%) frente a quienes no sabían (22,3%) y quienes opinaron lo contrario (16,8%),

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	103	16,8	16,8	16,8
No contesta	11	1,8	1,8	18,6
No sabe	137	22,3	22,3	40,9
Sí	363	59,1	59,1	100,0
Total	614	100,0	100,0	

Tabla 13: PIENSAN QUE LA LIBRE COMPETENCIA CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

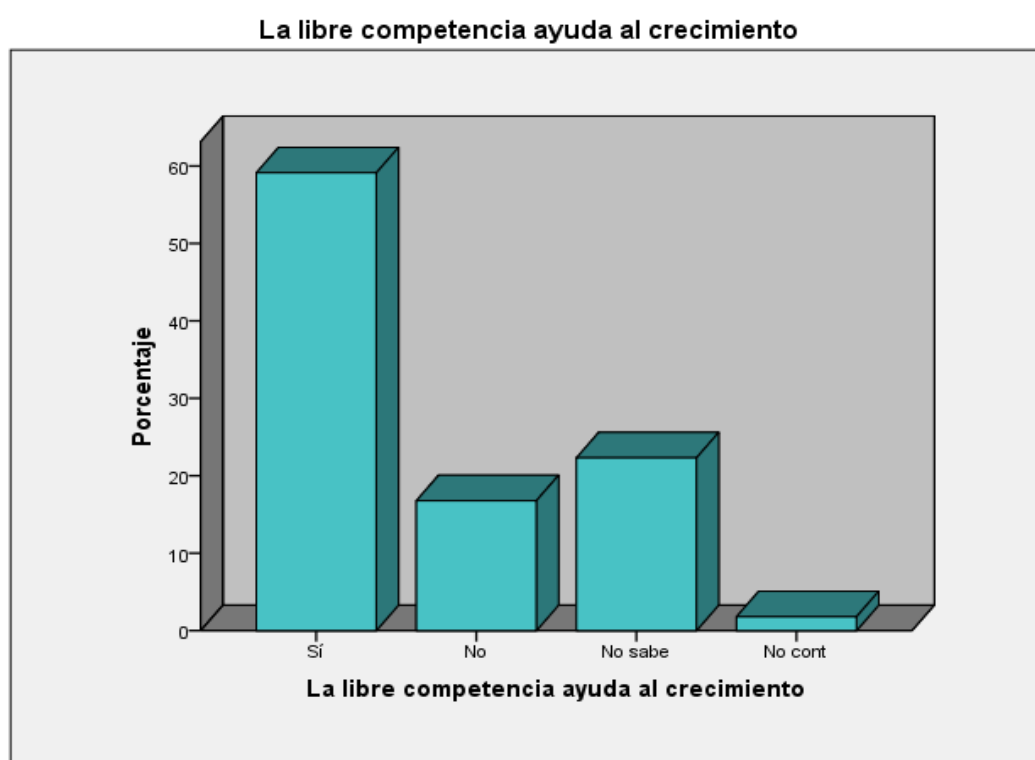


Figura 13: PIENSAN QUE LA LIBRE COMPETENCIA CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

* * * * *

8.7. LA OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS POR GRUPOS PROFESIONALES

8.7.1. ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS

En su mayor parte se manifiestan partidarios de la liberalización (32,6%) y de la liberalización con restricciones (53,5%). Tan solo un 11,6% no la desea y al 2,3% le es indiferente.

La mayoría se declara conocedora de las normativas española y europea sobre la competencia (69,8%) y está al tanto de la *Ley Ómnibus* (83,7%).

Son más los que han leído alguna obra sobre competencia (58,1%) que quienes no han visto nada (41,9%).

El 44,2% cree que las normas en favor de la competencia les afectan de manera positiva frente al 11,6% que las considera negativas para sus intereses. El resto de porcentajes se reparte entre quienes no contestan, quienes consideran que esas normas no les afectan y quienes no saben si les afectan.

En una línea parecida y consecuente con la pregunta anterior, el 58,1% estima beneficiosas las normas sobre la libre competencia frente al 25,6 que las considera perjudiciales. El resto no sabe si son beneficiosas o dañinas.

Los encuestados de este sector se muestran muy participativos en lo concerniente a la protección y garantía del consumo. Más de la mitad

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

han recurrido en alguna ocasión a un organismo de defensa del consumidor.

Y finalmente también la gran mayoría opina que la libre competencia ayuda al crecimiento económico.

Si evaluamos globalmente la opinión general de este sector hacia la liberalización de los servicios profesionales, nos aparece una tendencia manifiestamente favorable.

Las tablas y gráficos de barras correspondientes a estas apreciaciones son los que figuran en la página siguiente:

Partidarios de liberalización

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Me es indiferente	1	2,3	2,3	2,3
No	5	11,6	11,6	14,0
Sí	14	32,6	32,6	46,5
Sí, con restricciones	23	53,5	53,5	100,0
Total	43	100,0	100,0	

Tabla 14: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. PARTIDARIOS DE LA LIBERACIÓN

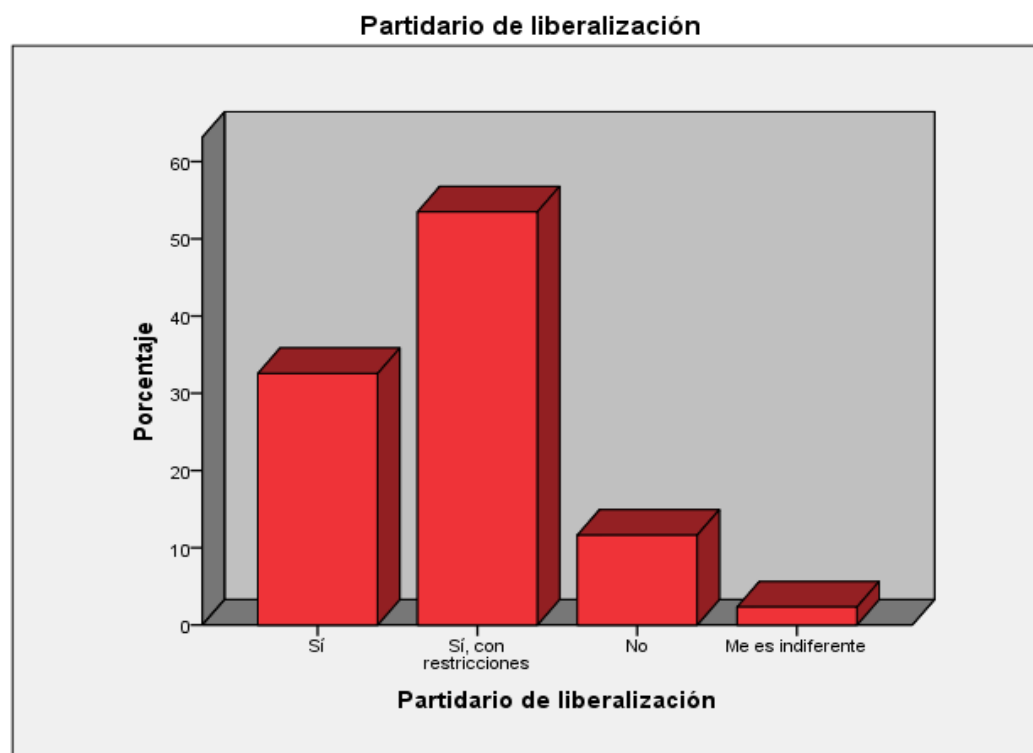


Figura 14: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. PARTIDARIOS DE LA LIBERACIÓN

CONOCEN LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
A medias	9	20,9	20,9	20,9
No	4	9,3	9,3	30,2
Sí	30	69,8	69,8	100,0
Total	43	100,0	100,0	

Tabla 15: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. CONOCEN LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA SOBRE LA COMPETENCIA

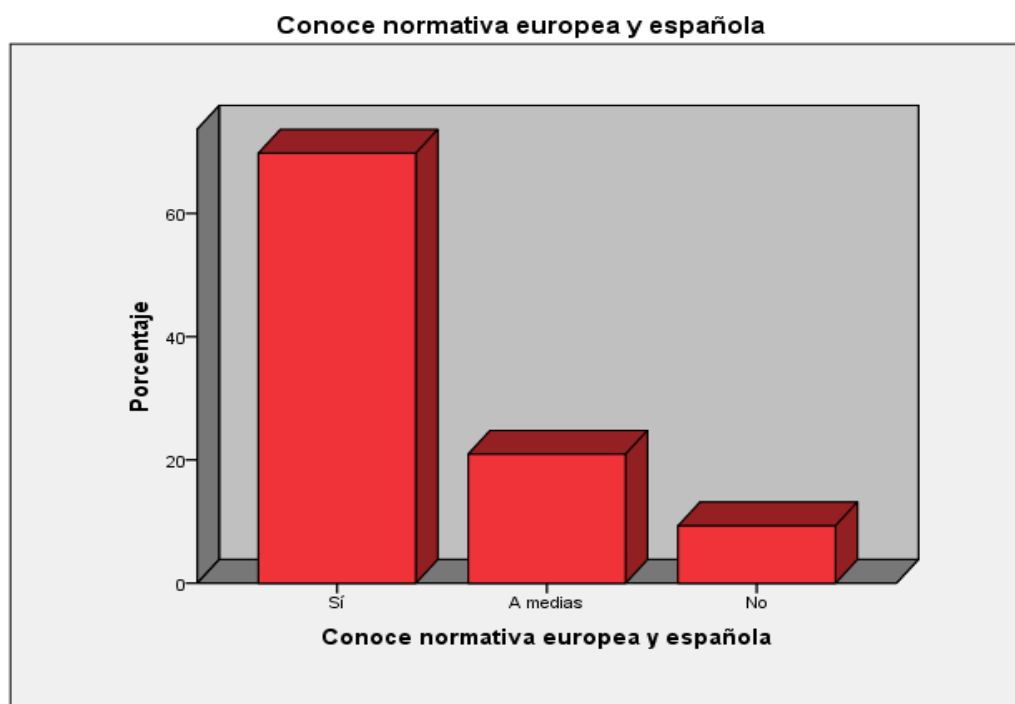
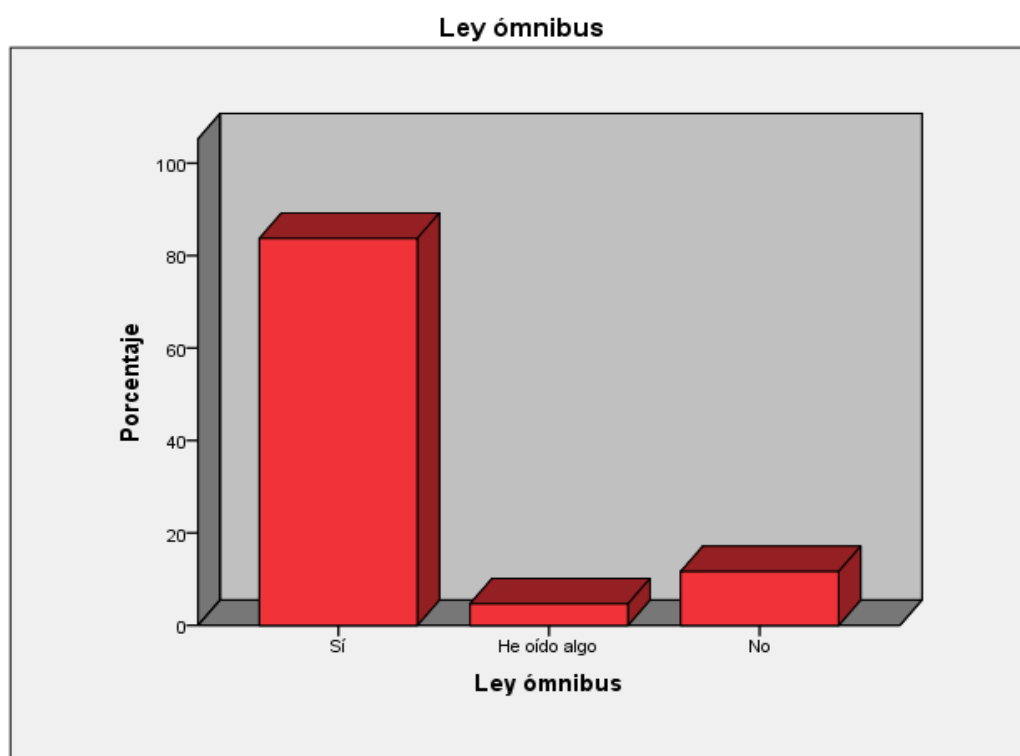


Figura 15: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. CONOCEN LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA SOBRE LA COMPETENCIA

LEY ÓMNIBUS

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
He oído algo	2	4,7	4,7	4,7
No	5	11,6	11,6	16,3
Sí	36	83,7	83,7	100,0
Total	43	100,0	100,0	

Tabla 16: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. CONOCEN LA LEY ÓMNIBUS**Figura 16:** ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. CONOCEN LA LEY ÓMNIBUS

HAN LEÍDO ALGUNA OBRA SOBRE LA COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	18	41,9	41,9	41,9
Sí	25	58,1	58,1	100,0
Total	43	100,0	100,0	

Tabla 17: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. LECTURA DE OBRAS SOBRE LA COMPETENCIA

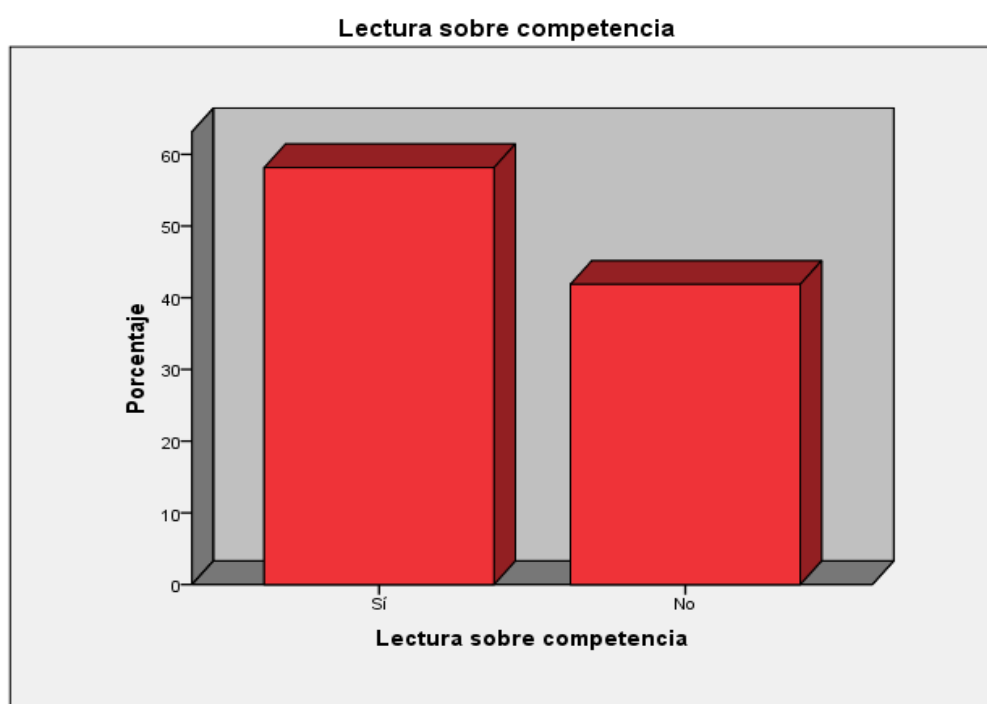


Figura 17: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. LECTURA DE OBRAS SOBRE LA COMPETENCIA

LAS NORMAS SOBRE LA COMPETENCIA LES AFECTAN

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Negativamente	5	11,6	11,6	11,6
No contesta	1	2,3	2,3	14,0
No me afectan	8	18,6	18,6	32,6
No sé si me afectan	10	23,3	23,3	55,8
Positivamente	19	44,2	44,2	100,0
Total	43	100,0	100,0	

Tabla 18: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. LES AFECTAN LAS NORMAS SOBRE LA COMPETENCIA

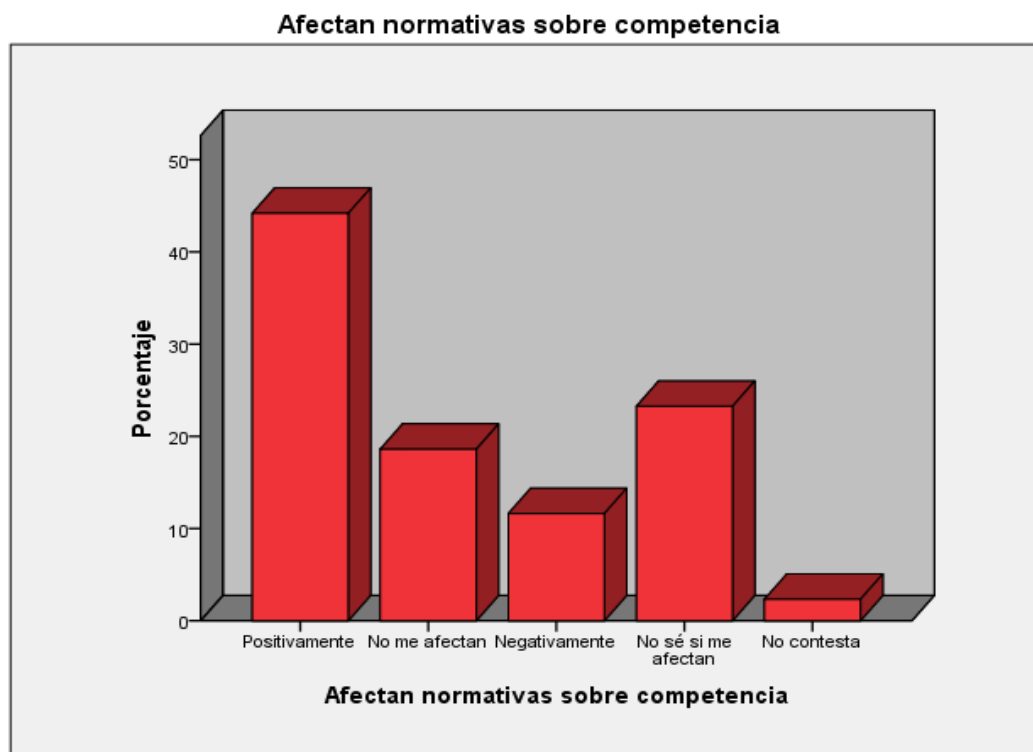


Figura 18: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. LES AFECTAN LAS NORMAS SOBRE LA COMPETENCIA

CONSIDERAN BENEFICIOSAS LAS NORMAS SOBRE LA COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	11	25,6	25,6	25,6
No sabe	7	16,3	16,3	41,9
Sí	25	58,1	58,1	100,0
Total	43	100,0	100,0	

Tabla 19: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. CONSIDERAN BENEFICIOSAS LAS NORMAS SOBRE LA COMPETENCIA

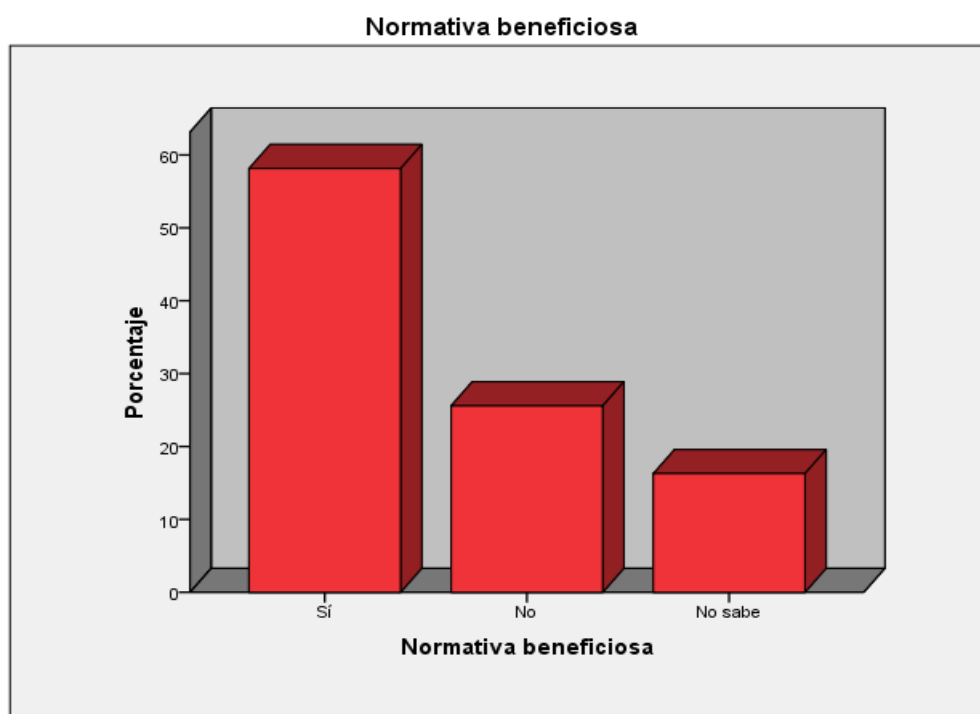


Figura 19: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. CONSIDERAN BENEFICIOSAS LAS NORMAS SOBRE LA COMPETENCIA

CONOCEN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	10	23,3	23,3	23,3
Sí	33	76,7	76,7	100,0
Total	43	100,0	100,0	

Tabla 20: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. CONOCEN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

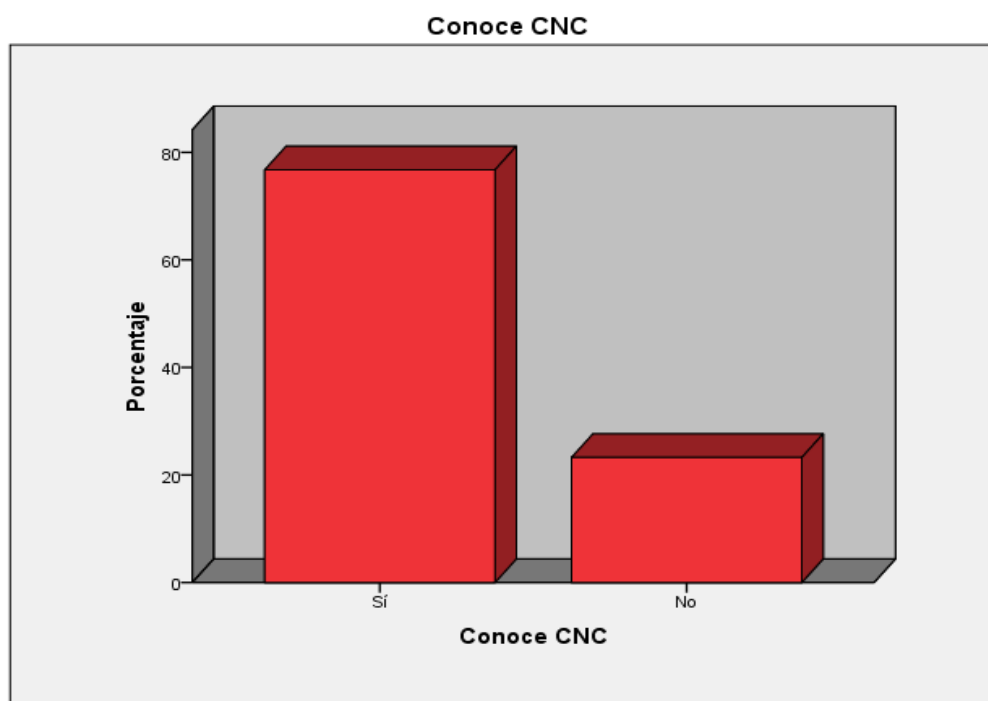


Figura 20: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. CONOCEN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

HAN RECURRIDO EN ALGUNA OCASIÓN A UN ORGANISMO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	21	48,8	48,8	48,8
Sí	22	51,2	51,2	100,0
Total	43	100,0	100,0	

Tabla 21: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. HAN RECURRIDO EN ALGUNA OCASIÓN A UN ORGANISMO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

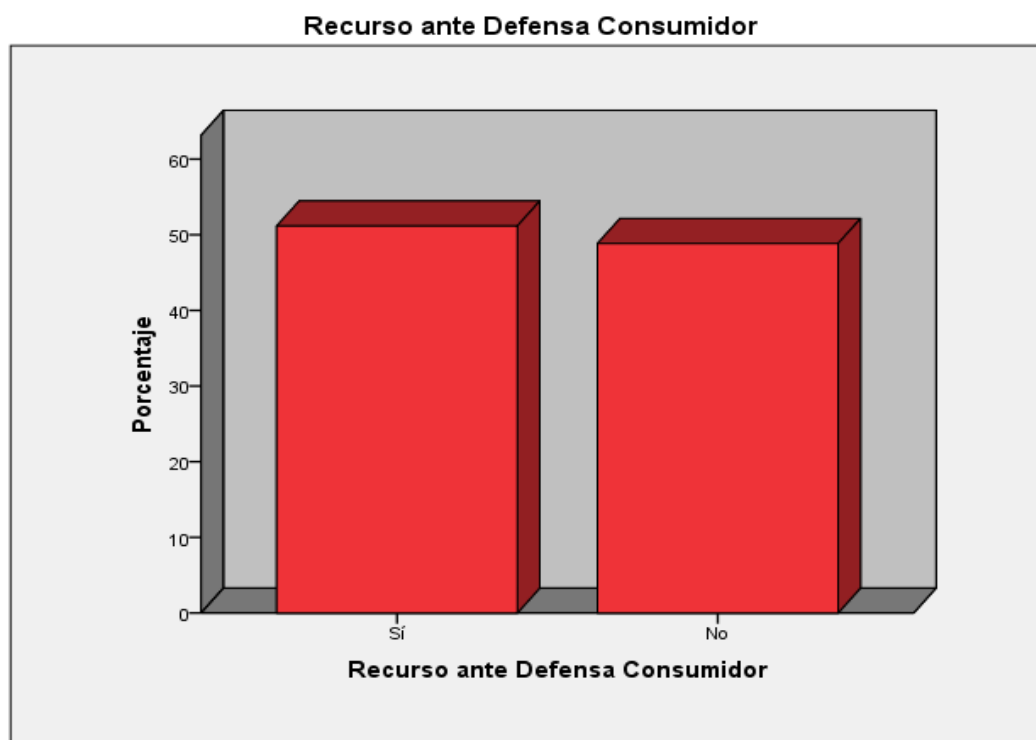


Figura 21: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. HAN RECURRIDO EN ALGUNA OCASIÓN A UN ORGANISMO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

CONSIDERAN QUE LA LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	7	16,3	16,3	16,3
No sabe	1	2,3	2,3	18,6
Sí	35	81,4	81,4	100,0
Total	43	100,0	100,0	

Tabla 22: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. CONSIDERAN QUE LA LIBRE COMPETENCIA CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

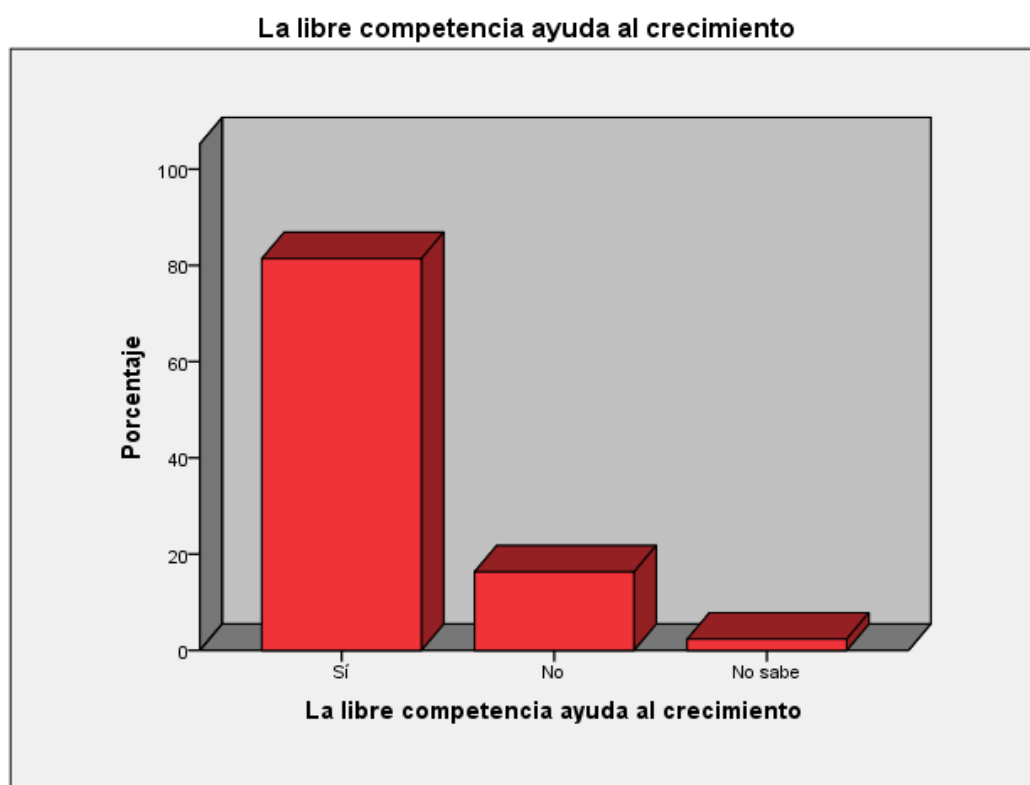


Figura 22: ABOGACÍAS DEL ESTADO Y LETRADOS. CONSIDERAN QUE LA LIBRE COMPETENCIA CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

* * * * *

8.7.2. NOTARÍAS

Si hacemos un análisis comparativo, más o menos en la misma proporción que los abogados y letrados, los que se declaran adscritos a este sector se muestran partidarios de la liberalización de los servicios profesionales (33,3%) aunque predominan, como en el caso anterior, los defensores de la liberalización con restricciones (41,7%).

Sin embargo, el conocimiento de la legislación vinculada a la competencia es menor. Esto puede deberse entre otros motivos, no a que los notarios desconozcan la legislación, sino a que es el personal vinculado a las notarías quien tiene un menor dominio de la materia que el manifestado por el personal circundante a los Abogados y Letrados del Estado.

El número de encuestados que conocen las normativas española y europea es algo inferior al de abogados y letrados. Lo mismo sucede con el conocimiento de la *Ley Ómnibus*.

Ven más negativas que positivas las normas sobre libre competencia, aunque la gran mayoría cree que no le afectan o no sabe si le afectan. En cambio son más los que las consideran beneficiosas que quienes las juzgan perjudiciales.

Mitad sí y mitad no conocen la Comisión Nacional de la Competencia en un 50%. Las tres cuartas partes nunca ha recurrido a organismos de defensa del consumidor, y un tercio a partes iguales considera que la libre competencia ayuda al crecimiento económico.

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Aunque las diferencias entre el sector de Abogados y Letrados del Estado y el de Notarías no son pronunciadas, los de este último se muestran menos conocedores de la legislación y más escépticos con la liberalización de la economía.

En las tablas y gráficos de la página siguiente se muestran de modo más pormenorizado estos resultados:

SON PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN DE SERVICIOS

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Me es indiferente	1	8,3	8,3	8,3
No	2	16,7	16,7	25,0
Sí	4	33,3	33,3	58,3
Sí, con restricciones	5	41,7	41,7	100,0
Total	12	100,0	100,0	

Tabla 23: NOTARÍAS. PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN DE SERVICIOS.

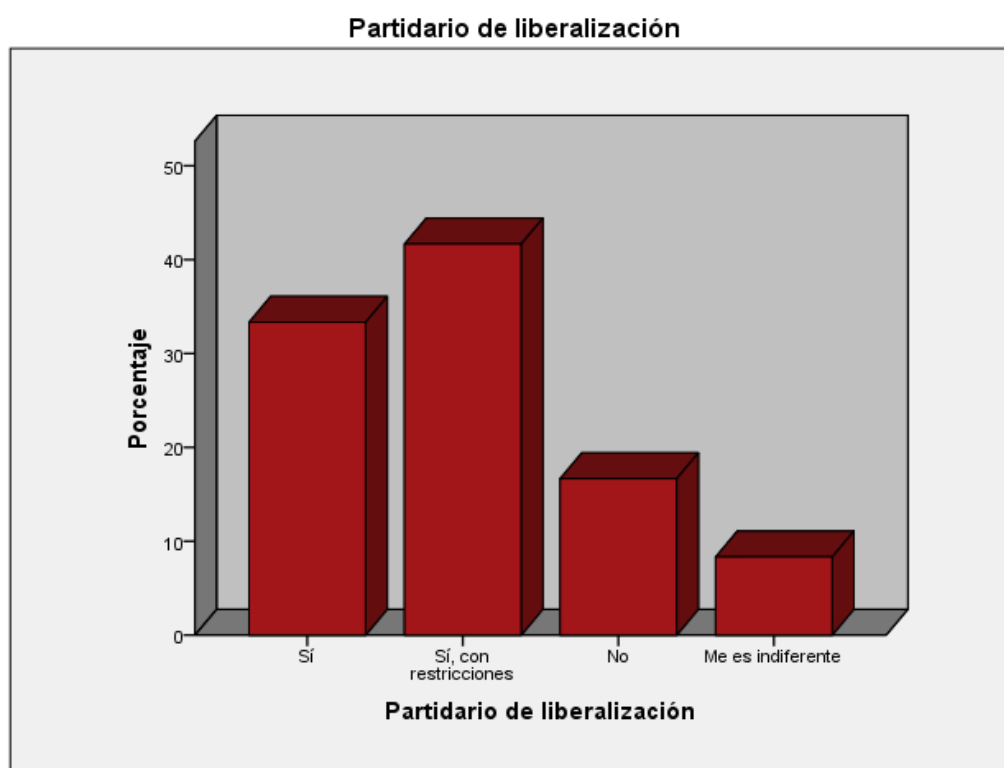


Figura 23: NOTARÍAS. PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN DE SERVICIOS.

CONOCEN LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
A medias	4	33,3	33,3	33,3
No	3	25,0	25,0	58,3
Sí	5	41,7	41,7	100,0
Total	12	100,0	100,0	

Tabla 24: NOTARÍAS. CONOCEN LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA SOBRE LA COMPETENCIA

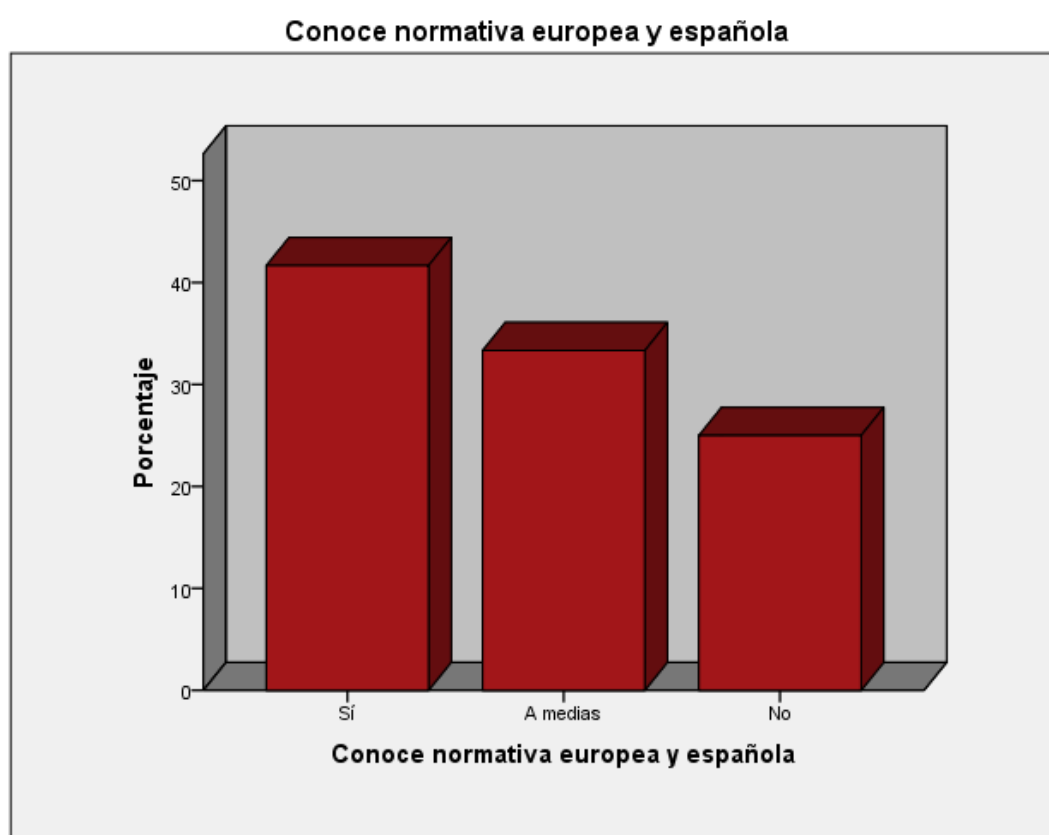


Figura 24: NOTARÍAS. CONOCEN LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA SOBRE LA COMPETENCIA

CONOCEN LA LEY ÓMNIBUS

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
He oído algo	2	16,7	16,7	16,7
No	2	16,7	16,7	33,3
Sí	8	66,7	66,7	100,0
Total	12	100,0	100,0	

Tabla 25: NOTARÍAS. CONOCEN LA LEY ÓMNIBUS

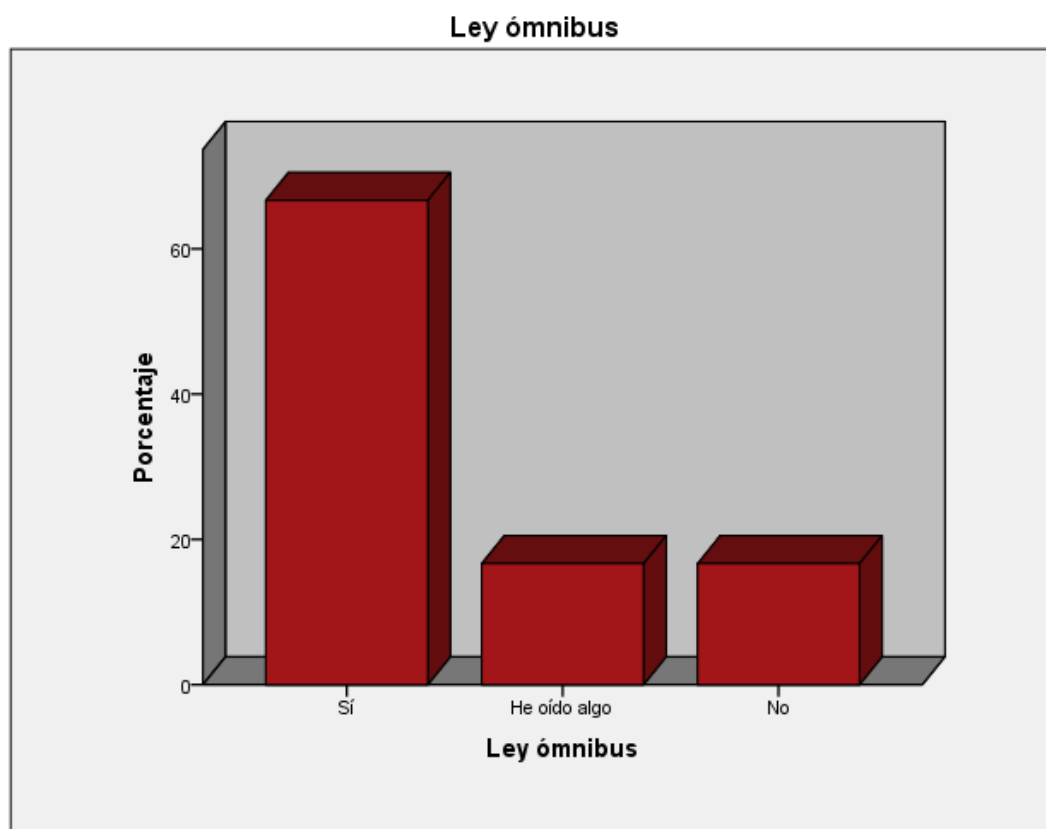
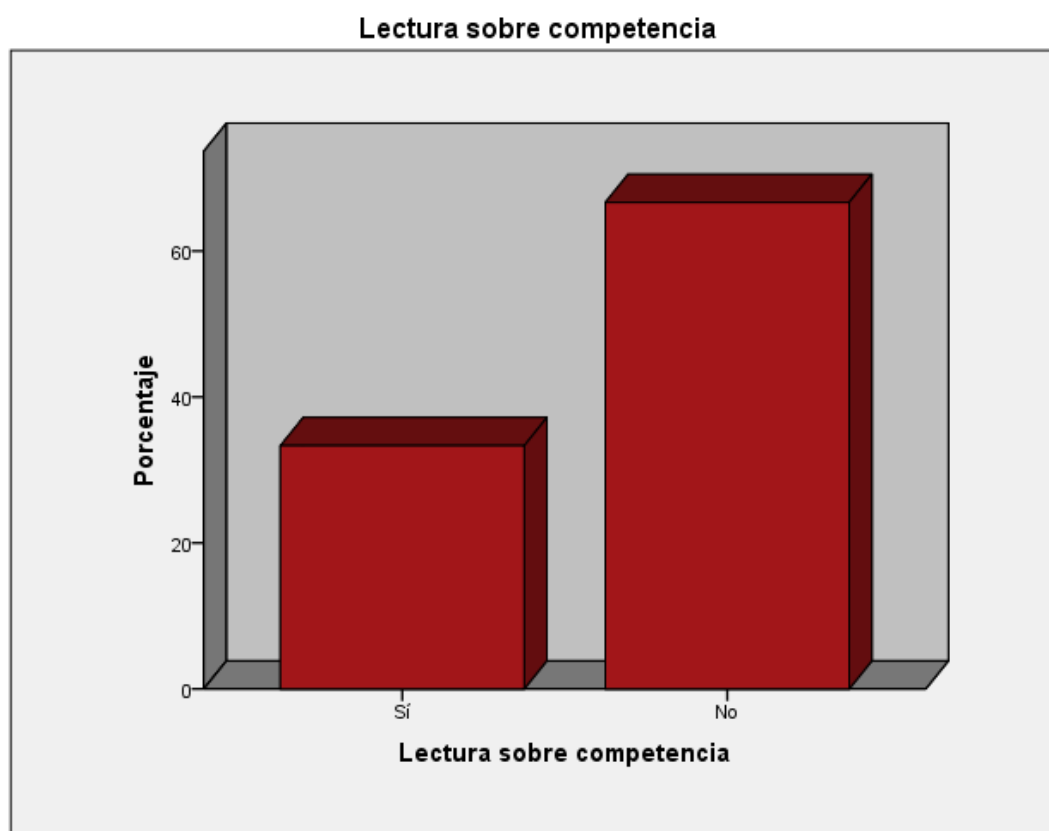


Figura 25: NOTARÍAS. CONOCEN LA LEY ÓMNIBUS

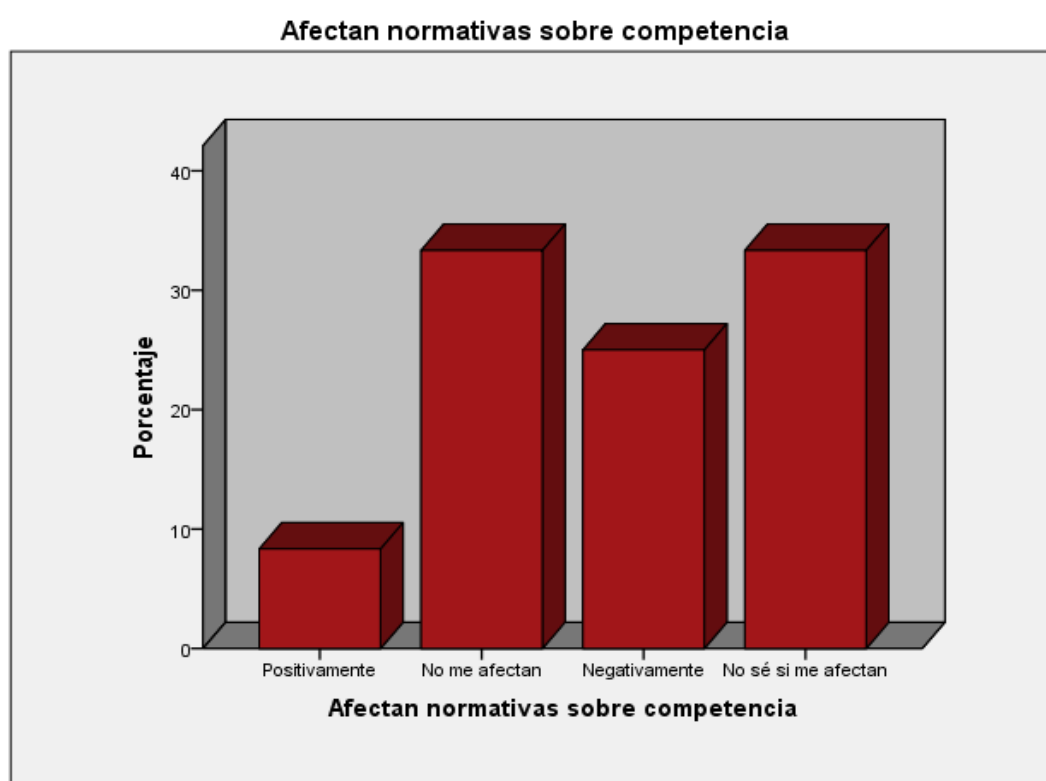
HAN LEÍDO ALGUNA OBRA SOBRE COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	8	66,7	66,7	66,7
Sí	4	33,3	33,3	100,0
Total	12	100,0	100,0	

Tabla 26: NOTARIÁS. LECTURA DE ALGUNA OBRA SOBRE COMPETENCIA**Figura 26:** NOTARIÁS. LECTURA DE ALGUNA OBRA SOBRE COMPETENCIA

LES AFECTA LA NORMATIVA SOBRE LA COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Negativamente	3	25,0	25,0	25,0
No me afectan	4	33,3	33,3	58,3
No sé si me afectan	4	33,3	33,3	91,7
Positivamente	1	8,3	8,3	100,0
Total	12	100,0	100,0	

Tabla 27: NOTARIÁS. LES AFECTA LA NORMATIVA SOBRE LA COMPETENCIA**Figura 27:** NOTARIÁS. LES AFECTA LA NORMATIVA SOBRE LA COMPETENCIA

CONSIDERAN BENEFICIOSA LA NORMATIVA SOBRE COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	2	16,7	16,7	16,7
No sabe	6	50,0	50,0	66,7
Sí	4	33,3	33,3	100,0
Total	12	100,0	100,0	

Tabla 28: NOTARÍAS. CONSIDERAN BENEFICIOSA LA NORMATIVA SOBRE COMPETENCIA

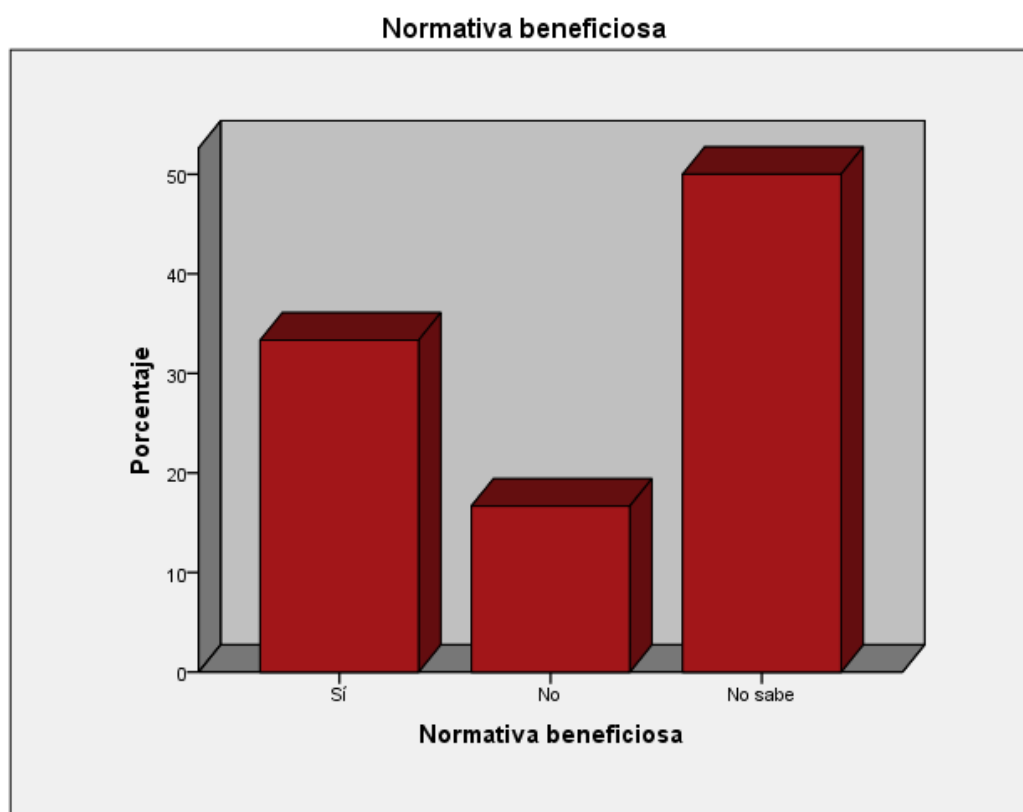


Figura 28: NOTARÍAS. CONSIDERAN BENEFICIOSA LA NORMATIVA SOBRE COMPETENCIA

CONOCE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	6	50,0	50,0	50,0
Sí	6	50,0	50,0	100,0
Total	12	100,0	100,0	

Tabla 29: NOTARIÁS. CONOCE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

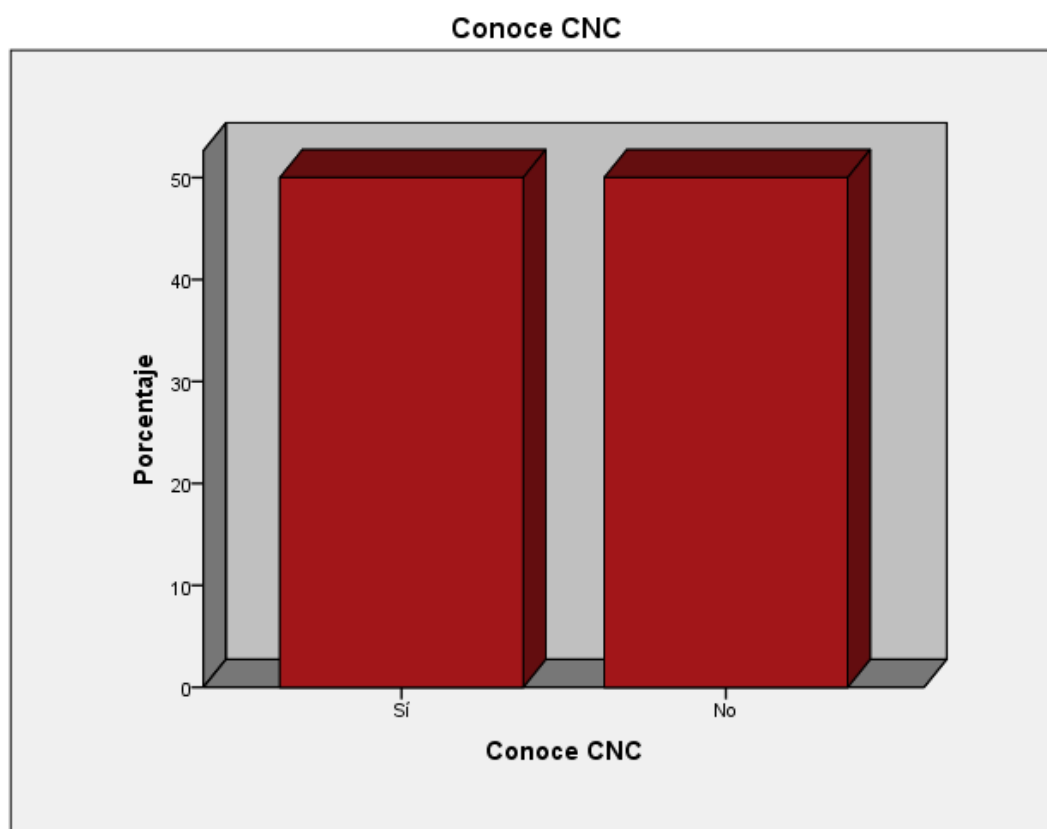


Figura 29: NOTARIÁS. CONOCE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

RECURSO ANTE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	9	75,0	75,0	75,0
Sí	3	25,0	25,0	100,0
Total	12	100,0	100,0	

Tabla 30: NOTARÍAS. RECURSO ANTE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

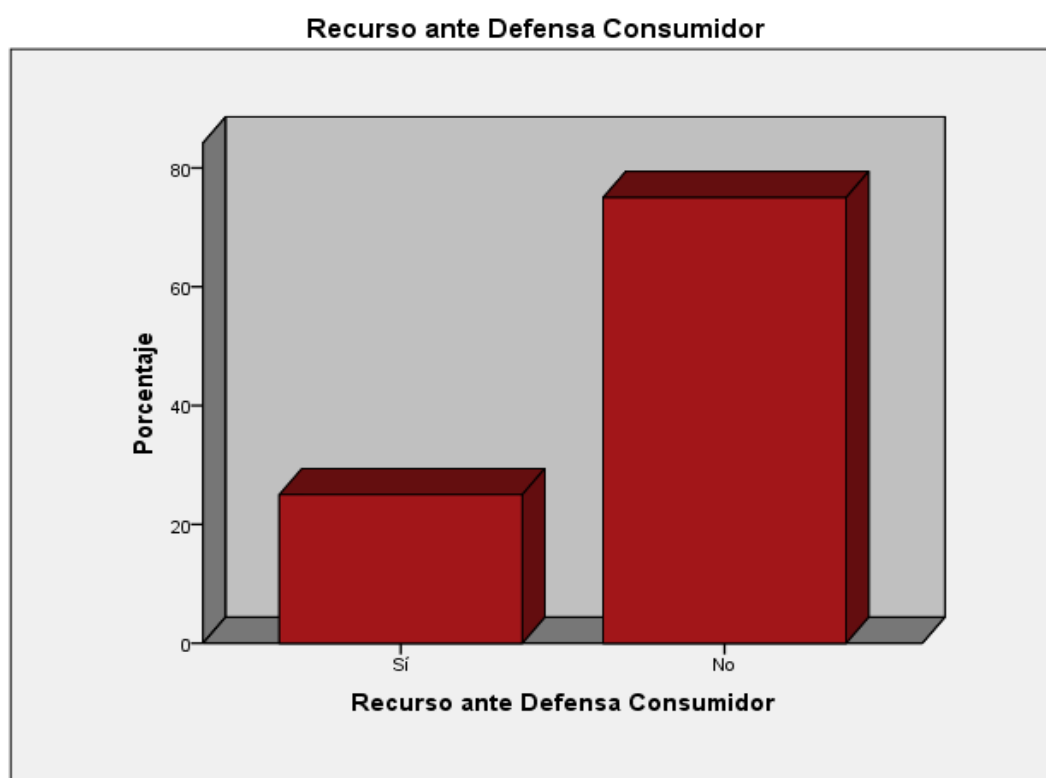


Figura 30: NOTARÍAS. RECURSO ANTE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

LA LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	4	33,3	33,3	33,3
No sabe	4	33,3	33,3	66,7
Sí	4	33,3	33,3	100,0
Total	12	100,0	100,0	

Tabla 31: NOTARÍAS. LA LIBRE COMPETENCIA CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO

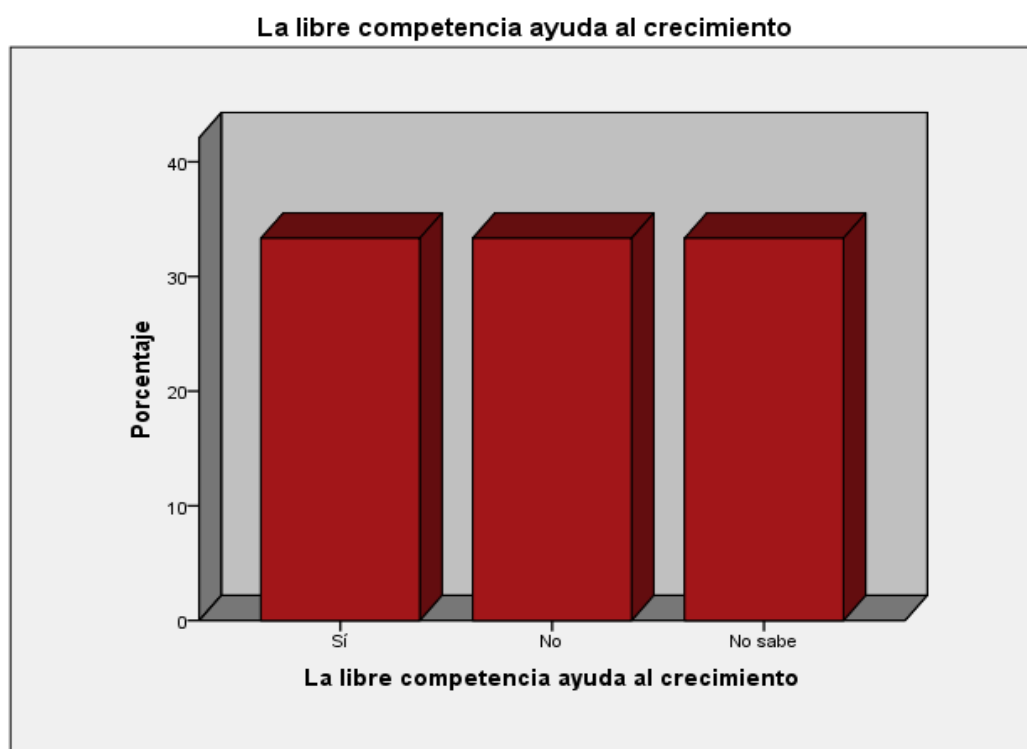


Figura 31: NOTARÍAS. LA LIBRE COMPETENCIA CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO

* * * * *

8.7.3. REGISTROS DE LA PROPIEDAD

En este sector nos encontramos con un posible pequeño desvío de congruencia en las contestaciones, ya que por una parte la mayoría de encuestados afirma no haber leído nada sobre competencia, y por otra parte conocen las normas e instituciones fundamentales sobre la competencia. Ello se explicaría si pudiera deberse a que hubiesen utilizado otras fuentes de información alternativas a la lectura en el soporte convencional: el papel.

En el entorno de los Registros de la Propiedad se han obtenido unos resultados similares en cuanto a la predisposición a abrirse a la liberalización de los servicios profesionales. Un 33,3% la aprueba y un 46,7% la acepta con restricciones; tan solo el 6,7% la rechaza y al 13,3% le es indiferente.

Una tercera parte conoce las normativas española y europea acerca de la competencia, otra tercera parte la conoce a medias y el resto la desconoce. En cambio, el 53,3% dice que está informado sobre la *Ley Ómnibus*, dato que desconcierta un poco a tenor de las respuestas de la pregunta anterior y a tenor de la pregunta siguiente, porque el 80% responde que no ha leído nada sobre competencia.

Tampoco deja de extrañar que la mayoría piense que las normas sobre la competencia no le afectan (53,3%), pero sí las consideran beneficiosas (46,7%).

Asimismo el 66,7% conoce la Comisión Nacional de la Competencia.

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Más de la mitad (60%) ha recurrido en alguna ocasión a un organismo de defensa del consumidor.

A continuación se explicitan estos resultados:

PARTIDARIO DE LA LIBERALIZACIÓN

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Me es indiferente	2	13,3	13,3	13,3
No	1	6,7	6,7	20,0
Sí	5	33,3	33,3	53,3
Sí, con restricciones	7	46,7	46,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Tabla 32: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN

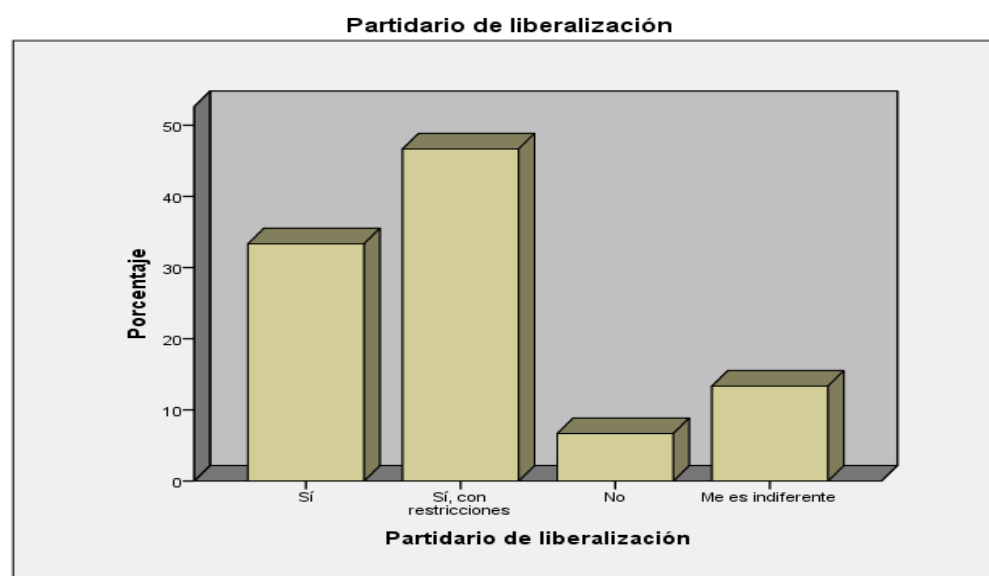


Figura 32: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN

CONOCE LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
A medias	5	33,3	33,3	33,3
No	5	33,3	33,3	66,7
Sí	5	33,3	33,3	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Tabla 33: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. CONOCE LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

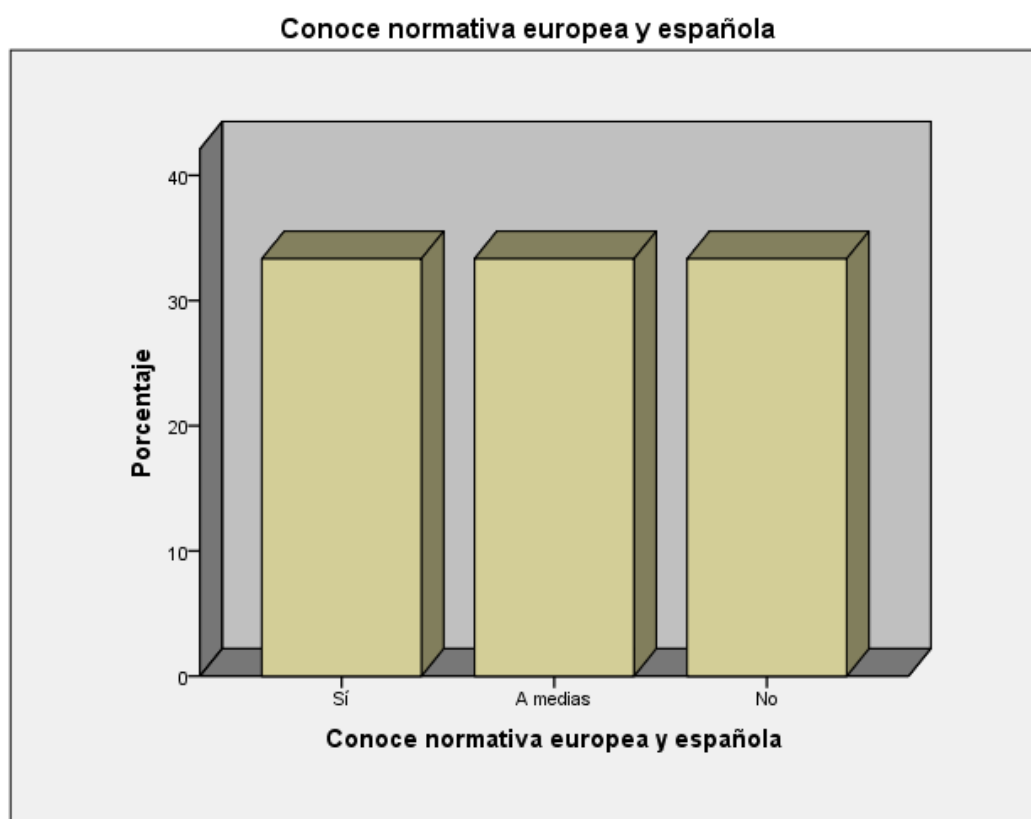
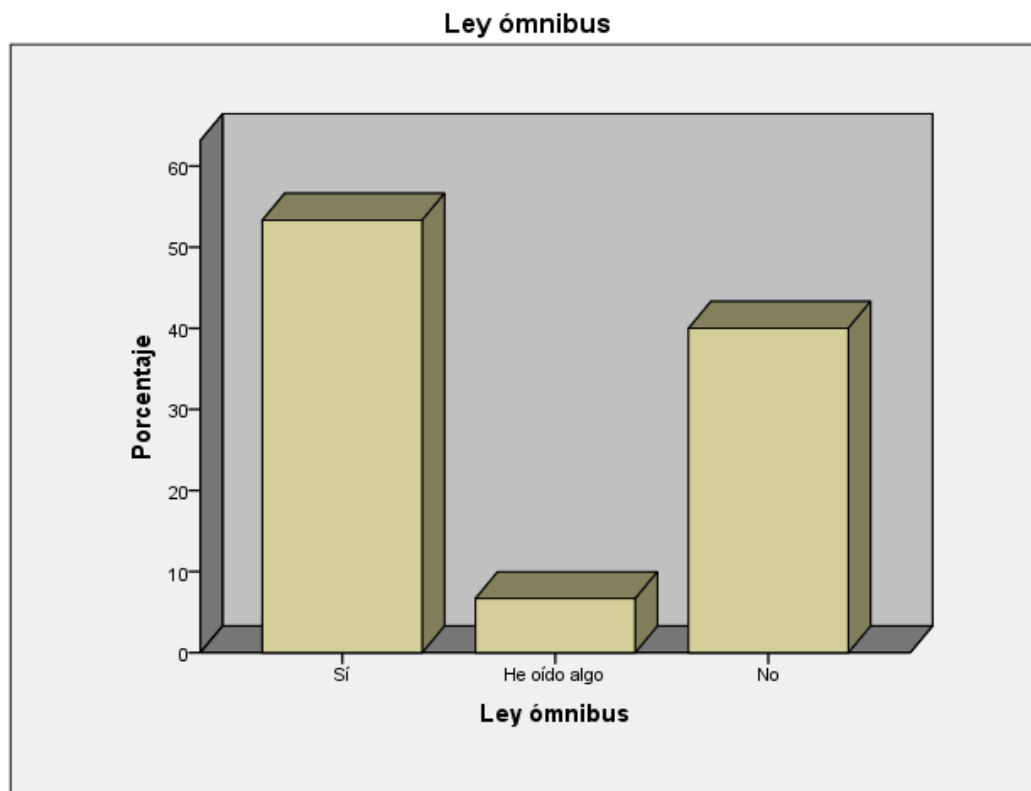


Figura 33: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. CONOCE LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

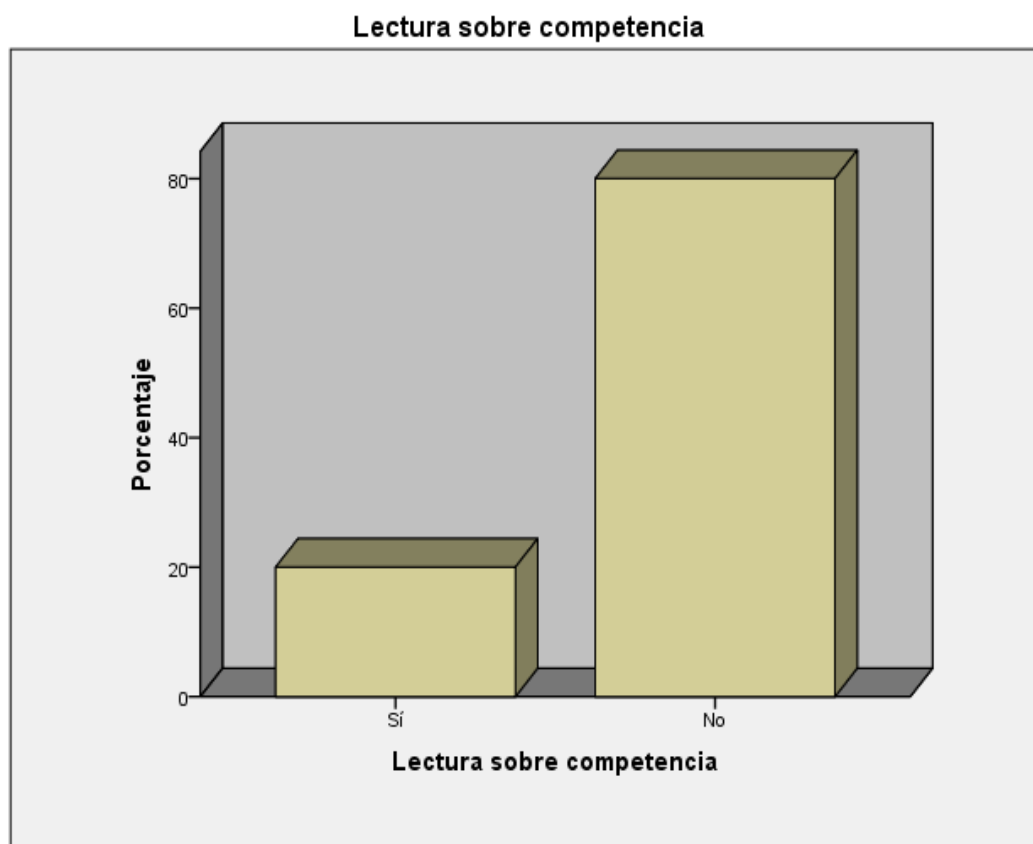
LEY ÓMNIBUS

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
He oído algo	1	6,7	6,7	6,7
No	6	40,0	40,0	46,7
Sí	8	53,3	53,3	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Tabla 34: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. LEY ÓMNIBUS**Figura 34:** REGISTROS DE LA PROPIEDAD. LEY ÓMNIBUS

LECTURA SOBRE COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	12	80,0	80,0	80,0
Sí	3	20,0	20,0	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Tabla 35: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. LECTURA SOBRE COMPETENCIA**Figura 35:** REGISTROS DE LA PROPIEDAD. LECTURA SOBRE COMPETENCIA

AFECTAN LAS NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Negativamente	3	20,0	20,0	20,0
No me afectan	8	53,3	53,3	73,3
No sé si me afectan	2	13,3	13,3	86,7
Positivamente	2	13,3	13,3	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Tabla 36: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA

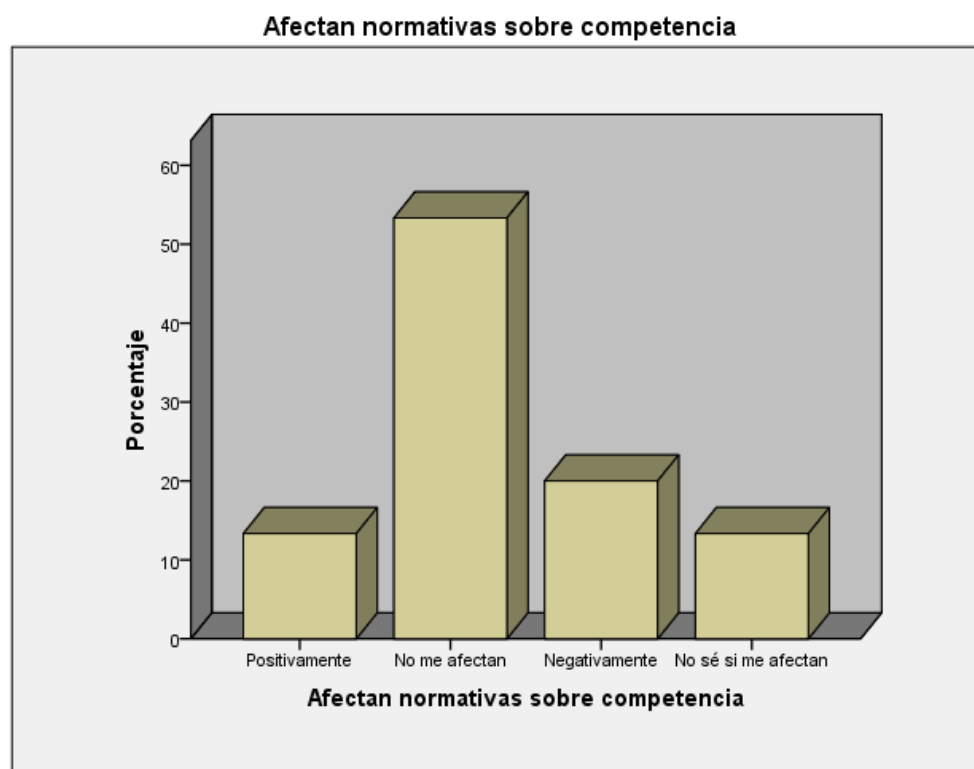
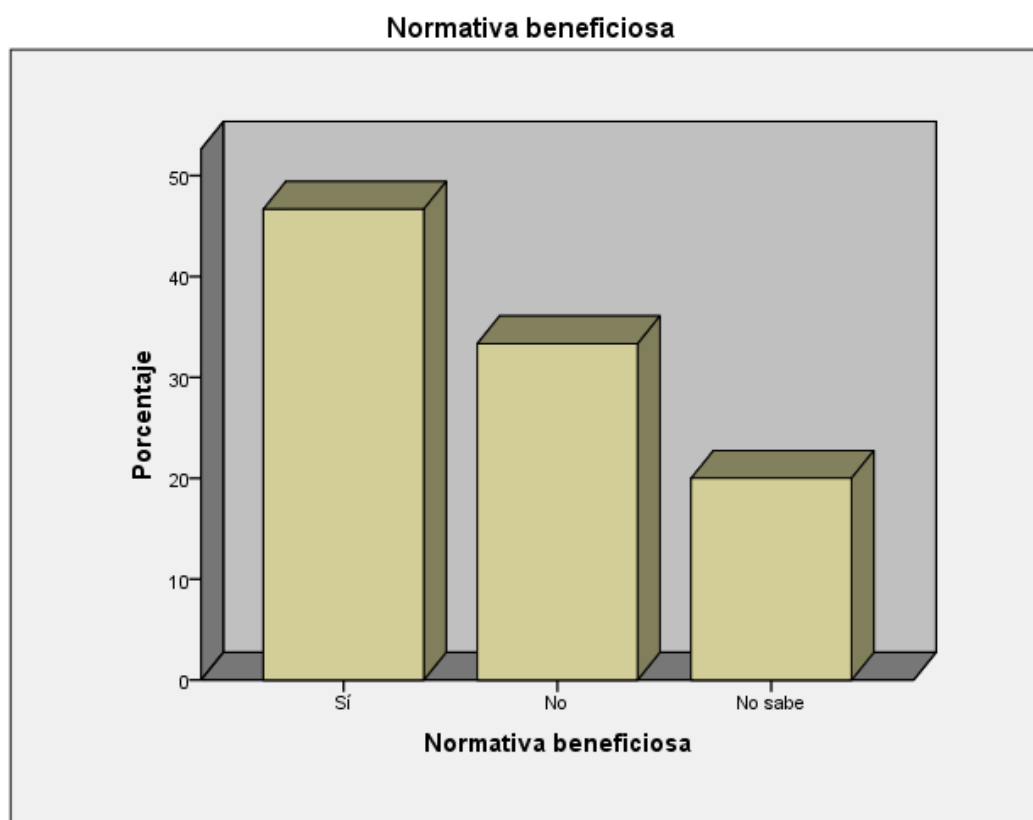


Figura 36: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA

NORMATIVA BENEFICIOSA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	5	33,3	33,3	33,3
No sabe	3	20,0	20,0	53,3
Sí	7	46,7	46,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Tabla 37: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. NORMATIVA BENEFICIOSA**Figura 37:** REGISTROS DE LA PROPIEDAD. NORMATIVA BENEFICIOSA

CONOCE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	5	33,3	33,3	33,3
Sí	10	66,7	66,7	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Tabla 38: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. CONOCE LA CNC

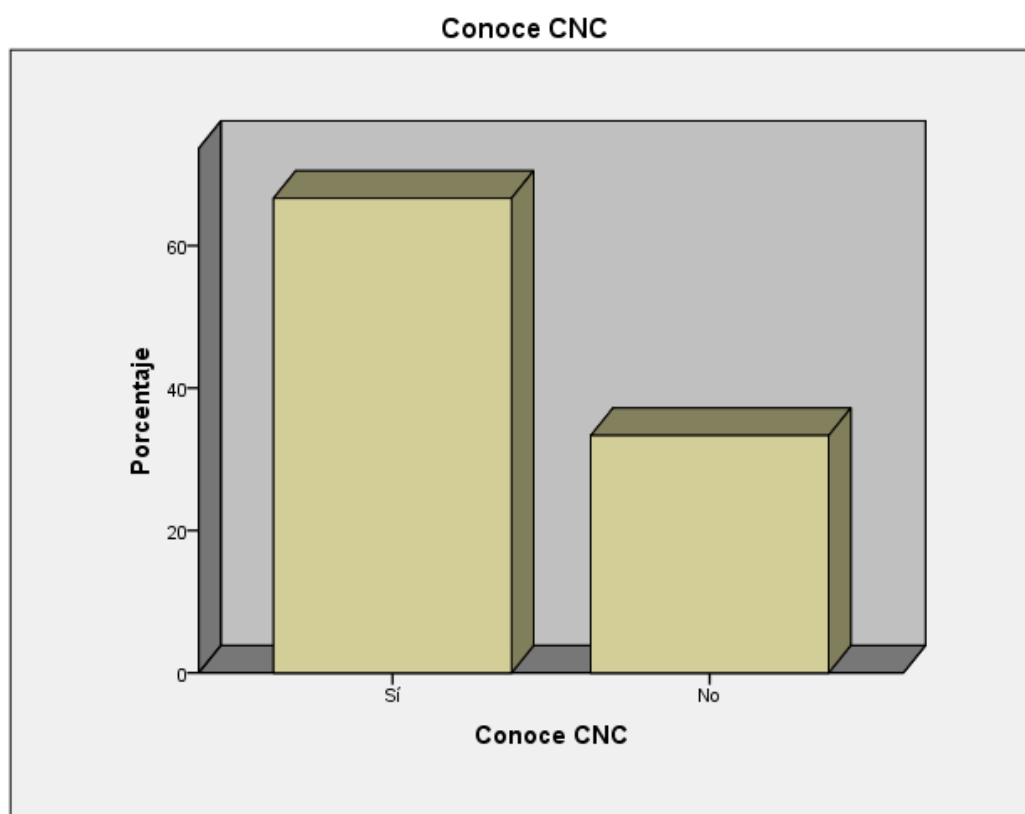


Figura 38: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. CONOCE LA CNC

RECURSO ANTE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	6	40,0	40,0	40,0
Sí	9	60,0	60,0	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Tabla 39: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. RECURSO ANTE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

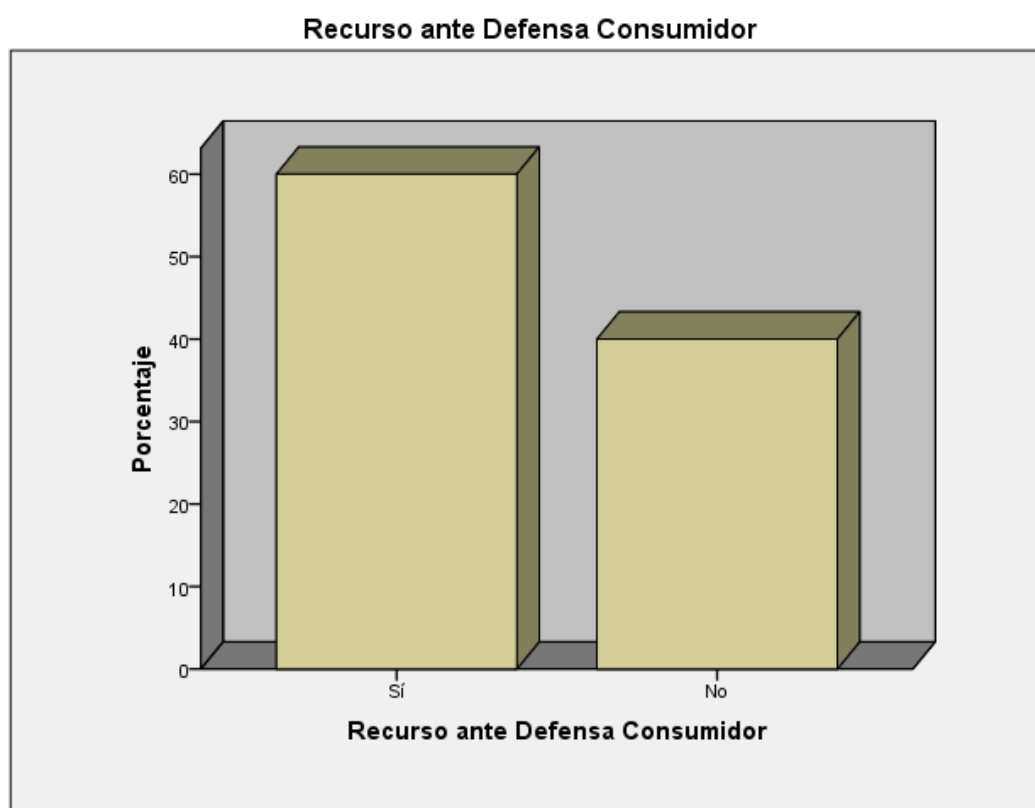


Figura39: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. RECURSOS ANTE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

LA LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	1	6,7	6,7	6,7
No sabe	2	13,3	13,3	20,0
Sí	12	80,0	80,0	100,0
Total	15	100,0	100,0	

Tabla 40: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. LIBRE COMPETENCIA CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO

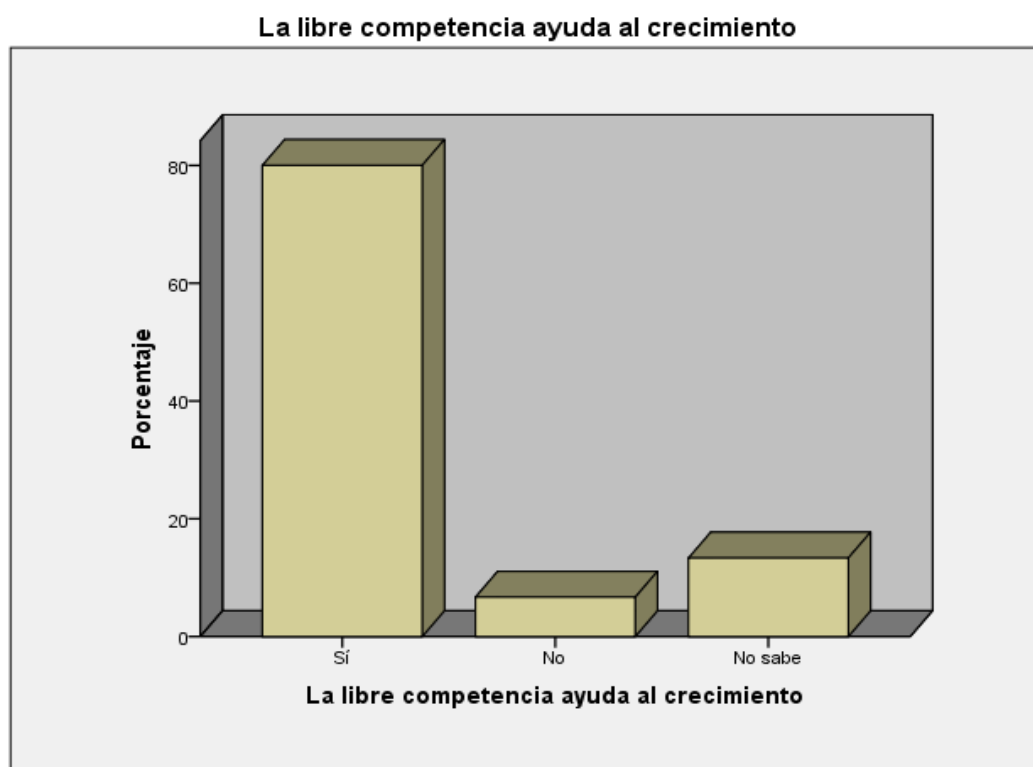


Figura 40: REGISTROS DE LA PROPIEDAD. LIBRE COMPETENCIA CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO

8.7.4. MEDICINA

En el ámbito de la Medicina inicialmente el panorama parece más predispuesto a la libre competencia. Si sumáramos a todos los partidarios de la libre competencia, se produciría una abrumadora mayoría entre quienes la desean globalmente (36.6%) más quienes la aceptan con restricciones (35,4%), en total el 72%, frente al 19,5 que la rechaza.

Los profesionales de este sector se muestran mucho más partidarios de la libre competencia que los juristas, en cambio desconocen también en mayor grado que estos últimos la legislación española y europea.

Más de la mitad de los encuestados (51,2%) la ignora y tan solo la conoce por entero el 18,3%. El resto (30,5%) ha oído decir algo sobre ella.

Mayoritariamente, asimismo, desconocen la Ley Ómnibus (63,4%); solo el 17,1% sabe en qué consiste. Sin embargo el 24,4% ha leído alguna obra sobre competencia.

Acerca de si la normativa sobre la competencia les afecta positiva o negativamente hay división de pareceres con una ligera inclinación hacia el lado positivo, pero en general predomina su escepticismo.

En la misma línea se pronuncian acerca de si la normativa sobre competencia les parece beneficiosa o perjudicial. Les parece más

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

beneficiosa que perjudicial, pero la mayoría no sabe con certeza qué opinar.

La mayoría desconoce la Comisión Nacional de la Competencia (67,1% frente al 32,9%).

Casi la mitad (45,1%) han recurrido en alguna ocasión ante un organismo de defensa del consumidor.

El 64,6% cree que la libertad de competencia ayudará al crecimiento económico.

Como podría preverse, prevalece en este sector un menor conocimiento de las cuestiones legislativas en relación con el sector de los juristas pero la confianza en el desarrollo de la libre competencia es mayor, como se puede comprobar en la tabla y figura de la página siguiente.

PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Me es indiferente	5	6,1	6,1	6,1
No	16	19,5	19,5	25,6
No contesta	2	2,4	2,4	28,0
Sí	30	36,6	36,6	64,6
Sí, con restricciones	29	35,4	35,4	100,0
Total	82	100,0	100,0	

Tabla 41: MEDICINA. PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN DE SERVICIOS

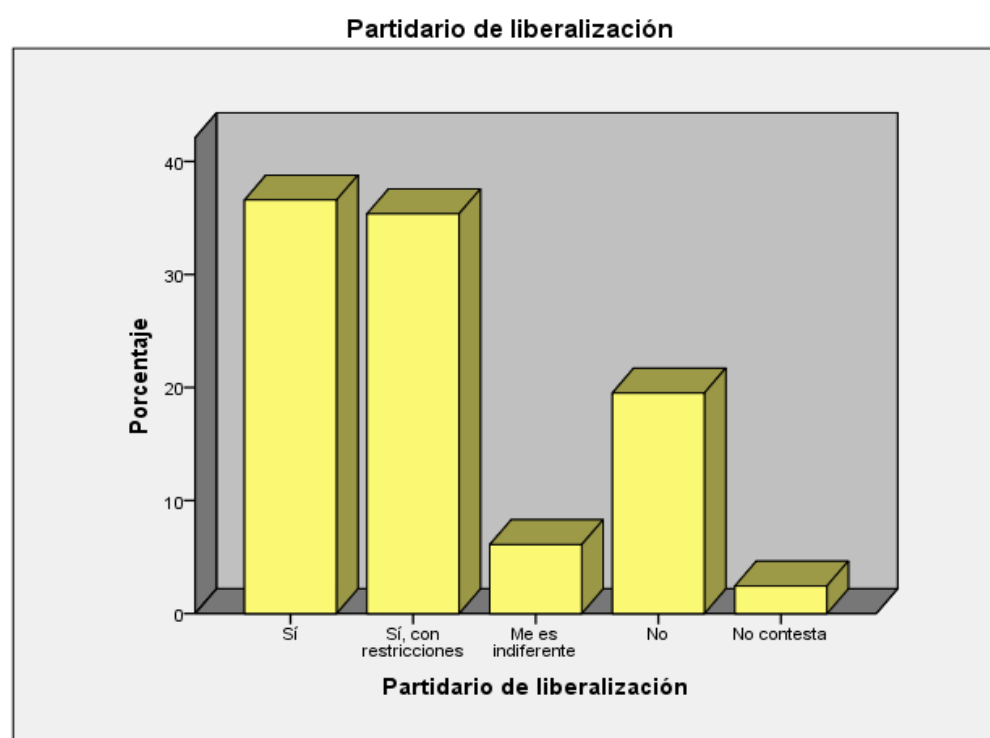


Figura 41: MEDICINA. PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN DE SERVICIOS

CONOCEN LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA SOBRE LA COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
A medias	25	30,5	30,5	30,5
No	42	51,2	51,2	81,7
Sí	15	18,3	18,3	100,0
Total	82	100,0	100,0	

Tabla 42: MEDICINA. CONOCEN LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

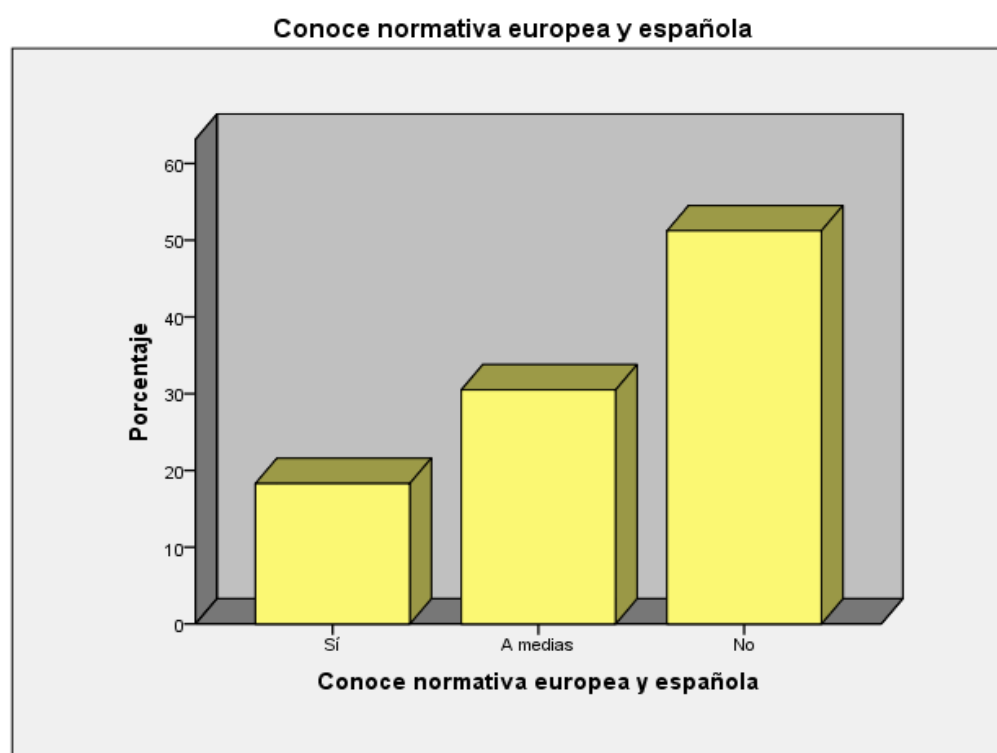


Figura 42: MEDICINA. CONOCEN LA NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

LEY ÓMNIBUS

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
He oído algo	15	18,3	18,3	18,3
No	52	63,4	63,4	81,7
No contesta	1	1,2	1,2	82,9
Sí	14	17,1	17,1	100,0
Total	82	100,0	100,0	

Tabla 43: MEDICINA. LEY ÓMNIBUS

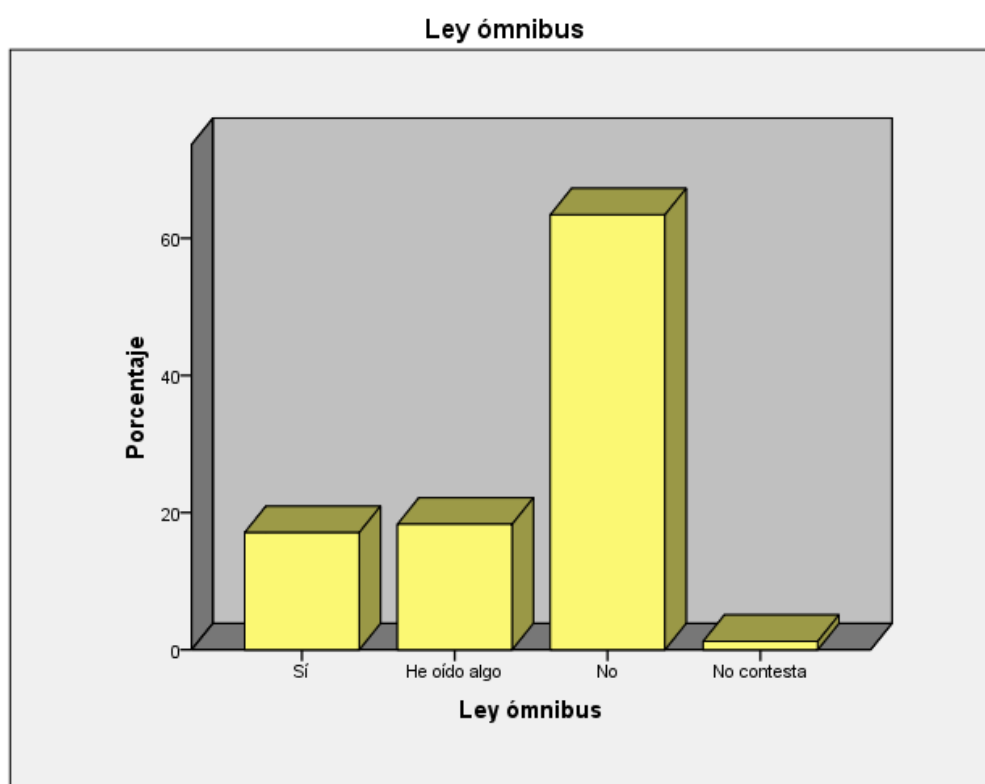
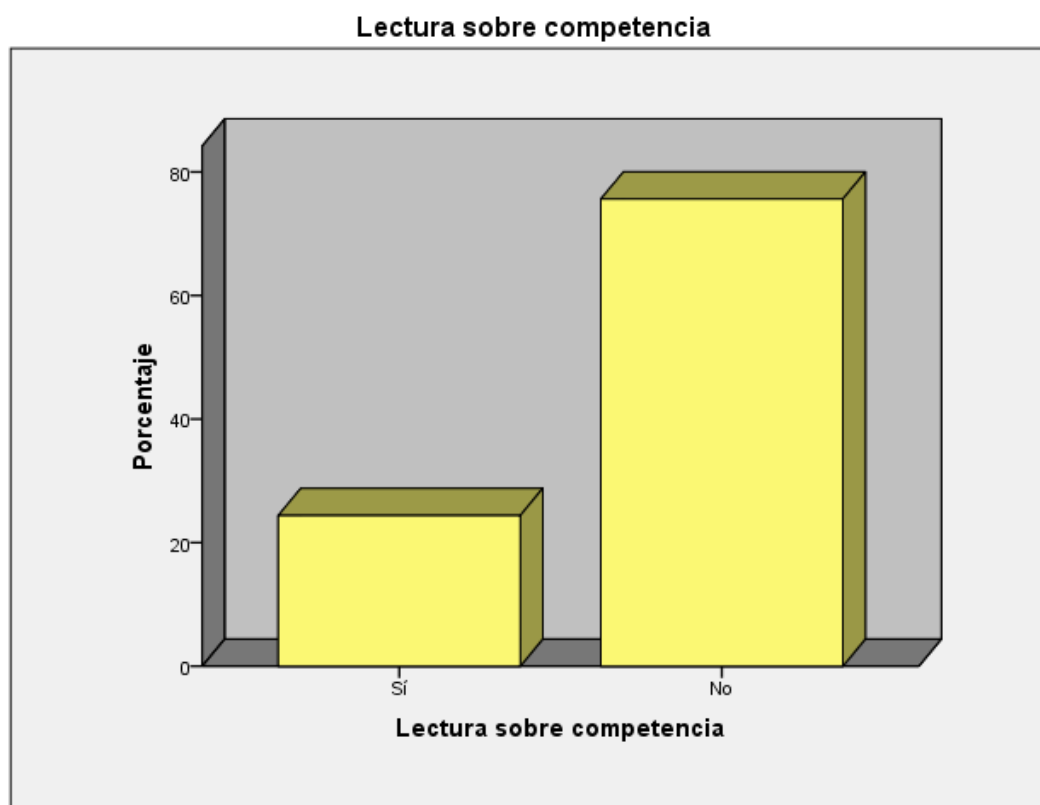


Figura 43: MEDICINA. LEY ÓMNIBUS

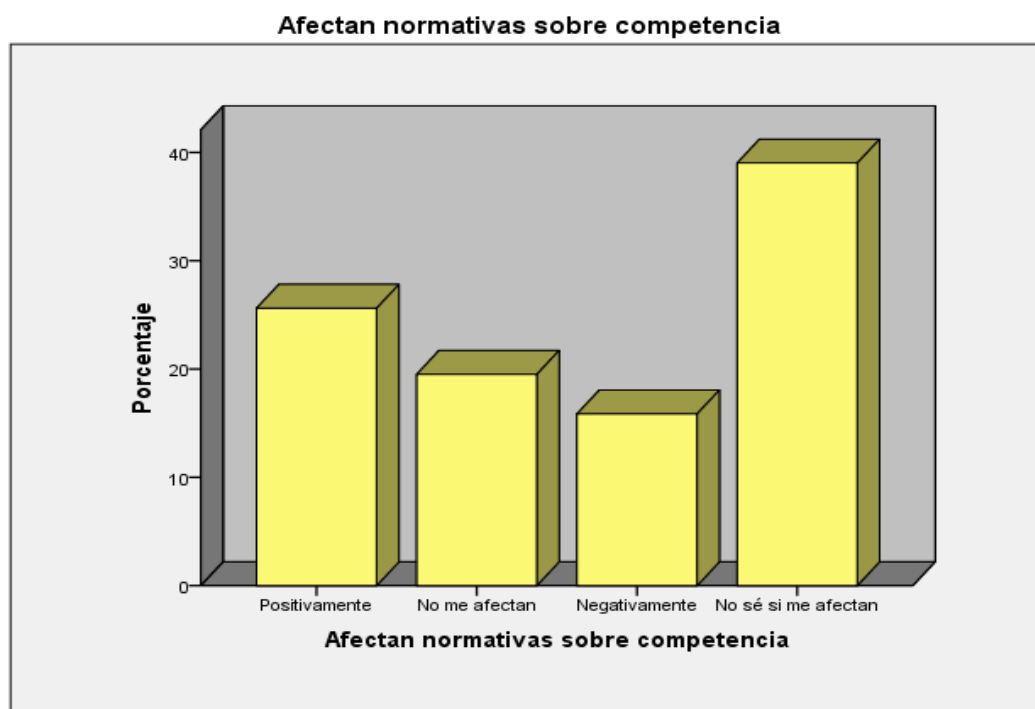
LECTURA SOBRE COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	62	75,6	75,6	75,6
Sí	20	24,4	24,4	100,0
Total	82	100,0	100,0	

Tabla 44: MEDICINA. LECTURA SOBRE COMPETENCIA**Figura 44:** MEDICINA. LECTURA SOBRE COMPETENCIA

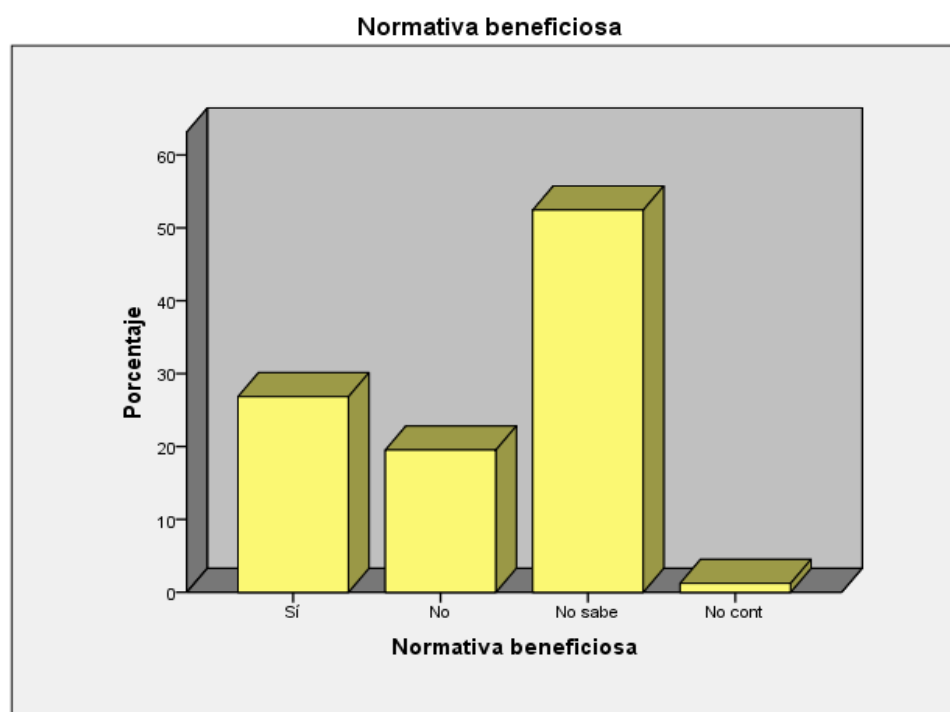
AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Negativamente	13	15,9	15,9	15,9
No me afectan	16	19,5	19,5	35,4
No sé si me afectan	32	39,0	39,0	74,4
Positivamente	21	25,6	25,6	100,0
Total	82	100,0	100,0	

Tabla 45: MEDICINA. AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA**Figura 45:** MEDICINA. AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA

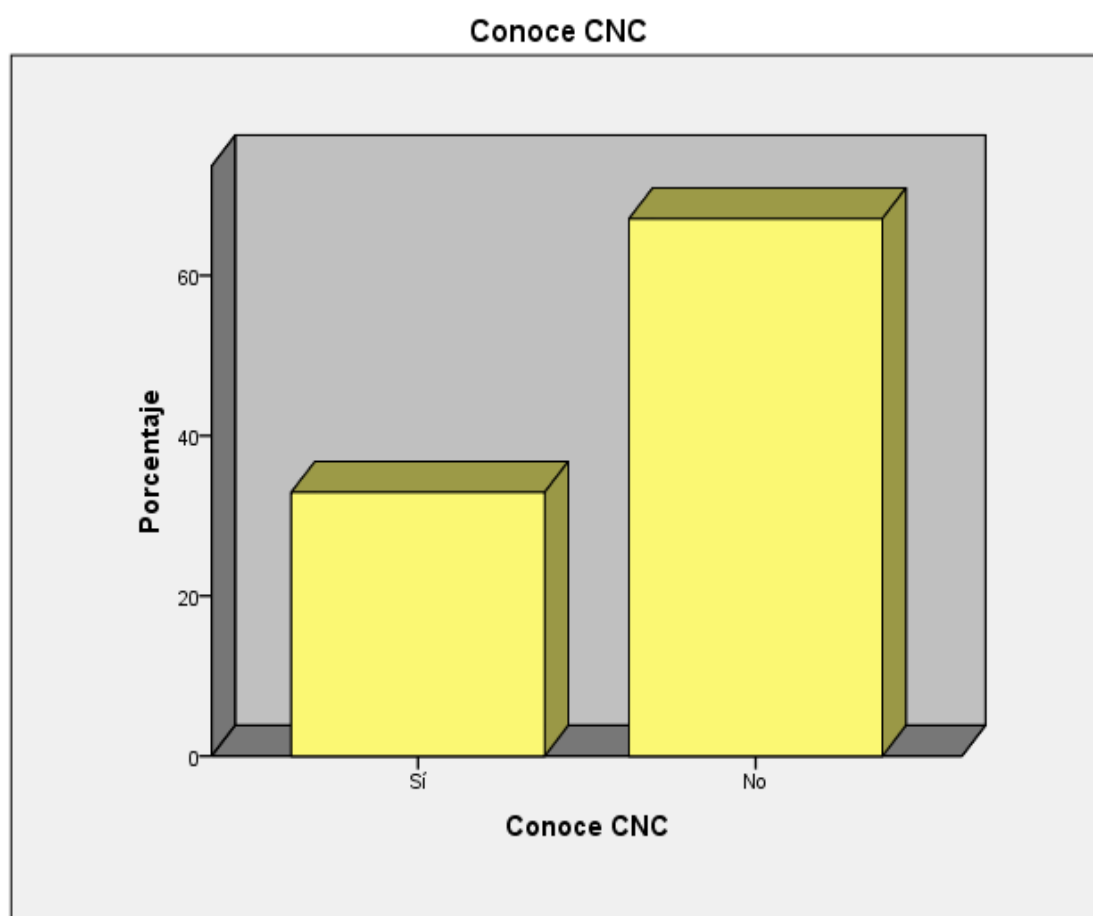
NORMATIVA BENEFICIOSA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	16	19,5	19,5	19,5
No contesta	1	1,2	1,2	20,7
No sabe	43	52,4	52,4	73,2
Sí	22	26,8	26,8	100,0
Total	82	100,0	100,0	

Tabla 46: MEDICINA. NORMATIVA BENEFICIOSA**Figura 46:** MEDICINA. NORMATIVA BENEFICIOSA

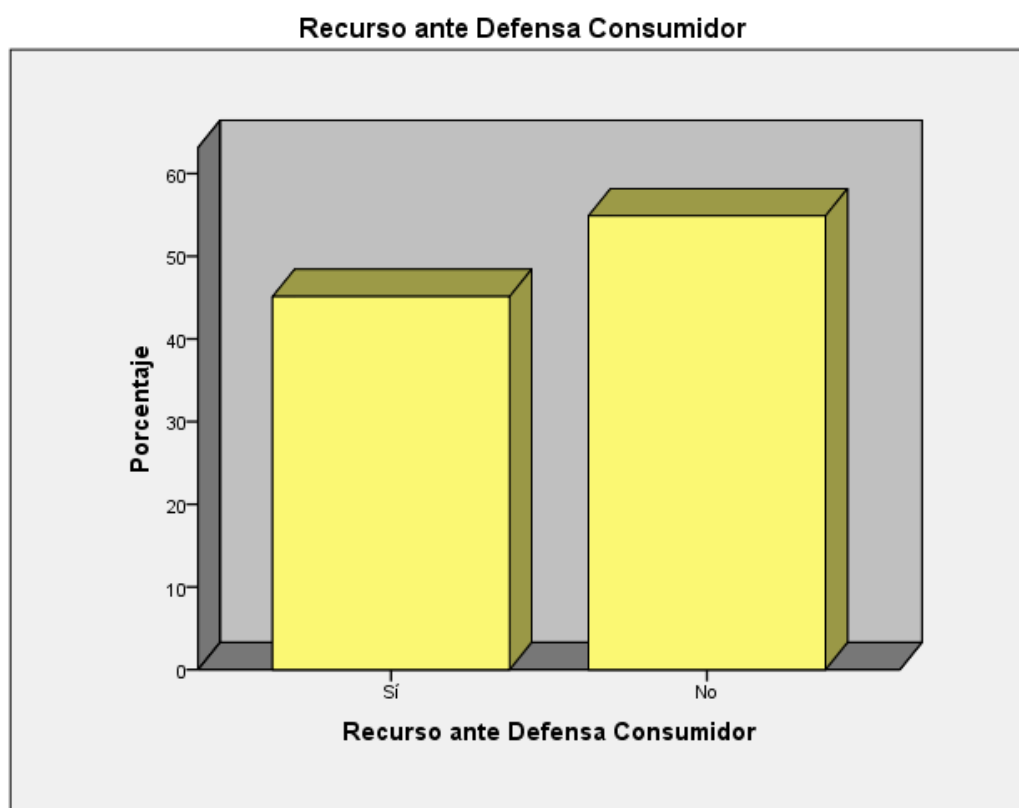
CONOCE CNC

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	55	67,1	67,1	67,1
Sí	27	32,9	32,9	100,0
Total	82	100,0	100,0	

Tabla 47: MEDICINA. CONOCE LA CNC**Figura 47:** MEDICINA. CONOCE LA CNC

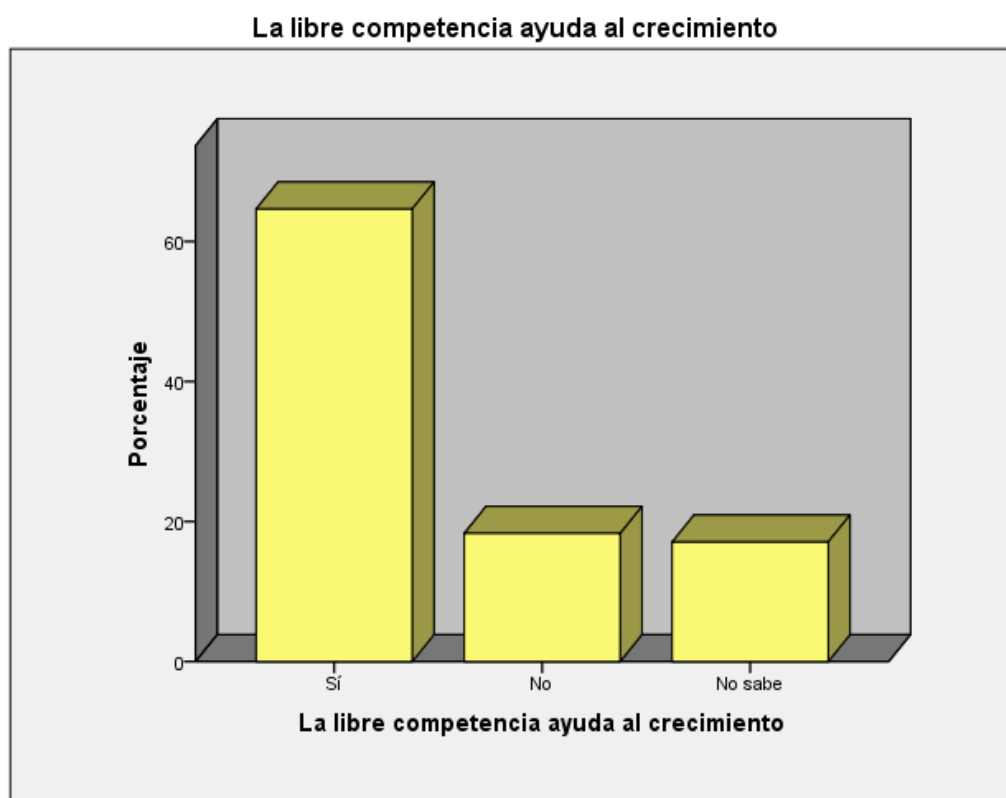
RECURSO ANTE DEFENSA CONSUMIDOR

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	45	54,9	54,9	54,9
Sí	37	45,1	45,1	100,0
Total	82	100,0	100,0	

Tabla 48: MEDICINA. RECURSO ANTE DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Figura 48:** MEDICINA. RECURSO ANTE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

LA LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	15	18,3	18,3	18,3
No sabe	14	17,1	17,1	35,4
Sí	53	64,6	64,6	100,0
Total	82	100,0	100,0	

Tabla 49: MEDICINA. LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO**Figura 49:** MEDICINA. LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO

8.7.5. VETERINARIA

El optimismo del sector de la Medicina acerca de la liberalización de servicios se ve contrarrestado por el escepticismo del ámbito veterinario. La gran mayoría se muestra partidaria de esta liberalización pero con restricciones (62,5%).

La normativa española y europea es mayoritariamente desconocida, aunque el pequeño porcentaje de quienes la conocen es algo superior al del sector médico.

Ocurre lo mismo con el apartado siguiente: los afines a la veterinaria conocen en un porcentaje algo superior (37,5%) la Ley Ómnibus frente al personal relacionado con la Medicina (17,1%).

Sin embargo son muy pocos los que han leído alguna obra sobre competencia (12,5%). Recordemos que en el apartado de Medicina era el 24,4%.

En esta ocasión se aprecia un problema de aparente incoherencia (que no lo es) porque ¿cómo es posible que el 37,5% conozca la Ley Ómnibus y solamente el 17,1% declare haber leído algo sobre la libre competencia? La respuesta puede ser diversa. Es probable que quienes conozcan la existencia de la *Ley Ómnibus* y de su contenido se hayan

enterado por otros medios de transmisión del conocimiento distintos a los de la cultura escrita¹³⁸.

En esta ocasión se muestran apreciablemente escépticos sobre la liberalización de los servicios profesionales, como antes se ha dicho, sin embargo el 50% cree que la normativa sobre la libre competencia les afecta positivamente (al 37,5% no le afectan y el 12,5% no sabe si le afectan).

Un 62,5% considera la normativa sobre la libertad de competir beneficiosa y un 37,5% no sabe si es beneficiosa.

El 37,5% conoce la CNC frente al 62,5 que la desconoce.

Un acentuado 75% ha recurrido en alguna ocasión a un organismo de defensa del consumidor.

La mayoría (87,5%) considera que la competencia ayuda al crecimiento económico.

A continuación se explicitan de modo más pormenorizado estas observaciones:

¹³⁸ Esta parece ser una característica general de la cultura de nuestros días: el cambio de costumbres de la comunicación oral y escrita por la comunicación a través de los medios audiovisuales.

PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	1	12,5	12,5	12,5
Sí	2	25,0	25,0	37,5
Sí, con restricciones	5	62,5	62,5	100,0
Total	8	100,0	100,0	

Tabla 50: VETERINARIA. PARTIDARIOS LIBERALIZACIÓN SERVICIOS

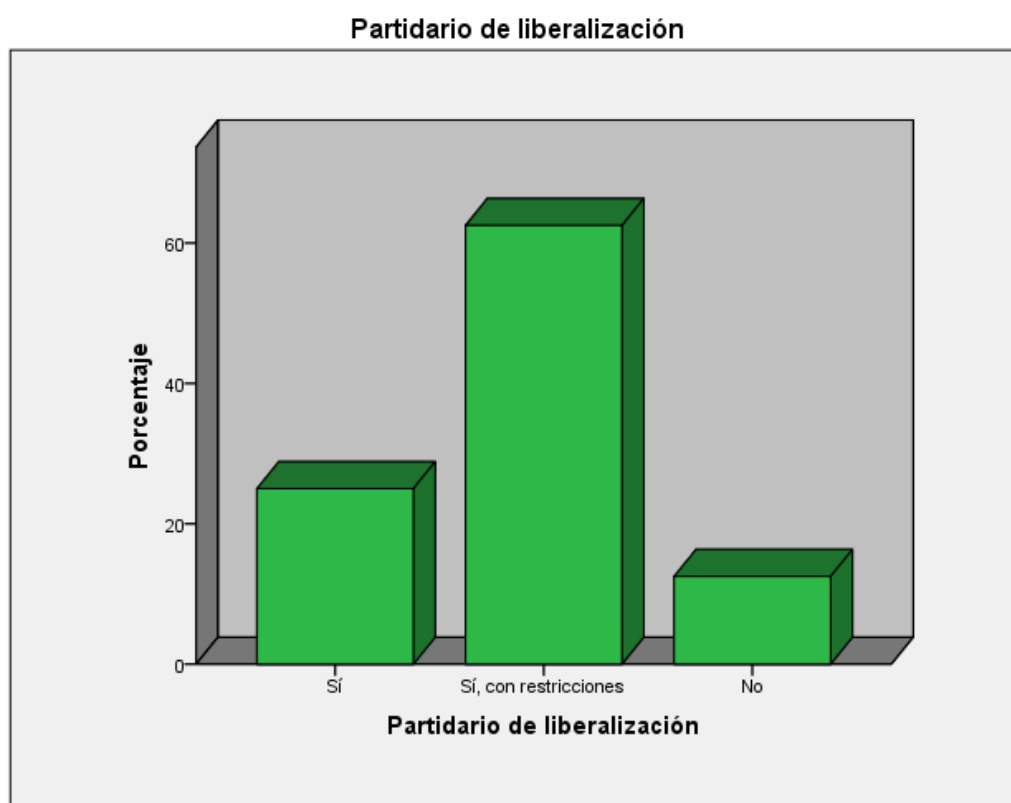


Figura 50: VETERINARIA. PARTIDARIOS LIBERALIZACIÓN SERVICIOS

CONOCE NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
A medias	3	37,5	37,5	37,5
No	3	37,5	37,5	75,0
Sí	2	25,0	25,0	100,0
Total	8	100,0	100,0	

Tabla 51: VETERINARIA. CONOCE NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

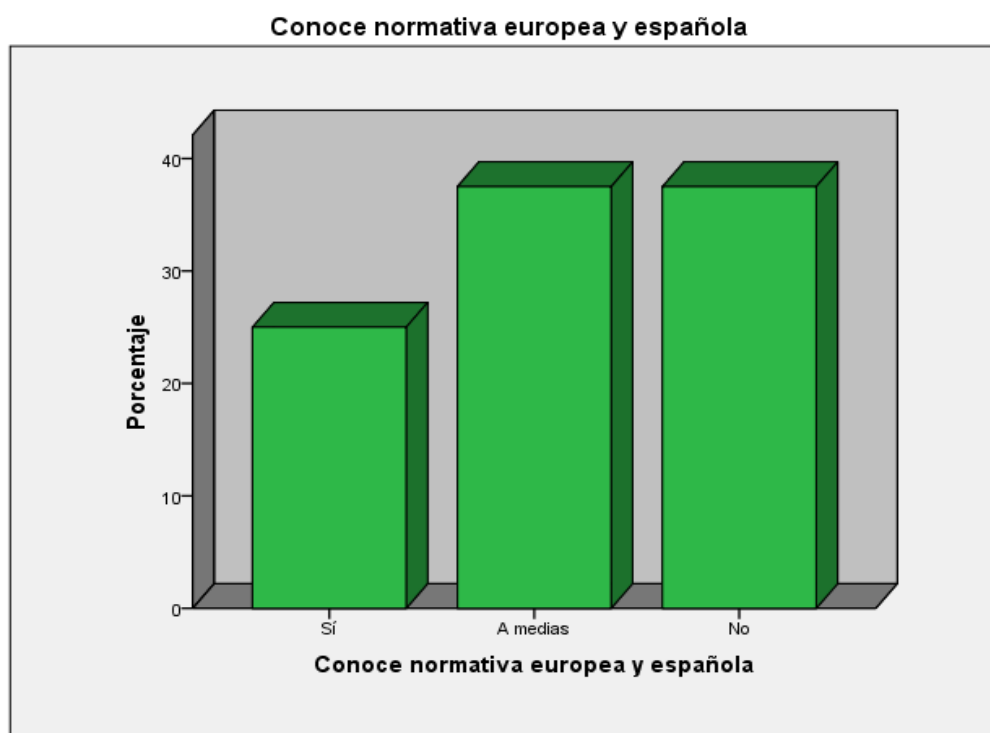
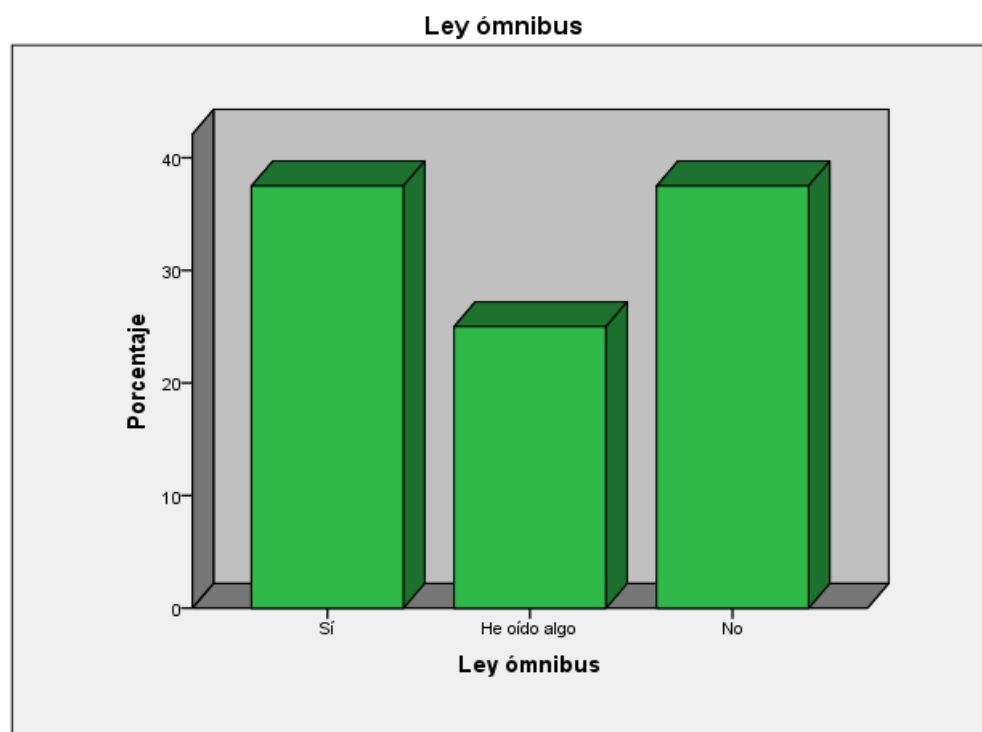


Figura 51: VETERINARIA. CONOCE NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

LEY ÓMNIBUS

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
He oído algo	2	25,0	25,0	25,0
No	3	37,5	37,5	62,5
Sí	3	37,5	37,5	100,0
Total	8	100,0	100,0	

Tabla 52: VETERINARIA. LEY ÓMNIBUS**Figura 52:** VETERINARIA. LEY ÓMNIBUS

LECTURA SOBRE COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	7	87,5	87,5	87,5
Sí	1	12,5	12,5	100,0
Total	8	100,0	100,0	

Tabla 53: VETERINARIA. LECTURA SOBRE COMPETENCIA

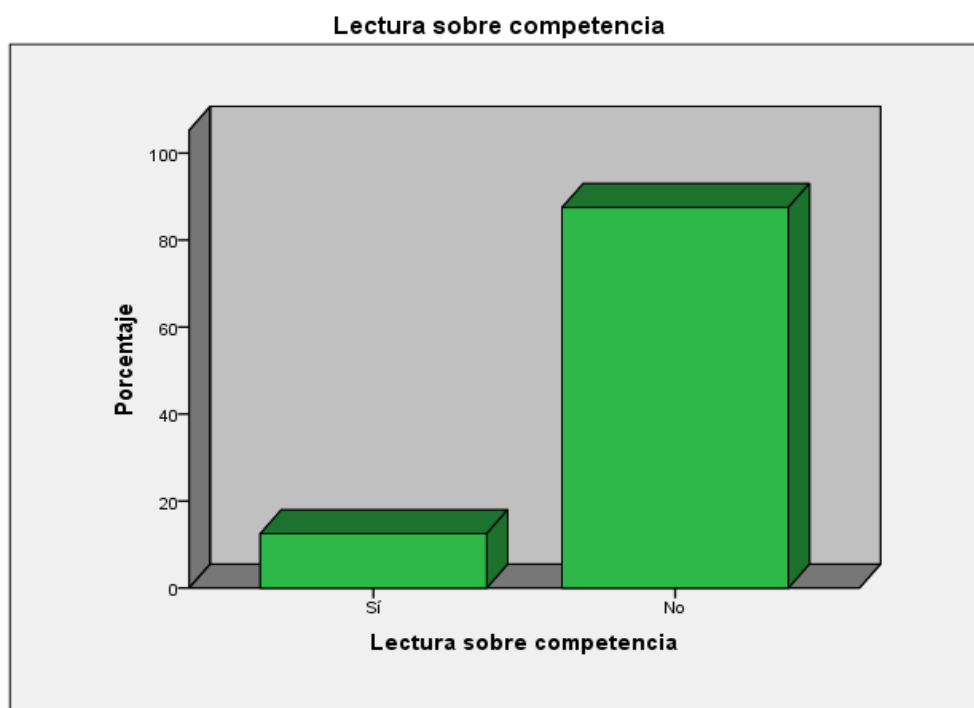
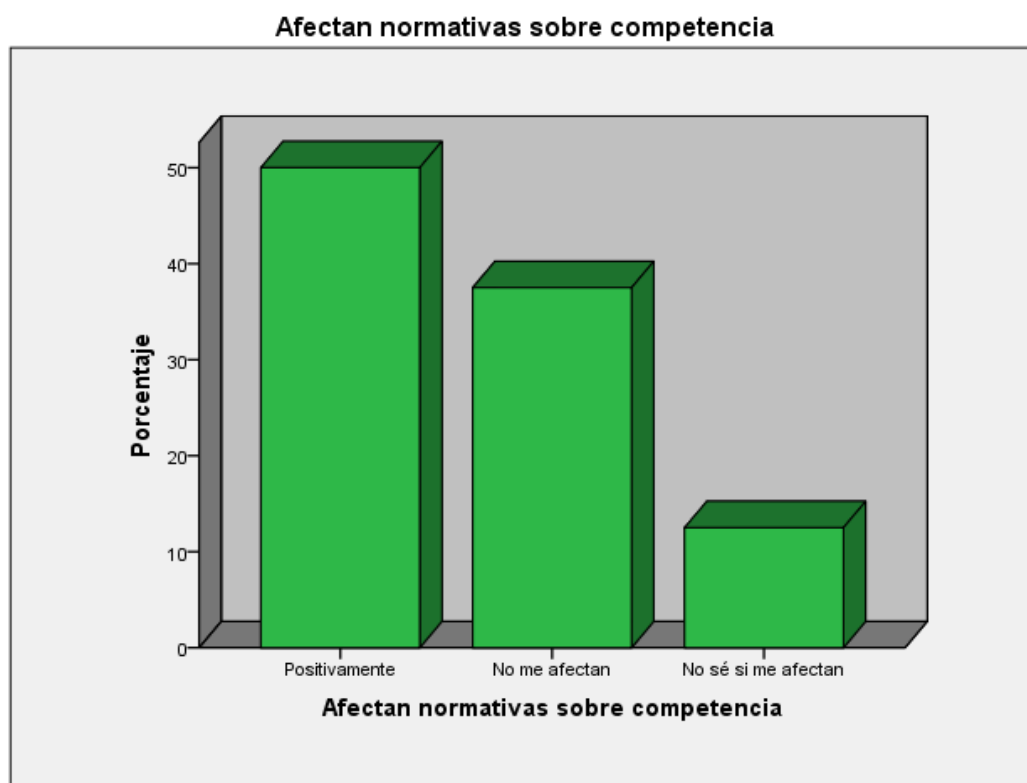


Figura 53: VETERINARIA. LECTURA SOBRE COMPETENCIA

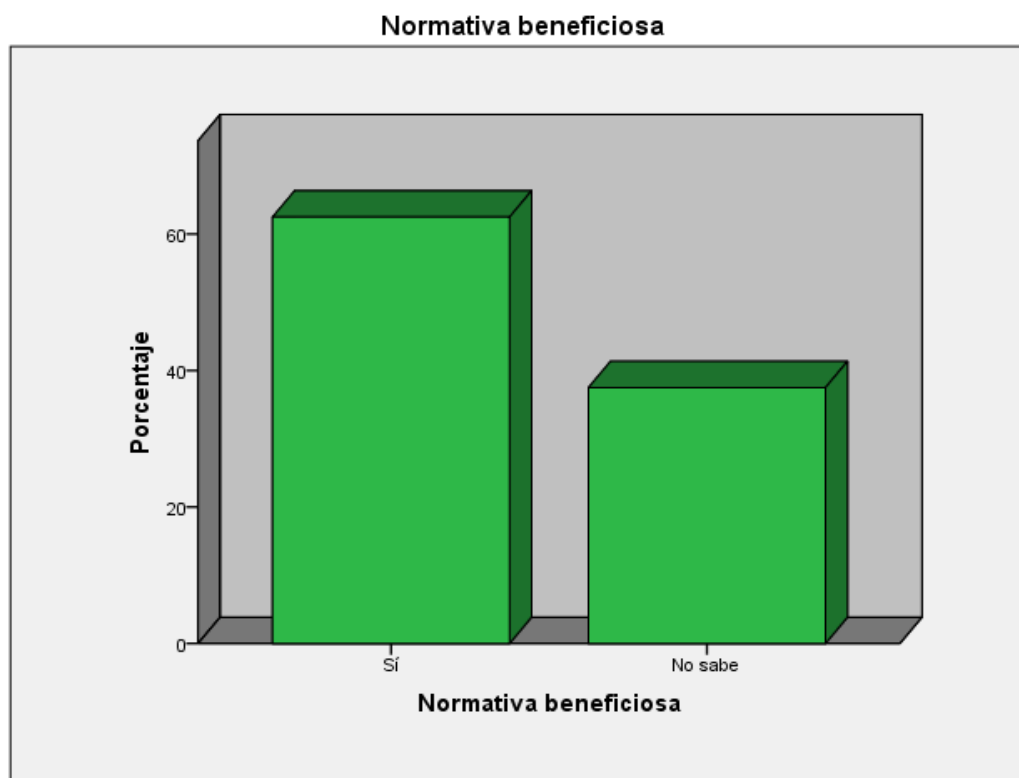
AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No me afectan	3	37,5	37,5	37,5
No sé si me afectan	1	12,5	12,5	50,0
Positivamente	4	50,0	50,0	100,0
Total	8	100,0	100,0	

Tabla 54: VETERINARIA. AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA**Figura 54:** VETERINARIA. AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA

NORMATIVA BENEFICIOSA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No sabe	3	37,5	37,5	37,5
Sí	5	62,5	62,5	100,0
Total	8	100,0	100,0	

Tabla 55: VETERINARIA. NORMATIVA BENEFICIOSA**Figura 55:** VETERINARIA. NORMATIVA BENEFICIOSA

CONOCEN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	5	62,5	62,5	62,5
Sí	3	37,5	37,5	100,0
Total	8	100,0	100,0	

Tabla 56: VETERINARIA. CONOCEN LA CNC

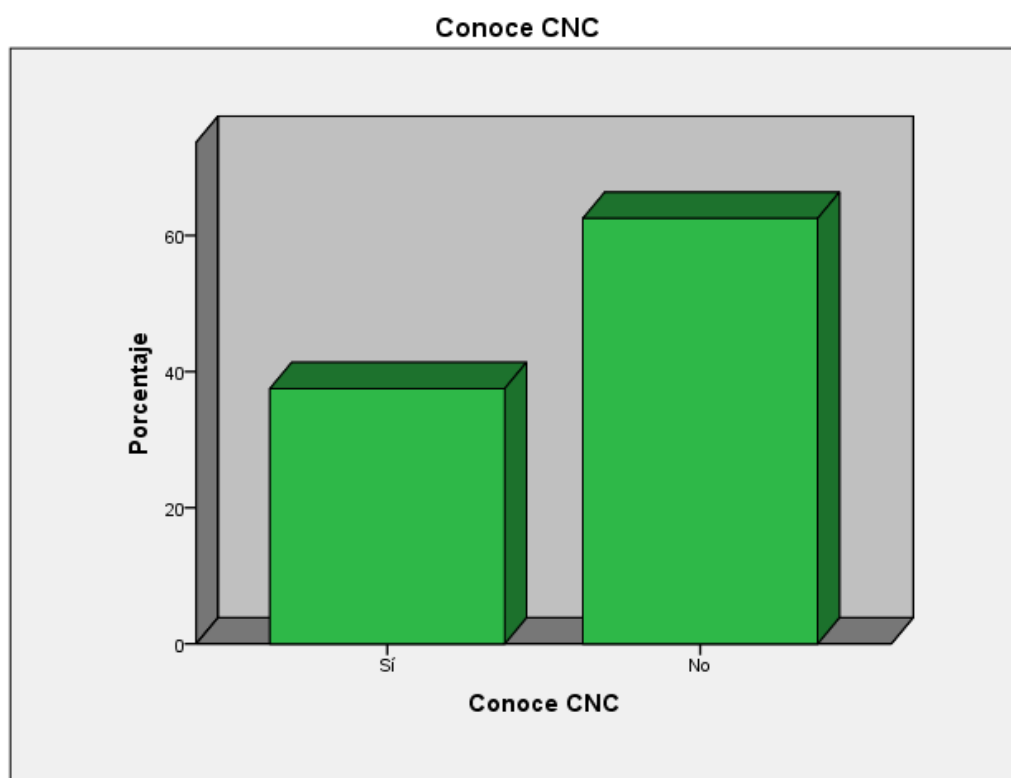


Figura 56: VETERINARIA. CONOCEN LA CNC

RECURSO ANTE DEFENSA CONSUMIDOR

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	2	25,0	25,0	25,0
Sí	6	75,0	75,0	100,0
Total	8	100,0	100,0	

Tabla 57: VETERINARIA. RECURSO ANTE DEFENSA CONSUMIDOR

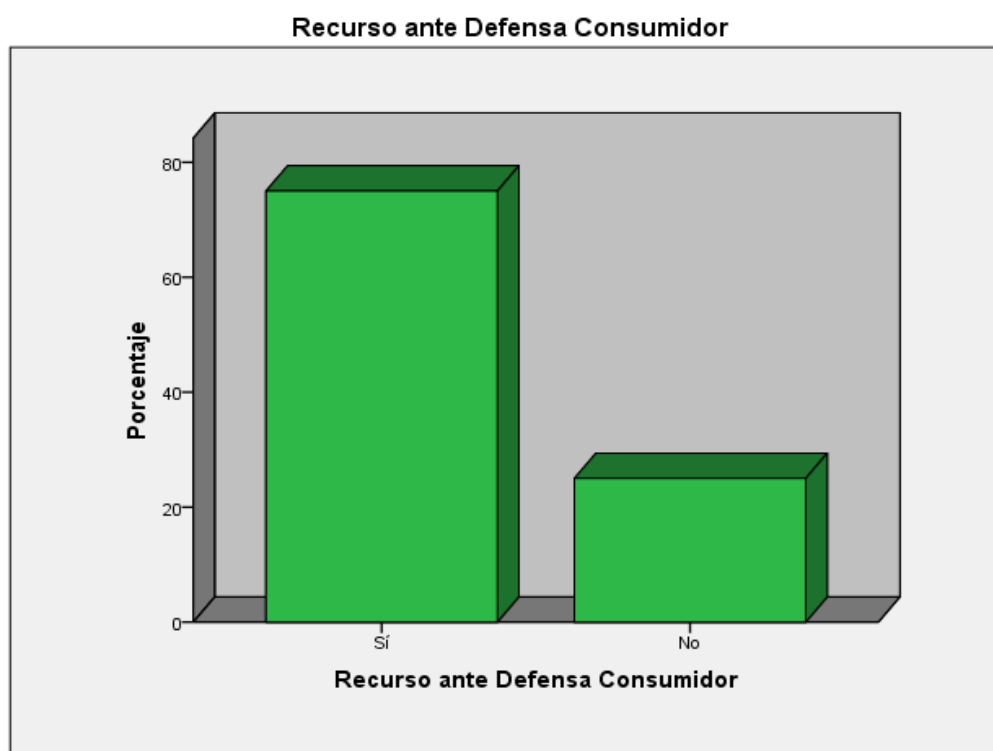
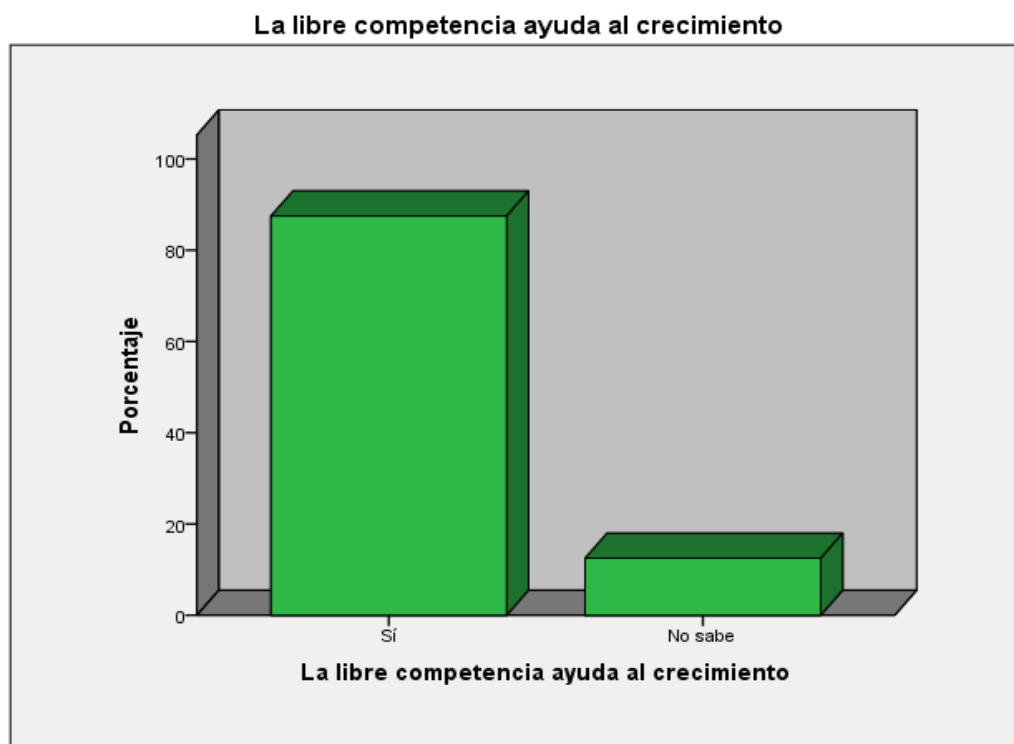


Figura 57: VETERINARIA. RECURSO ANTE DEFENSA CONSUMIDOR

LA LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No sabe	1	12,5	12,5	12,5
Sí	7	87,5	87,5	100,0
Total	8	100,0	100,0	

Tabla 58: VETERINARIA. LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO**Figura 58:** VETERINARIA. LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO

8.7.6. FARMACIA

De entre todos los colectivos es el más opuesto a la liberalización de los servicios profesionales con un 34,8%. A pesar de ello el 13% es favorable y el 43,5% es partidario con restricciones. Al 8,7% le es indiferente.

La mayoría desconoce la normativa española y europea sobre competencia (43,5%). Bien no se conoce (39,1%) o se conoce a medias (39,1%).

En proporciones similares los entrevistados de este sector desconocen la Ley Ómnibus (47,8%), han oído algo (39,1%) o la dominan (13%). Es, en este último caso también el colectivo menos informado sobre la Ley Ómnibus.

Apenas han leído algo sobre competencia, sólo el 8,7%.

Se muestran desconcertados acerca de si las normas sobre competencia les afectan positiva o negativamente. Al 26,1% no le afectan, el 34,8% no sabe si le afectan. El 26,1% piensa que le afectan negativamente y solamente el 13% ve positiva esta normativa.

En la misma línea, no ven con claridad si la normativa de la competencia puede resultar beneficiosa o perjudicial.

El 69,6% ignora la Comisión Nacional de la Competencia.

El 60,9% ha recurrido a un organismo de defensa del consumidor

En cambio a la hora de opinar acerca de si la libre competencia ayudará al crecimiento económico, el 56,5 opina que sí.

Da la impresión de que en este sector se produce una dicotomía entre la negativa a admitir las normas de libre competencia mercantil en el mundo farmacéutico y la conveniencia de aplicar estas normas en otros sectores. A continuación se exponen estos resultados:

PARTIDARIO DE LIBERALIZACIÓN

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Me es indiferente	2	8,7	8,7	8,7
No	8	34,8	34,8	43,5
Sí	3	13,0	13,0	56,5
Sí, con restricciones	10	43,5	43,5	100,0
Total	23	100,0	100,0	

Tabla 59: FARMACIA. PARTIDARIO LIBERALIZACIÓN

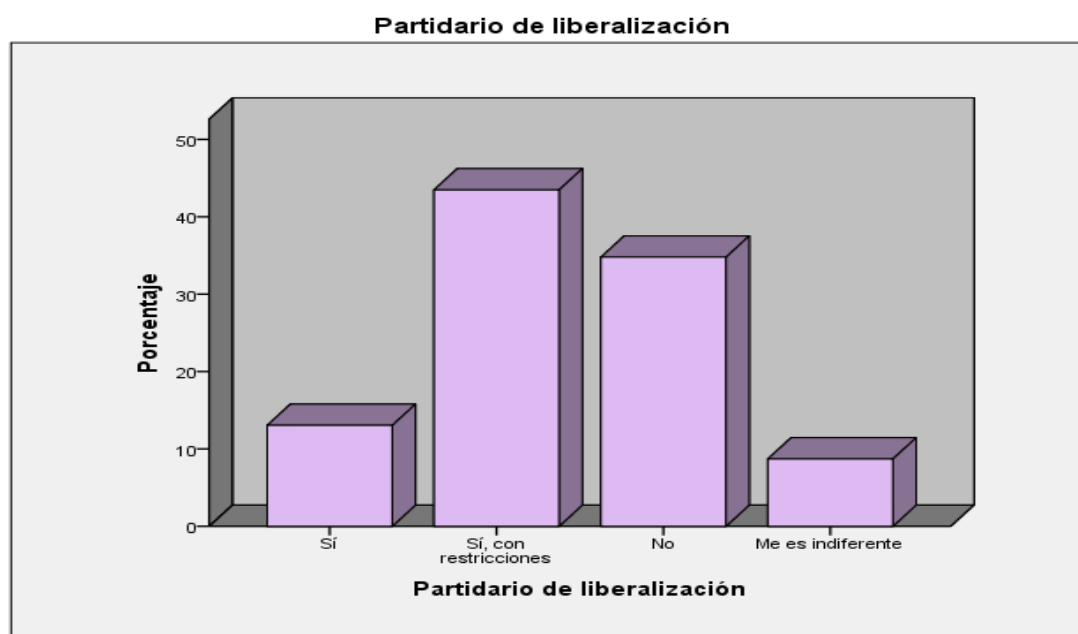
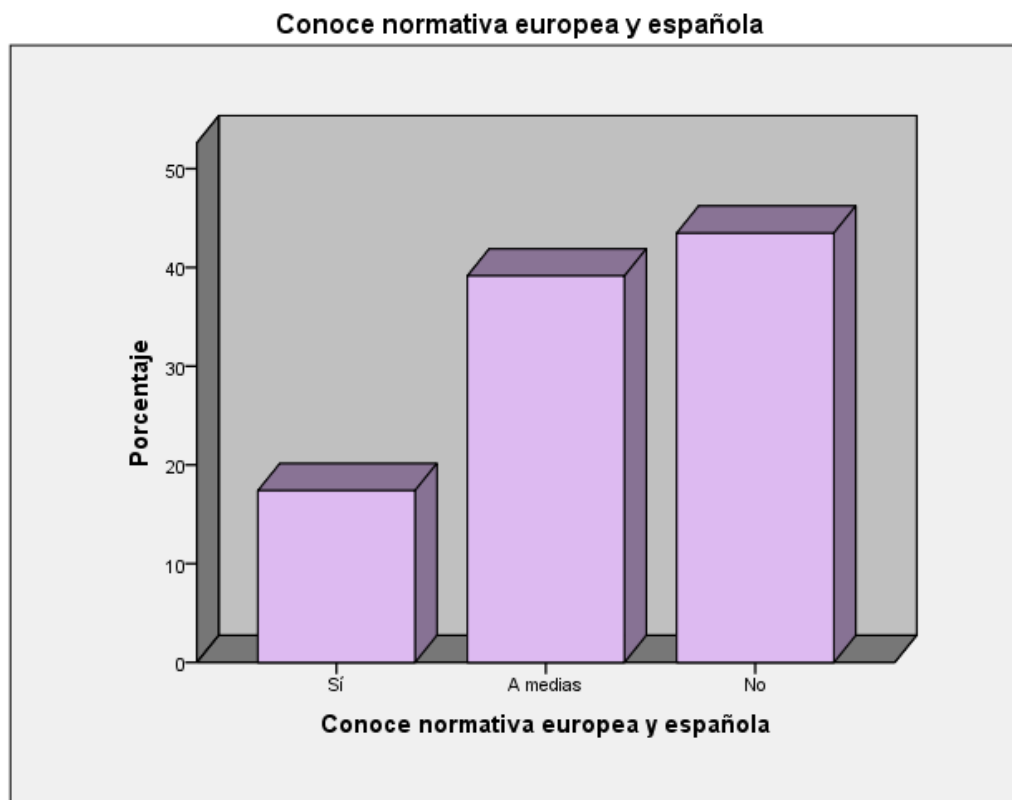


Figura 59: FARMACIA. PARTIDARIO LIBERALIZACIÓN

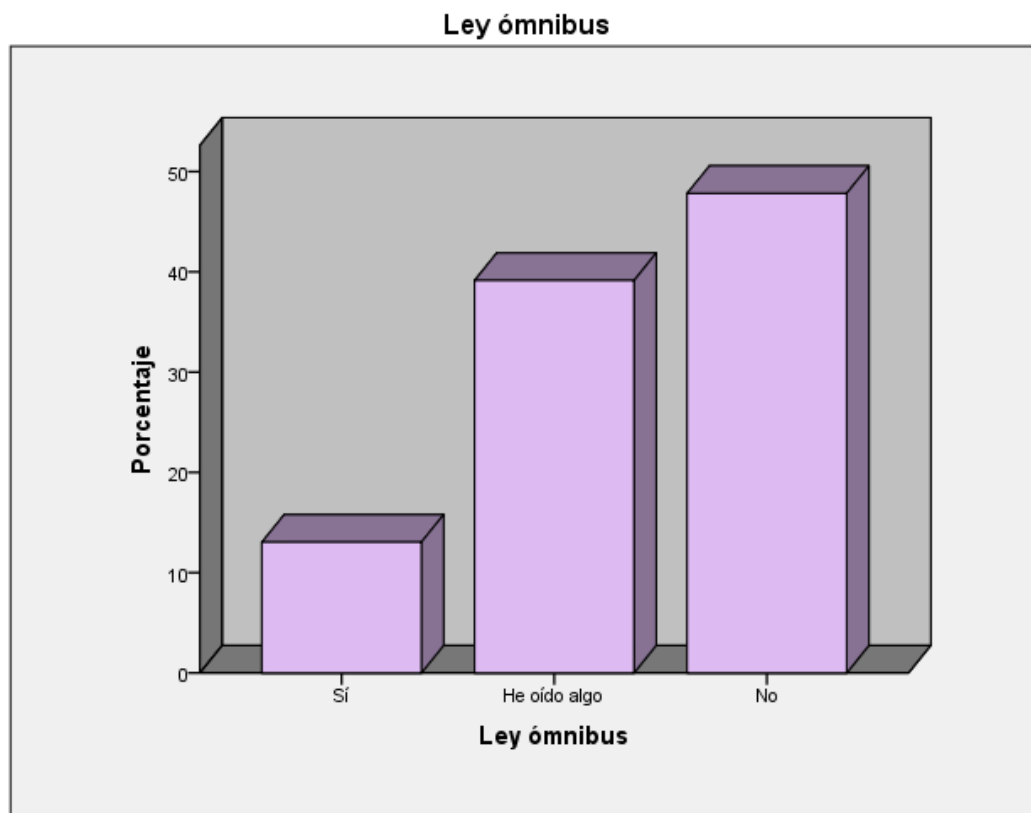
CONOCE NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
A medias	9	39,1	39,1	39,1
No	10	43,5	43,5	82,6
Sí	4	17,4	17,4	100,0
Total	23	100,0	100,0	

Tabla 60: FARMACIA. CONOCE NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA**Figura 60:** FARMACIA. CONOCE NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

LEY ÓMNIBUS

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
He oído algo	9	39,1	39,1	39,1
No	11	47,8	47,8	87,0
Sí	3	13,0	13,0	100,0
Total	23	100,0	100,0	

Tabla 61: FARMACIA. LEY ÓMNIBUS**Figura 61:** FARMACIA. LEY ÓMNIBUS

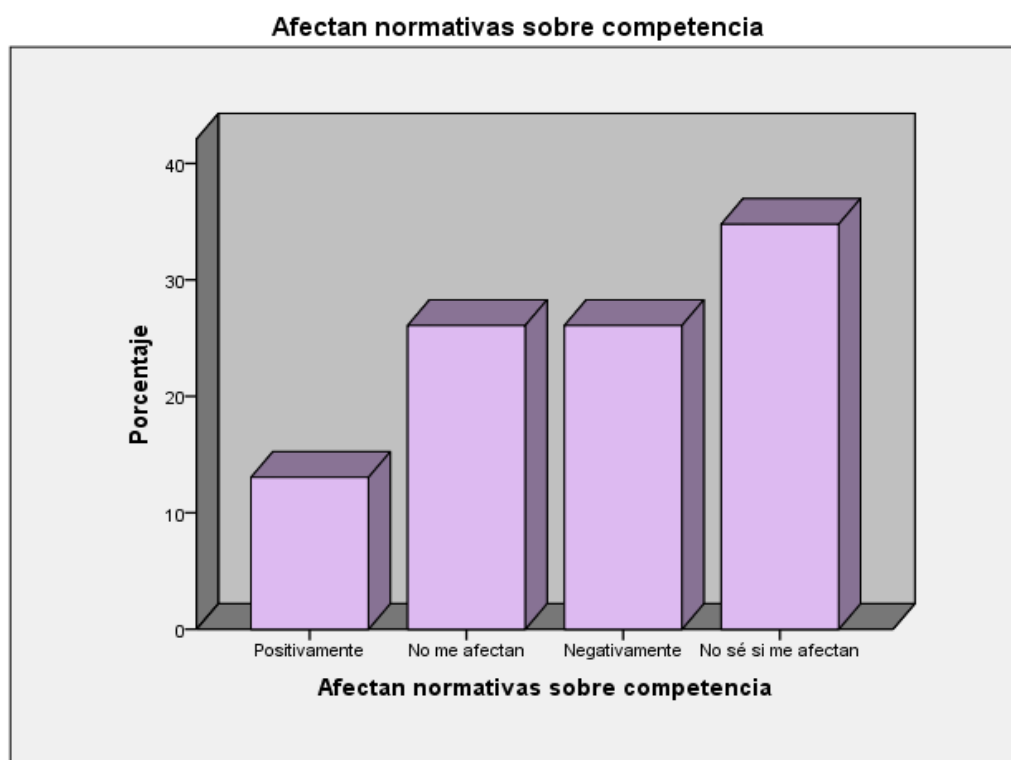
LECTURA SOBRE COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	21	91,3	91,3	91,3
Sí	2	8,7	8,7	100,0
Total	23	100,0	100,0	

Tabla 62: FARMACIA. LECTURA SOBRE COMPETENCIA**Figura 62:** FARMACIA. LECTURA SOBRE COMPETENCIA

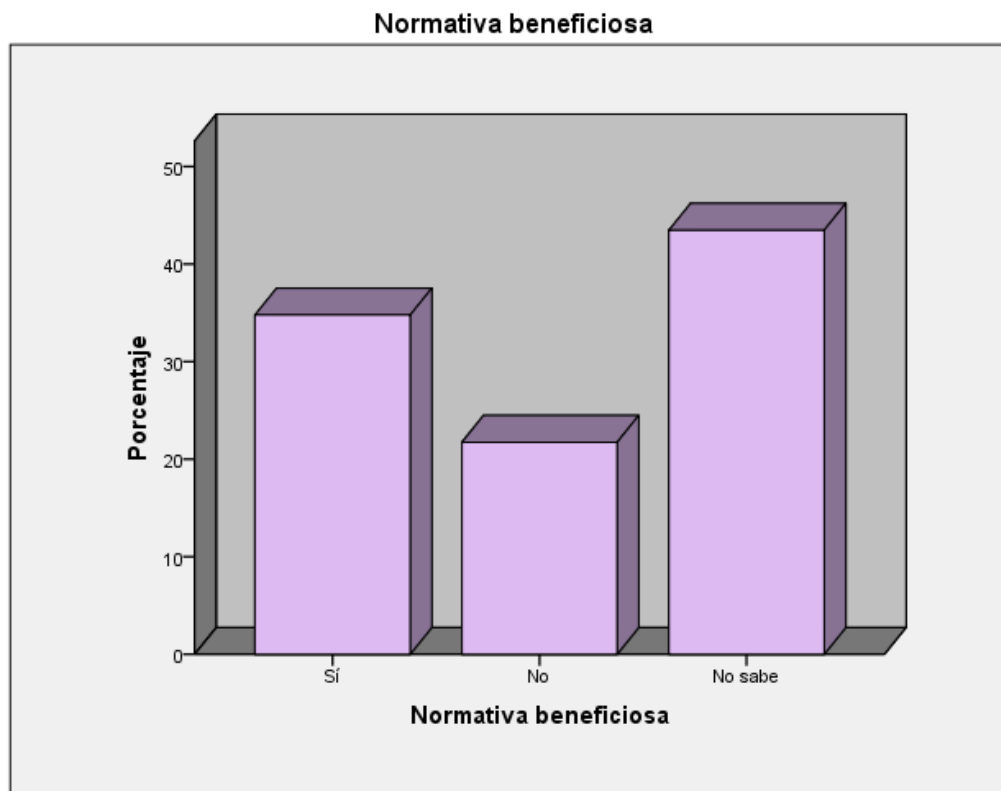
AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Negativamente	6	26,1	26,1	26,1
No me afectan	6	26,1	26,1	52,2
No sé si me afectan	8	34,8	34,8	87,0
Positivamente	3	13,0	13,0	100,0
Total	23	100,0	100,0	

Tabla 63: FARMACIA. AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA**Figura 63:** FARMACIA. AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA

NORMATIVA BENEFICIOSA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	5	21,7	21,7	21,7
No sabe	10	43,5	43,5	65,2
Sí	8	34,8	34,8	100,0
Total	23	100,0	100,0	

Tabla 64: FARMACIA. NORMATIVA BENEFICIOSA**Figura 64:** FARMACIA. NORMATIVA BENEFICIOSA

CONOCE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	16	69,6	69,6	69,6
Sí	7	30,4	30,4	100,0
Total	23	100,0	100,0	

Tabla 65: FARMACIA. CONOCE LA CNC

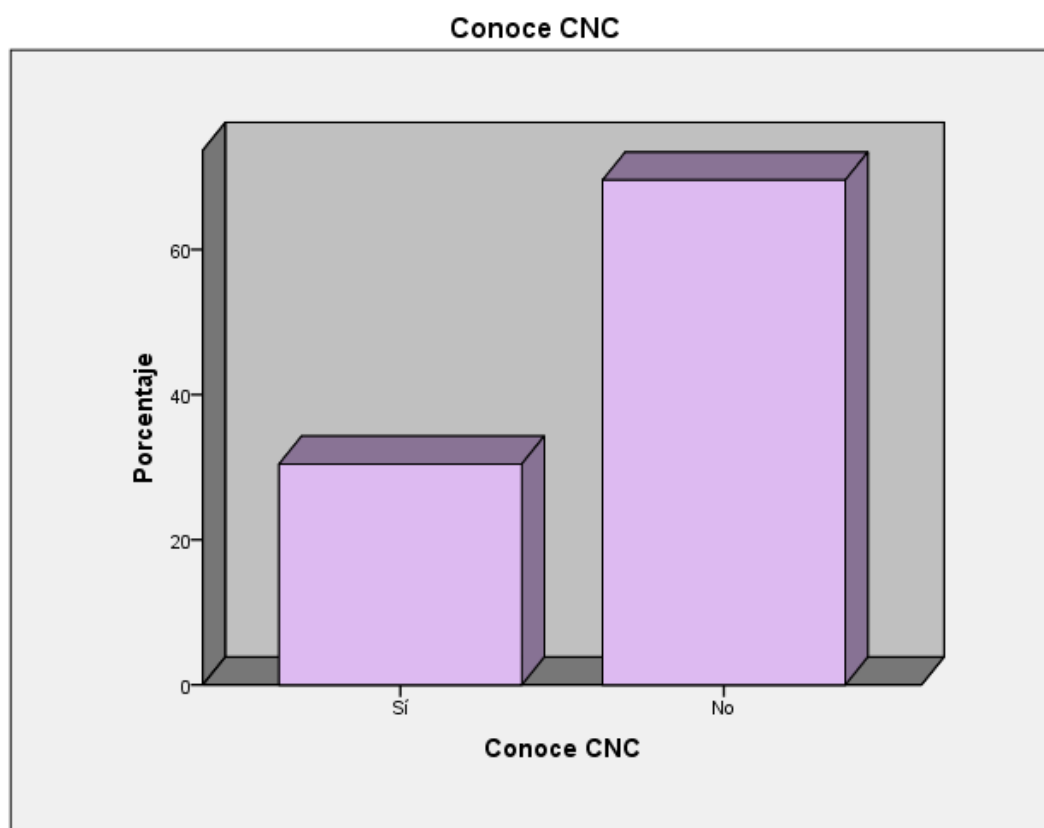
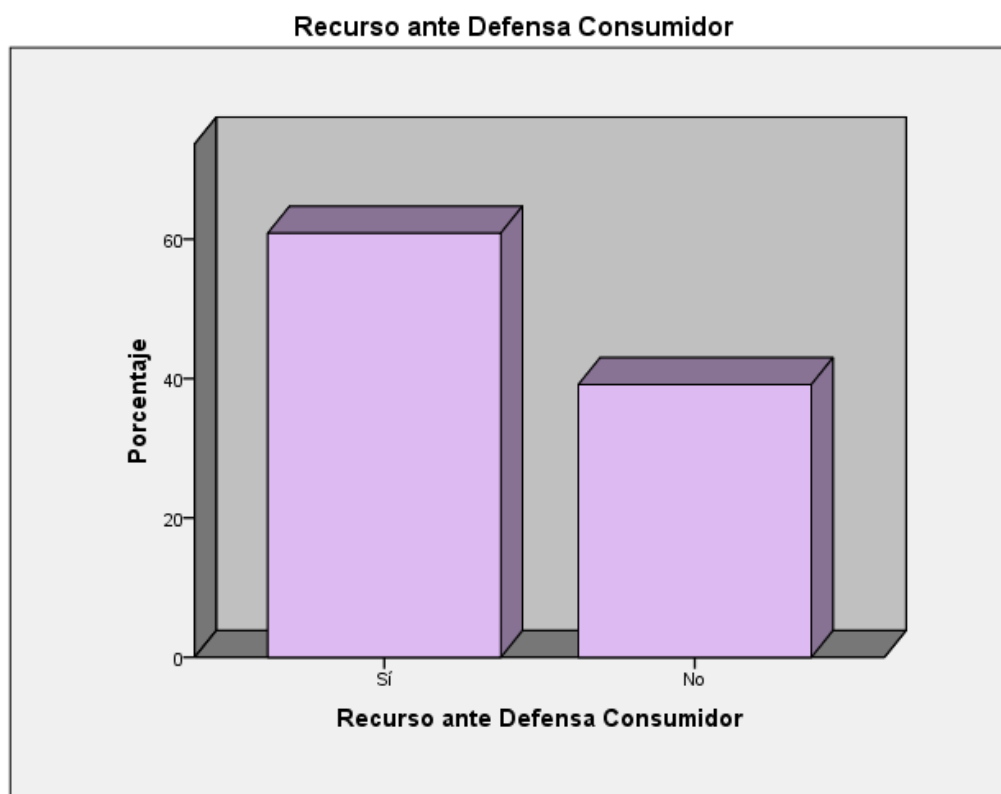


Figura 65: FARMACIA. CONOCE LA CNC

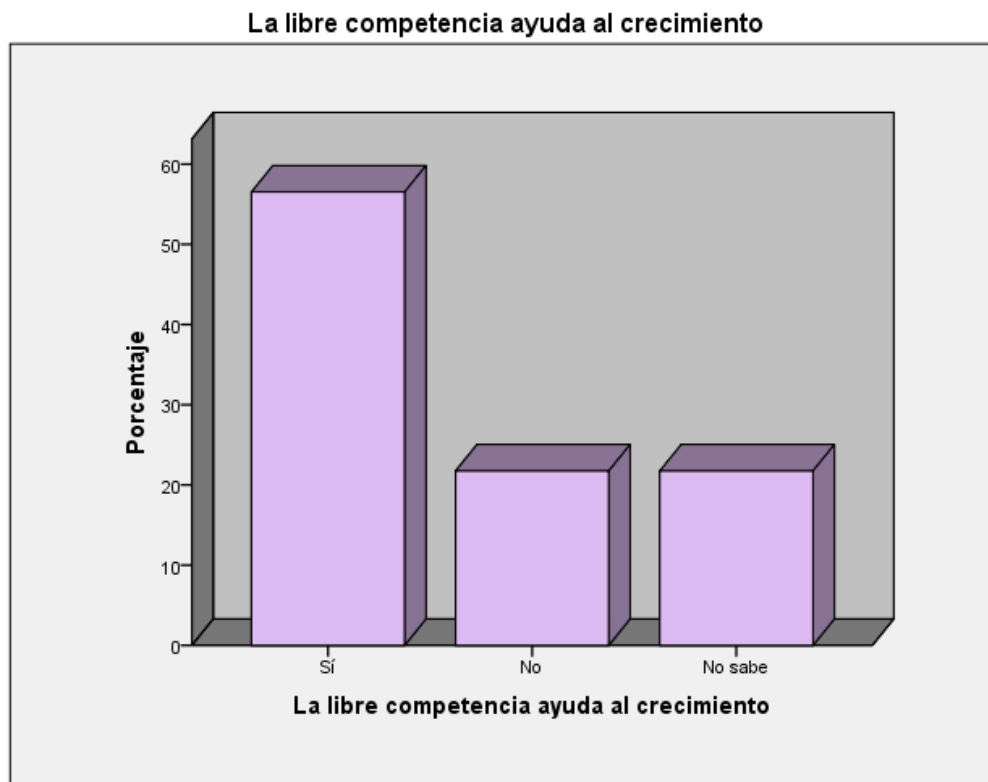
RECURSO ANTE DEFENSA CONSUMIDOR

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	9	39,1	39,1	39,1
Sí	14	60,9	60,9	100,0
Total	23	100,0	100,0	

Tabla 66: FARMACIA. RECURSO ANTE DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Figura 66:** FARMACIA. RECURSO ANTE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

LA LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	5	21,7	21,7	21,7
No sabe	5	21,7	21,7	43,5
Sí	13	56,5	56,5	100,0
Total	23	100,0	100,0	

Tabla 67: FARMACIA. LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO**Figura 67:** FARMACIA. LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO

8.8. EL JUICIO DE LOS GRUPOS PROFESIONALES Y LA OPINIÓN PÚBLICA

Un filtro que nos ha parecido interesante ha sido el de separar a los entrevistados en dos grupos de acuerdo con su preparación profesional. En este sentido he apartado a los expertos de los no profesionales.

El filtrado se ha hecho tomando como base las preguntas 3 y 4. En este sentido los resultados son los siguientes:

Como puede apreciarse más adelante, las diferencias entre uno y otro grupo son mínimas.

Por parte de los profesionales, el 24,3% apoya la liberalización de los servicios profesionales, el 50,5% la apoya con restricciones, el 12,6% no la apoya y al 9,7% le es indiferente.

Si establecemos una comparativa con la opinión pública de los usuarios, estos se manifiestan un poco más a favor de la liberalización, pero sus opiniones tampoco están muy alejadas de los anteriores. El 28,7% defiende la liberalización sin condiciones, el 37,5% con restricciones, el 17,4% no la apoya y al 13,1% le es indiferente.

Los usuarios aventajan muy poco a los profesionales tanto en el porcentaje a favor como en contra de la liberalización de los servicios, y a su vez muestran algo más de indiferencia.

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Los conocimientos sobre las normativas española y europea sobre competencia varían, asimismo, muy poco; el desconocimiento es mayoritario en ambos grupos.

Lo mismo ocurre con el conocimiento de la Ley Ómnibus, no llegan a la cuarta parte los entrevistados que la conocen en uno u otro sector.

En lo tocante a las lecturas sobre competencia, el grupo de profesionales ha leído un poco más que los no profesionales (34% frente al 23,2%).

En contra de lo que podría suponerse y de lo razonable en circunstancias normales, puesto que la práctica de la competencia suele beneficiar más a los consumidores que a los productores, es algo mayor el porcentaje de profesionales que piensan que la competencia les es favorable(28,2%) que el porcentaje de usuarios (21,3%).

Aunque la variable dominante es no saber si las normas liberalizadoras favorecen la competencia, los dos grupos coinciden en considerarlas beneficiosas en igual porcentaje.

Acerca de la Comisión Nacional de la Competencia, el número de usuarios que tiene conocimiento de ella es menor que el número de profesionales.

Los profesionales han recurrido más veces que los usuarios a organismos de defensa del consumidor. Probablemente la razón sea que están mejor informados sobre el funcionamiento de las instituciones de reclamación.

Por abrumadora mayoría, tanto profesionales como usuarios consideran que la libre competencia ayuda al desarrollo económico.

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Todas estas observaciones se amplían en las tablas y gráficos siguientes:

PARTIDARIO DE LIBERALIZACIÓN

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Me es indiferente	10	9,7	9,7	9,7
No	13	12,6	12,6	22,3
No contesta	3	2,9	2,9	25,2
Sí	25	24,3	24,3	49,5
Sí, con restricciones	52	50,5	50,5	100,0
Total	103	100,0	100,0	

Tabla 68: JUICIO PROFESIONALES. PARTIDARIO LIBERALIZACIÓN

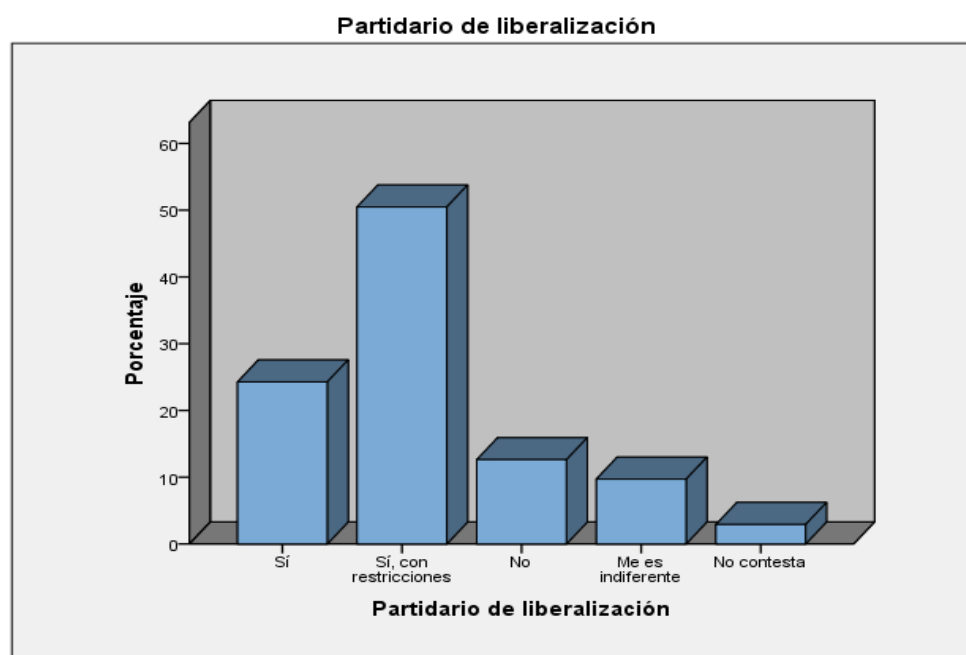


Figura 68: JUICIO PROFESIONALES. PARTIDARIO LIBERALIZACIÓN

CONOCE NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
A medias	34	33,0	33,0	33,0
No	53	51,5	51,5	84,5
Sí	16	15,5	15,5	100,0
Total	103	100,0	100,0	

Tabla 69: JUICIO PROFESIONALES. CONOCE NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

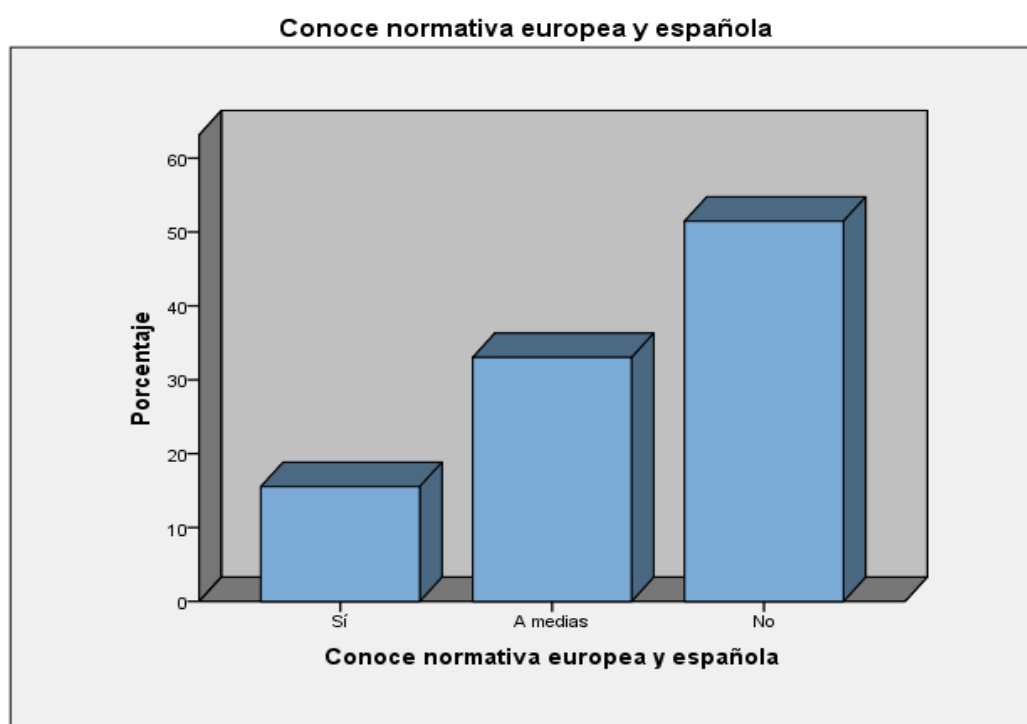
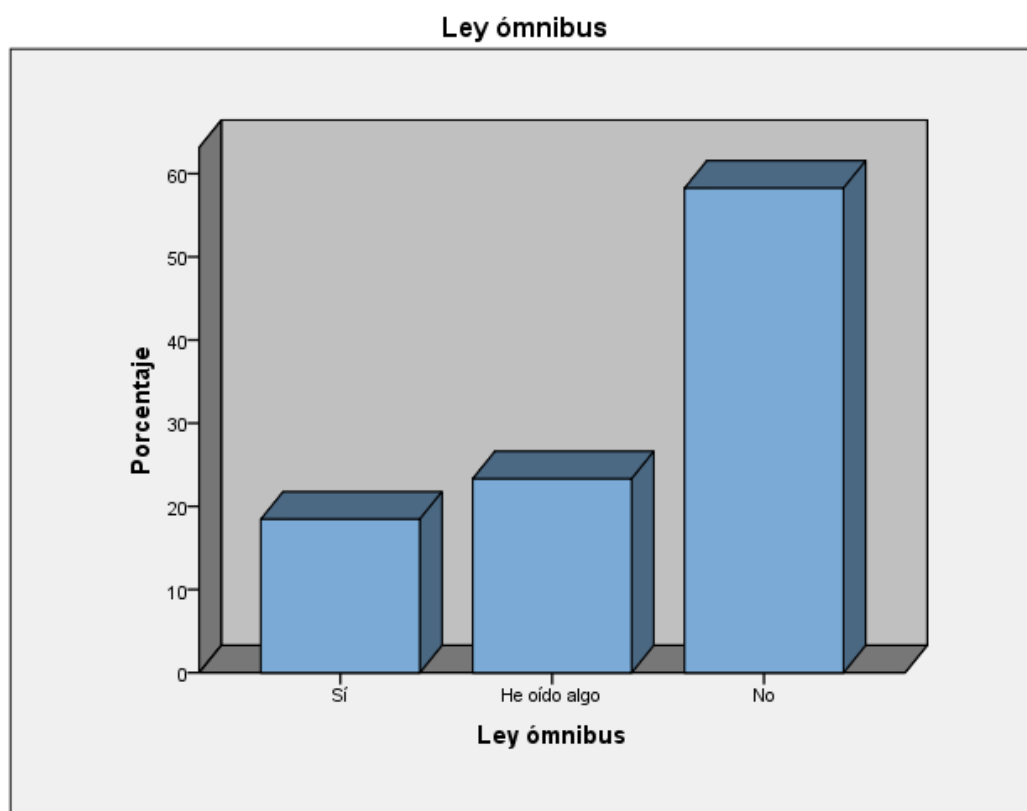


Figura 69: JUICIO PROFESIONALES. CONOCE NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

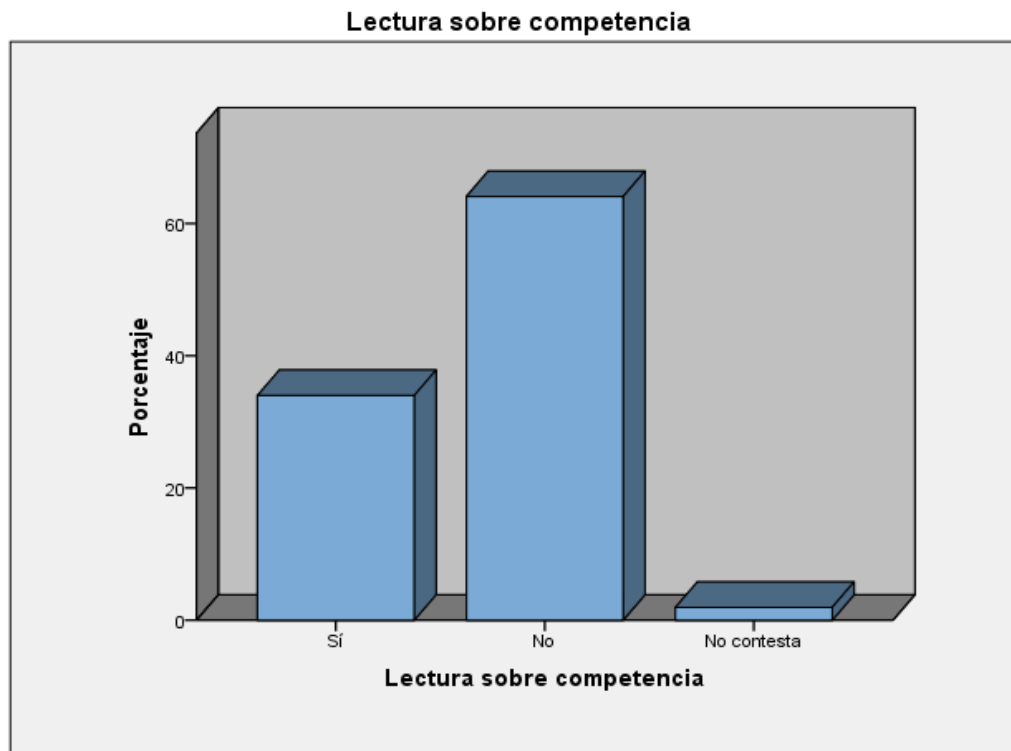
LEY ÓMNIBUS

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
He oído algo	24	23,3	23,3	23,3
No	60	58,3	58,3	81,6
Sí	19	18,4	18,4	100,0
Total	103	100,0	100,0	

Tabla 70: JUICIO PROFESIONALES. LEY ÓMNIBUS**Figura 70:** JUICIO PROFESIONALES. LEY ÓMNIBUS

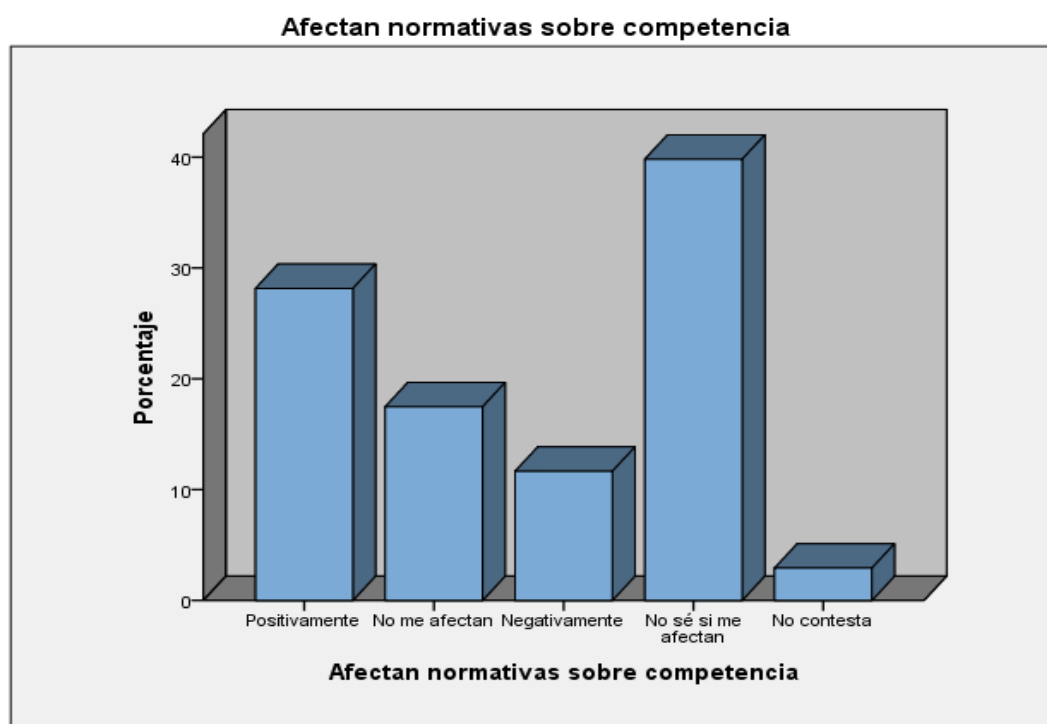
LECTURA SOBRE COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	66	64,1	64,1	64,1
No contesta	2	1,9	1,9	66,0
Sí	35	34,0	34,0	100,0
Total	103	100,0	100,0	

Tabla 71: JUICIO PROFESIONALES. LECTURA SOBRE COMPETENCIA**Figura 71:** JUICIO PROFESIONALES. LECTURA SOBRE COMPETENCIA

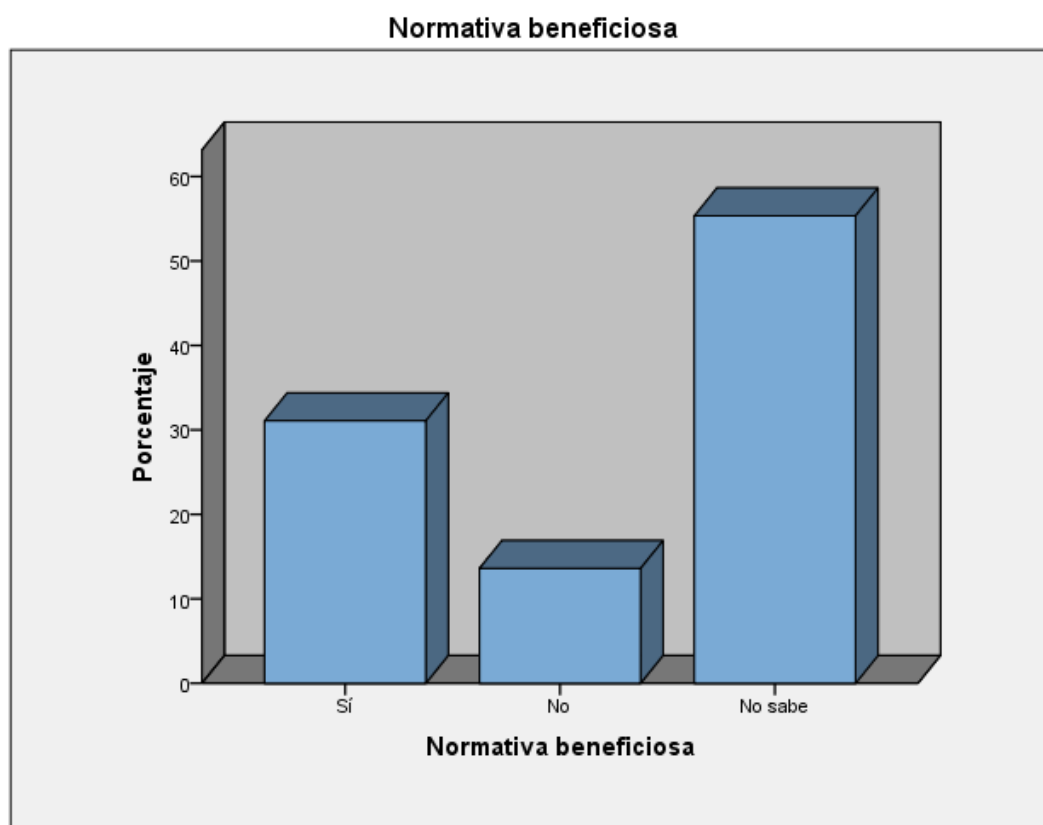
AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Negativamente	12	11,7	11,7	11,7
No contesta	3	2,9	2,9	14,6
No me afectan	18	17,5	17,5	32,0
No sé si me afectan	41	39,8	39,8	71,8
Positivamente	29	28,2	28,2	100,0
Total	103	100,0	100,0	

Tabla 72: JUICIO PROFESIONALES. AFECTAN NORMAS SOBRE COMPETENCIA**Figura 72:** JUICIO PROFESIONALES. AFECTAN NORMAS SOBRE COMPETENCIA

NORMATIVA BENEFICIOSA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	14	13,6	13,6	13,6
No sabe	57	55,3	55,3	68,9
Sí	32	31,1	31,1	100,0
Total	103	100,0	100,0	

Tabla 73: JUICIO PROFESIONALES. NORMATIVA BENEFICIOSA**Figura 73:** JUICIO PROFESIONALES. NORMATIVA BENEFICIOSA

CONOCE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	52	50,5	50,5	50,5
Sí	51	49,5	49,5	100,0
Total	103	100,0	100,0	

Tabla 74: JUICIO PROFESIONALES. CONOCE

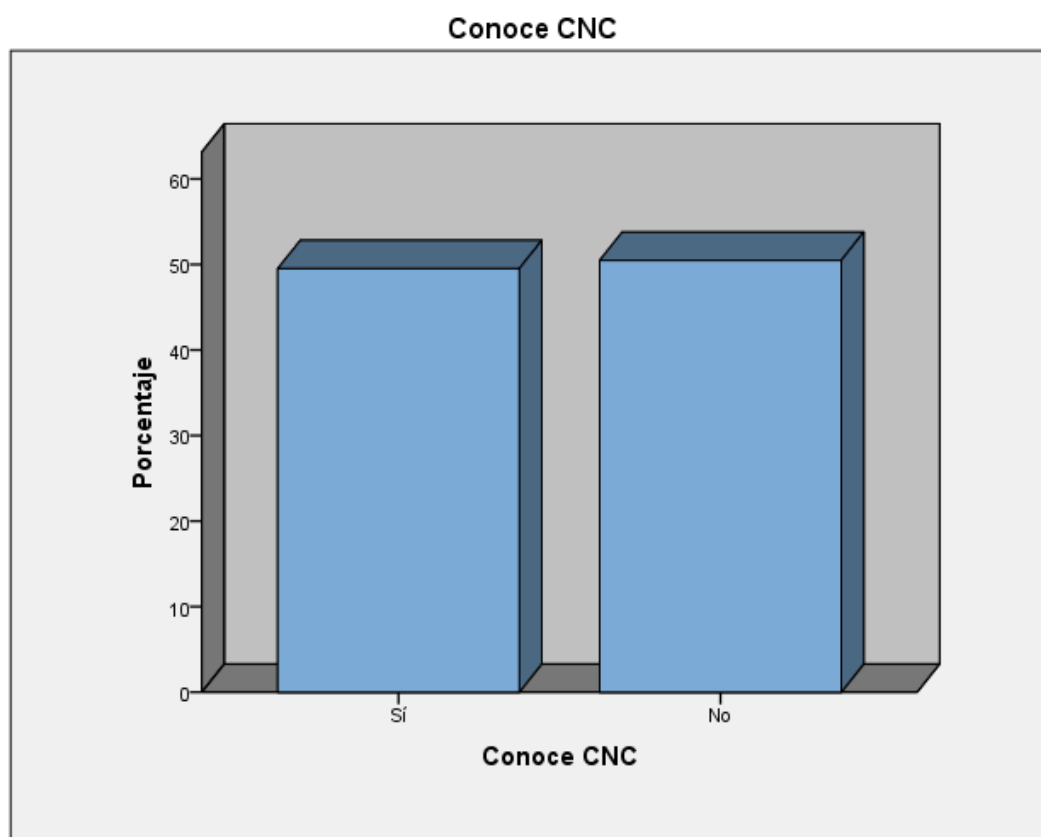


Figura 74: JUICIO PROFESIONALES. CONOCE CNC

RECURSO ANTE DEFENSA CONSUMIDOR

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	49	47,6	47,6	47,6
Sí	54	52,4	52,4	100,0
Total	103	100,0	100,0	

Tabla 75: JUICIO PROFESIONALES. RECURSO ANTE DEFENSA CONSUMIDOR

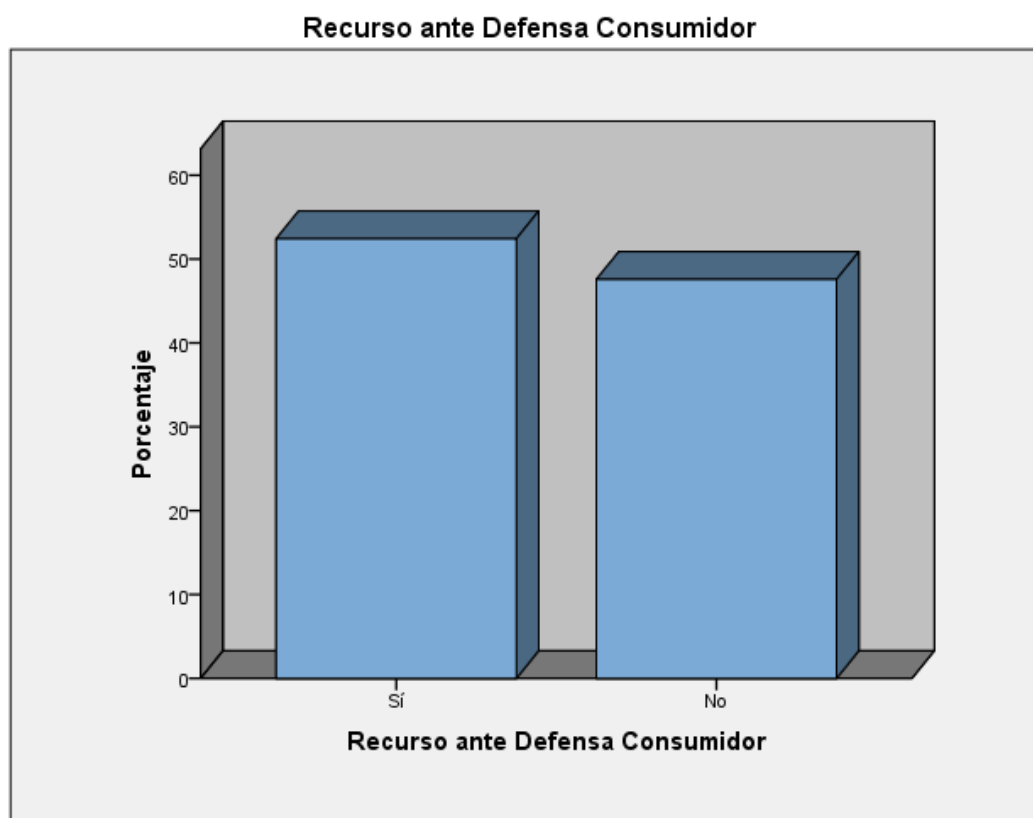
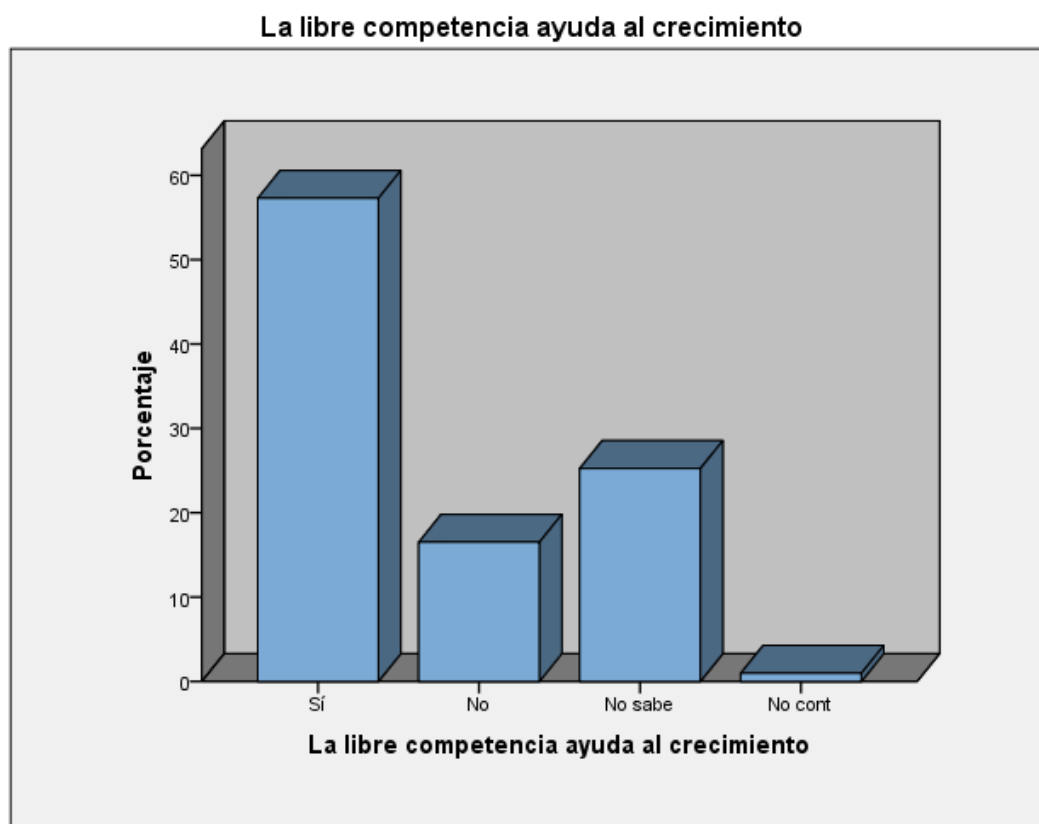


Figura 75: JUICIO PROFESIONALES. RECURSO ANTE DEFENSA CONSUMIDOR

LA LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	17	16,5	16,5	16,5
No contesta	1	1,0	1,0	17,5
No sabe	26	25,2	25,2	42,7
Sí	59	57,3	57,3	100,0
Total	103	100,0	100,0	

Tabla 76: JUICIO PROFESIONALES. LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO**Figura 76:** JUICIO PROFESIONALES. LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO

LA OPINIÓN PÚBLICA

PARTIDARIO DE LA LIBERALIZACIÓN

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Me es indiferente	43	13,1	13,1	13,1
No	57	17,4	17,4	30,5
No contesta	11	3,4	3,4	33,8
Sí	94	28,7	28,7	62,5
Sí, con restricciones	123	37,5	37,5	100,0
Total	328	100,0	100,0	

Tabla 77: OPINIÓN PÚBLICA. PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN

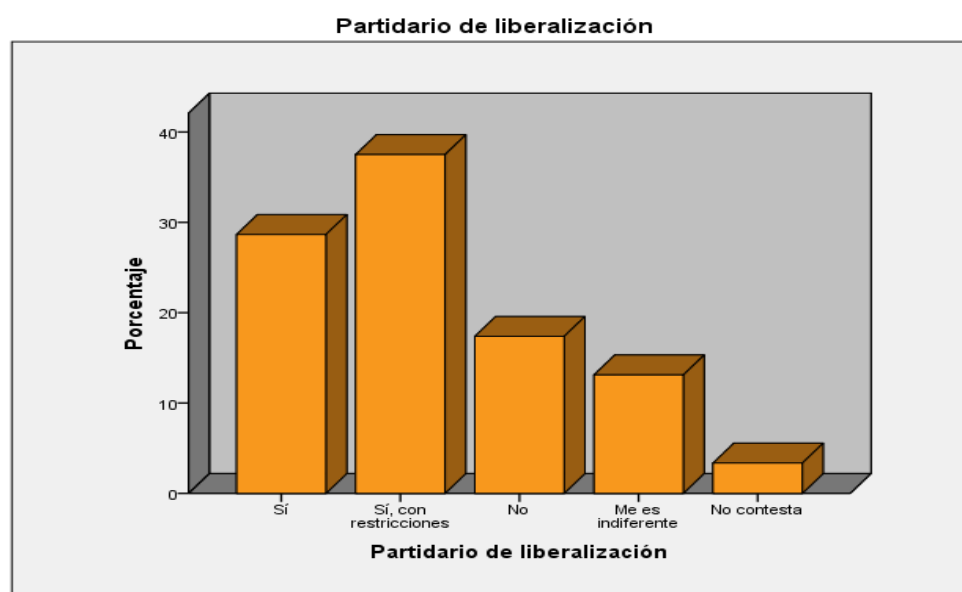
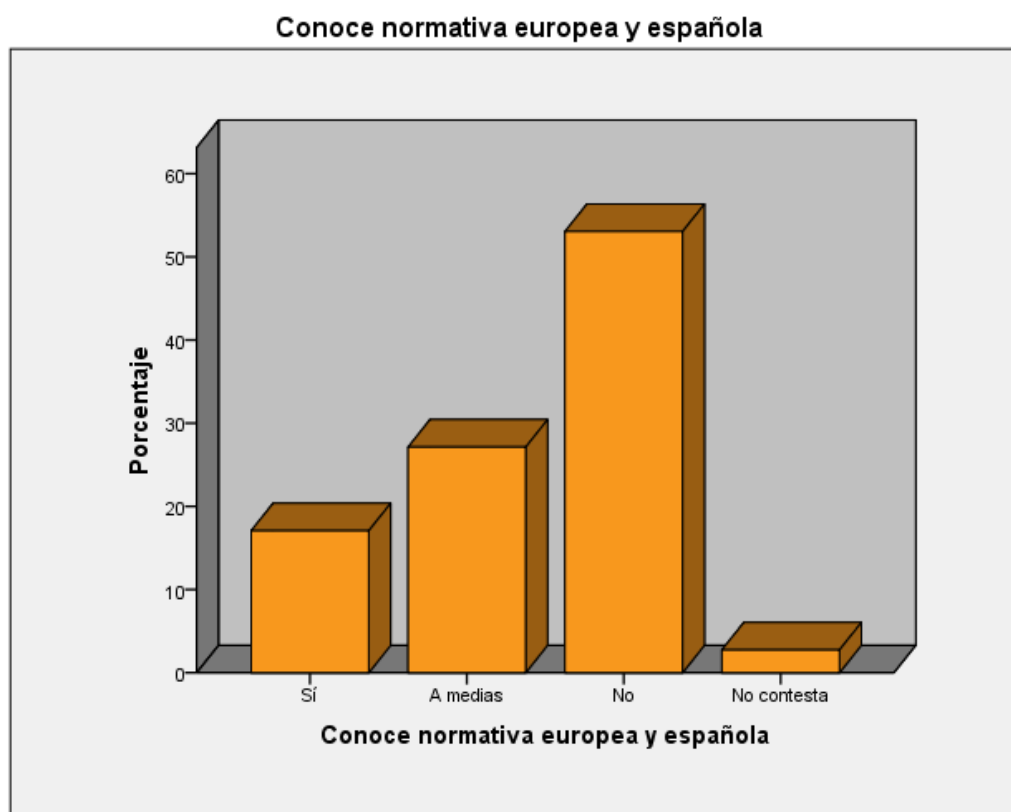


Figura 77: OPINIÓN PÚBLICA. PARTIDARIOS DE LA LIBERALIZACIÓN

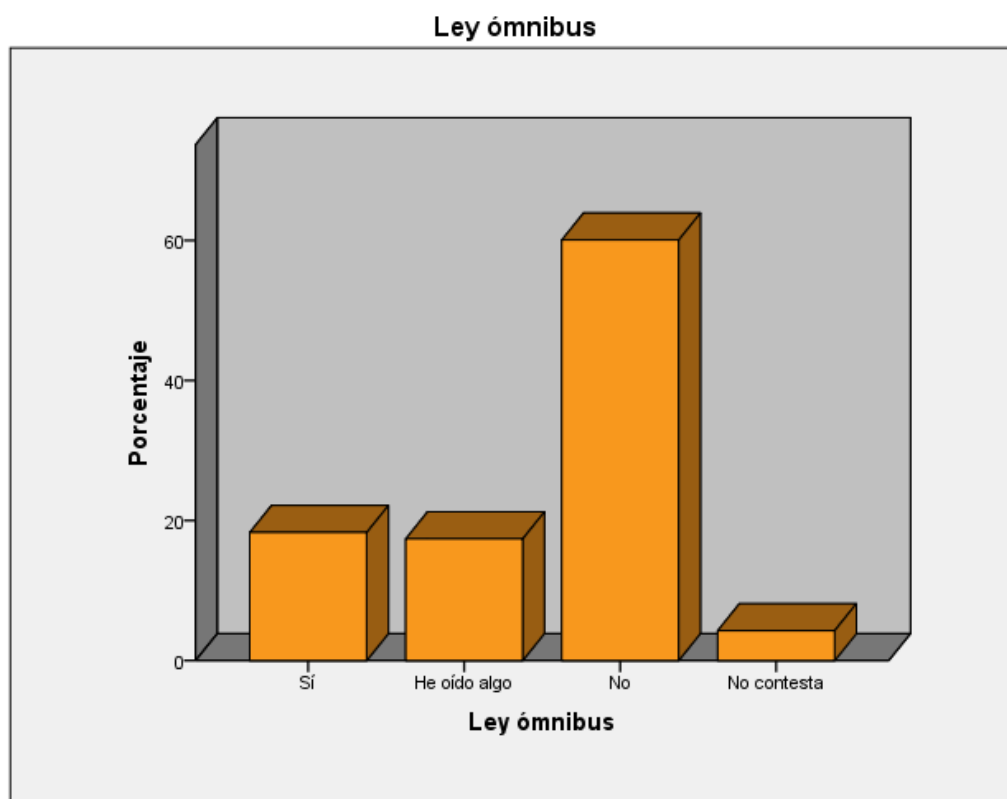
CONOCE NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
A medias	89	27,1	27,1	27,1
No	174	53,0	53,0	80,2
No contesta	9	2,7	2,7	82,9
Sí	56	17,1	17,1	100,0
Total	328	100,0	100,0	

Tabla 78: OPINIÓN PÚBLICA. CONOCE NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA**Figura 78:** OPINIÓN PÚBLICA. CONOCE NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

LEY ÓMNIBUS

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
He oído algo	57	17,4	17,4	17,4
No	197	60,1	60,1	77,4
No contesta	14	4,3	4,3	81,7
Sí	60	18,3	18,3	100,0
Total	328	100,0	100,0	

Tabla 79: OPINIÓN PÚBLICA. LEY ÓMNIBUS**Figura 79:** OPINIÓN PÚBLICA. LEY ÓMNIBUS

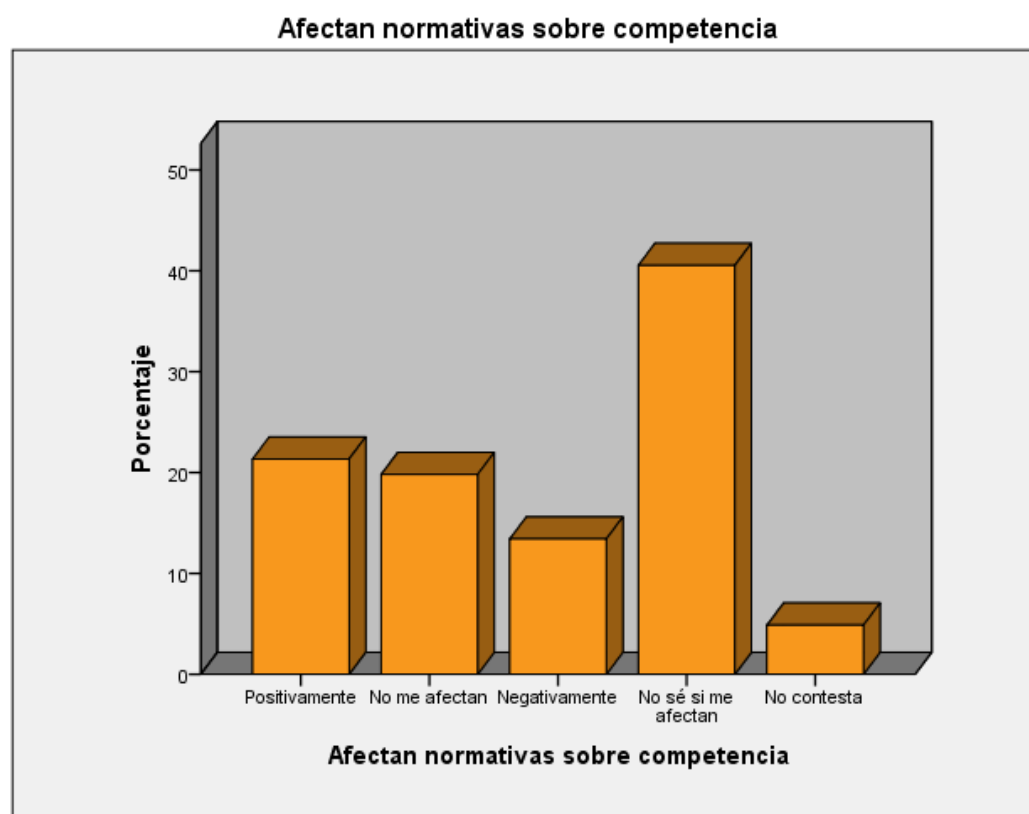
LECTURA SOBRE COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	242	73,8	73,8	73,8
No contesta	10	3,0	3,0	76,8
Sí	76	23,2	23,2	100,0
Total	328	100,0	100,0	

Tabla 80: OPINIÓN PÚBLICA. LECTURA SOBRE COMPETENCIA**Figura 80:** OPINIÓN PÚBLICA. LECTURA SOBRE COMPETENCIA

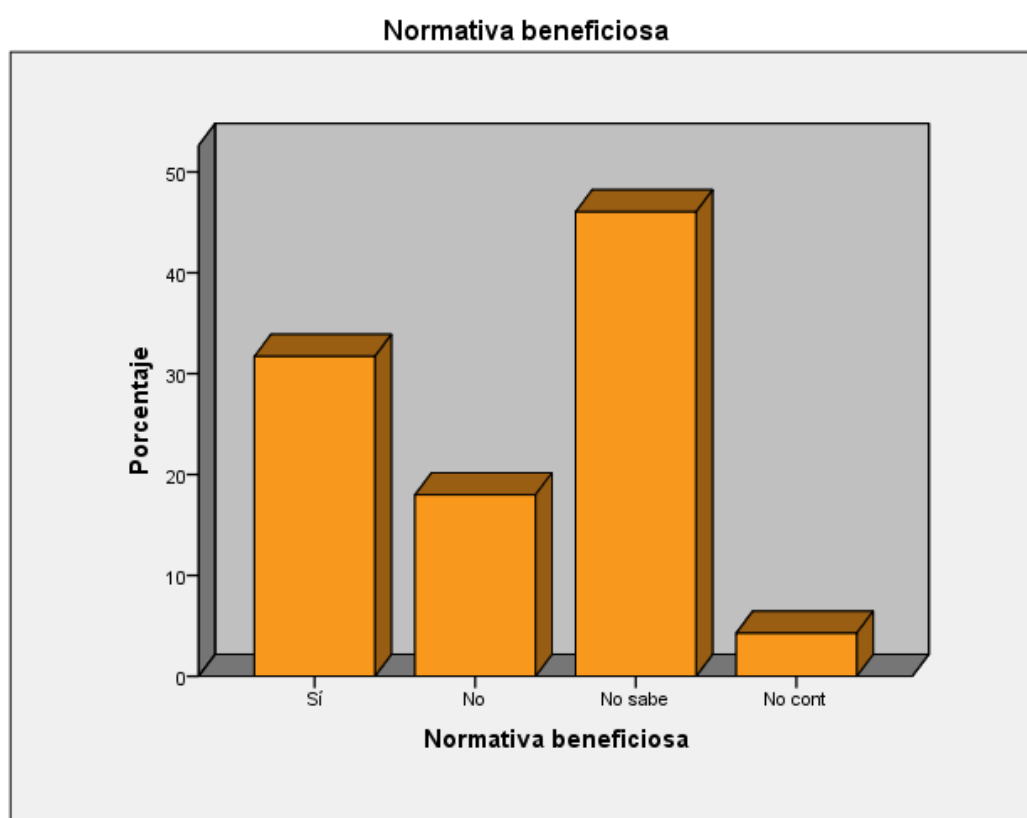
AFECTAN NORMATIVAS SOBRE COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Negativamente	44	13,4	13,4	13,4
No contesta	16	4,9	4,9	18,3
No me afectan	65	19,8	19,8	38,1
No sé si me afectan	133	40,5	40,5	78,7
Positivamente	70	21,3	21,3	100,0
Total	328	100,0	100,0	

Tabla 81: OPINIÓN PÚBLICA. AFECTAN NORMATIVA SOBRE COMPETENCIA**Figura 81:** OPINIÓN PÚBLICA. AFECTAN NORMATIVA SOBRE COMPETENCIA

NORMATIVA BENEFICIOSA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	59	18,0	18,0	18,0
No contesta	14	4,3	4,3	22,3
No sabe	151	46,0	46,0	68,3
Sí	104	31,7	31,7	100,0
Total	328	100,0	100,0	

Tabla 82: OPINIÓN PÚBLICA. NORMATIVA BENEFICIOSA**Figura 82:** OPINIÓN PÚBLICA. NORMATIVA BENEFICIOSA

CONOCE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	218	66,5	66,5	66,5
Sí	110	33,5	33,5	100,0
Total	328	100,0	100,0	

Tabla 83: OPINIÓN PÚBLICA. CONOCE CNC

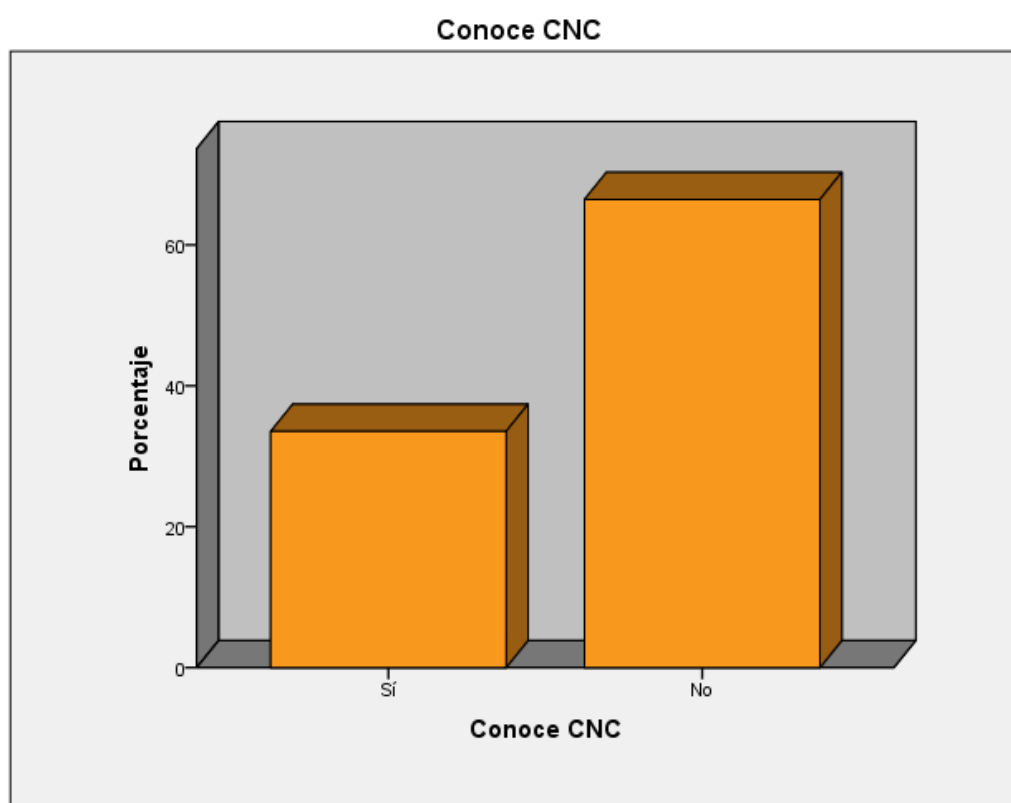


Figura 83: OPINIÓN PÚBLICA. CONOCE CNC

RECURSO ANTE DEFENSA CONSUMIDOR

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	195	59,5	59,5	59,5
Sí	133	40,5	40,5	100,0
Total	328	100,0	100,0	

Tabla 84: OPINIÓN PÚBLICA. RECURSO ANTE DEFENSA CONSUMIDOR

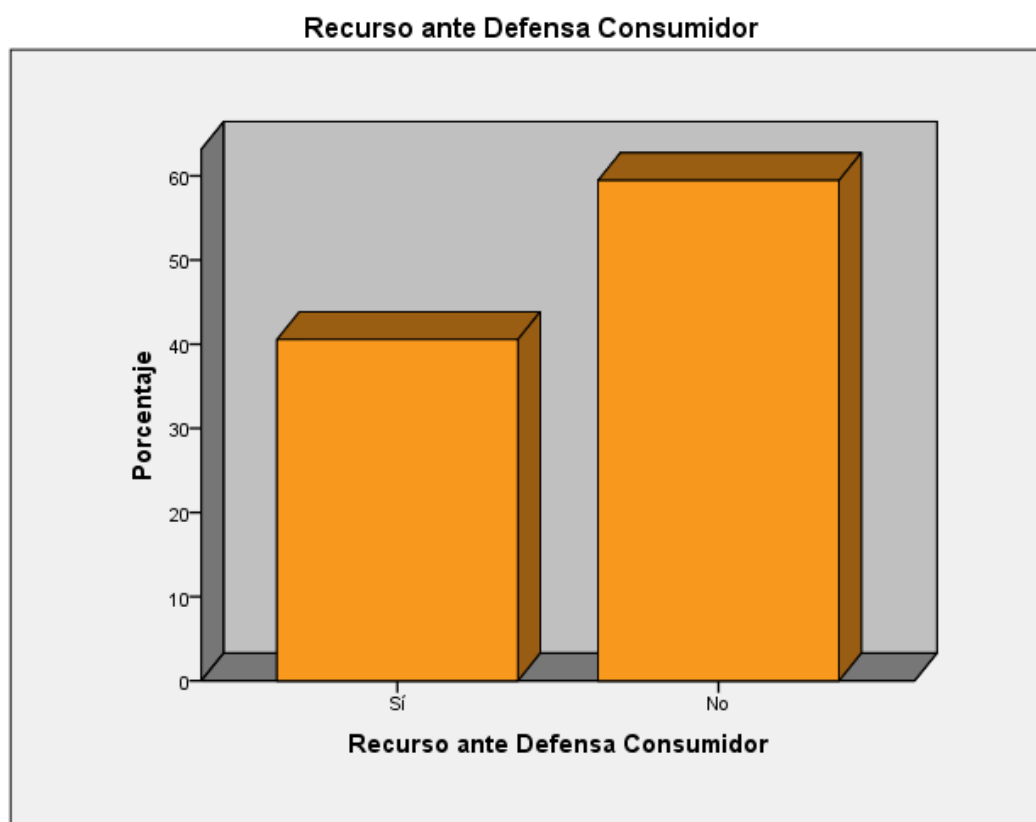


Figura 84: OPINIÓN PÚBLICA. RECURSO ANTE DEFENSA CONSUMIDOR

LA LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	54	16,5	16,5	16,5
No contesta	10	3,0	3,0	19,5
No sabe	84	25,6	25,6	45,1
Sí	180	54,9	54,9	100,0
Total	328	100,0	100,0	

Tabla 85: OPINIÓN PÚBLICA. LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO

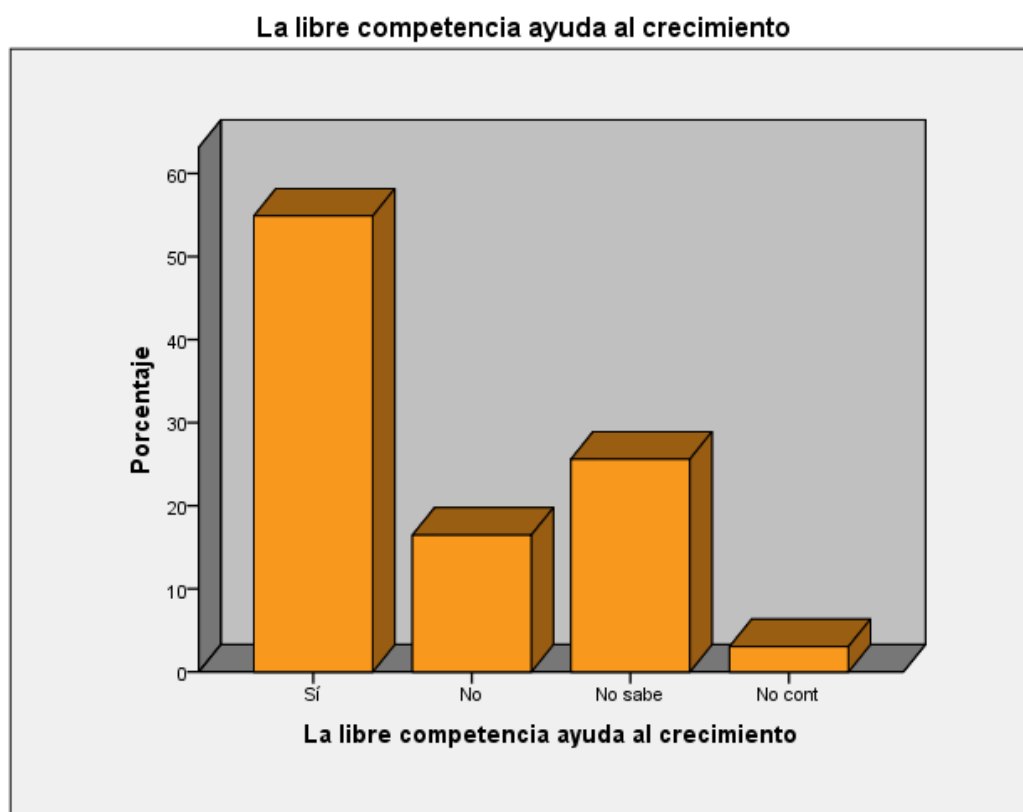


Figura 85: OPINIÓN PÚBLICA. LIBRE COMPETENCIA AYUDA AL CRECIMIENTO

8.9. TABLAS DE CONTINGENCIA – CHI CUADRADO (χ^2) – RESIDUOS CORREGIDOS

Las tablas de contingencia cruzan datos cualitativos, en este caso la selección de cruces realizados ha sido la siguiente:

Sexo * Partidario de liberalización

Sexo * Conoce normativa europea y española

Sexo * Ley ómnibus

Sexo * Lectura sobre competencia

Sexo * Afectan normativas sobre competencia

Sexo * Normativa beneficiosa

Sexo * Conoce CNC

Sexo * Recurso ante Defensa Consumidor

Sexo * La libre competencia ayuda al crecimiento

Sexo * Internet

Sexo * Televisión

Sexo * Prensa

Sexo * Libros

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Sexo * Conversaciones con otras personas

Sexo * Legislación

Edad * Partidario de liberalización

Edad * Conoce normativa europea y española

Edad * Ley ómnibus

Edad * Lectura sobre competencia

Edad * Afectan normativas sobre competencia

Edad * Normativa beneficiosa

Edad * Conoce CNC

Edad * Recurso ante Defensa Consumidor

Edad * La libre competencia ayuda al crecimiento

Edad * Internet

Edad * Televisión

Edad * Prensa

Edad * Libros

Edad * Conversaciones con otras personas

Edad * Legislación

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Profesión * Partidario de liberalización

Profesión * Conoce normativa europea y española

Profesión * Ley ómnibus

Profesión * Lectura sobre competencia

Profesión * Afectan normativas sobre competencia

Profesión * Normativa beneficiosa

Profesión * Conoce CNC

Profesión * Recurso ante Defensa Consumidor

Profesión * La libre competencia ayuda al crecimiento

Profesión * Internet

Profesión * Televisión

Profesión * Prensa

Profesión * Libros

Profesión * Conversaciones con otras personas

Profesión * Legislación

Sector de actividad * Partidario de liberalización

Sector de actividad * Conoce normativa europea y española

Sector de actividad * Ley ómnibus

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Sector de actividad * Lectura sobre competencia

Sector de actividad * Afectan normativas sobre competencia

Sector de actividad * Normativa beneficiosa

Sector de actividad * Conoce CNC

Sector de actividad * Recurso ante Defensa Consumidor

Sector de actividad * La libre competencia ayuda al crecimiento

Sector de actividad * Internet

Sector de actividad * Televisión

Sector de actividad * Prensa

Sector de actividad * Libros

Sector de actividad * Conversaciones con otras personas

Sector de actividad * Legislación

En su mayoría los contrastes realizados de Chi-cuadrado para cada uno de los cruces, han sido significativos al 95% del nivel de confianza. Esto es así porque el p-valor es menor de 0,05 ($p\text{-value} < 0,05$).

De la totalidad de posibles cruces, a continuación presento algunos de los que he estimado más relevantes para los objetivos de esta investigación.

Sexo * Partidarios de la liberalización

Según el sexo, el resultado muestra que tanto los hombres como las mujeres son partidarios de la liberalización de los servicios profesionales públicos en Derecho y Salud con restricciones.

Los residuos corregidos nos indican que los hombres son más partidarios de lo esperado a la liberalización sin restricciones con un 32,8% frente al 28,8% esperado. Por el contrario las mujeres son menos partidarias de lo esperado a la liberalización sin restricciones con un 23,6%.

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	9,533 ^a	4	,049

Tabla 86: CHI-CUADRADO (χ^2). SEXO * PARTIDARIOS LIBERALIZACIÓN

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Tabla de contingencia

			Partidario de liberalización					Total
			Me es indiferente	No	No contesta	Sí	Sí, con restricciones	
Sexo	Soy hombre	Recuento	32	61	6	115	137	351
		% dentro de Sexo	9,1%	17,4%	1,7%	32,8%	39,0%	100,0 %
		Residuos corregidos	-1,2	,5	-1,6	2,5	-1,4	
	Soy mujer	Recuento	32	42	10	62	117	263
		% dentro de Sexo	12,2%	16,0%	3,8%	23,6%	44,5%	100,0 %
		Residuos corregidos	1,2	-,5	1,6	-2,5	1,4	
Total		Recuento	64	103	16	177	254	614
		% dentro de Sexo	10,4%	16,8%	2,6%	28,8%	41,4%	100,0 %

Tabla 87: CONTINGENCIA. SEXO * PARTIDARIOS LIBERALIZACIÓN

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

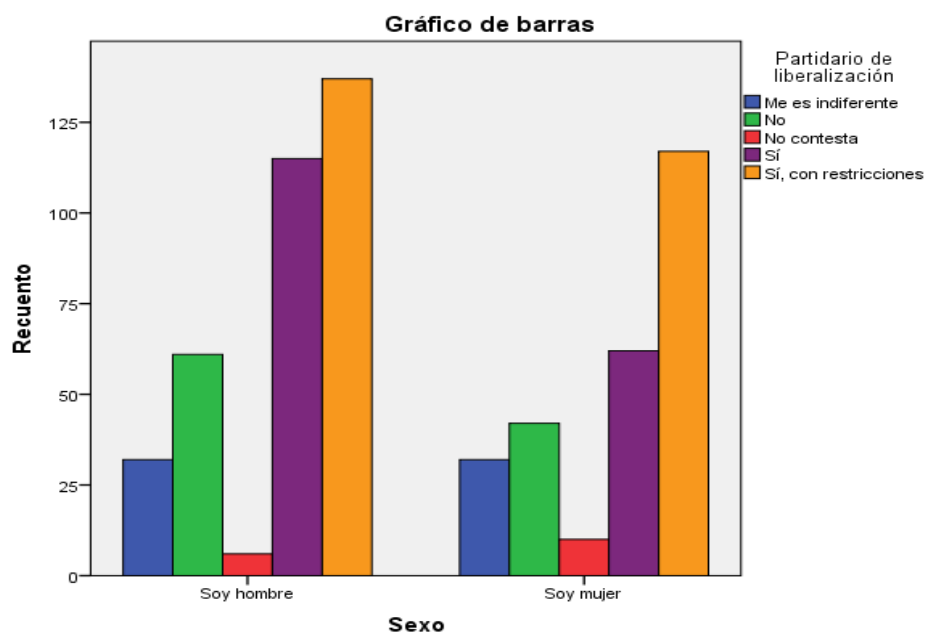


Figura 86: SEXO * PARTIDARIOS LIBERALIZACIÓN

Edad * Partidarios de la liberalización

A tenor de la edad de los encuestados, se produce una coincidencia con los resultados anteriormente analizados según el sexo. En general los españoles se muestran partidarios de la liberalización de los servicios profesionales públicos con independencia del rango de edad.

En este caso los residuos corregidos indican que las respuestas están dentro de lo esperado según los resultados, a excepción de los jóvenes entre 18 y 25 años que se manifiestan más indiferentes a la liberalización con un 21,7% frente al 10,4% esperado.

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	16,983 ^a	8	0,03

Tabla 88: CHI-CUADRADO (χ^2). EDAD * PARTIDARIOS LIBERALIZACIÓN

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Tabla de contingencia

			Partidario de liberalización					Total
			Me es indiferente	No	No contesta	Sí	Sí, con restricciones	
Edad	Entre 18 y 25 años	Recuento	15	15	3	13	23	69
		% dentro de Edad	21,7%	21,7 %	4,3%	18,8 %	33,3%	100,0%
		Residuos corregidos	3,3	1,2	1,0	-1,9	-1,4	
	Entre 26 y 45 años	Recuento	24	51	7	84	126	292
		% dentro de Edad	8,2%	17,5 %	2,4%	28,8 %	43,2%	100,0%
		Residuos corregidos	-1,7	,4	-,3	,0	,9	
	Más de 46 años	Recuento	25	37	6	80	105	253
		% dentro de Edad	9,9%	14,6 %	2,4%	31,6 %	41,5%	100,0%
		Residuos corregidos	-,4	-1,2	-,3	1,3	,1	
Total		Recuento	64	103	16	177	254	614
		% dentro de Edad	10,4%	16,8 %	2,6%	28,8 %	41,4%	100,0%

Tabla 89: CONTINGENCIA. EDAD * PARTIDARIOS LIBERALIZACIÓN

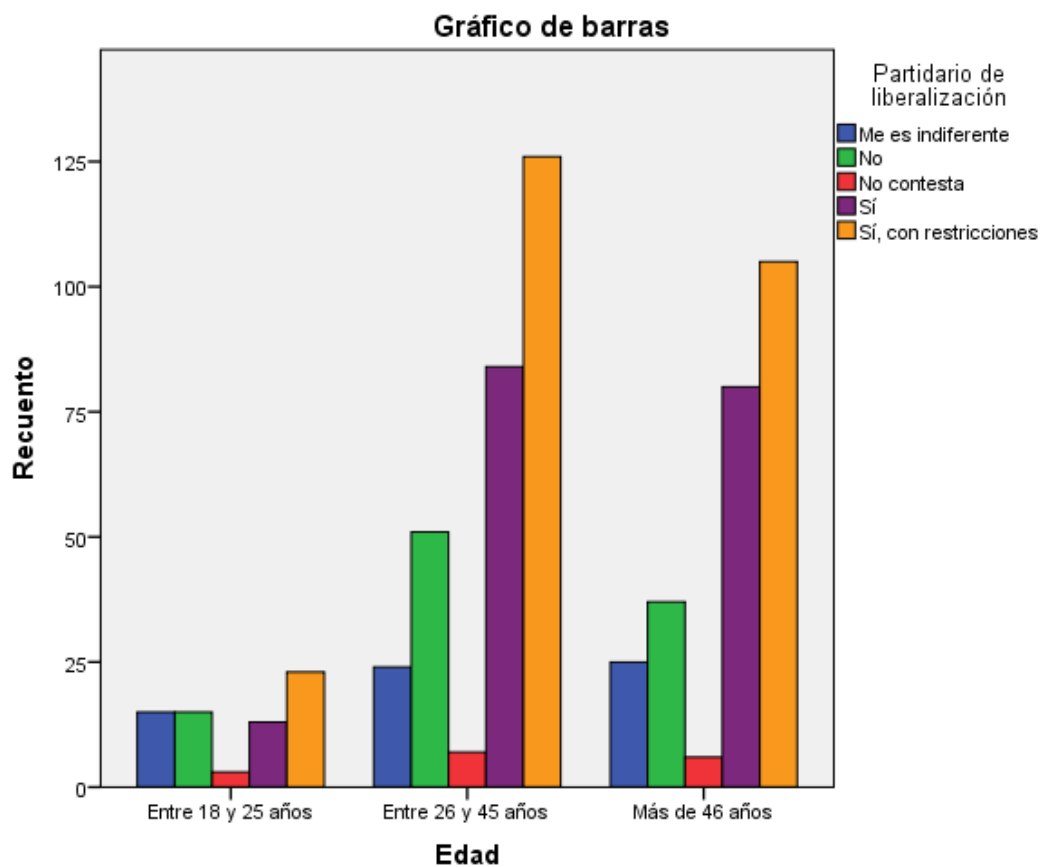


Figura 87: EDAD * PARTIDARIOS LIBERALIZACIÓN

Profesión * Conocen la normativa europea y española

Casi la mitad de los encuestados desconoce la normativa europea y española sobre la liberalización de los servicios profesionales públicos.

Según la profesión que desempeñan, encontramos algunas características significativas.

Por un lado, los profesionales liberales de carácter privado declaran conocer las normativas española y europea sobre competencia: un 32,5% frente al 21,7% esperado.

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Por otro lado, los clientes y usuarios conocen en menor medida estas normativas: un 15,9% frente al 21,7% esperado.

Aquí puede extraerse una conclusión: parece lógico que los profesionales a quienes esta normativa afecta (ya sea en su beneficio o en su contra) conozcan o hayan estudiado la normativa.

Aun así, estas normas, que atañen a toda la sociedad, deberían ser conocidas por todos los ciudadanos.

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	27,072 ^a	12	0,008

Tabla 90: CHI-CUADRADO (χ^2). PROFESIÓN * CONOCE LA NORMATIVA

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Tabla de contingencia

			Conoce normativa europea y española				Total
			A medias	No	No contesta	Sí	
Profesión	Desempeño una profesión liberal de carácter privado	Recuento	33	45	1	38	117
		% dentro de Profesión	28,2%	38,5%	,9%	32,5%	100,0%
		Residuos corregidos	-,2	-2,3	-,6	3,2	
	Desempeño una profesión liberal de carácter público	Recuento	57	74	5	31	167
		% dentro de Profesión	34,1%	44,3%	3,0%	18,6%	100,0%
		Residuos corregidos	1,7	-1,1	1,9	-1,1	
	Nada de lo anterior. Soy sencillamente un cliente o usuario de servicios	Recuento	68	141	2	40	251
		% dentro de Profesión	27,1%	56,2%	,8%	15,9%	100,0%
		Residuos corregidos	-,9	3,4	-1,1	-2,9	
	No contesta	Recuento	0	1	0	1	2
		% dentro de Profesión	,0%	50,0%	,0%	50,0%	100,0%
		Residuos corregidos	-,9	,1	-,2	1,0	
	Ocupo un cargo en una asociación o colegio profesional	Recuento	20	33	1	23	77
		% dentro de Profesión	26,0%	42,9%	1,3%	29,9%	100,0%
		Residuos corregidos	-,6	-,9	-,1	1,9	
Total		Recuento	178	294	9	133	614
		% dentro de Profesión	29,0%	47,9%	1,5%	21,7%	100,0%

Tabla 91: CONTINGENCIA. PROFESIÓN * CONOCE LA NORMATIVA

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

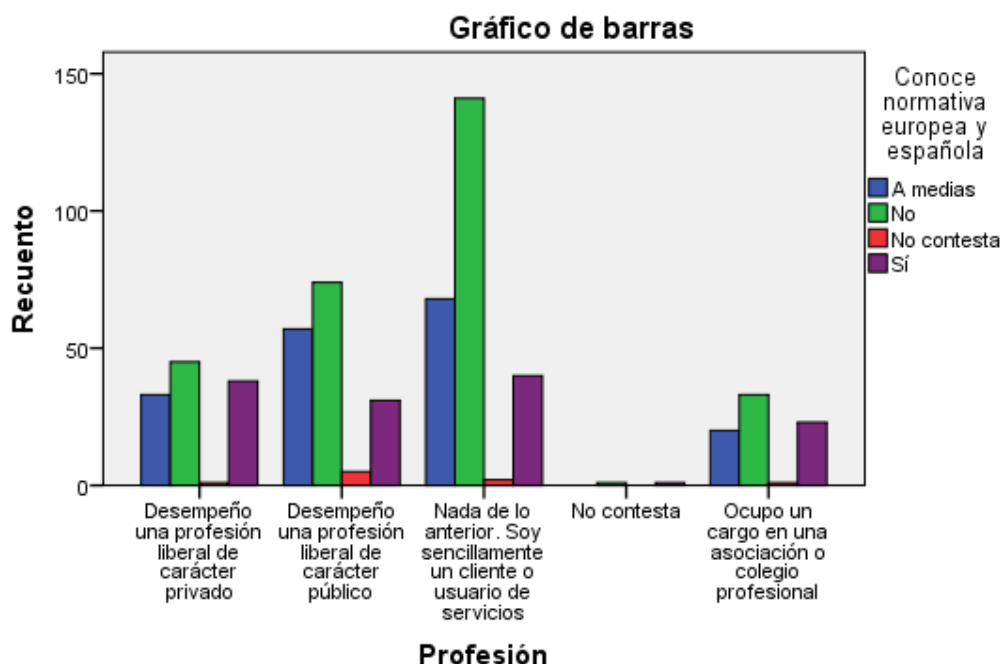


Figura 88: PROFESIÓN * CONOCE LA NORMATIVA

Profesión * les afectan las normativas sobre competencia

Según los resultados obtenidos, la mayoría *grosso modo* no sabe si les afecta o no la normativa sobre la liberalización de los servicios profesionales.

En la tabla de contingencia por un lado vemos que los profesionales liberales de carácter público dicen que no les afecta la normativa en mayor medida de lo esperado, es decir, un 29,3% frente al 20,8%.

También aparecen por debajo de lo esperado en cuanto a no saber si les afecta o no la normativa, por tanto entiendo que saben más sobre la

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

normativa que el resto de encuestados, aunque este dato no concuerde con lo analizado anteriormente.

Además comprobamos que los clientes y usuarios no saben si les afectan en mayor medida: un 45,8% frente al 37,6% esperado.

Finalmente las personas que ocupan un cargo en una asociación o colegio profesional consideran que esta normativa les influye positivamente en mayor grado de lo esperado, es decir, en un 33,8% frente al 24,3%.

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	39,891 ^a	16	0,001

Tabla 92: CHI-CUADRADO (χ^2). PROFESIÓN * AFECTA LA NORMATIVA

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Tabla de contingencia

			Afectan normativas sobre competencia					Total
			Negativa mente	No contesta	No me afectan	No sé si me afectan	Positiva mente	
Profesión	Desempeño una profesión liberal de carácter privado	Recuento % dentro de Profesión Residuos corregidos	18 15,4% ,5	4 3,4% ,1	23 19,7% ,4	39 33,3% -1,1	33 28,2% 1,1	117 100,0%
	Desempeño una profesión liberal de carácter público	Recuento % dentro de Profesión Residuos corregidos	24 14,4% ,2	6 3,6% ,3	49 29,3% 3,2	50 29,9% -2,4	38 22,8% -,5	167 100,0%
	Nada de lo anterior. Soy sencillamente un cliente o usuario de servicios	Recuento % dentro de Profesión Residuos corregidos	31 12,4% -1,0	8 3,2% -,1	45 17,9% -1,5	115 45,8% 3,5	52 20,7% -1,7	251 100,0%
	No contesta	Recuento % dentro de Profesión Residuos corregidos	0 ,0% -,6	1 50,0% 3,7	1 50,0% 1,0	0 ,0% -1,1	0 ,0% -,8	2 100,0%
	Ocupo un cargo en una asociación o colegio profesional	Recuento % dentro de Profesión Residuos corregidos	13 16,9% ,8	1 1,3% -1,0	10 13,0% -1,8	27 35,1% -,5	26 33,8% 2,1	77 100,0%
Total		Recuento % dentro de Profesión	86 14,0%	20 3,3%	128 20,8%	231 37,6%	149 24,3%	614 100,0%

Tabla 93: CONTINGENCIA. PROFESIÓN * AFECTA LA NORMATIVA

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

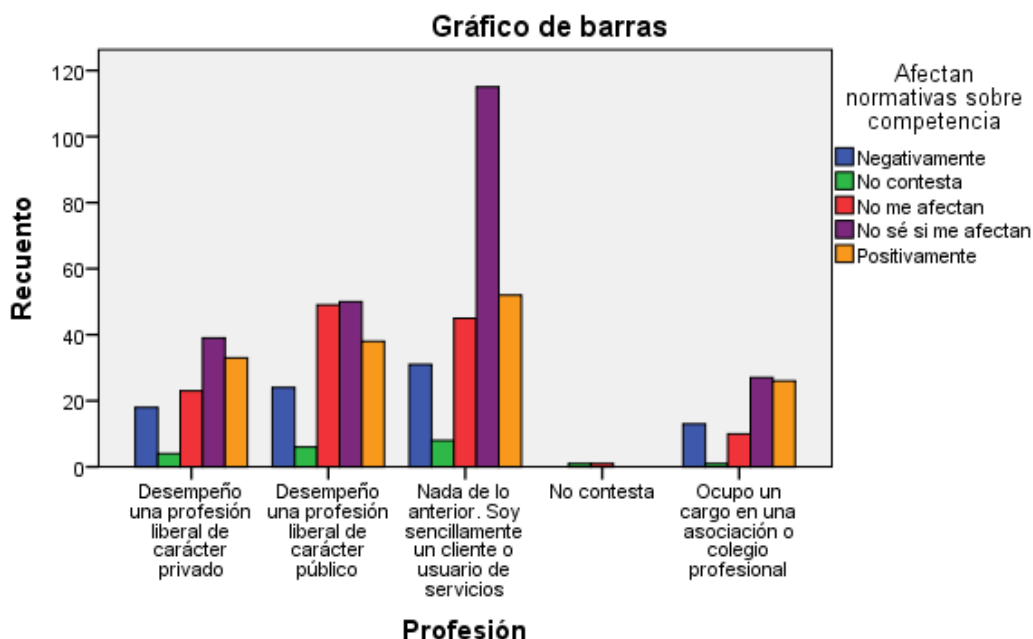


Figura 89: PROFESIÓN * AFECTA LA NORMATIVA

Profesión * Normativa beneficiosa

En general algo menos de la mitad de los españoles, el 45,6%, desconoce si la normativa es beneficiosa o perjudicial.

Hay que señalar que, por encima de las expectativas, los clientes y usuarios no saben si la normativa es beneficiosa o no con un 51,8% frente al 45,6% esperado. Además estos son quienes por debajo de lo esperado dicen que sí es beneficiosa con un 26,7% frente al 33,7% esperado.

El resto de grupos profesionales está dentro de los valores esperados.

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	31,653 ^a	12	,002

Tabla 94: CHI-CUADRADO (χ^2). PROFESIÓN * NORMATIVA BENEFICIOSA

Tabla de contingencia

			Normativa beneficiosa				Total
			No	No contesta	No sabe	Sí	
Profesión	Desempeño una profesión liberal de carácter privado	Recuento % dentro de Profesión Residuos corregidos	19 16,2%	2 1,7%	48 41,0%	48 41,0%	117 100,0%
	Desempeño una profesión liberal de carácter público	Recuento % dentro de Profesión Residuos corregidos	29 17,4%	4 2,4%	73 43,7%	61 36,5%	167 100,0%
	Nada de lo anterior. Soy sencillamente un cliente o usuario de servicios	Recuento % dentro de Profesión Residuos corregidos	48 19,1%	6 2,4%	130 51,8%	67 26,7%	251 100,0%
	No contesta	Recuento % dentro de Profesión Residuos corregidos	0 0,0%	1 50,0%	1 50,0%	0 0,0%	2 100,0%
	Ocupo un cargo en una asociación o colegio profesional	Recuento % dentro de Profesión Residuos corregidos	16 20,8%	2 2,6%	28 36,4%	31 40,3%	77 100,0%
Total		Recuento % dentro de Profesión	112 18,2%	15 2,4%	280 45,6%	207 33,7%	614 100,0%

Tabla 95: CONTINGENCIA. PROFESIÓN * NORMATIVA BENEFICIOSA

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

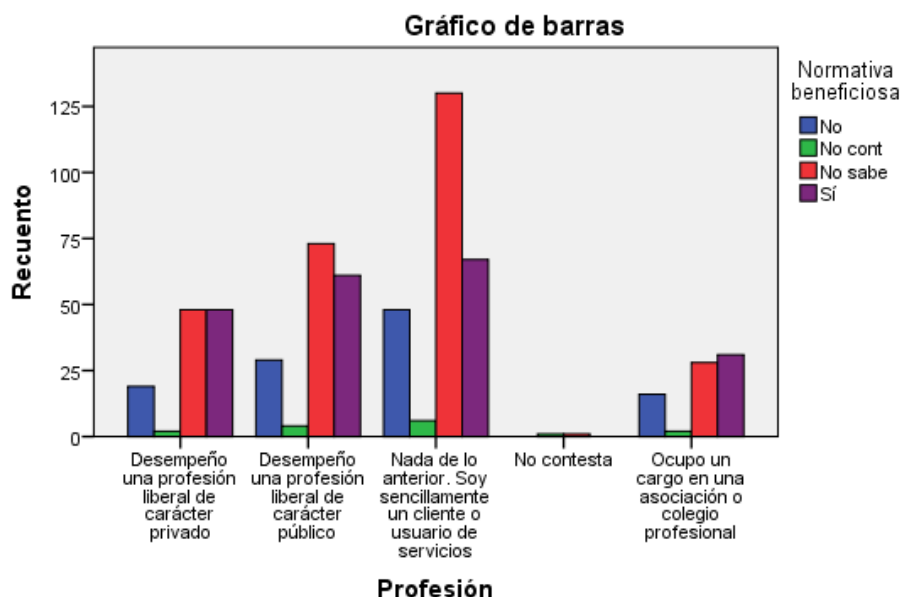


Figura 90: PROFESIÓN * NORMATIVA BENEFICIOSA

Sector de actividad * Conocen la normativa europea y española

Un 47,9% de los españoles tampoco conoce la normativa europea y española sobre la liberalización de los servicios profesionales.

Según el sector de actividad al que se dedican los españoles, encontramos como datos característicos que aquellos pertenecientes al gremio de abogacías y letrados del Estado conocen en mayor medida de lo esperado la normativa, con un 69,8% frente al 21,7%. Por el contrario son los estudiantes uno de los grupos que más desconoce esta normativa, con un 90%, seguidos de los jubilados con un 88,9%

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	249,922 ^a	159	,001

Tabla 96: CHI-CUADRADO (χ^2). SECTOR DE ACTIVIDAD * CONOCE LA NORMATIVA

Tabla de contingencia

			Conoce normativa europea y española				Total
			A medias	No	No contesta	Sí	
Sector de actividad	Abogacías del Estado y Letrados	Recuento	9	4	0	30	43
		% dentro de Sector de actividad	20,9%	9,3%	,0%	69,8 %	100,0%
		Residuos corregidos	-1,2	-5,3	-,8	7,9	
	Administración	Recuento	6	6	0	0	12
		% dentro de Sector de actividad	50,0%	50,0%	,0%	,0%	100,0%
		Residuos corregidos	1,6	,1	-,4	-1,8	
	Agricultura	Recuento	0	0	0	1	1
		% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	100,0%
		Residuos corregidos	-,6	-1,0	-,1	1,9	
	Ama de casa	Recuento	0	5	0	5	10
		% dentro de Sector de actividad	,0%	50,0%	,0%	50,0 %	100,0%
		Residuos corregidos	-2,0	,1	-,4	2,2	
	Análisis alimentos	Recuento	0	1	0	0	1
		% dentro de Sector de	,0%	100,0 %	,0%	,0%	100,0%

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	actividad					
	Residuos corregidos	-,6	1,0	-,1	-,5	
Arqueología	Recuento	0	1	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	100,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,6	1,0	-,1	-,5	
Arte	Recuento	0	7	0	1	8
	% dentro de Sector de actividad	,0%	87,5%	,0%	12,5%	100,0%
	Residuos corregidos	-1,8	2,3	-,3	-,6	
Asesoría	Recuento	0	0	0	2	2
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,9	-1,4	-,2	2,7	
Asociación de mujeres	Recuento	0	1	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	100,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,6	1,0	-,1	-,5	
Banca	Recuento	2	3	0	1	6
	% dentro de Sector de actividad	33,3%	50,0%	,0%	16,7%	100,0%
	Residuos corregidos	,2	,1	-,3	-,3	
Bibliotecas	Recuento	0	6	0	0	6
	% dentro de Sector de actividad	,0%	100,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-1,6	2,6	-,3	-1,3	
Biología	Recuento	0	1	0	0	1
	% dentro de	,0%	100,0%	,0%	,0%	100,0%

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	Sector de actividad Residuos corregidos	-,6	1,0	-,1	-,5	
Comercio	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	1 16,7%	3 50,0%	0 ,0%	2 33,3%	6 100,0%
		-,7	,1	-,3	,7	
Criminalística	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	1 100,0%	0 ,0%	0 ,0%	0 ,0%	1 100,0%
		1,6	-1,0	-,1	-,5	
Cultura	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	1 100,0%	0 ,0%	0 ,0%	0 ,0%	1 100,0%
		1,6	-1,0	-,1	-,5	
Deporte	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	2 33,3%	4 66,7%	0 ,0%	0 ,0%	6 100,0%
		,2	,9	-,3	-1,3	
Economía	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	7 43,8%	4 25,0%	0 ,0%	5 31,3%	16 100,0%
		1,3	-1,9	-,5	,9	
Educación	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	34 33,0%	53 51,5%	0 ,0%	16 15,5%	103 100,0%
		1,0	,8	-1,4	-1,7	
Empleado	Recuento	1	6	0	2	9

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	% dentro de Sector de actividad	11,1%	66,7%	,0%	22,2%	100,0%
	Residuos corregidos	-1,2	1,1	-,4	,0	
Empresario	Recuento	5	5	0	1	11
	% dentro de Sector de actividad	45,5%	45,5%	,0%	9,1%	100,0%
	Residuos corregidos	1,2	-,2	-,4	-1,0	
Estilista	Recuento	0	1	1	0	2
	% dentro de Sector de actividad	,0%	50,0%	50,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,9	,1	5,7	-,7	
Estudiante	Recuento	1	9	0	0	10
	% dentro de Sector de actividad	10,0%	90,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-1,3	2,7	-,4	-1,7	
Farmacia	Recuento	9	10	0	4	23
	% dentro de Sector de actividad	39,1%	43,5%	,0%	17,4%	100,0%
	Residuos corregidos	1,1	-,4	-,6	-,5	
Filología	Recuento	1	2	0	0	3
	% dentro de Sector de actividad	33,3%	66,7%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	,2	,7	-,2	-,9	
Funcionario	Recuento	2	8	0	1	11
	% dentro de Sector de actividad	18,2%	72,7%	,0%	9,1%	100,0%
	Residuos corregidos	-,8	1,7	-,4	-1,0	

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Graduado escolar	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	0 ,0% -6	1 100,0% 1,0	0 ,0% -1	0 ,0% -5	1 100,0%
Graduado Social	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	0 ,0% -6	0 ,0% -1,0	0 ,0% -1	1 100,0% 1,9	1 100,0%
Ingeniería	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	3 15,8% -1,3	11 57,9% ,9	1 5,3% 1,4	4 21,1% -1	19 100,0%
Jubilado	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	1 11,1% -1,2	8 88,9% 2,5	0 ,0% -4	0 ,0% -1,6	9 100,0%
Medicina	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	25 30,5% ,3	42 51,2% ,6	0 ,0% -1,2	15 18,3% -8	82 100,0%
Medio ambiente	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	0 ,0% -6	1 100,0% 1,0	0 ,0% -1	0 ,0% -5	1 100,0%
Monitor	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos	1 50,0% ,7	0 ,0% -1,4	0 ,0% -2	1 50,0% 1,0	2 100,0%

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	corregidos					
No contesta	Recuento	30	54	7	21	112
	% dentro de Sector de actividad	26,8%	48,2%	6,3%	18,8%	100,0%
	Residuos corregidos	-,6	,1	4,7	-,8	
Notarías	Recuento	4	3	0	5	12
	% dentro de Sector de actividad	33,3%	25,0%	,0%	41,7%	100,0%
	Residuos corregidos	,3	-1,6	-,4	1,7	
Parado	Recuento	3	4	0	0	7
	% dentro de Sector de actividad	42,9%	57,1%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	,8	,5	-,3	-1,4	
Periodismo	Recuento	12	12	0	4	28
	% dentro de Sector de actividad	42,9%	42,9%	,0%	14,3%	100,0%
	Residuos corregidos	1,7	-,5	-,7	-1,0	
Política	Recuento	0	0	0	1	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,6	-1,0	-,1	1,9	
Producción	Recuento	1	0	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	100,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	1,6	-1,0	-,1	-,5	
Proyectos I+D	Recuento	0	1	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	100,0%	,0%	,0%	100,0%

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	Residuos corregidos	-,6	1,0	-,1	-,5	
Publicidad	Recuento	2	2	0	0	4
	% dentro de Sector de actividad	50,0%	50,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	,9	,1	-,2	-1,1	
Recursos Humanos	Recuento	1	0	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	100,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	1,6	-1,0	-,1	-,5	
Registros de la Propiedad	Recuento	5	5	0	5	15
	% dentro de Sector de actividad	33,3%	33,3%	,0%	33,3%	100,0%
	Residuos corregidos	,4	-1,1	-,5	1,1	
Religión	Recuento	0	1	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	100,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,6	1,0	-,1	-,5	
Restauración	Recuento	0	2	0	0	2
	% dentro de Sector de actividad	,0%	100,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,9	1,5	-,2	-,7	
Riesgos Industriales	Recuento	1	0	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	100,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	1,6	-1,0	-,1	-,5	
Secretaria	Recuento	1	1	0	0	2
	% dentro de Sector de	50,0%	50,0%	,0%	,0%	100,0%

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	actividad					
	Residuos	,7	,1	-,2	-,7	
	corregidos					
Seguridad	Recuento	1	0	0	0	1
	% dentro de	100,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
	Sector de					
	actividad					
	Residuos	1,6	-1,0	-,1	-,5	
	corregidos					
Sistemas	Recuento	0	1	0	0	1
	% dentro de	,0%	100,0	,0%	,0%	100,0%
	Sector de		%			
	actividad					
	Residuos	-,6	1,0	-,1	-,5	
	corregidos					
Sistemas & IT	Recuento	0	1	0	0	1
	% dentro de	,0%	100,0	,0%	,0%	100,0%
	Sector de		%			
	actividad					
	Residuos	-,6	1,0	-,1	-,5	
	corregidos					
Sociedad	Recuento	1	0	0	0	1
	% dentro de	100,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
	Sector de					
	actividad					
	Residuos	1,6	-1,0	-,1	-,5	
	corregidos					
Trabajador social	Recuento	0	0	0	1	1
	% dentro de	,0%	,0%	,0%	100,0%	100,0%
	Sector de					
	actividad					
	Residuos	-,6	-1,0	-,1	1,9	
	corregidos					
Transporte	Recuento	1	1	0	0	2
	% dentro de	50,0%	50,0%	,0%	,0%	100,0%
	Sector de					
	actividad					
	Residuos	,7	,1	-,2	-,7	
	corregidos					
Turismo	Recuento	0	0	0	2	2
	% dentro de	,0%	,0%	,0%	100,	100,0%

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	Sector de actividad				0%	
	Residuos corregidos	-,9	-1,4	-,2	2,7	
Veterinaria	Recuento	3	3	0	2	8
	% dentro de Sector de actividad	37,5%	37,5%	,0%	25,0%	100,0%
	Residuos corregidos	,5	-,6	-,3	,2	
Total	Recuento	178	294	9	133	614
	% dentro de Sector de actividad	29,0%	47,9%	1,5%	21,7%	100,0%

Tabla 97: CONTINGENCIA. SECTOR DE ACTIVIDAD * CONOCE LA NORMATIVA

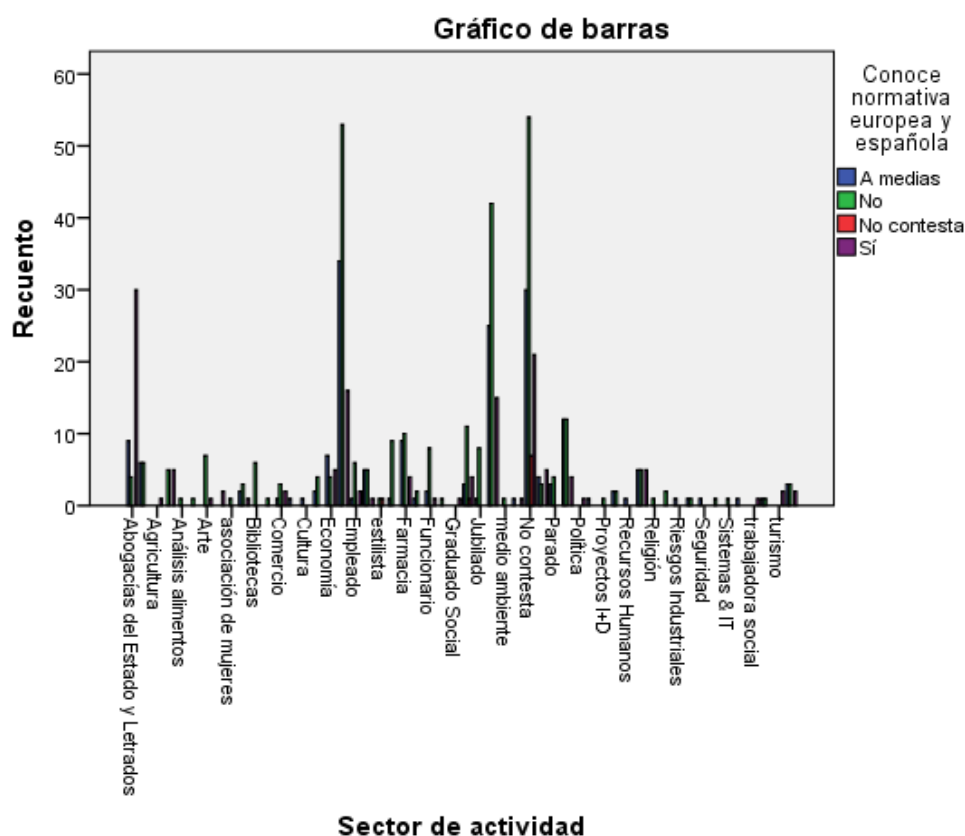


Figura 91: SECTOR DE ACTIVIDAD * CONOCE LA NORMATIVA

Sector de actividad * les afectan las normativas sobre competencia

De acuerdo con las diversas actividades profesionales los españoles contestan que la normativa sobre la liberalización de los servicios afecta negativamente a un 14%, positivamente a un 24,3%, no afecta al 20,8% y un 37,6% ignora si les afecta.

De los datos extraídos de la tabla de contingencia cabe destacar que los abogados del Estado y letrados han contestado (en mayor proporción a lo esperado) que a ellos les afecta positivamente, con un 44,2% de respuestas a favor. Por el contrario tanto españoles del sector de trabajo social, como de medio ambiente y registradores de la propiedad, han respondido que la normativa les afecta negativamente en mayor medida de lo esperado.

Caso curioso es el de los economistas a quienes parece que la normativa afecta en mayor medida puesto que han respondido (por debajo de lo esperado) que no les afecta.

En el resto de sectores el nexo de unión es el desconocimiento de los efectos de esta normativa y la no contestación a la pregunta.

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. Asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	271,441 ^a	212	0,004

Tabla 98: CHI-CUADRADO (χ^2). SECTOR DE ACTIVIDAD * AFECTA LA NORMATIVA

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Tabla de contingencia

			Afectan normativas sobre competencia					Total
			Negativa mente	No contesta	No me afectan	No sé si me afectan	Positiva mente	
Sector de actividad	Abogacías del Estado y Letrados	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	5 11,6%	1 2,3%	8 18,6%	10 23,3%	19 44,2%	43 100,0%
			-,5	-,4	-,4	-2,0	3,2	
	Administración	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	0 ,0%	0 ,0%	1 8,3%	8 66,7%	3 25,0%	12 100,0%
			-1,4	-,6	-1,1	2,1	,1	
	Agricultura	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	0 ,0%	0 ,0%	0 ,0%	0 ,0%	1 100,0%	1 100,0%
			-,4	-,2	-,5	-,8	1,8	
	Ama de casa	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	2 20,0%	0 ,0%	0 ,0%	8 80,0%	0 ,0%	10 100,0%
			,6	-,6	-1,6	2,8	-1,8	
Análisis alimentos		Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	0 ,0%	0 ,0%	0 ,0%	0 ,0%	1 100,0%	1 100,0%
			-,4	-,2	-,5	-,8	1,8	
Arqueología		Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	0 ,0%	0 ,0%	0 ,0%	1 100,0%	0 ,0%	1 100,0%
			-,4	-,2	-,5	1,3	-,6	
Arte		Recuento	0	0	3	5	0	8

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	37,5%	62,5%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-1,1	-,5	1,2	1,5	-1,6	
Asesoría	Recuento	1	1	0	0	0	2
	% dentro de Sector de actividad	50,0%	50,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	1,5	3,7	-,7	-1,1	-,8	
Asociación de mujeres	Recuento	0	0	0	1	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,4	-,2	-,5	1,3	-,6	
Banca	Recuento	1	0	2	1	2	6
	% dentro de Sector de actividad	16,7%	,0%	33,3%	16,7%	33,3%	100,0%
	Residuos corregidos	,2	-,5	,8	-1,1	,5	
Bibliotecas	Recuento	2	0	0	4	0	6
	% dentro de Sector de actividad	33,3%	,0%	,0%	66,7%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	1,4	-,5	-1,3	1,5	-1,4	
Biología	Recuento	0	0	0	1	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,4	-,2	-,5	1,3	-,6	
Comercio	Recuento	2	0	0	2	2	6
	% dentro de Sector de actividad	33,3%	,0%	,0%	33,3%	33,3%	100,0%
	Residuos corregidos	1,4	-,5	-1,3	-,2	,5	
Criminalística	Recuento	0	0	1	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	100,0%	,0%	,0%	100,0%

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	Residuos corregidos	- ,4	- ,2	2,0	- ,8	- ,6	
Cultura	Recuento	0	0	0	1	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	- ,4	- ,2	- ,5	1,3	- ,6	
Deporte	Recuento	1	0	2	2	1	6
	% dentro de Sector de actividad	16,7%	,0%	33,3%	33,3%	16,7%	100,0%
	Residuos corregidos	,2	- ,5	,8	- ,2	- ,4	
Economía	Recuento	0	2	0	7	7	16
	% dentro de Sector de actividad	,0%	12,5%	,0%	43,8%	43,8%	100,0%
	Residuos corregidos	-1,6	2,1	-2,1	,5	1,8	
Educación	Recuento	12	3	18	41	29	103
	% dentro de Sector de actividad	11,7%	2,9%	17,5%	39,8%	28,2%	100,0%
	Residuos corregidos	- ,8	- ,2	- ,9	,5	1,0	
Empleado	Recuento	2	0	2	5	0	9
	% dentro de Sector de actividad	22,2%	,0%	22,2%	55,6%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	,7	- ,6	,1	1,1	-1,7	
Empresario	Recuento	3	1	1	3	3	11
	% dentro de Sector de actividad	27,3%	9,1%	9,1%	27,3%	27,3%	100,0%
	Residuos corregidos	1,3	1,1	-1,0	- ,7	,2	
Estilista	Recuento	0	1	1	0	0	2
	% dentro de Sector de actividad	,0%	50,0%	50,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	- ,6	3,7	1,0	-1,1	- ,8	
Estudiante	Recuento	0	0	2	7	1	10

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	20,0%	70,0%	10,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-1,3	-,6	-,1	2,1	-1,1	
Farmacia	Recuento	6	0	6	8	3	23
	% dentro de Sector de actividad	26,1%	,0%	26,1%	34,8%	13,0%	100,0%
	Residuos corregidos	1,7	-,9	,6	-,3	-1,3	
Filología	Recuento	1	0	0	2	0	3
	% dentro de Sector de actividad	33,3%	,0%	,0%	66,7%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	1,0	-,3	-,9	1,0	-1,0	
Funcionario	Recuento	1	0	5	4	1	11
	% dentro de Sector de actividad	9,1%	,0%	45,5%	36,4%	9,1%	100,0%
	Residuos corregidos	-,5	-,6	2,0	-,1	-1,2	
Graduado escolar	Recuento	0	0	0	1	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,4	-,2	-,5	1,3	-,6	
Graduado Social	Recuento	1	0	0	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	100,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	2,5	-,2	-,5	-,8	-,6	
Ingeniería	Recuento	1	1	3	7	7	19
	% dentro de Sector de actividad	5,3%	5,3%	15,8%	36,8%	36,8%	100,0%
	Residuos corregidos	-1,1	,5	-,6	-,1	1,3	
Jubilado	Recuento	0	0	3	5	1	9
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	33,3%	55,6%	11,1%	100,0%

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	Residuos corregidos	-1,2	-,6	,9	1,1	-,9	
Medicina	Recuento	13	0	16	32	21	82
	% dentro de Sector de actividad	15,9%	,0%	19,5%	39,0%	25,6%	100,0%
	Residuos corregidos	,5	-1,8	-,3	,3	,3	
Medio ambiente	Recuento	1	0	0	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	100,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	2,5	-,2	-,5	-,8	-,6	
Monitor	Recuento	0	0	0	1	1	2
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	50,0%	50,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,6	-,3	-,7	,4	,9	
No contesta	Recuento	17	6	26	36	27	112
	% dentro de Sector de actividad	15,2%	5,4%	23,2%	32,1%	24,1%	100,0%
	Residuos corregidos	,4	1,4	,7	-1,3	,0	
Notarías	Recuento	3	0	4	4	1	12
	% dentro de Sector de actividad	25,0%	,0%	33,3%	33,3%	8,3%	100,0%
	Residuos corregidos	1,1	-,6	1,1	-,3	-1,3	
Parado	Recuento	2	2	1	1	1	7
	% dentro de Sector de actividad	28,6%	28,6%	14,3%	14,3%	14,3%	100,0%
	Residuos corregidos	1,1	3,8	-,4	-1,3	-,6	
Periodismo	Recuento	3	1	7	11	6	28
	% dentro de Sector de actividad	10,7%	3,6%	25,0%	39,3%	21,4%	100,0%
	Residuos corregidos	-,5	,1	,6	,2	-,4	
Política	Recuento	0	0	0	0	1	1

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,4	-,2	-,5	-,8	1,8	
Producción	Recuento	0	0	0	1	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,4	-,2	-,5	1,3	-,6	
Proyectos I+D	Recuento	0	0	0	1	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,4	-,2	-,5	1,3	-,6	
Publicidad	Recuento	0	0	2	1	1	4
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	50,0%	25,0%	25,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,8	-,4	1,4	-,5	,0	
Recursos Humanos	Recuento	0	0	0	1	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,4	-,2	-,5	1,3	-,6	
Registros de la Propiedad	Recuento	3	0	8	2	2	15
	% dentro de Sector de actividad	20,0%	,0%	53,3%	13,3%	13,3%	100,0%
	Residuos corregidos	,7	-,7	3,1	-2,0	-1,0	
Religión	Recuento	0	0	0	0	1	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,4	-,2	-,5	-,8	1,8	
Restauración	Recuento	0	0	0	2	0	2
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	Residuos corregidos	-,6	-,3	-,7	1,8	-,8	
Riesgos Industriales	Recuento	1	0	0	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	100,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	2,5	-,2	-,5	-,8	-,6	
Secretaria	Recuento	0	0	1	1	0	2
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	50,0%	50,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,6	-,3	1,0	,4	-,8	
Seguridad	Recuento	0	0	1	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	100,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,4	-,2	2,0	-,8	-,6	
Sistemas	Recuento	0	0	0	1	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,4	-,2	-,5	1,3	-,6	
Sistemas & IT	Recuento	0	0	0	0	1	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,4	-,2	-,5	-,8	1,8	
Sociedad	Recuento	0	1	0	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	100,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,4	5,5	-,5	-,8	-,6	
Trabajador social	Recuento	1	0	0	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	100,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	2,5	-,2	-,5	-,8	-,6	
Transporte	Recuento	1	0	0	1	0	2

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	% dentro de Sector de actividad	50,0%	,0%	,0%	50,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	1,5	-,3	-,7	,4	-,8	
Turismo	Recuento	0	0	1	0	1	2
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	50,0%	,0%	50,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,6	-,3	1,0	-1,1	,9	
Veterinaria	Recuento	0	0	3	1	4	8
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	37,5%	12,5%	50,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-1,1	-,5	1,2	-1,5	1,7	
Total	Recuento	86	20	128	231	149	614
	% dentro de Sector de actividad	14,0%	3,3%	20,8%	37,6%	24,3%	100,0%

Tabla 99: CONTINGENCIA. SECTOR DE ACTIVIDAD * AFECTA LA NORMATIVA

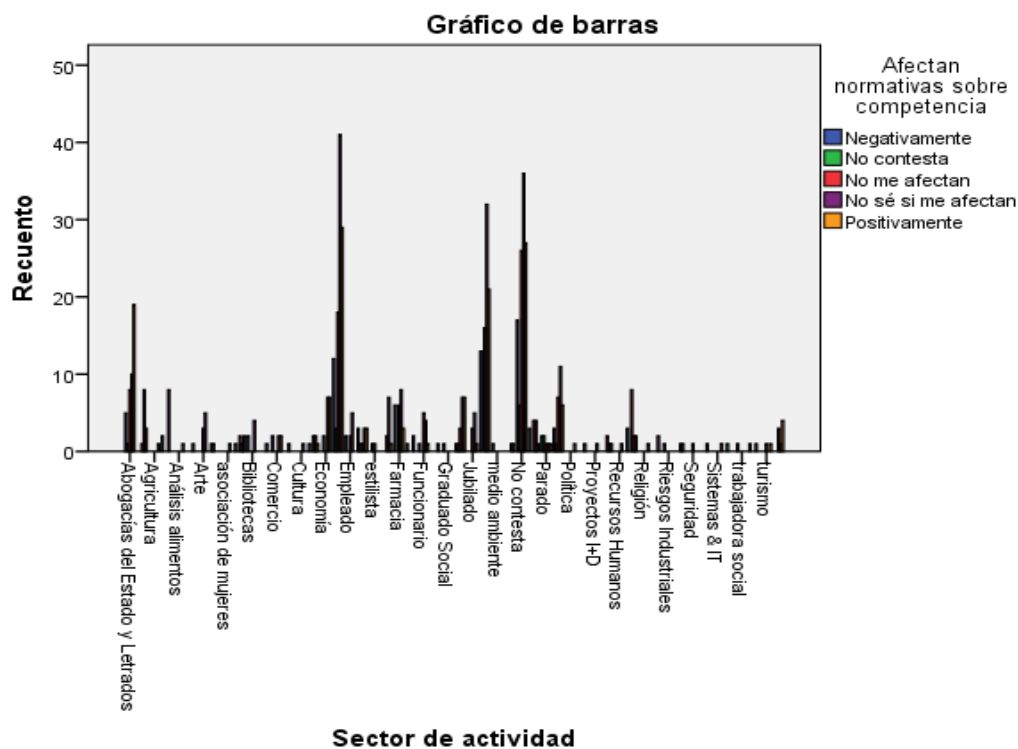


Figura 92: SECTOR DE ACTIVIDAD * AFECTA LA NORMATIVA

Sector de actividad * Normativa beneficiosa

En relación con la pregunta anterior, un 45,6% de los españoles no sabe si la normativa sobre la liberalización de los servicios profesionales es beneficiosa o no.

Además son otra vez los abogados del Estado y letrados los que mejor conocen la normativa, siendo el porcentaje de respuesta negativa sólo un 16,3% frente al 45,6% esperado, y más de la mitad (58,1%) cree que esta es beneficiosa.

En el resto de sectores la nota común es la falta de información sobre la normativa y por tanto o no saben si la normativa será beneficiosa o simplemente no contestan.

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	266,199 ^a	159	,001

Tabla 100: CHI-CUADRADO (χ^2). SECTOR DE ACTIVIDAD * NORMATIVA BENEFICIOSA

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Tabla de contingencia

			Normativa beneficiosa				Total
			No	No contesta	No sabe	Sí	
Sector de actividad	Abogacías del Estado y Letrados	Recuento	11	0	7	25	43
		% dentro de Sector de actividad	25,6%	,0%	16,3%	58,1%	100,0%
		Residuos corregidos	1,3	-1,1	-4,0	3,5	
	Administración	Recuento	0	0	7	5	12
		% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	58,3%	41,7%	100,0%
		Residuos corregidos	-1,7	-,6	,9	,6	
	Agricultura	Recuento	1	0	0	0	1
		% dentro de Sector de actividad	100,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
		Residuos corregidos	2,1	-,2	-,9	-,7	
	Ama de casa	Recuento	4	1	3	2	10
		% dentro de Sector de actividad	40,0%	10,0%	30,0%	20,0%	100,0%
		Residuos corregidos	1,8	1,6	-1,0	-,9	
	Análisis alimentos	Recuento	0	0	0	1	1
		% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	100,0%
		Residuos corregidos	-,5	-,2	-,9	1,4	
	Arqueología	Recuento	1	0	0	0	1
		% dentro de Sector de actividad	100,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
		Residuos corregidos	2,1	-,2	-,9	-,7	

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Arte	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	1 12,5% -,4	0 ,0% -,5	6 75,0% 1,7	1 12,5% -1,3	8 100,0%
Asesoría	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	1 50,0% 1,2	0 ,0% -,2	0 ,0% -1,3	1 50,0% ,5	2 100,0%
Asociación de mujeres	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	0 ,0% -,5	0 ,0% -,2	1 100,0% 1,1	0 ,0% -,7	1 100,0%
Banca	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	0 ,0% -1,2	0 ,0% -,4	3 50,0% ,2	3 50,0% ,8	6 100,0%
Bibliotecas	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	0 ,0% -1,2	1 16,7% 2,3	5 83,3% 1,9	0 ,0% -1,8	6 100,0%
Biología	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos corregidos	0 ,0% -,5	0 ,0% -,2	1 100,0% 1,1	0 ,0% -,7	1 100,0%
Comercio	Recuento % dentro de Sector de actividad Residuos	1 16,7% -,1	0 ,0% -,4	3 50,0% ,2	2 33,3% ,0	6 100,0%

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	corregidos					
Criminalística	Recuento	0	0	1	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,5	-,2	1,1	-,7	
Cultura	Recuento	0	0	1	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,5	-,2	1,1	-,7	
Deporte	Recuento	0	1	4	1	6
	% dentro de Sector de actividad	,0%	16,7%	66,7%	16,7%	100,0%
	Residuos corregidos	-1,2	2,3	1,0	-,9	
Economía	Recuento	3	1	3	9	16
	% dentro de Sector de actividad	18,8%	6,3%	18,8%	56,3%	100,0%
	Residuos corregidos	,1	1,0	-2,2	1,9	
Educación	Recuento	14	0	57	32	103
	% dentro de Sector de actividad	13,6%	,0%	55,3%	31,1%	100,0%
	Residuos corregidos	-1,3	-1,8	2,2	-,6	
Empleado	Recuento	1	0	7	1	9
	% dentro de Sector de actividad	11,1%	,0%	77,8%	11,1%	100,0%
	Residuos corregidos	-,6	-,5	2,0	-1,4	
Empresario	Recuento	2	1	4	4	11
	% dentro de Sector de actividad	18,2%	9,1%	36,4%	36,4%	100,0%

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	Residuos corregidos	,0	1,4	-,6	,2	
Estilista	Recuento	1	1	0	0	2
	% dentro de Sector de actividad	50,0%	50,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	1,2	4,4	-1,3	-1,0	
Estudiante	Recuento	0	0	8	2	10
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	80,0%	20,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-1,5	-,5	2,2	-,9	
Farmacia	Recuento	5	0	10	8	23
	% dentro de Sector de actividad	21,7%	,0%	43,5%	34,8%	100,0%
	Residuos corregidos	,4	-,8	-,2	,1	
Filología	Recuento	0	0	2	1	3
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	66,7%	33,3%	100,0%
	Residuos corregidos	-,8	-,3	,7	,0	
Funcionario	Recuento	3	0	6	2	11
	% dentro de Sector de actividad	27,3%	,0%	54,5%	18,2%	100,0%
	Residuos corregidos	,8	-,5	,6	-1,1	
Graduado escolar	Recuento	0	0	1	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,5	-,2	1,1	-,7	
Graduado Social	Recuento	1	0	0	0	1
	% dentro de Sector de	100,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	actividad					
	Residuos corregidos	2,1	-,2	-,9	-,7	
Ingeniería	Recuento	1	1	9	8	19
	% dentro de Sector de actividad	5,3%	5,3%	47,4%	42,1%	100,0%
	Residuos corregidos	-1,5	,8	,2	,8	
Jubilado	Recuento	1	0	4	4	9
	% dentro de Sector de actividad	11,1%	,0%	44,4%	44,4%	100,0%
	Residuos corregidos	-,6	-,5	-,1	,7	
Medicina	Recuento	16	1	43	22	82
	% dentro de Sector de actividad	19,5%	1,2%	52,4%	26,8%	100,0%
	Residuos corregidos	,3	-,8	1,3	-1,4	
Medio ambiente	Recuento	0	0	0	1	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,5	-,2	-,9	1,4	
Monitor	Recuento	1	0	1	0	2
	% dentro de Sector de actividad	50,0%	,0%	50,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	1,2	-,2	,1	-1,0	
No contesta	Recuento	21	4	44	43	112
	% dentro de Sector de actividad	18,8%	3,6%	39,3%	38,4%	100,0%
	Residuos corregidos	,2	,9	-1,5	1,2	
Notarías	Recuento	2	0	6	4	12
	% dentro de	16,7%	,0%	50,0%	33,3%	100,0%

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	Sector de actividad					
	Residuos corregidos	-,1	-,6	,3	,0	
Parado	Recuento	3	1	2	1	7
	% dentro de Sector de actividad	42,9%	14,3%	28,6%	14,3%	100,0%
	Residuos corregidos	1,7	2,0	-,9	-1,1	
Periodismo	Recuento	7	0	13	8	28
	% dentro de Sector de actividad	25,0%	,0%	46,4%	28,6%	100,0%
	Residuos corregidos	,9	-,9	,1	-,6	
Política	Recuento	0	0	0	1	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,5	-,2	-,9	1,4	
Producción	Recuento	0	0	1	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,5	-,2	1,1	-,7	
Proyectos I+D	Recuento	0	0	1	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,5	-,2	1,1	-,7	
Publicidad	Recuento	1	0	3	0	4
	% dentro de Sector de actividad	25,0%	,0%	75,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	,4	-,3	1,2	-1,4	
Recursos	Recuento	0	0	1	0	1

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Humanos	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,5	-,2	1,1	-,7	
Registros de la Propiedad	Recuento	5	0	3	7	15
	% dentro de Sector de actividad	33,3%	,0%	20,0%	46,7%	100,0%
	Residuos corregidos	1,5	-,6	-2,0	1,1	
Religión	Recuento	0	0	0	1	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,5	-,2	-,9	1,4	
Restauración	Recuento	0	0	2	0	2
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,7	-,2	1,5	-1,0	
Riesgos Industriales	Recuento	1	0	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	100,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	2,1	-,2	-,9	-,7	
Secretaria	Recuento	0	0	2	0	2
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,7	-,2	1,5	-1,0	
Seguridad	Recuento	0	1	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	100,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,5	6,3	-,9	-,7	

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

Sistemas	Recuento	1	0	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	100,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	2,1	-,2	-,9	-,7	
Sistemas & IT	Recuento	0	0	1	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	100,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,5	-,2	1,1	-,7	
Sociedad	Recuento	0	1	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	,0%	100,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,5	6,3	-,9	-,7	
Trabajador social	Recuento	1	0	0	0	1
	% dentro de Sector de actividad	100,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	2,1	-,2	-,9	-,7	
Transporte	Recuento	1	0	1	0	2
	% dentro de Sector de actividad	50,0%	,0%	50,0%	,0%	100,0%
	Residuos corregidos	1,2	-,2	,1	-1,0	
Turismo	Recuento	0	0	0	2	2
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	,0%	100,0%	100,0%
	Residuos corregidos	-,7	-,2	-1,3	2,0	
Veterinaria	Recuento	0	0	3	5	8
	% dentro de Sector de actividad	,0%	,0%	37,5%	62,5%	100,0%
	Residuos	-1,3	-,5	-,5	1,7	

8. OPINIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DE CASO

	corregidos					
Total	Recuento	112	15	280	207	614
	% dentro de Sector de actividad	18,2%	2,4%	45,6%	33,7%	100,0%

Tabla 101: CONTINGENCIA. SECTOR DE ACTIVIDAD * NORMATIVA BENEFICIOSA

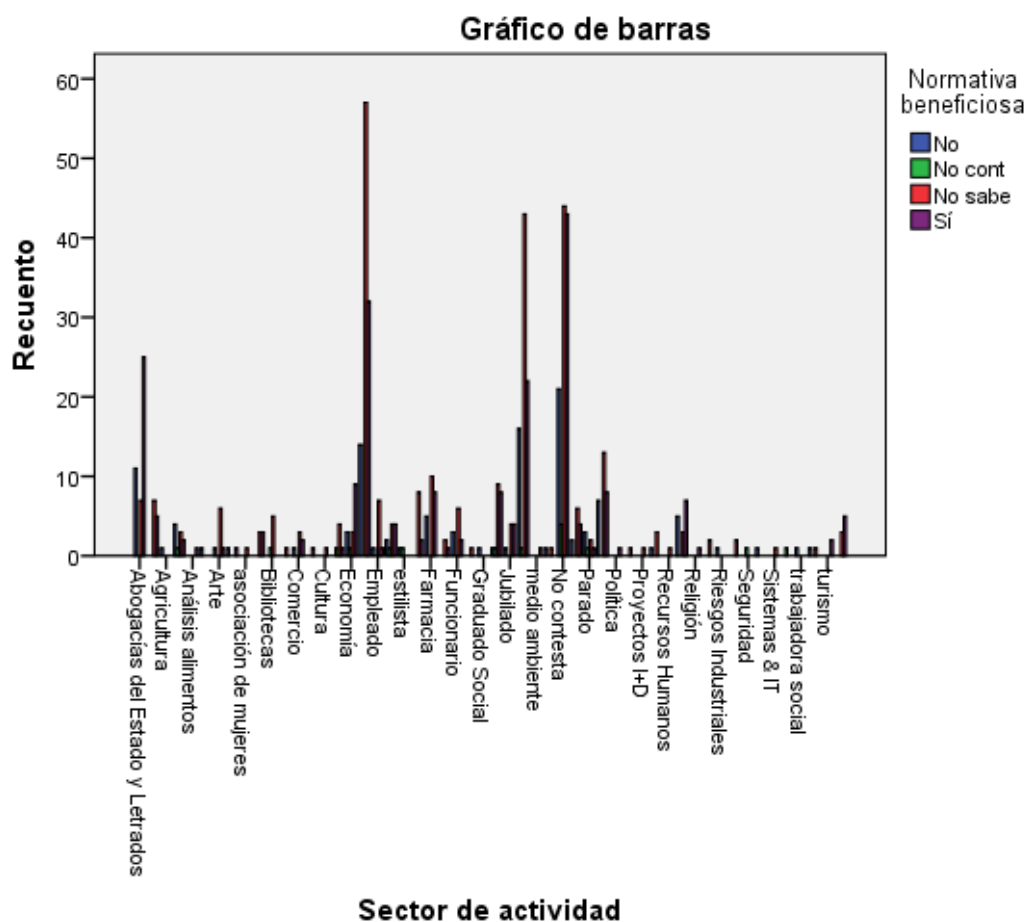


Figura 93: SECTOR DE ACTIVIDAD * NORMATIVA BENEFICIOSA

Futuras líneas de investigación

Tras este estudio de carácter descriptivo, como futuras líneas de investigación me planteo realizar una ampliación de las tablas de tipo inferencial que contrastan la significatividad de los resultados obtenidos.

Me centraré en la metodología de contrastes basados en distribuciones multinominales.

Asimismo me propongo hacer un estudio de tipo longitudinal a lo largo de varios años, para analizar los posibles cambios en las tendencias observadas actualmente.

9. CONCLUSIONES

Partiendo del principio de que una conclusión no es un resumen, a menudo es frecuente ver en los trabajos de investigación cómo un ingente número de contenidos tratados se reduce a un escaso número de consecuencias o conclusiones. En este caso las conclusiones deben ser tenidas en cuenta como avances provisionales, porque en algunos aspectos la situación española parece aún emergente, es decir: la política gubernamental se muestra indecisa a adoptar unas medidas completamente competitivas.

La anunciada *Ley de servicios profesionales* ha quedado en ciernes. Antes de las últimas elecciones generales, el anteproyecto de ley preparado por el Partido Socialista fue rechazado en su totalidad por Ascensión Carreño, portavoz adjunta del Grupo Popular, en la sesión parlamentaria del día 26 de octubre del 2011.

Con todo, apunto las conclusiones siguientes:

1.- Inicialmente los representantes de los colegios profesionales son los únicos que mantienen una oposición a los cambios en su *status* (supuestamente por motivos de falta de autofinanciación) pero la encuesta de tipo selectivo, realizada entre los meses de abril y agosto del año 2011 revela que la sociedad española *grosso modo* es partidaria de la liberalización de los servicios profesionales públicos de las actividades vinculadas a Abogacías del Estado y Letrados, Notarías, Registros de la Propiedad, Procuradurías, Medicina, Veterinaria y Farmacia.

9. CONCLUSIONES

La liberalización supone en unos casos un menor control de los colegios profesionales, y en otros, si no la desaparición, sí la no obligatoriedad de trámites administrativos redundantes o perjudiciales desde el punto de vista económico para el ciudadano.

La opinión pública en general, con ligeras variaciones (por ejemplo, los abogados son menos proclives a la liberalización que los médicos, y los farmacéuticos aún menos partidarios que estos últimos) viene a ser coincidente, y se ha mostrado defensora de la liberalización, aunque es preciso apostillar que la opinión pública mayoritariamente apoya la liberalización con restricciones, le siguen los partidarios de la liberalización completa, frente a una minoría (coincidente con la de los representantes de los colegios profesionales), que se muestra contraria a la liberalización de los servicios.

Los profesionales y los usuarios, se definen partidarios de la liberalización, y las fuentes de información que han utilizado para formar esta opinión han procedido más de los medios audiovisuales de la comunicación de masas que de la lectura.

Este fenómeno, que viene produciéndose desde hace al menos un cuarto de siglo, debe hacernos recapacitar porque estamos viviendo principalmente en la cultura de la imagen, con sus ventajas e inconvenientes para sus defensores y detractores, porque si bien es verdad que una imagen puede valer más que mil palabras, tampoco es menos cierto que mil imágenes pueden no ser suficientes para definir un concepto.

9. CONCLUSIONES

2.- La defensa de la competencia, que en muchos casos puede no surgir de un sentimiento popular, sí al menos es un principio defendido por las principales autoridades internacionales en materia económica: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y, en lo que afecta a España, Unión Europea para fomentar el desarrollo de los intercambios comerciales. Por el momento parece una de las maneras más viables para desarrollar el comercio internacional al fomentar la capacidad creativa de los productores y reducir los gastos de los consumidores en un sistema de competencia perfecta.

Sin embargo, al igual que existen otras clases de organismos internacionales que regulan y juzgan aspectos comunes de los diferentes países del mundo como, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional (o Corte Penal Internacional); se echa en falta una legislación internacional (por consiguiente *européa*) uniforme para el respeto a los buenos usos de la Economía en un mercado de libre cambio y, asimismo, un hipotético Tribunal Internacional de la Competencia para el control y sanción de aquellas prácticas de competencia desleal realizadas en países que acaten este sistema de comercio.

3.- En el **contexto mundial** parece difícil que los países que no se adaptan al sistema de libre competencia alcancen los mismos niveles de desarrollo económico que aquellos que así lo hicieran. El espectacular desarrollo de las comunicaciones durante el último tercio del siglo XX ha producido tal abaratamiento en los costes de desplazamiento de recursos físicos e informativos que redundan en ventajas para la competitividad en el marco internacional. La solución de muchas pequeñas y medianas empresas españolas (pymes) para salir de la crisis económica actual es la internacionalización, es decir, la apertura

9. CONCLUSIONES

de filiales en el exterior, para ello tendrán que someterse al sistema de libre empresa que esté establecido en esos países extranjeros.

La aldea global, globalización o mundialización, como también se denomina, es un fenómeno que empuja a los gobiernos a la expansión comercial al exterior si pretenden mantener unos mínimos y aceptables niveles de competitividad. Los países del sudeste (o sureste) asiático han sido un buen ejemplo de esta política económica, como en la actualidad lo son las emergentes economías en crecimiento de Rusia, India, China y Brasil. España parece abocada a seguir este ejemplo.

4.- En el ámbito europeo, la renovación de las profesiones liberales vinculadas con servicios públicos y privados presenta por el momento una incompatibilidad de difícil acoplamiento entre los acuerdos de la Unión Europea, defensores de la competencia, y las diversas legislaciones nacionales mayoritariamente amparadas en el derecho romano y la tradición germánica.

5.- En el nivel nacional, España es un país aún aferrado a costumbres contrarias al espíritu de la libre competencia.

Considero que las medidas proteccionistas mantenidas no sólo en el aspecto macroeconómico a través de las leyes, sino también en ámbitos inferiores como el corporativismo profesional u otros intereses grupales, se oponen a un sistema económico competitivo.

En la redacción de los estatutos de todos los colegios profesionales españoles analizados: Derecho, Medicina, Farmacia y Veterinaria, se observan unas manifestaciones contrarias al espíritu de la libre competencia.

9. CONCLUSIONES

El comercio español debe adaptarse a las directrices de la Unión Europea. Ello ha provocado, entre otras medidas, la precipitada *Ley Ómnibus*, que por una parte resulta incompleta por no incluir algunas actividades económicas fundamentales y, por otra parte, parece ambigua y compleja al no dejar claros los límites de la libre competencia empresarial.

6- Las ramas profesionales vinculadas a las ciencias jurídicas y de la salud albergan poderosos recursos contra la competitividad, cuya manifestación más ostensible son los colegios profesionales. Estos son excesivamente numerosos. Dentro de un mismo colegio sus normas pueden variar de unas provincias a otras y, pese a su expresa voluntad de renovación, siguen manteniendo prebendas que perjudican la competitividad, porque encarecen los servicios prestados por los profesionales adscritos a esos colegios.

7.- La *Ley Ómnibus*, a pesar de sus lagunas y limitaciones, es la antesala de un futuro sistema profesional de libre competencia acorde con la normativa de la Unión Europea.

De modo similar a lo ocurrido con el *Informe Abril* entre los representantes políticos, ha tenido una acogida negativa entre algunos de los responsables de los colegios profesionales.

Desde el punto de vista de la economía cuantitativa hay que juzgar que este rechazo se debe en buena medida al desconocimiento general del ahorro derivado de las prácticas de la libre competencia.

9. CONCLUSIONES

Desde la perspectiva estrictamente económica, tomando como referencia el planteamiento de Breuss y Badinger [2005] aplicado al entorno de la Unión Europea, lejos de empeorar la situación laboral, con esa tímida *Ley Ómnibus* se espera conseguir en los próximos tres años la creación de unos 150 000 puestos de trabajo.

8.- No se puede entender el liberalismo económico sin un liberalismo cultural. La cultura liberal implica no sólo libertad de expresión y de acción, sino también respeto a las costumbres de los demás. Las situaciones de injusticia y los fallos, en general, del sistema social en los regímenes de épocas pasadas en algunos países, más que a las medidas económicas de carácter liberal, se deben a las malas prácticas de las personas que juegan con ventaja.

Las críticas al pensamiento liberal por lo general deberían ir dirigidas no tanto a las ideas liberales como tales, cuanto a los mecanismos de comportamientos no honestos y de sistemas judiciales poco operativos.

10. EPISTEMOLOGÍA DE LA COMPETENCIA¹³⁹

Parece conveniente al tratar cualquier asunto definir algunos conceptos básicos que valgan para orientar la lectura y evitar ambigüedades. A pesar de ello siempre habrá interpretaciones de términos iguales o muy parecidos utilizados en contextos diferentes, y en ocasiones habrá que considerar la Economía, al menos en el ámbito del pensamiento económico, tal como decía Keynes, más que como una ciencia exacta como una ciencia peligrosa [Barber, 1984, p. 243].

El término *competencia*, como dice Manuel Enrique Alejo González, “se presta a múltiples interpretaciones, tanto en el campo de la Economía como en el del resto de las ciencias sociales”¹⁴⁰

El concepto de competencia económica se aplica a la relación comercial entre una o varias partes oferentes y una o varias partes demandantes sobre determinados bienes o servicios en un sistema de libre mercado.

¹³⁹ Se ubica esta parte al final y no al principio de la obra porque el destino de su lectura no es un público general que precise de aclaraciones previas sino un grupo de expertos que en casos excepcionales deba consultarla con el fin de conocer el sentido de los términos empleados por la doctoranda.

¹⁴⁰ Tesis doctoral dirigida por D. Luis Gámir Casares. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid, curiosamente leída el 1 de enero (fiesta nacional) de 1991. Resumen obtenido de la base de datos Teseo. En esta tesis se interpreta la *competencia* como una gran fuente de información e incentivos. En: <https://www.educacion.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=D562B425392E82AE7D173649703E4827>. Consulta 4 de abril del 2011].

La libertad de elección es un principio fundamental en las relaciones comerciales. Los demandantes tienen libertad de elegir tanto productos y servicios como oferentes de dichos productos y servicios, y además, los oferentes tienen la posibilidad de escoger tanto productos y servicios como demandantes de los mismos para establecer las relaciones comerciales.

La libertad de elección se pone en entredicho cuando se consideran las circunstancias en las que se desarrollan las actividades comerciales. Es decir, si yo quiero vender un objeto ¿cómo he fabricado o conseguido obtener ese objeto anteriormente?

Se establecen así, **al menos en teoría**, dos modos de competencia: la competencia perfecta y la competencia imperfecta.

La escuela clásica (siglos XVIII y XIX) y la Escuela Austríaca (siglo XX) mantuvieron la consideración del sistema de competencia perfecta o competencia en un estado natural de las cosas. Por lo tanto no parece un caso de competencia perfecta, por ejemplo, el de los alumnos que desean acceder a la Universidad mediante las pruebas de selectividad porque, como apunta Engel y Navia [2006], al menos en Chile basta tener un padre profesional y haber ido a un colegio particular para sacar una ventaja en las PSU.

Competencia y competitividad

En general ambos términos se aceptan como sinónimos, así lo demuestran las entradas *competencia* y *competitividad* que aparecen en el *Diccionario* de carácter general de la Real Academia Española. El

especializado *The New Palgrave* no registra el artículo competitividad (competitiveness) aunque menciona actos competitivos.

En el *Diccionario* de Ramón Tamames y Santiago Gallego [2006, p. 202] se puede leer que *competitividad* es un término cacofónico introducido en los años 80.

El *Nuevo diccionario bilingüe de economía y empresa: inglés-español, español-inglés*¹⁴¹ de José María Lozano Irueste ni siquiera recoge las palabras competencia y competitividad.

El *Diccionario de Derecho y Economía de la Competencia* de Julio Pascual y Vicente [2002] destina nada menos que siete páginas para explicar el concepto y tipos de competencia, pero no figura el término *competitividad*.

En la literatura económica, sin embargo, aparecen en muchos casos con sentidos diferentes y de hecho se pueden leer artículos con la frase “competencia *versus* competitividad”. Por razones puramente operativas y con el objetivo de evitar confusiones en la redacción, propongo la distinción siguiente:

-Competencia es el tipo de capacidad que tiene la persona para actuar ante su entorno. Incluye los conocimientos adquiridos (el saber) y las actitudes (idiosincrasia). Es un concepto que sobrepasa el campo meramente económico, aunque en este estudio solamente se aplica a esta materia científica.

¹⁴¹ 3ª ed. Revisada y ampliada. Madrid: Pirámide, 1993. ISBN 843680757X.

-Competitividad es la puesta en práctica de la competencia por parte de los individuos o de la sociedad en una situación de libre mercado para producir bienes y servicios capaces de igualar o superar la actividad existente con iguales o menores costos.

La competitividad en el ámbito del pensamiento económico puede llegar a ser un concepto relativo porque alguno puede preguntarse ¿en qué consiste la competitividad? En teoría se trata de ofrecer productos de igual calidad a menor precio, pero en la práctica, si es que se acepta este supuesto, muchas veces en los procesos de producción una mayor competitividad se logra solamente cuando se aplican variables espurias. Por ejemplo, una empresa puede conseguir ser más competitiva que otra porque recorte derechos a sus trabajadores.

En otros contextos el término competencia puede tener otros sentidos. Por ejemplo, el economista y humanista Valentín Andrés Álvarez Álvarez en su personal interpretación del mercantilismo consideraba que “la palabra concurrencia se debía emplear para las personas y competencia para las cosas” [Perdices, 2003, p. 36].

Competencia frente a proteccionismo

Esta dicotomía entronca con uno de los grandes debates recogidos por la historia de la Economía. El tópico de creer que la competencia es una medida económica propia de regímenes liberales, frente al proteccionismo como aplicación de medidas económicas vinculadas a gobiernos intervencionistas y absolutistas no es cierto, porque también en los gobiernos de tinte liberal pueden producirse fenómenos de proteccionismo.

Independientemente, pues, de las decisiones gubernamentales de uno u otro signo, creo que hay muchas maneras de camuflar el proteccionismo. Muchas veces no resulta fácil establecer la frontera entre competencia y proteccionismo en el entorno mundial.

El hecho, por ejemplo, de que veamos desde el tren grandes plantaciones de algodón en buena parte del campo andaluz, por decisión de la Unión Europea, cuando ese mismo producto podría darse también en muchos otros países tercermundistas no es muestra ni más ni menos que de una medida proteccionista, aunque aparentemente no parezca tal cosa, al menos si se tiene en cuenta que muchos países pobres podrían producir asimismo algodón. El problema de la pobreza en el Tercer Mundo, en algunos casos no depende de su falta de recursos naturales, sino de la posibilidad de distribuir sus productos en el mercado internacional.

Competencia y Ética

Parece conveniente recordar dos conceptos a veces confusos: el de ética y el de moral. Los principios éticos tienen que ver con el deber o no deber hacer las cosas. Los principios morales incluyen juicios de valor, es decir: lo que se hace o lo que no se hace es bueno o es malo.

Las relaciones entre Economía y Ética (algunos incluyen Moral) están estudiadas en diversas obras que contienen el título genérico *economía divina*, entre las que destaca el libro de Stephen I. Long *Divine Economy: Theology and the Market* ¹⁴².

¹⁴² London; New York: Routledge, 2000. Hay traducción española hecha por María Luisa Gómez Bardón, Francisco Javier Martínez y Sebastián Montiel

Estimo que el estudio de la competencia en el ámbito de la Economía no debería aparecer desvinculado de consideraciones éticas.

La doctrina social de la iglesia Católica

La iglesia católica, y por consiguiente la española, ha difundido, sobre todo a partir de finales del siglo XVIII, a través de las diversas encíclicas papales y otras clases de manifiestos, su voluntad de practicar la austeridad, su oposición al consumismo, la condena del liberalismo, el rechazo de la Revolución Industrial y, por el contrario, su defensa del corporativismo, del agrarismo *antiurbano* y del *antimaquinismo*¹⁴³. Pero desde el punto de vista diacrónico estas consideraciones generales no están exentas de excepciones.

Aunque es verdad que la Iglesia en sus orígenes mantuvo una doctrina contraria a las relaciones de mercado (como es normal por el origen social del cristianismo, que aparece entre campesinos y pescadores empobrecidos de Palestina, y ya se sabe cómo los campesinos y pescadores por lo general no tienen muy buena opinión de los comerciantes, que en definitiva viven de ellos), también ha predicado lo contrario como ha demostrado Julio Caro Baroja¹⁴⁴.

con el título *Divina economía: la teología y el mercado*. Granada: Nuevo Inicio, 2006.

¹⁴³ Cfr. el capítulo sexto completo de la obra de Pedro Fraile Balbín *La retórica contra la competencia en España...* titulado "Las objeciones ético-religiosas: la Doctrina Social de la Iglesia (DSI)" (pp. 149-192).

¹⁴⁴ Cfr. los dos capítulos "el sacerdote y el mercader" y "contabilidad y espiritualidad" del libro *Las formas complejas de la vida religiosa* de Julio Caro Baroja (Barcelona: Sarpe, 1985).

La ejemplar y tan citada obra de Max Weber *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, tal vez más importante por la utilización de una metodología deductiva y especulativa que por la veracidad de sus contenidos, llegó a la conclusión de que en aquellas comunidades europeas donde triunfaron las ideas protestantes, el desarrollo del capitalismo fue muy superior al de las sociedades católicas. Tal aseveración no parece completamente cierta e incluso recientemente se ha puesto en entredicho.

La iglesia católica, que tantas veces se ha manifestado anticapitalista, también ha mostrado su interés por la economía, y sobre todo por la economía de la pobreza. Una de las encíclicas que más han incidido en este aspecto ha sido *Populorum Progressio* de Pablo VI, en la que por una parte se ataca el liberalismo económico y por otra se alude a los beneficios de la industrialización. No es precisamente un ejemplar tratado de Economía sino más bien los bandazos o doble rasero con que la Iglesia ha medido muchas veces los hechos económicos.

La misma actitud ambigua eclesiástica sobre la economía aparece, según el profesor Rodríguez Braun [2000, pp. 473-492] en la encíclica *Centesimus Annus* que el Papa Juan Pablo II publicó en 1991 coincidiendo con el primer centenario de la encíclica *Rerum Novarum* de León XIII.

Competencia y política económica

Las prácticas competitivas son muchas veces el resultado de las políticas económicas de los gobiernos. A menudo se difunde el tópico de que los gobiernos liberales en general establecen normas tendentes a

practicar la libre competencia perfecta; los gobiernos conservadores, en cambio, tienden a mantener situaciones de autarquía, proteccionismo y actividades mercantiles de competencia imperfecta como son el monopolio arbitrario, el monopolio natural, el oligopolio, el duopolio, el oligopolio diferenciado y la competencia monopolística.

Pero en algunos casos esto no es así y todos los fenómenos apuntados se pueden producir indistintamente en cualquier tipo de sistema político.

La nueva competitividad

La conmovedora y preocupante expresión: “Por qué ustedes, los científicos, no dejan las cosas como están. ¿Cómo voy a ganarme la vida lavando si no hay nada sucio que lavar?”¹⁴⁵ podrá resultar muy romántica pero no tiene mucho sentido en el campo de la moderna economía. El desarrollo económico está estrechamente relacionado con el movimiento. Me uno a la creencia de que el estatismo es lo peor que puede suceder a la economía.

El despliegue económico de China, India y los países del Sudeste Asiático supone un reto importante para la competitividad europea y norteamericana. Si se persigue un equilibrio general, pienso que la nueva competitividad deberá dar prioridad o mayor importancia a los recursos humanos por encima de los materiales si no desea una progresiva deshumanización del mundo.

¹⁴⁵ *The man in the white suit*, minutaje 1h.17'.20”

En este sentido opino que la educación es un factor fundamental para el desarrollo económico y por tanto debería ser considerada y tratada como un activo financiero más.

Si se aceptara esta estrategia habría que reformar en profundidad las organizaciones empresariales, primordialmente el sector servicios.

Una de las mejores inversiones que pueden hacer los gobiernos es la inversión en educación. Ello fomenta la competitividad de sus ciudadanos para desarrollar su capacidad de trabajo dentro o fuera del país.

El efecto más significativo sería, entre otros, la nueva división internacional del trabajo. De este modo probablemente el motivo fundamental de la migración ya no sería tanto la huida de la pobreza como la oportunidad de poder trabajar en aquella parte del mundo donde pueda ejercer mejor aquel oficio para el que uno esté preparado.

11. GLOSARIO SOBRE COMPETENCIA¹⁴⁶

Abuso de posición dominante

Es una de las [conductas prohibidas](#) por la Ley de [Defensa de la Competencia](#). Por posición dominante se entiende la situación en la que una empresa tiene la posibilidad de desarrollar un comportamiento relativamente independiente que le permite actuar en el mercado sin tener en cuenta a los proveedores, clientes o competidores. La legislación española no sanciona la mera posición dominante, puesto que ésta puede ser resultado de un buen desempeño empresarial, sino un [abuso](#) de la misma que pretenda restringir la libre [competencia](#) debilitando a los competidores, obstaculizando la entrada a otras empresas o aplicando condiciones injustas a clientes o proveedores.

¹⁴⁶ Las voces sucedidas de las siglas CNC indican que se han obtenido en el sitio web de la Comisión Nacional de la Competencia. Las mencionadas con las siglas JPV señalan que la fuente de información utilizada es la obra de Julio Pascual y Vicente, *Diccionario de Derecho y Economía de la Competencia en España y Europa*. Las seguidas de GCE corresponden al *Glosario....* de la Comisión Europea.

<http://www.cncompetencia.es/Inicio/FAQ/Glosario/tabid/101/Default.aspx?item=197#197> [Consulta 17 de junio del 2011].

Nos han sido, asimismo, muy orientativas las publicaciones de la Comisión Europea: *Glossary of terms used in EU competition policy. Antitrust and control of concentrations* [2002], accessible en

http://ec.europa.eu/competition/publications/glossary_en.pdf. [Consulta 17 de junio del 2011], y el Glossary del Manual de Carlton y Perloff [1994, pp. 919-927].

Se considera un comportamiento abusivo, por ejemplo, obligar a los consumidores a comprar juntos productos que podrían venderse por separado o expulsar del mercado a sus competidoras mediante acuerdos exclusivos. Si una empresa tiene una cuota de mercado inferior al 40%, se considera poco probable que ocupe una posición dominante (CNC).

Abuso de posición dominante

Conducta prohibida por la Ley española de Defensa de la competencia y por el Tratado de la Comunidad Europea, también denominada explotación abusiva, que consiste en utilizar una posición dominante en el mercado para obtener ventajas que serían inasequibles en unas condiciones de mayor competencia. Las conductas abusivas de posición de dominio no son autorizables (JPV).

Actos desleales

La CNC puede sancionar los actos de [competencia desleal](#) (de denigración de competidores, por ejemplo) pero sólo en el caso de que falseen de manera sensible la libre [competencia](#) y afecten al interés público (CNC).

Acuerdo de precios

Acuerdo entre empresas por el que se fijan ciertos precios, niveles de precios o métodos para su determinación. Constituye, a criterio del Tribunal de Justicia Europeo, una de las restricciones más graves a la competencia (JPV).

Agotamiento

Los derechos de propiedad intelectual e industrial, tales como las patentes y las marcas registradas, confieren al titular ciertos derechos exclusivos sobre la explotación de su trabajo, por ejemplo en la producción y la comercialización. Sin embargo, en la UE, el derecho exclusivo no puede utilizarse para dividir artificialmente el mercado común en función de las fronteras nacionales. Por consiguiente, el titular de un derecho de propiedad intelectual en un Estado miembro no puede oponerse a la importación de un producto protegido por el derecho de propiedad intelectual en ese Estado miembro si ese producto ya ha sido comercializado en el mercado de otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento. En este supuesto se considera agotado el derecho de propiedad intelectual del titular. El principio de agotamiento no se aplica a los productos comercializados en el mercado de terceros países.

Amicus curiae

Desde que la [Ley 15/2007](#), de 3 de julio, de [Defensa de la Competencia](#) ha posibilitado la aplicación privada del Derecho de la [Competencia](#), se han arbitrado mecanismos de colaboración entre la CNC y las [autoridades autonómicas](#) de [defensa de la competencia](#), por un lado, y los [órganos jurisdiccionales](#), por otro. Así, la CNC y los correspondientes órganos de las CCAA están legitimados para aportar información o presentar observaciones por propia iniciativa ante los órganos jurisdiccionales competentes (CNC).

Autorreglamentación (vid. Autorregulación)

Autorregulación

Capacidad legal de los agentes para dotarse de normas que se orientan a modificar su comportamiento con el objeto de ordenar el ejercicio de la actividad económica que desempeñan (JPV).

Barreras de entrada

Son las dificultades y costes asociados que una empresa tiene que superar para iniciarse en un sector productivo. Las barreras de entrada pueden ser de dos tipos:

Barreras legales y reglamentarias.

Barreras inherentes al propio mercado como, por ejemplo, la falta de una información o publicidad global entre oferentes y demandantes de servicios para fijar los precios.

Las dificultades para las nuevas empresas que procuran entrar en el mercado libre no siempre son las mismas, como dice Ana Rosado Cubero [2010, p. 170] “Barriers to entry are not always the same, since firms are interested in different kinds of agreements to exclude competition. These will vary according to time and place”.

Bienestar de los consumidores

Es la satisfacción que a los individuos procura el consumo de bienes y servicios. En la práctica, la economía del bienestar aplicada recurre a la noción de excedente de los consumidores para medir su bienestar total (JPV).

Cártel

Todo acuerdo interno entre dos o más competidores cuyo objeto sea la fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o la restricción de las importaciones o las exportaciones.

Si el acuerdo entre los competidores no tiene como fin ni como resultado la restricción de la competencia, no podría considerarse un fenómeno de cártel y sus acuerdos serían lícitos.

Cártel de precios

(*vid.* Acuerdo de precios)

Clemencia / Leniency

The New Palgrave Dictionary of Economics no deja claro este término. En esta obra de consulta se encuentra el artículo de Joseph E. Harrington, Jr.¹⁴⁷ con el lema “Corporate Leniency Program” como referencia más aproximada. No es fácil encontrar una definición acertada en los diccionarios de Economía, sin embargo la Unión Europea deja bien claro su sentido:

¹⁴⁷ Harrington, Joseph E. "antitrust enforcement." *The New Palgrave Dictionary of Economics*. Second Edition. Eds. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. Palgrave Macmillan, 2008. *The New Palgrave Dictionary of Economics Online*. Palgrave Macmillan. En: http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_A000223 <doi:10.1057/9780230226203.0048 [Consulta 22 de abril del 2011].

“Leniency. The penalties for companies that breach the competition rules can be very severe. For cartel infringements, the largest fine imposed on a single company is over €896 million; the largest fine imposed on all members of a single cartel is over €1,3 billion. In June 2006 the Commission revised its [guidelines for setting fines in competition cases](#). These revised guidelines will often lead to fines for cartels being significantly higher than previously.

However, companies that have participated in illegal cartels have a limited opportunity to avoid or reduce a fine (= Sin embargo, las empresas que hayan participado en los cárteles ilegales tienen la posibilidad de evitar o reducir el importe de una multa). The Commission operates a leniency policy whereby companies that provide information about a cartel in which they participated might receive full or partial immunity from fines.

La clemencia o indulgencia tiene sus aplicaciones en la Ley de Defensa de la Competencia, sin embargo José Eugenio Soriano (2007, pp. 214-221) pone en duda la constitucionalidad de la clemencia por su posible incompatibilidad con algunos puntos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre todo por los juicios paralelos, ya que independientemente de la validez sancionadora de la Comisión Nacional de la Competencia, los mismos actos son susceptibles de ser juzgados también por los tribunales ordinarios de lo civil y lo penal.

Competencia

En su dimensión económica la competencia hace referencia a la eficiencia que se procura en la asignación de los escasos recursos de la sociedad, al movilizar a todo el que quiere mejorar para que ofrezca los

bienes o servicios que produce con la mayor calidad y el menor coste; es decir, usando en la menor medida posible los recursos escasos de la sociedad (JPV).

Una competencia leal y no falseada es el pilar fundamental de una economía de mercado. Cuando existe una situación de competencia efectiva en un mercado los vendedores de un producto o servicio luchan de forma independiente para alcanzar los objetivos de unos beneficios, unas ventas o una mayor cuota de mercado. La rivalidad competitiva se manifiesta en diferencias en los precios, en la calidad, en el servicio o bien en una combinación de estos factores y ha de poder ser valorada por los clientes (CNC).

Para referirnos a las leyes en defensa de la competencia, la costumbre europea es emplear las palabras *Competition Law*, en cambio en las publicaciones norteamericanas es más frecuente ver la frase *Antitrust Law*.

Competencia directa

Competencia en la que se comercializan productos con características comunes o casi idénticas.

Competencia indirecta

Competencia en la que se venden productos sustitutos.

Competencia perfecta

Tomando como modelo la definición de Carlton y Perloff [1994, p. 87]: “We define perfect competition as a market outcome in which all firms produce homogeneous, perfectly divisible output and face no barriers to entry or exit; producers and consumers have full information, incur no transaction cost, and are price takers; and there are no externalities”.

Concentración económica

Es el “cambio estable del control de la totalidad o parte de una o varias empresas como consecuencia de:

- a) La fusión de dos o más empresas anteriormente independientes.
- b) La adquisición por una empresa del control sobre la totalidad o parte de una o varias empresas.
- c) La creación de una empresa en participación y, en general, la adquisición del control conjunto sobre una o varias empresas, cuando éstas desempeñen de forma permanente las funciones de una entidad económica autónoma”¹⁴⁸.

Conducta colusoria

Coordinación del comportamiento competitivo de las empresas. En el caso de las conductas colusorias es probable que el resultado de esa coordinación sea una subida de precios, una restricción de la producción y un aumento de los beneficios de las empresas participantes. El comportamiento colusorio no siempre se establece mediante acuerdos explícitos entre las empresas: también podría resultar de situaciones en que las empresas actúan por su cuenta pero, reconociendo su interdependencia con sus competidores, ejercitan

¹⁴⁸ Ley 15/2007 de Defensa de la competencia, *B.O.E.* nº 159, p. 28852.

conjuntamente el poder de mercado con los demás competidores en colusión. Esta práctica recibe el nombre de «colusión tácita» (CNC).

Conducta de *minimis*

Aquella que, por su menor importancia, no es susceptible de afectar de forma significativa a la competencia¹⁴⁹.

Consortio

Grupo de empresas independientes que trabajan juntas en la ejecución de un proyecto específico. Los consorcios abundan, por ejemplo, en el sector de la construcción, en el que los grandes proyectos (edificios, autopistas, etc.) requieren una estrecha colaboración entre empresas de ingeniería, de planificación y de construcción. La Comisión ha adoptado un reglamento específico de exención por categorías para los consorcios entre compañías de transporte marítimo para la explotación conjunta de servicios de transporte de línea regular. Estos consorcios pueden restringir la competencia en el mercado común y afectar al comercio entre Estados miembros y, de no ser por la exención, estarían prohibidos conforme al apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE (GCE).

Cuota Litis

(*vid.* Pacto de cuota Litis).

¹⁴⁹ *Cfr.* Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. *B.O.E.* n° 159, p. 28849.

Cuota de mercado

Porcentaje que representa las ventas de una empresa respecto de las ventas totales de las empresas del sector, durante un período de tiempo determinado, generalmente un año (JPV).

Deslealtad

La regulación legal de la deslealtad está en la Ley 3/1991, de 10 de enero de 1991, de Competencia Desleal (LCD). Anteriormente “en España y a lo largo del siglo XX, la tutela de la lealtad en la actividad competidora de los empresarios se ha caracterizado por su notable imperfección y su excesivo casuismo [Jiménez Sánchez, 2010, p. 144].

Según el artículo 4 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), “se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.

El problema es medir la buena o la mala fe de las personas porque puede suceder que en algunos casos la buena fe implique conductas restrictivas a la competencia y que la mala fe suponga comportamientos de competencia perfecta.

Prefiero definir la *deslealtad*, en el contexto de este estudio, como el incumplimiento en todo o en parte de las leyes y de las normas que defienden la competitividad en las acciones mercantiles.

Muy atinadamente el manual *Lecciones de Derecho Mercantil* [Jiménez Sánchez, 2010] diferencia la deslealtad entre empresarios y “la deslealtad entre empresarios y consumidores y usuarios” (p. 146).

Los actos concretos de deslealtad competitiva entre empresarios, siguiendo la obra de Jiménez Sánchez (pp. 147-148) son: confusión, engaño, omisiones engañosas constituidas, prácticas agresivas, denigración, comparación, actos de imitación y de explotación de la

reputación ajena, violación de secretos, desviación de dependientes y contratantes, violación de normas, discriminación y precios predatorios.

Dumping

Con la misma clarividencia que para definir algún que otro extranjerismo admitido en nuestro idioma, el Diccionario de la Real Academia Española dice: “Práctica comercial de vender a precios inferiores al costo, para adueñarse del mercado, con grave perjuicio de este”.

Duopolio de Cournot

(*vid.* Precio de Cournot)

Economía de mercado

Sistema económico que se rige por las decisiones que libremente adoptan quienes intervienen en el mismo, comprando o vendiendo bienes y servicios en un sistema de respeto a la propiedad privada¹⁵⁰. Su sistema antagónico es el de economía de planificación central, que se rige exclusivamente por las decisiones de la autoridad (JPV).

Eficacia

Relación entre los objetivos propuestos y los logros obtenidos.

¹⁵⁰ El subrayado es mío.

Eficiencia

Relación entre medios empleados y logros obtenidos o utilización óptima de recursos escasos.

Según el Diccionario de Julio Pascual y Vicente, se distinguen normalmente dos tipos de eficiencia: eficiencia tecnológica (o técnica) y la eficiencia económica (asignativa o distributiva).

Estrategia de ofuscación

Estrategia así denominada por Stephen P. Magee, William A. Brock y Leslie Young, consistente en que “ciertas políticas impopulares, tales como los aranceles, por ejemplo, son disfrazadas por parte de los *lobbies* con argumentos que camuflan su intención redistributiva”¹⁵¹.

Excedente del consumidor

Medida del bienestar del consumidor. Se define como la diferencia entre el valor atribuido por el consumidor al producto y el precio efectivamente pagado por él (JPV).

Excepción legal a la competencia

Acuerdos, prácticas o decisiones prohibidos en virtud de lo establecido en la *Ley de Defensa de la Competencia*, pero que se hacen acreedores de una dispensa mediante una norma con rango de Ley en virtud de los intereses generales que mediante este procedimiento se supone que se consiguen (JPV).

¹⁵¹ *Black hole tariffs and endogenous policy theory. Political economy in general equilibrium*. Cambridge: University Press, 1989, p. 134. Apud. Pedro Fraile. *La retórica contra la competencia...*, p. 28

Exención por categorías

El Gobierno y la Unión Europea en sus respectivos ámbitos de competencia podrán, mediante Reglamentos de exención, autorizar las categorías de acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas previstas en la legislación vigente e inicialmente prohibidos, siempre que se cumplan las condiciones exigidas en las normas y el procedimiento previsto (JPV).

Fijación de precios

Acuerdo o acción concertada entre empresas, o decisión de una asociación de empresas, que tiene por finalidad o por efecto limitar, directa o indirectamente, la libertad de las empresas para fijar los precios en las transacciones individuales con los proveedores o con los clientes (JPV).

Gremio

Asociación de profesionales de determinados oficios manuales, surgida en la Baja Edad Media en Europa hasta la revolución industrial en el siglo XVIII, con el fin de controlar la oferta y los precios de los productos manufacturados. Se ocupaban de controlar la formación profesional estableciendo un rígido sistema de tres clases de trabajadores: maestros, oficiales y aprendices. También se ocupaban de prestar servicios asistenciales a sus miembros en casos de desgracias personales como la enfermedad, la orfandad o la viudez e, incluso fomentaron el asociacionismo de tinte religioso mediante las cofradías. Algunos han visto en los gremios el precedente de los modernos

sindicatos. Otros han establecido un paralelismo entre los gremios y los colegios profesionales con la diferencia de que los primeros están relacionados con las actividades profesionales de carácter manual y los segundos con las de tipo intelectual.

Interés general

Como se indica en este trabajo es la terminología más apropiada y cada vez más usada en los trabajos científicos en vez de *interés público*. Por oposición al término interés particular, el interés general se refiere al interés de la mayoría, sin embargo su elevado nivel de abstracción lo hace susceptible de interpretaciones muy dispares.

Interés público

(*vid. Interés general*)

Libre competencia

Supresión de todo privilegio u obstáculo que impida el acceso a los empleos o profesiones y a los mercados ya que la existencia de barreras artificiales induce producciones ineficientes y ampara conductas ineptas, la asignación de recursos se resiente y la sociedad en su conjunto padece el daño al reducirse el nivel de vida de los ciudadanos (JPV).

Monopolio

Situación de mercado que se caracteriza porque hay un solo vendedor. En esas condiciones, la empresa tiene capacidad para fijar con independencia los precios, las cantidades ofertadas o las condiciones comerciales. En estas condiciones el monopolista obtiene un beneficio superior al normal (la renta de monopolio) a costa de los consumidores, que sufren una pérdida neta de bienestar (JPV).

Monopolio natural

Fenómeno que de manera excepcional se tolera en un sistema de libre mercado cuando son necesarias inversiones muy costosas en infraestructuras, cuando revistan un beneficio social necesario y evidente, y siempre que se cumplan determinadas condiciones que no perjudiquen a otros competidores.

Monopsonio

Término creado por la economista Joan Violet Robinson en su obra *The Economics of Imperfect Competition* [1933] para describir la relación comercial en la que hay un único comprador de un producto o de un servicio. En bastantes ocasiones esto sucede cuando el único demandante es el Estado; un ejemplo claro es la compra de armamento pesado. Se trata de un caso de competencia imperfecta.

Ofuscación

(*vid.* Estrategia de ofuscación).

Oligopolio

“Forma concreta del mercado, en la cual un reducido número de ofertantes controla la mayor parte de la oferta, pero sin llegar a un acuerdo entre sí, de modo que se mantiene una cierta competencia oligopolística, que generalmente va paralela a la existencia de marcas, cuya difusión en el mercado se intenta a través de estudios de marketing, promoción y publicidad” [Tamames y Gallego, 2006, p. 577].

Oligopsonio

En un entorno de libre mercado de oferta y demanda, situación caracterizada por un reducido número de demandantes.

Operador económico

En el contexto de la competencia, son operadores económicos las Administraciones Públicas, corporaciones u otras entidades de naturaleza jurídico-pública “cuando actúen excediendo del ejercicio de sus potestades públicas o *ius imperii*, mediante la realización de actuaciones sujetas a Derecho privado” [Cfr. Sergio Baches Opi (coord.). La ley 15/2007, de defensa de la competencia. Balance de su aplicación, p. 140].

Pacto de cuota Litis

Es el “acuerdo suscrito entre el Procurador y su cliente con anterioridad a la finalización de un pleito en el que el cliente es parte,

en virtud del cual este se compromete a pagar al Procurador un tanto por ciento o una parte alícuota del valor que se obtenga en dicho pleito o de los bienes litigiosos” (Ciarreta Antuñano et al. 2010, p. 212).

Pérdida neta de bienestar

Valor monetario del excedente de los consumidores que se pierde como consecuencia de un alza de los precios como consecuencia del deficiente funcionamiento de la competencia en los mercados (JPV).

Pliopolio

Concepto acuñado por Fritz Machlup [1942, pp. 1-23] para referirse a la capacidad que tiene un mercado para aceptar la entrada de nuevos productores. El pliopolio resulta positivo cuando el número de competidores aumenta, y negativo cuando disminuye; esto último ocurre sobre todo si se producen fusiones o casos equivalentes.

Poder de mercado

Aptitud de una empresa, o grupo de empresas, de subir y mantener los precios de sus productos por encima del nivel de competencia. El ejercicio de un poder de mercado (o poder de monopolio) tendrá por efecto una disminución de la producción o una pérdida neta de bienestar (JPV).

Posición dominante

Dominio o preponderancia de una empresa que puede actuar sin necesidad de tener en cuenta las reacciones que su comportamiento suscita en el mercado. En estas condiciones, la competencia no desempeñaría un papel regulador de aquél (JPV).

Práctica anticompetitiva

Genéricamente se aplica a un gran número de prácticas comerciales que tienen por objeto o efecto restringir la competencia entre las empresas. Las categorías de prácticas susceptibles de ser consideradas como anticompetitivas y, en consecuencia, prohibidas por la legislación, varían según los países (JPV).

Práctica conscientemente paralela

Comportamiento armonizado de varias empresas en el mercado, sin que medie un acuerdo expreso o tácito entre ellas, como simple consecuencia de desarrollar las mismas sus respectivas acciones con el propósito de evitar la discordancia (JPV).

Precio de Cournot

En un mercado de duopolio cada empresa establece un precio máximo de rentabilidad en la creencia de que su otro oponente no cambiará el precio. Una vez equilibrado el mercado cada empresa puede variar sus precios a la baja para conseguir mayor número de clientes. La empresa contraria hará lo mismo, llegando a una regulación de precios. Los precios tenderán a la baja a medida que aumente el número de

empresas. Para una información más completa, consúltese la interesante tesis doctoral inédita de del Economista Jefe de la CNC, nombrado en el 2008, Juan Delgado Urdanibia, *competencia duopolística en mercados desregulados*.

Precio predatorio

Precio mínimo de un objeto, e incluso por debajo del coste de producción, fijado por un productor, inicialmente con el objeto de evitar la competencia de los adversarios, para conseguir posteriormente una situación de monopolio. Es una estrategia punible prevista en el artículo 17 de la Ley de Competencia Desleal.

Coates [2011, p. 3] dice algo parecido: “Predation occurs when a company incurs a loss for a period of time sufficient to weaken or eliminate a competitor, or to deter potential competitors from entering the market, with a view to foreclosing the market and emerging from the predation in a stronger position than it would otherwise have been”.

Profesión liberal

Existe una posible ambigüedad a la hora de consensuar una definición de este concepto¹⁵². Haciendo eco de Karl Popper y creyendo que muchas veces es mejor hincar el diente a los problemas que ponernos a definir las palabras, *profesión liberal* es la actividad laboral que realiza una persona con una titulación universitaria, por la que recibe una remuneración no como salario sino mediante el pago de

¹⁵² Cfr. <http://www.gerencie.com/profesion-liberal.html> [Consulta 22 de abril del 2011].

honorarios, lo que supone que no existe un contrato laboral sino un contrato de servicios.

Regulación de precios

Se trata de la fijación de precios (máximos o mínimos) mediante normas legales. El término incluye también las normas que establecen los sistemas de revisión de determinados precios de bienes o servicios en mercados controlados por las Administraciones públicas (JPV).

Reparto de mercado

Concierto de voluntades por el que dos o más empresas se distribuyen el mercado de modo que cada una de ellas se compromete a no entrar como operador económico dentro del ámbito adjudicado a otra empresa. Cuando estos acuerdos tienen por objeto o efecto (o pueden tenerlo) el limitar la competencia, están prohibidos (JPV).

Reservas de actividad

Son las actividades que solamente pueden ser desempeñadas por quienes tienen una determinada cualificación para ello. En España actualmente hay identificadas al pie de 200 profesiones con esta clase de restricción. La próxima Ley de Servicios Profesionales pretende reducirlas a 50.

Trust

Con una encomiable claridad el *Diccionario de la Real Academia Española* define este vocablo de la manera siguiente: “Grupo de empresas unidas para monopolizar el mercado y controlar los precios en su propio beneficio”.

Visado

Reconocimiento, examen y autorización de un documento. En general los colegios profesionales de actividades aplicadas (arquitectos, ingenieros,...) visan o dan el visto bueno a los trabajos de sus miembros colegiados. El visado es un sistema de control que debería hacer la Administración del Estado pero que, en cambio, delega en los colegios. El visado trata de identificar al autor y respaldar la calidad del trabajo de acuerdo con unas determinadas normas de producción.

A pesar de las críticas manifestadas por muchos usuarios e incluso por profesionales, la ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio justifica plenamente la emisión de visados¹⁵³.

¹⁵³ B.O.E. 23 de diciembre del 2009, pp. 108507-108578.

12. BIBLIOGRAFÍA

ALONSO SOTO, Ricardo (1999). Los poderes públicos y la libertad de competencia (Análisis del artículo 90 del Tratado de la Comunidad Europea). *Comunidad Europea Aranzadi*. N° 5, mayo, p. 31-37. ISSN 1132-2527.

ANÁLISIS de la competencia (1997). Madrid: Instituto Superior de Estudios Empresariales.

ARANZABE PABLOS, Guillermo (2009). Colegios Profesionales y Defensa de la Competencia: la experiencia vasca. *La Ley*, n° 12, noviembre-diciembre, pp. 43-54. ISSN 0211-2744.

ARRUÑADA, Benito (1996). The Economics of Notaries. *European Journal of Law and Economics*, vol. 3, n° 1, pp. 5-37. ISSN 0929-1261.

BACHES OPI, Sergio (Coord.)(2010). *La Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. Balance de su aplicación*. Madrid: La Ley; Asociación Española de Defensa de la Competencia. ISBN 8481267938.

BARBER, William J. (1967). *A history of economic thought*. Harmondsworth: Penguin. Hay versión española, *Historia del pensamiento económico*. Madrid: Alianza Editorial, 1984. Cito por la edición española, ISBN 8420621012.

12. BIBLIOGRAFÍA

BENEYTO, José María y Jerónimo Maillo (dirs.) (2009). *La nueva ley de defensa de la competencia: análisis y comentarios*. Barcelona: Bosch. ISBN 8497904704.

BERUMEN, Sergio A. (coord.) (2009). *La política de la competencia en Europa*. Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC. ISBN 8473566216.

BORCHARDT, Klaus-Dieter (2011). *El ABC del Derecho de la Unión Europea*. Luxemburgo: Unión Europea, Oficina de Publicaciones, 2011. ISBN 978-92-78-40526-7.

BREUSS, Fritz y Harald BADINGER (2005). *The European Services Market in the context of the Lisbon Agenda*. Wien. Institute for Advanced Studies.

BROSETA PONT, Manuel (2011). *Manual de Derecho Mercantil. Vol. I: Introducción y estatuto del empresario, derecho de la competencia y de la propiedad industrial, derecho de las sociedades*. 18ª ed. Preparada por Fernando Martínez Sanz. Madrid: Tecnos. ISBN 8430953523.

BUJEDA SÁNCHEZ, José (1974). *La medida en las ciencias sociales*. Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros. ISBN 8472311570.

CABRILLO RODRÍGUEZ, Francisco (1980). *España ante la C.E.E.: libertad financiera*. Madrid: Unión Editorial. ISBN 8489633355.

CABRILLO RODRÍGUEZ, Francisco (1986). Los mercados y la competencia. *Torre de los Lujanes*, Nº 54, p. 161-168. ISSN 1136-4343.

12. BIBLIOGRAFÍA

CARO BAROJA, Julio (1985). *Las formas complejas de la vida religiosa*. Barcelona: Sarpe. ISBN 8422652994.

CARLTON, Dennis W. y Jeffrey M. (1994) Perloff. *Industrial Organization*. 2nd. ed. New York: HarperCollins College Publishers.

CARRETERO Y JIMÉNEZ, Anselmo (1977). *La personalidad de Castilla en el conjunto de los pueblos ibéricos*. San Sebastián: Hyspamérica. ISBN 8440037279.

CIARRETA ANTUÑANO, Aitor, María Paz Espinosa Alejos, José Manuel Martín Osante, Aitor Zurimendi Isla (2010). *El estado de la competencia en la profesión de notario*. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2010. ISBN 8497687843.

CIARRETA ANTUÑANO, Aitor, María Paz Espinosa Alejos, José Manuel Martín Osante, Aitor Zurimendi Isla (2010b). *El estado de la competencia en las profesiones de abogado y procurador*. Madrid: Cívitas (Thompson Reuters). ISBN: 8447033423.

COATES, Kevin (2011). *Competition law and regulation of technologies*. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0199575213.

COMISIÓN Europea (2004). *Glosario de términos utilizados en el ámbito de la política de competencia de la Unión Europea. Normas de defensa de la competencia y control de las concentraciones*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, p. 6. ISBN 92-894-6315-5.

COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA (2008). *Informe sobre el sector de servicios profesionales y los colegios profesionales*.

12. BIBLIOGRAFÍA

Madrid: Comisión Nacional de la Competencia. Salió en el mes de setiembre.

COMPETENCIA. Revista latina de negocios. Sede en Buenos Aires. 1972-. ISSN 1667-8435.

COMPETENCIA (2004). *Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo*. Nueva York; Ginebra: Naciones Unidas.

CORNELLA, Alfons (1994). *Los recursos de información. Ventaja competitiva de las empresas*. Madrid (etc.): McGraw-Hill. ISBN 8448118146.

CUERDO MIR, Miguel (2005). Presentación. En: Javier Guillén Caramés. *Libre competencia y Estado autonómico*. Madrid; Barcelona: Marcial Pons; Universidad Rey Juan Carlos. ISBN 849768219X.

DEMING, W. Edwards (1989). *Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis*. Madrid: Díaz de Santos. ISBN 8487189229.

DEMSETZ, Harold (1986). *La competencia: aspectos económicos, jurídicos y políticos*. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 8420624705.

DERECHO y Economía de la Competencia. Lista de distribución sostenida por RedIris. Creada el 20 de mayo del 2004, a las 12:15:24 horas. Accesible en <http://www.rediris.es/list/info/dercomp.html> [consulta 2 de setiembre del 2010].

DEUSTUA, Alejandro. Liberalismo y mercantilismo: más allá del debate económico. *Contexto.org*, diciembre 2004, 8 pp. En: <http://www.contexto.org/pdfs/comsegbor.pdf> [Consulta, 9 de febrero del 2010].

12. BIBLIOGRAFÍA

ENGEL, Eduardo y Patricio Navia (2006). *Que gane el más mejor*. Santiago de Chile: Random House; Editorial Debate. ISBN 9789568410087.

ENGRA, José Carlos y Edurne Navarro Varona (abogados de Uría & Menéndez) (2002). Derecho de la competencia y colegios profesionales. *Revista española de Derecho Europeo*, nº 3, julio-septiembre, pp. 517-530. ISSN 1579-6302.

ESPAÑA (1995). Tribunal de Defensa de la Competencia. *La defensa de la competencia en España y en Europa: informes del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Comisión Europea*. Barcelona: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Servicio de Estudios. ISBN 8434420724.

EUROPEAN COMMISSION (2002). *Glossary of terms used in EU competition policy. Antitrust and control of concentrations*. Brussels: European Comisión. ISBN 92-894-3951-3.

FERNÁNDEZ FARRERES, Germán (dir.) (2002). *Defensa de la competencia y colegios profesionales*. Madrid: Civitas. ISBN. 84-470-1716-8. Tiene una reseña hecha por Javier Junceda Moreno en *Civitas. Revista española de derecho administrativo*, nº 117, 2003, pp. 153-155. ISSN 0210-8461.

FOX, Eleanor M. y Abel Moreira Mateus (eds.) (2011). *Economic development: the critical role of competition law and policy*. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing. 2 vols. ISBN 978-1-84980-046-4.

12. BIBLIOGRAFÍA

FRAILE BALBÍN, Pedro (1998). *La retórica contra la competencia en España (1875-1975)*. Madrid: Fundación Argentaria; Visor. ISBN 8477749566.

GALÁN CORONA, Eduardo (1977). *Acuerdos restrictivos de la competencia*. Madrid: Montecorvo. ISBN 8471111160.

GARRIDO MEDINA, Luis J. (1992). La educación profesional para el empleo. En: Emilio Albi Ibáñez (dir.). *Europa y la competitividad de la economía española*. Barcelona: Ariel. ISBN 8434420724.

GARRIGUES WALKER, Joaquín (1964). *La defensa de la competencia mercantil*. Madrid: Sociedad de Estudios y Publicaciones.

GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago (1977). *La aplicación del derecho de la competencia a los colegios profesionales*. Madrid: Tecnos. ISBN 8430929940.

GUILÉN CARAMÉS, Javier (2002). *El estatuto jurídico del consumidor (Política comunitaria, bases constitucionales y actividad de la Administración)*. Madrid: Cívitas, 2002. ISBN 8447017850.

IBN JALDÚN (2005). *Introducción a la historia universal*. México: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9681626451.

IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac (1995). *Defensa de la competencia y colegios profesionales*. Madrid: Dykinson. ISBN 8481550876.

ILLÁN FERNÁNDEZ, José María (2009). *La prueba electrónica, eficacia y valoración en el proceso civil: nueva oficina judicial, comunicaciones telemáticas (LEXNET) y el expediente judicial*

12. BIBLIOGRAFÍA

electrónico: análisis comparado legislativo y jurisprudencial. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. ISBN 849903 3969.

INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. *ISO 690:2010 Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources*. 3rd ed. 15 de junio del 2010. (Genève): ISO, 2010. 40 páginas.

IRANZO, Juan Emilio y Marta Otero (2010). La competencia desleal. *Economistas*, n° 123 extraordinario, p. 248-251. ISSN 0212-4386.

JELEZTCHEVA JELEZTCHEVA, María (2009). *Las autoridades de defensa de la competencia: Los Estados Unidos y la Unión Europea. España y Bulgaria*. Tesis doctoral presentada en el Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid en el mes de marzo del año 2007. Director Juan de la Cruz Ferrer. En la ficha catalográfica figura el año 2009. ISBN 8469201336.

Accesible en <http://eprints.ucm.es/8185/1/T30219.pdf> [Consulta 14 de abril del 2011]

JIMÉNEZ LATORRE, Fernando y Javier Coronado Saleh. La naturaleza de las simulaciones y su utilidad. En: Sergio Baches Opi (Coord.)(2010). *La Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. Balance de su aplicación*. Madrid: La Ley; Asociación Española de Defensa de la Competencia. ISBN 8481267938.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J. (Coord.) (2010). *Lecciones de Derecho Mercantil. Adaptado al texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital*. 14^a ed. Madrid: Tecnos. ISBN 8430951451.

12. BIBLIOGRAFÍA

JORNADAS Justicia y competitividad 2006 (2007). Madrid: Consejo General del Poder Judicial. ISBN 8496809581.

LEY 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales. *BOE* núm. 40 de 15/02/1974, pp. 3046-3049. ISSN 0212-033X.

LEY de defensa de la competencia (2008). Madrid: Tecnos. ISBN 8430947225.

LÓPEZ AGÚNDEZ, José María (2008). Competencia ataca el poder de los colegios y reclama su liberalización. *Expansión*. 16-09-2008.
<http://www.expansion.com/2008/09/16/juridico/1164888.html> [Consulta 27-01-2010].

LÓPEZ AGÚNDEZ, José María y D. Gracia (2009). Economía frena a Competencia y no libera los colegios profesionales. *Expansión*, 21-01-2009. También en
<http://www.expansion.com/2009/04/20/economia-politica/1240263980.html>
[Consulta 27-01-2010]

LOZANO IRUESTE, José María (1993). *Nuevo diccionario bilingüe de economía y empresa: inglés-español, español-inglés*. 3ª ed. Revisada y ampliada. Madrid: Pirámide. ISBN 843680757X.

MACARRÓN LARUMBE, Alejandro (2006). *Competencia: todos con todos, todos contra todos*. Córdoba: Almuzara. ISBN: 8496416836.

MACHLUP, Fritz (1942). Competition, Pliopoly and Profit. *Economica*, vol. 9, nº 33, pp. 1-23. ISSN 0013-0427.

12. BIBLIOGRAFÍA

MANGAS MARTÍN, Araceli (2010). *Instituciones y derecho de la Unión Europea*. 6ª ed. Madrid: Tecnos. ISBN. 8430947591.

MAÑAS ALCÓN, Elena, María Luisa Peinado Gracia y Raquel Llorente Heras [2006]. *Impacto en la economía española de las profesiones colegiadas: un estudio sobre la producción y el empleo*. Madrid: Instituto de Estudios Económicos. ISBN 84-88533-84-5.

MARCOS FERNÁNDEZ, Francisco (2003). La aplicación del Derecho de defensa de la competencia a los colegios profesionales: Notas a propósito del libro “Colegios Profesionales y Competencia”. *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, nº 223, pp. 85-91. ISSN 1575-2054.

MARTÍN MARTÍN, Victoriano (2002). *El liberalismo económico: la génesis de las ideas liberales desde San Agustín hasta Adam Smith*. Madrid: Síntesis. ISBN 8497560329.

MASSAGUER, José et al. (2008). *Comentario a la ley de defensa de la competencia*. Madrid: Thomson Civitas. ISBN: 8447028993.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (2005). *Libro blanco para la reforma del sistema español de defensa de la competencia*. Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda. NIPO 601-05-013-9.

MONTANER FRUTOS, Alberto (1999). *Prontuario de Bibliografía*. Gijón: Trea. ISBN 8495178451.

MURRAY, Peter L. (2007). *Real Estate Conveyancing in 5 European Union Member States: A Comparative Study*. Cambridge (Massachusetts): Harvard Law School. Accesible en: <http://www.cnue.eu/cnue-2010/en/006/murray-short-preliminary-report-final-25-06-07-en.pdf>

12. BIBLIOGRAFÍA

[consulta 28 de julio del 2011].

NAVARRO ARANCEGUI, Mikel (2007). *El entorno económico y la competitividad en España*. Bilbao: Universidad de Deusto. ISBN 8498306767.

OLTRA CLIMENT, Vicente (1995). *Instalarse en el cambio: competitividad y ética*. Madrid: CDN.

ORTIZ BLANCO, Luis. *Manual de Derecho de la Competencia*. Madrid: Tecnos, 2008. ISBN: 840948093.

PALGRAVE (The New): A Dictionary of Economics. Edited by John Eatwell, Murray Milgate and Peter Newman (1987). London: Macmillan Press. ISBN: 0333372352. Hay edición en formato electrónico online en:

<http://www.dictionaryofeconomics.com/dictionary> [el acceso a los artículos completos es de pago].

Se trata de un diccionario enciclopédico o, para ser más exactos, enciclopedia. Es probablemente la mejor obra de consulta o referencia en su género.

PAREJO ALFONSO, Luciano y Alberto Palomar Olmeda (dirs.) 2008). *Derecho de la competencia: estudios sobre la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia: actualizado con el RD 261/2008*. Prólogo de Luis Berenguer. Las Rozas, Madrid: La Ley. ISBN: 8497258975.

PASCUAL Y VICENTE, Julio (2002). *Diccionario de Derecho y Economía de la Competencia en España y Europa*. Madrid: Cívitas. ISBN 8447017206.

12. BIBLIOGRAFÍA

PERDICES DE BLAS, Luis (ed.) (2008). *Historia del pensamiento económico*. Madrid: Síntesis. ISBN 8496877124.

PERDICES DE BLAS, Luis y John Reeder (eds) (2003). *Diccionario de pensamiento económico en España*. Madrid: Fundación ICO; Síntesis. ISBN 8477383376.

PIOTROWSKI, Roman (1933). *Cartels and Trusts. Their Origin and Historical Development from the Economic and Legal Aspects*. London: George Allen & Unwin. Se ha reeditado sucesivas veces, por ejemplo corre una edición de 1978, que es la que he utilizado. ISBN 0879919515.

PONS-ROMEY Y ALBENTOSA-FURIO, Leopoldo. *Mercados competitivos y colegios profesionales: el papel de la regulación colegial en el funcionamiento de los mercados de prestaciones de servicios profesionales colegiados. Un análisis económico de la cuestión*. En:

http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.leopoldopons.com%2Fes%2Fdescargas%2Fdoc_download%2F5-mercados-competitivos-y-colegios-profesionales.html&rct=j&q=mercados%20competitivos%3A%20el%20papel%20de%20la%20regulaci%C3%B3n&ei=cRj2TYXnEsyyhAeb373xBg&usg=AFQjCNEpZI5PUC54ndiLt4C7KYaOfYRfLg&cad=rja

[Consulta 13 de junio del 2011] En formato pdf. Este trabajo está fechado en el mes de noviembre del 2008. 53 páginas.

PONS-ROMEY Y ALBENTOSA-FURIO, Leopoldo (2011). *La economía de la crisis 2009-2011: una revisión quincenal*. Valencia: Colegio de Economistas. Sin ISBN.

POPPER, Karl Raimund (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. New York, Basic Books. Cito por la traducción de Ronald Puppo i

12. BIBLIOGRAFÍA

Bunds, *La lògica de la investigació científica*. Barcelona: Laia. ISBN 8472229173.

POPPER, Karl Raimund (1994). *En busca de un mundo mejor*. Barcelona: Paidós. ISBN 8475099874.

PORTER, Michael E. (1991). *Estrategia competitiva. Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia*. México: Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V. ISBN 9682603498.

RAMOS GOROSTIZA, José Luis (2006). Competencia imperfecta. En: Luis Perdices de Blas (Coord.). *Escuelas de pensamiento económico*. Madrid: Ecobook, pp. 112-113. ISBN 8493480746.

RIBÓ CASAUS, Joan (2009). Los colegios profesionales ante la Ley Ómnibus. La libre competencia. *Avui*, 27-09-2009.

También en: <http://www.eltemadelostemas.com/ambito-publico/44-articulo-destacado-3/501-los-colegios-profesionales-ante-la-ley-omnibus-la-libre-competencia> [consulta 27-010-2009]. Joan Ribó es Ingeniero técnico industrial, es decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.

RIVERA HERNÁEZ, Olga (2006). *Análisis estratégico del entorno competitivo*. San Sebastián: Universidad de Deusto. ISBN 8498300193.

ROBINSON, Joan Violet (1933). *The Economic of Imperfect Competition*. London, Macmillan and Co.

RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos (2000). Tensión económica en la *Centesimus Annus*. *Empresa y Humanismo*, Vol. 2, nº 2. pp. 473-492. ISSN 1139-7608. También accesible en:

12. BIBLIOGRAFÍA

<http://www.liberalismo.org/articulo/147/15/tension/economica/centesimus/annus/> [Consulta 1 de noviembre del 2011]

ROSADO CUBERO, Ana Isabel (2010). *Barriers to Competition. The Evolution of the Debate*. London: Pickering & Chatto Publisher's. ISBN 9781851966448.

SALA I MARTÍN, Xavier (2001). *Economía liberal per a no economistes y no liberals*. Barcelona: Pòrtic. Repetidamente reeditada y reimpressa hasta 2009 tanto en catalán como en español. Cito por la edición de Barcelona: Debolsillo, 2008. ISBN 8497936310.

SCHWARTZ GIRÓN, Pedro (2007). *En busca de Montesquieu. La democracia en peligro*. Madrid: Encuentro. ISBN 8472962866. Título cuyo precedente es *En busca de Montesquieu. Democracia y mundialización*, discurso de entrada en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (no “Ciencias Sociales y Políticas” como dice Antonio Moro Serrano, *Bol. Colegio de Registradores*, nº 113, p. 833). En el 2009 salió una segunda edición.

SORIANO, José Eugenio (2007). *La defensa de la competencia en España*. Madrid: Iustel. ISBN 8496717688.

TAMAMES, Ramón y Santiago Gallego (2006). *Diccionario de Economía y finanzas*. 13ª ed. Madrid: Alianza. ISBN: 8420648639.

VARELA CARID, Fernando (coord.) (2010). *Estudios sobre la nueva Ley de defensa de la competencia: análisis desde la perspectiva autonómica gallega*. Santiago de Compostela: Tribunal Galego de Defensa da Competencia. ISBN 8461464265.

12. BIBLIOGRAFÍA

VELARDE FUERTES, Juan (1951). *Sobre la decadencia económica de España*. Madrid: Guía.

VELASCO SAN PEDRO, Luis Antonio (director) (2006). *Diccionario de derecho de la competencia*. Madrid: Iustel. ISBN 8496440702.

VIRGÓS SORIANO, Miguel (1993). *El comercio internacional en el nuevo derecho español de la competencia desleal: un análisis del art. 4 de la Ley española de competencia desleal de 1991*. Madrid. Cívitas. ISBN 8447001369.

WORLD ECONOMIC FORUM (WEF) – FORO ECONÓMICO MUNDIAL. En: <http://www.weforum.org> Fundación independiente, sin ánimo de lucro, supervisada por el gobierno federal suizo, creada en 1971 por el economista Klaus M. Schwab, con sede en Ginebra. Celebra anualmente una asamblea en Davon (Suiza). Sus informes, avalados por expertos de probado reconocimiento y experiencia tienen gran trascendencia tanto para la teoría económica como para la economía aplicada [consulta 28 de julio del 2011].